

DOCUMENTO

LA HISTORIA RECIENTE DE CHILE A TRAVÉS DE "LA SEMANA POLÍTICA"

Miguel González Pino*

INTRODUCCIÓN

Cuando se habla de estilos y géneros periodísticos en Chile, no puede dejar de mencionarse, como un estilo distinto y muy particular, aquel lenguaje empleado durante casi tres décadas en la columna dominical "La Semana Política" del diario *El Mercurio*.

Cuando se quiere comentar el pensamiento y el devenir político en Chile en las últimas décadas, "La Semana Política" constituye también una fuente imprescindible de documentación.

Muchos análisis se han efectuado, desde distintas perspectivas, sobre el contenido y la forma de expresión de *El Mercurio*, algunos con especial referencia a esta columna periodística.¹

La razón de ello, según explica Reyes Matta, estriba en que "El diario *El Mercurio* es sin duda un actor en la realidad chilena. Su influencia, su significado para las cúpulas políticas y empresariales es de público conocimiento, lo cual se une a la creación de un estilo con el que se ha convertido en un referente esencial para importantes sectores de la sociedad

* Abogado y periodista. Investigador del Centro de Estudios Públicos.

¹ Véase, por ejemplo, Guillermo Sunkel, *El Mercurio: 10 años de educación político-ideológica 1969-1979*, (Santiago: ILET, 1983), quien cita además en su bibliografía otros 10 trabajos sobre el mismo diario; Anne Bravo, *El Mercurio: un discurso sobre la cultura (1958-1980)*, (Santiago: Ceneca, 1986).

chilena. En este sentido, es un objeto de estudio siempre interesante al que periódicamente los dentistas sociales retornan, para desmontar una estructura detrás de la cual emergen los datos capaces de explicar la conducta de sectores hegemónicos en el país".²

Los lectores de *El Mercurio* pertenecen a una amplia gama de posiciones ideológicas, y no sólo a un grupo afín a su línea editorial.

"La importancia y el prestigio adquiridos por este órgano de prensa durante sus setenta años de vida ha dado lugar a una situación de caracteres paradójicos: forman el contingente de sus lectores no sólo quienes participan de las posiciones que sus editoriales sustentan, sino también muchos de quienes son los más ardientes adversarios de las doctrinas propugnadas por *El Mercurio* en lo político, económico y lo social".³

Si bien diversos trabajos se han referido a este medio desde principios de siglo,⁴ sólo a partir de los años 60 comienzan los estudios acerca de su contenido. Curiosamente, todos los análisis provienen de sectores que no comparten en absoluto la línea editorial del medio, por lo que son, desde distintas perspectivas, abiertamente críticos de ésta.

Según Guillermo Sunkel,⁵ las líneas que guían las investigaciones críticas que comienzan en esta época están trazadas en los primeros estudios de Armando y Michele Mattelart,⁶ y se sitúan en el marco del análisis ideológico, con elementos tomados del estructuralismo, en un esquema básicamente marxista.

Pero no es fácil para el lector seguir las alternativas de la política chilena a través de los comentarios de *El Mercurio* si no dispone de información adicional al respecto. Esto se debe al estilo en que éstos están escritos, el que entre sus rasgos tiene el de dar por sentado que el lector

² Fernando Reyes Matta, en Guillermo Sunkel, *op. cit.*, p. 11.

³ Hermógenes Pérez de Arce, *El Mercurio*, 1 de junio de 1970.

⁴ Entre ellos, José Peláez y Tapia, *Historia de El Mercurio* (El Mercurio, 1927); Raúl Silva Castro, *El Mercurio de Santiago (1900-1960)* (Lord Cochrane, S.A., 1960); Carlos Silva Vildósola, *Medio Siglo de Periodismo en Chile*, (Zig-Zag, 1938).

⁵ Para una descripción de las principales líneas de investigación de prensa en los últimos años, véase Guillermo Sunkel, "La Investigación sobre la Prensa en Chile", en *Investigación sobre la Prensa en Chile (1974-1984)*, varios autores (Santiago: CERC, ILET, 1986).

⁶ Armando Mattelart, Mabel Piccini y Michele Mattelart, "Los Medios de Comunicación de Masas. La ideología de la prensa liberal en Chile", en *Cuadernos de la Realidad Nacional*, N° 3 (Santiago: CEREN, P.U.C.C., 1970).

conoce los hechos y los nombres de los protagonistas y, por tanto, busca el comentario con los antecedentes frescos en la memoria.

El "estilo mercurial" ha sido descrito por don Arturo Fontaine Aldunate: "El tono sereno, impersonal y algo distante con que suelen juzgarse las más graves cuestiones; la falta de énfasis, de interjecciones y de puntos de exclamación; el estilo más bien coloquial y sencillo, y hasta la orientación oblicua de las alusiones al comportamiento ajeno, han creado una atmósfera que morigera la lucha política a lo largo de su historia. El llamado 'estilo mercurial' es, en este sentido, una importante creación periodística nacional. Más que lo que se dice, influye el cómo se dice, para que las situaciones se desprendan de su carga de violencia, de apasionamiento, de abanderización. Pierden así los hechos su brillo primerizo. Se vuelven más opacos y menos atractivos. Pero cobran entonces su verdadero volumen y su magnitud duradera. Este trabajo tranquilo de la razón es singularmente favorable al ejercicio de las libertades públicas y a la formación de una ciudadanía políticamente madura".⁷

También los críticos se han referido al estilo. Dooner, por ejemplo, señala: "Hay, sin embargo, un segundo punto que hemos querido resaltar y que se refiere al estilo periodístico asumido durante el gobierno de Allende, ya que, incluso hasta ahora, la prensa de derecha de nuestro país logró crear la imagen de una prensa 'seria', preocupada de los grandes acontecimientos mundiales, y no sólo interesada sino que vinculada a los grandes hitos de la evolución política y social de Chile. El referente fundamental para entender este fenómeno se encuentra en un estilo espartano y de aparente neutralidad afectiva desarrollado muy principalmente por el diario *El Mercurio* que, con el tiempo, llevó a una identificación de la 'objetividad', la 'seriedad' y la 'verdad' con el texto de las columnas mercuriales. La solidez de esta imagen no alcanzó a resentirse ni siquiera con las denuncias de ciertas élites políticas rivales que, en diversas oportunidades, acusaron al diario de 'sibilino' y de transmitir un mensaje ideológico velado".⁸ (De acuerdo al diccionario, sibilino significa "misterioso, oscuro, con apariencia de importante".)

Este estilo adquiere particular relevancia en las páginas editoriales, y dentro de ellas, en la columna "La Semana Política".

⁷ Arturo Fontaine Aldunate, *El Mercurio*, 13 de febrero 1977.

⁸ Patricio Dooner, *Periodismo y política, la prensa de derecha e izquierda 1970-1973* (Santiago: Hoy, Andante, 1989), p. 99.

Por eso en los análisis, junto a las portadas y a los editoriales, ocupa un lugar importante "La Semana Política". Por ejemplo, Ossandon construye la "matriz ideológica" del diario a partir de la página editorial, incluyendo todas las "Semanas Políticas" del período analizado.⁹ Dooner considera a esta columna como ejemplo del estilo mercurial cuando dice: "Hay un comentario muy pintoresco que apareció publicado en la sección 'Semana Política' de *El Mercurio* y que es una fiel ilustración del estilo sibilino del diario".¹⁰

Sin embargo, hasta ahora no se ha recogido en una antología una selección de dichos artículos que permita una lectura continuada de lo que los analistas llaman "el discurso".

Si bien la columna refleja la opinión del diario, y no lleva firma, han sido pocos los autores de ella a lo largo del tiempo, entre los que se encuentran René Silva Espejo, Rafael Valdivieso y Arturo Fontaine Aldunate. Los artículos que recogimos en esta antología fueron escritos por don Arturo Fontaine Aldunate,¹¹ quien ocupó durante largos años la subdirección y luego la dirección de *El Mercurio*. Por esa razón, los artículos pueden verse desde la doble perspectiva del pensamiento de *El Mercurio* y del particular punto de vista de su autor.

El peculiar estilo, ya reseñado, hizo necesario un largo y paciente trabajo de investigación para informar al lector actual, antes de cada artículo, que cuando se habla de "los últimos acontecimientos políticos" o "lo ocurrido ayer en el Senado" se refiere a tal hecho, protagonizado por tales personas. Para mayor información, se señalan además el día y la página de *El Mercurio* donde se puede hallar la información respectiva.

Por ejemplo, en la "Semana Política" del 20-11-1966 encontramos la siguiente frase: "Dos senadores de la República, entre otros muchos ciudadanos, han sido vejados y escarnecidos por cierta prensa". Se hizo necesario poner en la explicación previa que se trata de los senadores Raúl Ampuero y Pedro Ibáñez, quienes habían sido injuriados por el diario *Clarín*.

La presente antología corresponde al período 1965-1970. Si bien no se pretende en esta ocasión hacer un análisis del "discurso" que caracteriza

⁹ Fernando Ossandon, "El Mercurio y la Represión, 1973 a 1978", en *Investigación sobre la Prensa en Chile (1974-1984)*, op. cit., p. 133.

¹⁰ Patricio Dooner, op. cit., p. 83.

¹¹ Abogado. Premio Nacional de Periodismo. Miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudios Públicos.

a esta época, en breves palabras puede señalarse que los temas de fondo se relacionan con el distanciamiento entre el pensamiento y la acción del gobierno de Eduardo Frei; el apoyo práctico e ideológico que recibe del Partido Demócrata Cristiano; los valores de la clase media chilena y los peligros de la penetración ideológica marxista en los partidos que la representan (Democracia Cristiana y Partido Radical) y las alternativas de la elección presidencial de 1970.

LA SEMANA POLÍTICA (1965-1970)

Preeminencia del criterio electoral frente a las soluciones que exigen los problemas nacionales

(7 de febrero de 1965)

Han pasado tres meses desde el comienzo del período de Eduardo Frei como Presidente de la República, y las miradas están puestas en las elecciones parlamentarias de marzo. El comentario se refiere a la ley de reajuste de remuneraciones para 1965, en trámite en el Senado, y a la llamada "Ley del Cobre", cuya petición de trámite de urgencia fue retirada por el Ministro de Minería, Eduardo Simián.

Existen pactos electorales entre liberales y conservadores, pero ambas corrientes declaran que no se justifica una fusión (EM, 4 febrero, pág. 19; 6 febrero, pág. 23).

La Semana Política

Preeminencia del criterio electoral frente a las soluciones que exigen los problemas nacionales. Los debates en torno del proyecto de reajuste y de la nueva legislación para la industria del cobre. Integración de partidos afines.

* * *

La tarea de la política consiste en abrirle camino al país, lo que implica mandar, imponer deberes y sacrificios y mostrar metas que justifiquen éstos. Todo ello significa resolver, decidir, empeñarse en el ataque real de los problemas nacionales.

Cuando falta valor para decidir y decidirse, lo que fue tarea se transforma en el juego de la política. En

lugar de una estrategia para hacer marchar el país, se cae en las escaramuzas electorales de corto alcance. Hay que ganar conciencias antes que votos, como ha dicho un político, con mucho acierto. Eso es lo que debía entenderse entre nosotros.

Subordinadas las verdaderas decisiones políticas al propósito de no disgustar o de servir intereses de grupos de electores, se vive tejendo la telaraña de normas legales que se dictan con la vista puesta en casos determinados o con el ánimo de no incomodar a nadie, en tanto que los gobiernos no consiguen leyes que respondan a un pensamiento orgánico y que traigan soluciones definitivas para los asuntos que se pretende abordar.

En lugar de que las elecciones sean un instrumento para realizar una política desde el poder o desde una oposición que presente otras alternativas viables frente a las propuestas del Gobierno, los procesos eleccionarios se transforman en fines por sí mismos.

La política no puede consistir sólo en hacer favores o en el empleo de grandes palabras con fines demagógicos. Ella debe presentar a la ciudadanía caminos definidos para llegar a las metas de bien colectivo, a fin de que la opinión pública opte entre dos o más repertorios de posibles realizaciones, antes que entre nombres o tendencias que a menudo aparecen como negaciones recíprocas.

El clima en que el actual Gobierno asumió el poder no fue el más favorable para decisiones bien meditadas, a causa de la proximidad de un nuevo proceso eleccionario. Sin embargo, si prevaleciera entre nosotros el ejercicio de la verdadera política, tal vez ninguna ocasión fuera más oportuna para acometer a fondo algunos problemas centrales del país.

En efecto, las elecciones parlamentarias próximas reúnen, quiérase o no, características semejantes a los comicios de septiembre último. En aquella oportunidad se trataba de cerrar el paso al comunismo. En la próxima está en juego la eficacia del régimen libre, pues la división o frustración de los elementos democráticos frente a la urgencia de hacer caminar al país abrirían una puerta aún más ancha que la cerrada en septiembre a la penetración comunista.

En plena tensión preelectoral se ofrece la oportunidad de mostrar al

país las distintas posiciones políticas como interesadas positivamente en encontrar soluciones de fondo para una colectividad que está sometida desde hace dos años y más a la fatiga de la polémica y la propaganda, mientras se retardan las realizaciones.

Gracias a las atinadas y patrióticas actitudes exhibidas por diversos señores senadores, al aprobarse en general el proyecto de reajuste en las Comisiones Unidas de esa rama del Congreso, puede esperarse que esa iniciativa salga financiada y contemple el propósito original de ofrecer el reajuste de las remuneraciones y de dar lugar a una inversión pública que nuestra economía necesita.

Es evidente que un proyecto de esta envergadura implica sacrificios de la colectividad, sea por la vía de los impuestos, sea por la vía de la inflación. El ánimo de juego electoral pretenderá ocultar este hecho, pero un verdadero criterio político tendrá que estar dispuesto a aceptar las consecuencias lógicas de la iniciativa. En todo caso, el propósito de hacer servicios o demagogia habrá que intentar excluirlo de la discusión parlamentaria.

* * *

Es sensible que el tiempo no haya permitido adelantar más en el proyecto del cobre. Como es sabido, el programa por aprobarse consulta una expansión sin precedentes de esta fundamental actividad de exportación, con la doble ventaja de estimular significativamente la demanda de producción nacional y la ocupación, por una parte, y de in-

crementar en más del sesenta por ciento los ingresos de divisas a partir de 1970. Aunque las mayores ventajas del proyecto se obtendrán a largo plazo, algunas de ellas son próximas, como el incremento paulatino de la ocupación y otras, inmediatas, como el clima de confianza que está llamado a producir entre los inversionistas del exterior el solo anuncio de que Chile arregla definitiva y honorablemente su rubro básico de exportaciones.

La tramitación de la iniciativa del cobre es otro signo de la tendencia paralizadora que pesa en el ambiente. Por una parte, el asunto es demasiado fundamental y complejo para tratarlo a la carrera. La Comisión de Minería, aunque informada en detalle por el Gobierno, no tuvo a mano sino en el último momento la maciza y razonada fundamentación que entregó don Raúl Sáez en reportaje a este diario. De haberse anticipado este análisis público, se habría llegado más pronto al convencimiento de la verdadera magnitud y significación de este programa.

Como se sabe, el Gobierno retiró la urgencia para dar más libertad al Congreso en el examen de este proyecto y parece haber ambiente para su aprobación en general. Es deseable que la discusión parlamentaria contribuya a precisar las disposiciones propuestas; pero, sobre todo, es de interés nacional indiscutible que el Gobierno cuente a la mayor brevedad con las herramientas legales para resolver esta materia en la línea que el país conoce.

Con fines de información interna, el Gobierno ha entregado una declaración oficial en que describe

los esfuerzos que ha realizado para conseguir que la iniciativa se aprobara en general. Es difícil prever el efecto que la suspensión legislativa produzca en el extranjero, donde podría suponerse, con ignorancia de nuestra peculiar psicología política, que hay resistencia de fondo hacia la fórmula misma, en circunstancias que sólo existen la esperada negativa absoluta del FRAP y el ánimo de postergación que nos caracteriza. Con todo, no parece conveniente que el clamor de nuestra polémica interna trascienda de las fronteras, pues ahora más que nunca somos observados y hay países industriales que quieren tener confianza en nuestra sensatez y corrección de procedimientos.

El curso seguido por los proyectos de reajuste y del cobre no habla bien de la voluntad realizadora del país. Los dos son fundamentales, pero el primero de ellos mira a redistribuir recursos existentes y el segundo propende a crear recursos nuevos en una proporción hasta ahora desconocida. No obstante, por una paradoja habitual en nuestro ambiente, toma velocidad el proyecto redistributivo -que nominalmente reparte riquezas- y queda pendiente la iniciativa creadora de nuevas fuentes de producción.

Esta tentación de inercia es tanto más lamentable cuando estamos más cerca que nunca de dar pasos decisivos en favor de nuestro desarrollo económico. Con esfuerzo vacilante, pero fructífero, una administración tras otra han ido impulsando la actividad de las diversas regiones, creando la infraestructura básica, difundiendo la instrucción y trazando ahora planes para el incre-

mentó sustantivo de la producción y elaboración de nuestras riquezas aún no explotadas y a veces de rápido incremento, todo lo cual forma una misma línea orientada a producir el "despegue" del país. Como asesores y como realizadores han contribuido a este proceso, en otro momento, muchos que hoy tienen altas responsabilidades en el Gobierno actual. Ello prueba que avanzamos con el concurso de todos, pese a las resistencias y a los desaciertos de unos u otros.

Sólo faltan las condiciones políticas para dar evidencia y celeridad a este trabajo común.

De ahí la necesidad de que se provoque un mínimo de coincidencias de la ciudadanía democrática en torno a ciertas decisiones esenciales que los Poderes Públicos deben adoptar con la mayor rapidez. Para conseguir tal cosa nada es tan contraindicado como provocar un clima de belicosidad sarracena en que se abandonan las ideas creadoras para introducir las consignas y las pugnas estériles.

A nadie le cabrá duda de que si Chile mantiene su organización de libertades y cuenta con una relativa estabilidad política que aliente el trabajo honrado e impulse a producir y crear, experimentará sin contratiempos las transformaciones que son el signo de la hora.

En más de una oportunidad se ha propiciado la unión de los partidos Liberal y Conservador. Conociendo los dirigentes de estas colectividades los obstáculos que encuentra este género de aglutinaciones políticas, interpretado casi siempre como signo de debilidad de las colectividades que las llevan a cabo, han ex-

presado reiteradamente que no creen que se justifique la fusión de las dos agrupaciones y que la finalidad de unir fuerzas puede alcanzarse mediante la firma de pactos y aun por medio de una Federación de Derecha, que podría incluir en su seno a importantes grupos electorales que actúan hoy al margen de los partidos.

Los hechos han seguido otorgando validez a esta posibilidad, como lo demuestra el pacto que acaban de suscribir los liberales para apoyar en la elección senatorial por Valparaíso y Aconcagua al personero del conservantismo, actual diputado don Edmundo Eluchans. Este acuerdo tuvo como resultado inmediato el retiro del candidato independiente D. Luis Guevara, que contaba con el apoyo de muchos miles de electores, que en su gran mayoría se desplazarán hacia la postulación de los partidos unidos.

Es decir, que han prevalecido, por sobre las banderas tradicionalmente separadas, consideraciones de integración política que mejoran la posibilidad en las urnas del candidato de la derecha.

Conviene señalar, sin embargo, que no es fácil que la ciudadanía acepte la concertación, aun cuando sus ideales sean en lo esencial coincidentes. Es lo que ocurre, por ejemplo, con liberales y conservadores. Unos y otros han ido modelando sus programas en torno de una misma filosofía política, social y económica, sin que tampoco existan barreras confesionales que les impidan actuar de consuno. Pese a todo esto, hay que reconocer que aún subsisten resabios de la mentalidad que se opone a una acción concertada de fuerzas públicas a

través del territorio. La demostración de ello es que, frente al anuncio de que el apoyo liberal en la circunscripción de Valparaíso y Aconcagua exigiría una compensación de los conservadores en Concepción, para los candidatos a diputados del liberalismo, han surgido resistencias de las directivas provinciales del sur, que tratan de sostener las postulaciones del conservantismo por sobre el acuerdo de las juntas ejecutivas nacionales.

El fenómeno que analizamos se presenta en el otro extremo del espectro político, con motivo de la elección de candidatos del FRAP también en las provincias de Valparaíso y Aconcagua. Allí el Partido Socialista se negó a reconocer el mejor derecho de los comunistas para designar a un hombre de sus filas o patrocinado por ellos, for-

zando la proclamación de la diputada señora Ana Eugenia Ugalde, marginada del radicalismo durante la última elección presidencial. Esta posición del socialismo parece responder a cálculos de que puedan agregarse a los votos del FRAP los de algunos sectores radicales que hasta el momento aparecen en libertad de acción.

En el fondo de la disparidad de criterio entre socialistas y comunistas se advierte el temor de los primeros de ser absorbidos por el partido más fuerte de la izquierda, cuyo programa, por lo demás, presenta muy escasas diferencias con el socialismo criollo. Para resolver esas pugnas se ha hablado más de una vez del Partido Único de Izquierda o Partido Socialista Obrero, ideal de los teóricos del marxismo en todo el mundo.

Los partidos históricos en busca de nuevos métodos

(18 de abril de 1965)

El 7 de marzo se realizaron las elecciones parlamentarias, quedando integrada la Cámara de Diputados por 82 demócratacristianos, 20 radicales, 18 comunistas, 13 socialistas, 6 liberales, 3 conservadores y el resto de grupos menores. En el Senado la situación es la siguiente: 12 demócratacristianos, 10 radicales, 7 socialistas, 5 liberales, 3 comunistas, 2 conservadores y otros de grupos menores.

Los diversos grupos analizan los resultados, destacando la Convención de Cartagena, celebrada entre el 10 y el 12 de abril por la Democracia Cristiana, en la que cada Ministro expuso los planes de su Cartera (EM, días 12 y 13 de abril, varias informaciones).

Disturbios callejeros protagonizan estudiantes en el Pedagógico de Macul, en el centro y otros lugares por el alza de tarifas de la locomoción (EM, 16 abril, pág. 13).

La Semana Política

La marejada política que se inició con las elecciones presidenciales de septiembre de 1964 sigue produciendo sus efectos en el campo de los partidos, incluso en la democracia cristiana, que obtuvo tan decisivo avance en la renovación del Congreso, el 7 de marzo último.

LOS PARTIDOS HISTÓRICOS EN BUSCA DE NUEVOS MÉTODOS

Todas las tiendas democráticas han ventilado en los últimos días sus cuestiones internas, y algunas renovaron o se preparan para renovar sus mesas directivas.

El Partido Radical, que fue el que sufrió menos deterioro en su representación parlamentaria, tiene en funciones una comisión destinada a preparar la Convención del Partido para junio próximo, anunciándose el propósito de cambiar completa-

mente el mecanismo interno con que tradicionalmente había funcionado la antigua colectividad por espacio de largos años. Los organizadores de esa asamblea han avanzado opiniones que significan que el radicalismo reconoce la crisis del sistema de asambleas, abrigando seguridad de que la doctrina que inspira al partido, puesta a tono con la socialdemocracia de estilo europeo, asegurará la supervivencia de esa colectividad.

El Partido Liberal reunió su Directorio General y procedió a cambiar la Mesa, aceptando la renuncia de la que había actuado durante los recientes comicios e integrando una nueva bajo la presidencia del ex diputado don Luis Undurraga Correa. La juventud y los sectores gremiales, según declaraciones dadas a conocer por algunos de sus voceros, estiman que la directiva que se ha hecho cargo debe conducir los des-

tinios liberales solamente hasta la próxima convención, en que presentarán planteamientos que se califican de "neoliberales", a fin de estar a tono con los problemas de la hora.

Los conservadores celebraron una Junta Ampliada, resolviendo no innovar por ahora en la constitución de la Mesa y anunciando convención para el mes de octubre próximo. Posteriormente la Junta acordó adelantar el pronunciamiento sobre la renuncia presentada por la actual directiva que preside el senador don Bernardo Larraín para el mes de junio próximo. Las escuetas versiones dadas a conocer sobre las deliberaciones conservadoras no adelantan grandes cambios en la estructura interna de esta agrupación política.

LA DEMOCRACIA CRISTIANA EN REVOLUCIÓN INTERNA

El partido que da base al Gobierno presidido por el Excmo. señor Frei presentaba netas diferencias con sus oponentes democráticos desde antes de la elección presidencial. Su trabajo se caracterizaba por el activismo de sus miembros y por la difusión de la consigna de la "revolución en libertad". Frente a las colectividades políticas que, por doctrina o actuación coalicionista durante Gobiernos anteriores aparecían defensoras del status político, y en contraposición al marxismo que preconizaba la destrucción total del régimen económico y social existente, la democracia cristiana representaba una "tercera posición", que no fue debilitada ni alterada por pactos, en las elecciones presi-

denciales y parlamentarias. Su método de conquista de la opinión planteó abiertamente una disputa con el FRAP, en la que sus activistas salieron a campos y fábricas, poblaciones y gremios a disputar palmo a palmo los sectores de opinión no afiliados. Como estos últimos eran vastos, ya que los partidos históricos se caracterizaban por el asambleísmo, carente de actividad y controlado por pequeñas oligarquías dirigentes, que no irradiaban hacia el exterior y tampoco recibían nuevos aportes, el Partido Demócrata Cristiano realizó amplia conscripción a través del país, la que adquirió ritmo torrencial con la elección de un Presidente de la República de sus filas. Es un hecho que esa conquista de opinión hizo perder dinamismo a la extrema izquierda que representaba la política de células férreamente jerarquizadas, pero igualmente cerradas, o de brigadas agresivas cuya organización estaba concebida para dominar los sindicatos, amedrentar a las masas y divulgar consignas que en la mayor parte de los casos no se relacionaban con los intereses chilenos.

LA REUNIÓN DE CARTAGENA Y EL PROFESIONALISMO POLÍTICO

El partido de Gobierno, consciente de que su organización es numerosa pero que también adolece de los vicios de la antigua política militante nacional, quiso en la primera hora contrarrestarlos, dedicando los debates de la Convención de Cartagena, en gran parte, a modificar el espíritu de la organización.

Sus teóricos revelaron haber meditado al respecto y por eso presentaron a la consideración de los elementos dirigentes tesis bien definidas acerca de lo que corresponde hacer para evitar que esta nueva colectividad, desbordada por adherentes sin doctrina, caiga en los mismos errores en que incurrieron otras agrupaciones que alcanzaron el Poder, con sorpresa para ellas mismas.

Dos proposiciones dominaron este debate: una de ellas fue el destierro de la asamblea y la actuación bajo la norma de que la democracia cristiana tiene que llegar a gran número de la ciudadanía, por la presencia de sus dirigentes y parlamentarios en todos los terrenos de la vida nacional, antes que por la promesa a distancia y por mecanismos de conscripción hoy ya sobrepasados. Esto es lo que se definió como "partido de masas", en contraposición a lo que fue antes el partido de asambleas. Estas últimas han estado siendo reemplazadas y lo serán en mayor medida en el futuro por "los grupos comunitarios" y "grupos comunales". Esta red de acción política debe capturar la voluntad del pueblo por el estudio de los problemas que afectan a cada uno de los sectores, por el conocimiento de sus necesidades y por el traslado de la información a los organismos ejecutivos del partido. Es una forma de convivencia llamada, según sus preconizadores, a evitar que la responsabilidad de la acción quede en manos de un corto número de dirigentes o sea exclusivamente una compensación por el apoyo político que se presta al parlamentario.

Con respecto a la función de los congresales, la democracia cristiana la concibe al margen del profesionalismo político, es decir, ajena al clásico sistema de que cada representante del pueblo se adueñe de su electorado y lo cultive con iniciativas demagógicas o proyectos de leyes sin estudio, que se apartan de la consideración del interés general. En el fondo se quiere terminar, de acuerdo a lo expuesto en la reunión de Cartagena, con los diputados y senadores que tramitan beneficios para los caciques electorales, que improvisan disposiciones legales destinadas a favorecer a estas o aquellas personas o a beneficiar a gremios de los cuales esperan obtener votos.

LA POLÍTICA NACIONAL POR SOBRE INTERESES PARCIALES

Se dijo en la reunión mencionada que el parlamentario es a la vez servidor de la comunidad que lo elige y del plan general de Gobierno, de modo que sus actuaciones no pueden consumirse en atender peticiones, sino que deben, a la vez, concurrir a la política nacional. Una de las derivaciones de esta nueva concepción sería que el presupuesto público no puede utilizarse con fines de provecho electoral, y que las inversiones fiscales han de responder a necesidades amplias de la nación y no servir sólo de escalabel a los representantes del pueblo para "hacer carrera electoral".

Estas nuevas ideas deben haber sorprendido a más de alguno de los antiguos integrantes de la democracia cristiana, que competían brazo a brazo con los parlamentarios

de otras colectividades en la aprobación de leyes desfinanciadas o de preceptos destinados a servir de compensación a los electores. Imponer nuevas directivas en este momento será tarea dura para un partido que dispone del Gobierno y que, naturalmente, sufrirá el asedio de peticiones de todo género, en favor de sus numerosos partidarios del último momento. Porque no hay que olvidar que donde los parlamentarios trataron siempre de ejercer su presión fue en el reparto de puestos y prebendas administrativos. En la medida que aquí funcione también una compuerta que sólo dé entrada al mérito y la capacidad, podrá prevalecer este nuevo espíritu depurador.

MAQUINARIA OPOSITORA
SE PONE EN MOVIMIENTO

Los partidos históricos están, como hemos consignado más arriba, concentrados en una revisión de sus posiciones y haciendo esfuerzos para dar atracción a sus programas. Radicales, liberales y conservadores no revelan frente al actual Gobierno propósitos de obstruccionismo ciego.

La discusión del proyecto de reajuste dio la medida de la actitud de esas colectividades. Estuvieron efectivamente en contra del impuesto patrimonial y del veto; anularon disposiciones tributarias sustanciales para financiar el aumento de las remuneraciones, como la del mayor gravamen a los bienes raíces. Pero, en otros aspectos de la ley, propusieron disposiciones sustitutivas y, cuando llegó la hora de pronunciarse sobre las observa-

ciones del Ejecutivo, esos tres partidos actuaron con relativa benevolencia.

Algo distinto pasa con el FRAP, que está dispuesto a explotar en el Congreso, y fuera de él, los recursos demagógicos más extremos, con tal de detener o desmejorar la actuación del Gobierno. Comunistas y socialistas han actuado en el estudio del reajuste y al votar el veto lo han hecho con el propósito de colocar al Ejecutivo en posiciones impopulares; en otras oportunidades procedieron a reemplazar los artículos del proyecto por otros que, siendo aparentemente de beneficio para las masas, tendían a introducir desorganización, como ocurrió en lo referente a la promoción popular. No han perdido ocasión los componentes del FRAP para esgrimir el argumento de las alzas, atribuyéndolas, no a la efectiva desvalorización de la moneda y el consiguiente aumento de sueldos y salarios, sino a propósito deliberado del Gobierno. Esta es la actitud consuetudinaria del FRAP, que sólo ha silenciado las alzas cuando algunos de sus afiliados eran parte del Gobierno, lo que ocurrió, por ejemplo, durante el comienzo de la Administración Ibáñez. En todos los demás casos, su campaña de prensa, callejera y en el Congreso trata de convencer al pueblo de que se lo castiga con mayores precios para favorecer a las empresas y los capitalistas.

En la actual coyuntura, socialistas y comunistas han tratado de poner en práctica la acción directa, lanzando a las calles a sus grupos estudiantiles, que son minoría, pero están adiestrados en el disturbio, para crear situaciones de violencia por el alza

de las tarifas de la locomoción. Siempre detrás de esta agitación está el cálculo de que un obligado mantenimiento del orden público haga alguna víctima y con ella se empañe la actuación del Gobierno.

Estas actuaciones del FRAP se multiplicarán, no sólo porque obedecen a su tradicional tarea de en-

torpecimiento de todos los regímenes democráticos, sino porque, además, responden a las consignas que están poniéndose en práctica en toda Latinoamérica, con el fin de hacer más difícil la tarea de reforma de la sociedad democrática, que el marxismo quiere frustrar, aunque sea al costo de muchas vidas.

El FRAP abandona la acción directa

(2 de mayo de 1965)

El comentario se refiere a un descenso en la actividad político sindical y estudiantil, luego de violentos desórdenes en diversas ciudades por alzas de tarifas en la locomoción. Se solucionaron huelgas mineras en Potrerillos y El Salvador, y los trabajadores de ENAP volvieron con un aumento igual al alza del IPC en 1964.

El Presidente Eduardo Frei, en su discurso con motivo de las festividades del trabajo, señala que aspira a una "unidad sin tutelados" para los trabajadores.

Los diputados comunistas se oponen a que las bancas de la Cámara contiguas a las que ocupan los Ministros cuando concurren al recinto, sean para los parlamentarios demócratacristianos. El asunto debe ser sometido a la comisión de Policía Interior (EM, 29 de abril, pág. 27).

La Semana Política

Los acontecimientos políticos de los últimos días indican que se ha trabado en el país una lucha entre la mayoría política, que representa el actual Gobierno, y la mayoría sindical, que detentan los partidos de extrema izquierda. Las primeras escaramuzas tuvieron lugar con la movilización del FRAP, a través de grupos estudiantiles, para imponer al Gobierno la derogación de las tarifas de la locomoción. La capital y otras ciudades de la República vieron reproducirse desórdenes que antes obligaron a otros gobiernos a derogar sus medidas y hasta cambiar el Gabinete y la composición de los partidos que formaban parte de ellos. En esta oportunidad la extrema izquierda careció de fuerza para crear el terror, como el 2 de abril de 1957, y después de pocos días de agitación se vio obligada a replegar sus fuerzas y a cesar en su intento de doblegar al Ejecutivo.

EL FRAP ABANDONA LA ACCIÓN DIRECTA

Hasta hace una semana no existía seguridad de que el FRAP había reconocido su primera derrota, flotando la impresión de que después del feriado de fin de semana volverían a verse perturbadas las actividades del país, que renacerían las huelgas estudiantiles y que a ellas se agregaría la suspensión de faenas en actividades vitales del país. Sin embargo, decayó súbitamente la agitación, se reintegraron a las faenas los servicios interrumpidos ilegalmente, y el país pudo observar que Chile recuperaba la normalidad sin registrarse una sola víctima como consecuencia de los ataques a la propiedad pública y privada que desataron los grupos de choque del marxismo.

Otro hecho que demostró que la Central Unica de Trabajadores carecía del influjo que había demos-

trado en años anteriores fue la rápida solución de huelgas legales, como la del petróleo y del cobre, cuyo mantenimiento afectaba vitalmente las actividades industriales del país y el flujo de divisas indispensables para el abastecimiento y el desarrollo económico de la nación. Sobre estos desenlaces de los conflictos han tratado de tender cortinas de humo socialistas y comunistas, ofreciendo a la opinión explicaciones tan inconsistentes como la de que los sindicatos de las minas de Salvador y Potrerillos consiguieron aumentos del 50 por ciento, cuando el pliego aprobado abarca 15 meses, es decir, un período mayor que el año calendario que la Dirección de Estadísticas tomó como base para establecer el alza del costo de la vida en 38,4 por ciento.

CANSANCIO SINDICAL POR ACCIÓN POLÍTICA

Queda, pues, en pie que el Gobierno ha conseguido imponer la norma de que los reajustes de sueldos y salarios deben ser equivalentes al 100% del alza del costo de la vida, pero no superiores a ese límite.

Este resultado no tiene otra interpretación que el cansancio sindical frente a las aventuras inútiles a que arrastró a los trabajadores durante tantos años el control político de la CUT. De golpe se ha abierto camino en la masa obrera la convicción de que conviene más a sus intereses no presionar reajustes que acarrear alzas superiores al costo de la vida. Este sentir va acompañado de la esperanza de que pueda existir en el futuro verdadera liber-

tad de organización para los sindicatos, sin las amenazas de que ello pudiera significar la pérdida del trabajo para los que se atrevían a alzar su voz en contra de la dictadura de los dirigentes.

Sería torpe desconocer que la organización gremial es el recurso adecuado para que mejore la condición económica de los asalariados o, por lo menos, para que ella no se deteriore a medida que descende el valor de la moneda. Pero lo que ha ocurrido en Chile es que las finalidades de los sindicatos y su manejo sufrieron una deformación progresiva. Los objetivos de bienestar y elevación cultural y material de los integrantes de estas organizaciones dejaron de cumplirse en una gran proporción, transformándose en agencias para la difusión de la propaganda electoral del marxismo.

LIBERTAD SINDICAL SIN MONOPOLIO GUBERNATIVO

Ahora comienza una nueva etapa en que se anuncia, junto con la libertad de asociación, la despolitización de los sindicatos.

Este proceso exige una cuidadosa vigilancia, porque conviene evitar que se repita la experiencia bajo otro signo, como sería que la organización sindical se tornara en agencia del partido que tiene influjo mayoritario en el país.

La declaración hecha ayer por el Jefe del Estado en la concentración de los trabajadores, en el sentido de que había que combatir todo género de monopolio sindical, está en la línea correcta.

Los sindicatos deben dejar de ser asamblea política, en que se elija a

las directivas por la orientación doctrinaria de quienes las integran.

Si los trabajadores están fatigados de que se los utilice con fines proselitistas, el país desea que terminen las asambleas sindicales en que lo único que preocupa es qué partido obtuvo la mayoría.

No hay duda de que una sindicación más amplia que la que hoy existe provocará el auge en las Federaciones de los elementos que comulgan con la idea del actual Gobierno, pero esto no deberá significar necesariamente el exterminio de los que queden en minoría, llámense radicales, socialistas o comunistas. Buscar disposiciones legales que dieran ese resultado sería encaminarse hacia el totalitarismo en el manejo del país, sistema que el Excmo. señor Frei ha repudiado expresamente al hablar en la concentración de la Fiesta del Trabajo.

EXIGENCIAS QUE CONVIENE EVITAR

No es fácil evitar que los partidos que crecen en forma explosiva y dominan en corto plazo el Congreso y la Administración observen una respetuosa consideración por sus adversarios y no se dejen llevar por la impresión de que el número es suficiente para justificar cualquiera actitud.

En los últimos días se suscitó un incidente baladí en apariencia, pero que debe poner sobre aviso a los jefes de la Democracia Cristiana. La representación mayoritaria pidió que se le diera en la Cámara de Diputados las bancas contiguas a las que ocupan los Ministros. Esta exigencia motivó de inmediato el malestar de los partidos que han ocupado esas

dependencias desde hace algún tiempo.

La justificación de la demanda que comentamos parecería ser el deseo de los representantes demócratacristianos de mantener contacto con el Gabinete durante los debates que se suscitarán en el futuro. Pero esa razón es débil para justificar un desplazamiento como el que implicaría acceder a la mencionada solicitud. La Mesa de la Cámara de Diputados será demócratacristiana, como la mayoría de esa rama del Congreso. ¿Qué mayores garantías pueden necesitar los Ministros, atendida la circunstancia de que los partidos de extrema izquierda deben atenerse al reglamento y evitar actitudes que puedan significar ataques verbales o físicos a las personas?

Esta clase de demandas deben ser evitadas por un partido que llega al Gobierno y cuya inspiración es respetuosa de los fueros democráticos.

LA ADMINISTRACIÓN Y EL NUEVO GOBIERNO

El brusco vuelco que significó el advenimiento al poder de la democracia cristiana implica necesariamente cambios administrativos. Lo que importa es que ellos se operen sin ocasionar trastornos innecesarios ni envuelvan tampoco la idea de monopolio ideológico a que tan aficionados son los marxistas.

Un procedimiento justo sobre el particular es necesario para el prestigio del régimen y además para la eficiencia de los servicios.

Las garantías para los servidores que ostentan hoja de servicio meri-

tona son indispensables si no se desea bajar deplorablemente el nivel de las funciones.

Experiencias de otros regímenes que llegaron al poder y desmantelaron las oficinas para colocar en ellas a sus partidarios o a quienes por conveniencia se proclamaban tales, son muy conocidas. Chile no tiene reservas de funcionarios para reemplazar una dotación por otra. Los partidos nuevos tampoco están en condiciones de ofrecer, en el número suficiente, las personas capaces de tomar el sitio de las que se eliminan.

Esas mismas experiencias indican que en los últimos veinticinco años hubo gobernantes arrepentidos de la precipitación con que sus partidarios les exigieron designar en cargos de la más diversa responsabilidad a candidatos que no tenían más merecimientos que llevar la etiqueta del partido o partidos triunfantes.

En este terreno el país puede confiar en la ecuanimidad y firmeza con que ha de proceder el Presidente de la República, supremo árbitro para decidir sobre tan delicada materia. Hasta ahora se advierte comúnmente consideración hacia el mérito y los años de servicios del personal de la Administración. Pero no sería extraño que al ponerse en movimiento una dotación parlamentaria deseosa de que avancen sus banderas, los Ministros y jefes de servicios se vean bajo abrumadora ofensiva de empeños.

LA INFLACIÓN Y LA BUROCRACIA

Además es necesario que se tome en cuenta que hay oficinas saturadas

de personal y que reclaman una pronta racionalización, si ella no se hace y además se crean otras nuevas, aun con los mejores propósitos, querría decir que el gasto fiscal continuaría gravitando sobre la economía en forma muy adversa para el desarrollo económico.

El Gobierno recuerda una y otra vez que el país está en guerra contra la inflación, pero es necesario que para asegurar la victoria evite que sobre la economía sobrevenga el ataque de la burocracia, en proceso de crónico crecimiento.

Las prédicas en favor del aumento de la productividad no sólo deben convencer a los trabajadores y empresarios, sino que además aprovechar a los altos integrantes del Gobierno, a los organismos estatales de producción y a los bastiones feudales de la empleomanía, que son los servicios semifiscales.

Así como se eleva el rendimiento por unidad en las fábricas y organizaciones privadas, con lo que se consigue abaratar los costos y tener mejores resultados financieros, debe ocurrir otro tanto en el campo público, donde se mueven centenares de miles de millones de escudos, sin que en todos los casos haya cuidado de hacer economías en los gastos de material y operación.

La Administración nacional tiene un compromiso de honor frente a la actitud de la mayoría de los sindicatos obreros que han aceptado reajustar sus sueldos y salarios en el límite del alza del costo de la vida, a pesar de la campaña insistente de la CUT y del FRAP que les pedían y siguen pidiendo que rompan la barrera del 38,4 por ciento. Ese compromiso puede satisfacerse

dando ejemplo de manejo cuidadoso y apolítico del presupuesto nacional.

Sabemos que esto entraña grave dificultad, porque en la raíz de todas las organizaciones partidistas está el impulso de abarcar para sus prosélitos el mayor número de ventajas, como una manera de consolidarse en el poder.

Lamentablemente la situación económica de nuestro país es tan delicada que si se siguiera ese impulso, la democracia cristiana, hoy triunfadora, ahogaría sus planes de desarrollo económico bajo el peso de los gastos públicos, que significan inevitables cercamientos de las posibilidades de inversión y de producción.

El tema de la propiedad privada

(23 de mayo de 1965)

El 21 de mayo comienza sus labores el nuevo equipo de parlamentarios elegido en marzo. Se realiza la sesión solemne del Congreso Pleno, presidida por el senador Hermes Ahumada, elegido presidente provisional del Senado con la oposición de su partido, el radical (EM, 16 mayo, págs. 39 y 43). El comentario analiza el primer mensaje presidencial en lo relativo al anuncio del proyecto de Reforma Agraria y la propiedad privada (EM, 22 mayo, texto completo del mensaje).*

* y con votos de los democratacristianos, liberales y conservadores.

La Semana Política

NUEVA LEGISLATURA

La atención pública se concentró en los últimos días en las labores preparatorias para el funcionamiento del nuevo Congreso.

Sorteado un inconveniente político de último momento, el senador don Hermes Ahumada ocupó la presidencia provisional del Senado y en tal carácter presidió el Congreso Pleno del viernes 21.

Está todo dispuesto para que los legisladores se consagren al despacho de los proyectos que el Ejecutivo ha enviado al Congreso y de las nuevas iniciativas que tiene en estudio.

El Presidente de la República aprovechó el Mensaje sobre la marcha política y administrativa de la nación para describir el estado económico social del país, indicando el trabajo realizado por su Gobierno y la tarea que está iniciando y para la cual reclama el concurso de toda la ciudadanía.

En su discurso, el Jefe del Estado bosquejó el contenido del movimiento popular que representa y,

en un momento de la exposición, dijo: "No es éste un movimiento hacia el estatismo y en contra de la propiedad privada y de la iniciativa individual" con lo cual define con claridad una posición del gobierno.

Esa es la línea que posibilita el contenido renovador del programa gubernativo y se aparta, por igual, de quienes se oponen a todo cambio y de los que, en su afán de cambiarlo todo, diluyen los conceptos de propiedad privada y de iniciativa individual que son los ejes del desarrollo moderno en un régimen democrático representativo.

EL TEMA DE LA PROPIEDAD PRIVADA

Ha sido útil esta precisión del Jefe del Estado porque el tema de la propiedad privada se ha prestado a ardorosas polémicas con motivo de la proyectada reforma agraria y de la reforma constitucional que tiende a facilitarla.

Quien presencia esas discusiones de alto vuelo especulativo entre los que creen amenazada la propiedad

privada, y los que, para impugnar a los primeros, parecen ver en tan indispensable institución una cosa subalterna, podría creer que los nuevos proyectos desconocen la propiedad privada o que propugna formas nuevas y desconocidas de apropiación.

La propiedad de que se trata es obviamente la propiedad sobre los medios de producción y, en especial, de la tierra cultivable. Nadie pone en duda el derecho de los hombres a apropiarse legítimamente de las cosas útiles y, en general, todos admiten la propiedad de los individuos sobre los bienes de uso personal.

Un régimen garantiza la propiedad privada cuando ampara el derecho de dominio de los particulares sobre los bienes productivos.

Hay actualmente dos formas concretas de establecer la propiedad sobre esta clase de bienes. Una de ellas es negar francamente la propiedad privada y radicarla en el Estado, que es el caso de los totalitarismos socialistas. La otra es garantizar la propiedad de los particulares y su iniciativa individual, conjugando una y otra con las exigencias del bien común. Esta es la situación en que se encuentran las democracias contemporáneas.

Magnificar la propiedad hasta concebirla como absoluta e intangible no es propiamente un anacronismo sino una posición imaginaria, porque siempre la propiedad ha tenido límites y, en todo caso, el mecanismo de la expropiación tiene una historia demasiado larga.

Así como resulta inconcebible una propiedad privada sin restricciones impuestas por el bien común,

entre las que se incluye el límite extremo de la expropiación, sería ilusorio imaginar otras formas de propiedad distintas de la privada y que no desemboquen en un modo u otro en el colectivismo estatal. En el terreno de las instituciones jurídicas no caben experiencias de laboratorio. Por eso, las teorías que procuran escamotear la maciza realidad de la propiedad privada caen de bruces en el estatismo.

PROPIEDAD Y LIBERTAD

Nuestro régimen jurídico no puede negar la propiedad privada sin contradecirse a sí mismo.

El sistema de libertades políticas está fundado en que la sociedad exista para los individuos humanos que la componen. La sociedad sirve a la persona y no ésta a la sociedad.

La oposición irreductible entre un régimen totalitario y un régimen libre estriba precisamente en que ambos establecen prioridades del todo inversas: en el primero, la sociedad tiene la primacía y el segundo priman las personas.

El régimen libre supone que el individuo no es un hijo menor de edad sujeto a la patria potestad del Estado y pendiente de que éste le suministre ocupación y medios de vida, sino que, por el contrario, parte de la base que el particular está en el derecho y en el deber de conquistar su independencia económica, de vivir a costa de su capacidad creadora y de sus fuerzas propias. Y la autonomía responsable de los particulares, en la esfera que les corresponde, sólo se concibe si hay propiedad privada.

Negarla es dejar en el aire la libertad personal, arrebatarse el sentido concreto de ésta y contradecir por tanto, el régimen de libertades públicas.

Ello aparece confirmado por la experiencia histórica. En los países en que se apaga la iniciativa individual y se destruye la propiedad privada sucumben las libertades públicas.

PROPIEDAD PRIVADA Y ESTATISMO

La afirmación sobre el valor de la propiedad privada es compatible con el mayor campo que se reconoce a la propiedad pública respecto de todas aquellas empresas que el esfuerzo privado no puede sustentar, situación que es cada día más frecuente, sobre todo en los países pobres, debido a la magnitud y limitado rendimiento de muchas inversiones básicas.

También es compatible no sólo con las restricciones del ejercicio de la propiedad privada sino también con la aceptación de los deberes de ésta. "La propiedad obliga" dice escuetamente la Constitución de la República Federal Alemana, sin caer en el vago concepto de la función social, pero expresando con firmeza la responsabilidad del propietario frente al bien común.

Desde este punto de vista parece lógico que mantener sin cultivo una tierra fértil es no dar cumplimiento a los fines de la propiedad privada, pues los bienes productivos no están destinados al mero atesoramiento sino a rendir frutos para su dueño y para la colectividad.

Cuando el Presidente, en su Mensaje, manifiesta que el proyec-

to de reforma agraria hará susceptibles de expropiación las tierras incultas, las notoriamente mal explotadas en relación a los niveles de productividad de la región, las abandonadas o que tengan parte importante sin cultivos o explotaciones pecuarias adecuadas, reafirma simplemente la idea de que "La propiedad obliga".

Los que subrayan la importancia de una nueva redacción de la garantía constitucional de la propiedad debieran tener en cuenta que dicho precepto no ha sido obstáculo para el desmesurado crecimiento del estatismo, que es el verdadero enemigo de la propiedad privada.

En sucesivas administraciones, los controles, las fijaciones de rentas y precios, los impuestos, han cercenado el dominio en forma menos ostensible que la expropiación, pero el decaimiento general de las propiedades particulares es quizás más grave y decisivo que aquella.

Tiene mayor importancia que los textos constitucionales o legales el espíritu con que se aplican. Muchas legislaciones europeas son menos rigurosas que la Constitución de 1925 en materia de garantías a la propiedad, pero en las naciones libres de Europa hay un ambiente natural de respeto a los frutos del trabajo, hay un clima de estímulo a los que producen, hay una conciencia de que la propiedad individual es la base de la libertad.

La búsqueda del paternalismo estatal es la verdadera amenaza. Todos en Chile, empresarios y obreros, regiones y municipalidades, requieren el auxilio del Estado en caso de apuro, y los funcionarios, a su vez, resuelven las necesidades

públicas con intervenciones de la autoridad. Debe primar el concepto de que los particulares son los primeros responsables de su propia suerte y de que nadie, ni siquiera el Estado, va a suplir su ineficacia, su indolencia o su falta de previsión.

PROPIEDAD PRIVADA Y EXPROPIACIÓN

"En la Reforma Agraria que vamos a realizar -dice el Presidente en el Mensaje- no perseguiremos el despojo de la propiedad privada, sino su perfeccionamiento".

El Jefe del Estado toca a fondo, con estas palabras, en lo que va envuelto en la polémica sobre la propiedad privada. Para que no haya despojo debe haber precio justo y pago oportuno en las expropiaciones que sean indispensables para la reforma agraria u otras de carácter análogo.

En muchas oportunidades el texto constitucional vigente ha servido para dilatar o entorpecer expropiaciones de utilidad pública indiscutible. Por otra parte, abrir indiscriminadamente la puerta al arbitrio en materia tan delicada establece una atmósfera de inseguridad que desde todo punto es negativa para la normalidad de las actividades de producción.

Lo necesario es encontrar una fórmula que respetando firmemente los derechos del propietario, asegure un procedimiento justo y expedito para llevar a cabo las expropiaciones que el interés público exige.

La determinación y forma de pago del valor de expropiación es el problema.

Un procedimiento demasiado drástico para determinar dicho valor ofrece el peligro de impulsar al Estado a fijarlo unilateralmente y a incurrir en una confiscación arbitraria.

El pago previo de la expropiación es, por otra parte, un resguardo prudente ante la posibilidad de que el Estado asuma compromisos excesivos en este rubro y cuyo cumplimiento se dilate y dificulte.

Por último, la debilidad de nuestra moneda impone necesariamente un mecanismo de reajuste de las obligaciones diferidas, a fin de que el valor de la expropiación no sea ilusorio.

Anuncia el Presidente de la República que se estudiará la forma de dar el mayor respaldo y las mayores garantías a la parte del precio de las expropiaciones de la reforma agraria que se pagará en bonos. Debe entenderse que los resultados del estudio que anuncia coincidirán con el despacho de la nueva ley de reforma agraria y con la reforma constitucional que la apoya, porque la naturaleza de ese respaldo y de esas garantías serán la prueba fehaciente del amparo que el Estado otorga a la propiedad privada. Si bien esta institución se acentúa permitiendo el acceso a ella del mayor número posible de personas, su solidez depende del reconocimiento del derecho de los propietarios actuales, pues esto sirve de precedente para la confianza de los dueños futuros.

En otros términos, el robustecimiento de la propiedad particular en Chile depende de los actos positivos que se realicen para afianzar el derecho de los individuos a lo que

les pertenece y para impulsarlos a obtener el máximo de rendimiento de los bienes productivos. No es la letra lo que importa, sino el espíritu que se encamina hacia el estatismo

o hacia la propiedad privada y la iniciativa individual. Las palabras del Presidente de la República marcan una dirección segura a este respecto.

¿Resurrección del Frente Popular?

(20 de junio de 1965)

El artículo analiza la agitada convención del Partido Radical, efectuada los días 19 y 20 de junio, en la que presentan sus renunciaciones a la colectividad Luis Alberto Cuevas, Pedro Enrique Alfonso y Raúl Rettig, destacados dirigentes del Partido, denunciando la penetración marxista. La cuenta de la directiva fue rechazada, y el partido disminuyó su representación parlamentaria en marzo, de 38 a 20 diputados y de 12 a 10 senadores (EM, 20 junio, pág. 37). Se comenta además la iniciativa de Reforma Constitucional destinada a ampliar el derecho a sufragio a los mayores de 18 años de edad y a los analfabetos.

La Semana Política

La Convención Nacional del radicalismo, que debe terminar hoy sus debates, se inició en medio de un ambiente de verdadero interés, al cual contribuían, por igual, la importancia parlamentaria de este partido, que es el que tiene más representación después del mayoritario de Gobierno, y el deseo de que en el juego democrático no falte un elemento compensador que amortigüe los choques de los bandos políticos principales, que en este momento son la democracia cristiana y el FRAP. Desafortunadamente para la apreciación de los resultados de este torneo y, mucho más para su comentario, se han interpuesto durante dos días fricciones que llevan en este instante a la histórica colectividad, salvo que surjan avenimientos de última hora, si no a la división, a la desintegración de sus efectivos dirigentes y de su representación parlamentaria. Lo sucedido hace necesario analizar retrospectivamente los acontecimientos que han venido gestando la división interna, sin perjuicio de referirnos en la Semana Política a algunos aspectos de la actual Convención. A eso cabe

agregar un comentario sobre indicaciones hechas en la Comisión de Legislación y Justicia para modificar la Constitución en lo que corresponde a las calidades del ciudadano elector, rebajando la edad y los requisitos de cultura mínima.

LA CONVENCION RADICAL

El clima de tensión reinante en el torneo del radicalismo indica que los convencionales sienten la trascendencia del momento que vive su partido. Soplan en él, vientos de renovación y de independencia. Por otra parte, la clase media empresaria, profesional, técnica y de empleos y oficios necesita una fuerza democrática que la interprete sin rígidos esquematismos.

Hay en Chile una gran cantidad de pequeños propietarios agrícolas y urbanos, que aceptan una democracia progresista, pero que no están dispuestos a ser absorbidos por un colectivismo aniquilador de las libertades. Existen muchos profesionales conscientes de que el país depende del estímulo que dé a sus hombres capaces, a los individuos

creadores en el campo de la cultura, de la ciencia y de la técnica. Los dueños de industrias y negocios que manejan ellos mismos necesitan de una atmósfera de respeto al trabajo y al ahorro. Los empleados y los obreros buscan sobre todo moneda firme y oportunidades de trabajo. Esa es la realidad del país, una gran proporción de sus habitantes aspira a laborar y a progresar en paz, sin sentirse atraída por la polarización de las fuerzas políticas que se produjo en las últimas elecciones presidenciales y parlamentarias.

El esquema de septiembre de 1964 y de marzo de 1965 no cubre todo el dial ideológico y político del país. Hay toda una masa electoral que flota entre estos dos polos y busca orientaciones de centro, que hasta ahora sólo podían surgir del radicalismo.

Jugando sus cartas, sin impaciencias ni debilidades, tan alejado de la restauración del Frente Democrático, como de una restauración todavía más anacrónica, la del Frente Popular, el Partido Radical aparece como una fuerza progresista capaz de interpretar a una fuerte porción del país, que quiere evolución social, apegada al modo de ser de Chile, a la cultura y a la posición geográfica de la nación, y que no desea progresos verbales, sino ampliación del horizonte moral y material de los chilenos.

De la Convención que comentamos se ha esperado el encuentro entre un partido democrático remozado y una vasta opinión pública de la capital y de la provincia que daría conductores sensatos e imaginativos a la vez.

LAS DOS CRISIS RADICALES

En el momento de escribirse este comentario, se habla del quiebre de la Convención, porque el rechazo de la cuenta de la directiva provocó la renuncia al Partido Radical del presidente don Luis Alberto Cuevas y de otros miembros del CEN.

Hay que hacer votos por la vuelta a la calma que mantenga la unidad del partido, pese a las diferencias.

Las agitadas aguas del radicalismo dejan ver una doble crisis, cuyo enjuiciamiento adecuado es muy importante para el país y para los propios radicales.

Diríamos que hay una crisis que mira al pasado y otra que se refiere al futuro.

La primera es una pugna entre dirigentes que luchan por el control de partido y que utilizan el desenlace de los acontecimientos iniciados con la colaboración radical al Presidente Alessandri, para provocar un desplazamiento de la directiva. Discutir ahora lo que se hizo y no debió hacerse, o lo que hubiera sucedido en una hipótesis que no se dio, es tarea académica y no política. Las recriminaciones en torno al pasado darán lugar a cambios de nombres en los puestos de mando, pero no ayudarán al radicalismo a encontrar el caudal de ideas que necesita para asumir sus responsabilidades actuales. La política da siempre la cara al futuro, y deja a los historiadores el análisis de los tiempos que fueron.

Mucho más importancia tiene la segunda crisis. En ésta se plantea la interrogante sobre la posibilidad de que el radicalismo concibe su acción inmediata como la continuación de un sistema de pactos con

fuerzas doctrinariamente opuestas, o si va a resolverse a revisar a fondo su estructura y su pensamiento, mientras realiza una oposición independiente y espera con calma su hora.

RESURRECCIÓN DEL FRENTE POPULAR

Con el pretexto de las experiencias pasadas, no faltan radicales que sueñan en los antiguos tiempos del Frente Popular, olvidándose que esos tinglados de la era estalinista han desaparecido en todo el mundo y que el socialismo democrático se opone por definición al marxismo leninismo. El ingreso de los radicales al FRAP sería, a estas horas, el abandono de sus convicciones libertarias y el sumarse a un extremismo, que, de triunfar, significaría la aniquilación de la existencia democrática. La popularidad obtenida por ese camino sería ilusoria, pues los aplausos y los halagos tendrían una procedencia marxista indudable.

La opinión pública espera que los dirigentes responsables del Partido Radical capten las verdaderas posibilidades políticas de esa tendencia. No es efectivo que una oposición eficaz obligue a pactar con el FRAP. Muy por el contrario, corresponde al radicalismo ayudar a que el país no se enfrasque en la disyuntiva entre la Democracia Cristiana y el comunismo. El partido no debería entrar en la competencia entre los que desean mostrarse cada vez más extremistas. Así la línea de centro-izquierda, de progreso laico, amenaza quedar abandonada y con este abandono se deja sin voz a una parte de la ciudadanía.

Sólo tal vez la falta de información y la tenaz propaganda marxista

hacen olvidar que el porvenir de Chile está en constituirse en una democracia social, más cercana a las de Occidente que a las dictaduras socialistas de todos los signos que se han entronizado en el llamado "tercer mundo".

Un país pobre y lejano, pero de raza homogénea, con recursos suficientes para que, bien administrados y en un clima de aliento al trabajo creador, las condiciones de vida de todos sean dignas, y con un sistema institucional que cuenta con la adhesión popular, está a mucha distancia de la Cuba que hizo posible a Fidel Castro o de las ex colonias asiáticas o africanas. La línea centrista es aquí la indicada para permitir el progreso social sin violencia y el desarrollo sin desaliento de los factores que animan la actividad económica.

Cuando los partidos de centro se sienten tentados a inclinarse a la izquierda extremista, se comprende que el gran problema nacional es que muchas mentalidades piensan y actúan aquí como si vivieran en el extranjero. Por ir tras las cautivadoras consignas de la demagogia y de la agitación, olvidan en qué país están y pierden los triunfos que tienen en la mano, mientras muchos electores chilenos ven frustrados sus anhelos más modernos y naturales.

AMPLIACIÓN DEL SUFRAGIO

La indicación constitucional para otorgar sufragio a los mayores de 18 años y analfabetos sigue el ejemplo de otros países que han creído que la ampliación del derecho a voto a los iletrados e inmaduros de la sociedad contribuye a perfeccionar la democracia.

Quienes saben que nuestras instituciones libres tienen una vida más sólida y larga que las del resto de los países latinoamericanos reciben con beneficio de inventario esas experiencias, cuyo verdadero fruto no ha sufrido todavía la prueba del tiempo, que es la única verdadera cuando se trata de fórmulas constitucionales.

El perfeccionamiento de la democracia está en la búsqueda simultánea de la mayor participación posible del pueblo en el poder político y del resguardo de las libertades ciudadanas.

Entre ambas finalidades debe existir el necesario equilibrio. El ideal es, naturalmente, que la mayor parte de la población sea llamada a influir en la generación de los poderes públicos, pero, en la medida en que no se asegura una mínima idoneidad de los que votan, se prepara el camino para el cercenamiento de las libertades públicas: los irreflexivos se inclinan, en general, a favor de la violencia y de la demagogia, sean éstas de derecha o de izquierda.

Gracias a la madurez de su electorado, Chile ha mantenido un régimen libre y un respeto institucional que no tienen parangón en el resto de los países de habla española. Hay que evitar que esta valiosa condición corra peligro, y con ella el verdadero desarrollo social y económico de la nación.

DEMOCRACIA O PROLETARIZACION

Es preciso que el país abandone de una vez por todas la falacia de creer que la manera de favorecer a los desamparados es nivelar a toda la población al tenor de la vida y de aspiraciones de los que nada tienen.

Promover socialmente a los pobres y a los analfabetos no debe consistir en empobrecer a los demás y en incorporar el analfabetismo a la política, sino por el contrario en crear las condiciones para que los pobres y los analfabetos dejen de ser tales.

El Partido Comunista desea y estimula la proletarización del país, pues el Estado totalitario se levanta derrotando los poderes privados de los ciudadanos y colocando a éstos bajo la férrea directiva colectivista. Todo su juego está en arrastrar a los empresarios medianos y pequeños, a los profesionales, a los empleados y obreros calificados hacia una condición disminuida que los prive del orgullo del propio esfuerzo y de los incentivos para ser dueños de los frutos de su trabajo. En una palabra: proletarizarlos.

La democracia progresa y se defiende a sí misma creando el clima necesario para que todos se esmeren en superarse. Ella establece una sociedad libre y abierta, en la que impera la igualdad de oportunidades. Esto significa que desconoce todo privilegio que no sea el conquistado por el mérito personal, pero que, por lo mismo, aplaude el coraje, la perseverancia, el espíritu de iniciativa y de ahorro.

Los menesterosos y los iletrados requieren de la especial preocupación de un Gobierno democrático para que salgan de su estado y sean también dueños de su destino. Por esto, ellos deben ascender palpando las ventajas que producen el trabajo y la ilustración y sintiéndose estimulados al esfuerzo personal, en vista de que las leyes y las autoridades respetan a quienes conquistaron ya esos valores.

El comunismo se convierte en partido de masas

(4 de julio de 1965)

El Partido Comunista ha celebrado su Pleno los días 26 y 27 de junio, destacando entre sus acuerdos el llamado a sus militantes para integrarse a las organizaciones populares que está creando el Gobierno (EM, 28 junio, pág. 35). En el Pleno se manifiesta gran desconfianza hacia las posiciones del Partido Radical.

Cabe destacar que después del anterior Pleno del 24 de abril, el senador Luis Corvalán declaró que "la vía electoral fue favorable hasta la pasada elección presidencial, pero que la vía armada es una posibilidad que el marxismo no puede desechar" (EM, 27 abril, pág. 3).

En los mismos días el Partido Socialista se reúne en Panimávida, donde se produce una violenta pugna entre Raúl Ampuero y Salvador Allende, y se rechaza la idea de revivir el Frente Popular (EM, 26 - 27 junio).

La Semana Política

El Pleno del Partido Comunista y el Congreso General del Partido Socialista dibujan con distintos matices su línea de dura oposición a la democracia cristiana. Ambos grupos parten de la base que la única fuerza que defiende al régimen libre es el partido de Gobierno, en vista de que los acontecimientos de septiembre y de marzo pasados disminuyeron sensiblemente el poder electoral del radicalismo y de la derecha. Los comunistas quieren mostrar que el partido mayoritario es inoperante para realizar los "cambios", o sea, la revolución colectivista a que aspira el FRAP. Por dos caminos que se juntan, el extremismo desea forzar a la democracia cristiana a apartarse del verdadero sentido del 4 de septiembre. Ello impone a los elementos electorales y sindicales del partido de Gobierno, así como a su representación parlamentaria, un robustecimiento de su inspiración doctrinal básica, a fin de transmitir al país la plena

confianza de que, al dar el triunfo en las urnas a un movimiento nacional y popular de estirpe democrática, cerró definitivamente las puertas a la dictadura comunista.

Tal precisión doctrinaria y práctica es más necesaria que nunca, desde que el FRAP intensificara su oposición demagógica y los activistas del comunismo trataran de infiltrarse en las organizaciones de base democratacristiana y confundirse con los elementos de ésta.

El partido de Gobierno une a las desventajas propias de una fuerza joven, cuyas iniciativas no siempre aparecen fraguadas en la experiencia, el ataque de un adversario sutil e implacable, que explotará en beneficio propio toda debilidad que con él se tenga o cualquier concesión que se le haga. Tiene, además, la democracia cristiana la posibilidad de seguir contando con el concurso del país no politizado, la fuerza independiente que aspira a la normalidad institucional y económica, la

masa que, en *todas* las clases sociales, no tiene secta, ni ideología, ni odio, y que aspira a trabajar en paz.

EL COMUNISMO SE CONVIERTE
EN PARTIDO DE MASAS

Los comunistas han comprendido que el secreto del éxito democratacristiano está en el contacto vivo y fraternal de los elementos de ese partido con los sectores populares. Ese tipo de relación brinda oportunidades excepcionales, cuando no implica exigencias de disciplina y de trabajo, sino que ofrece más bien perspectivas halagadoras a quienes siguen a los líderes.

La experiencia revolucionaria mundial del comunismo aconseja a éste actuar mediante minorías escogidas. La formación ideológica y moral de ellas es incompatible con el trato personal abierto, con la actitud de servicio directo y desinteresado en lo inmediato, que tanto fruto político ha dado a la democracia cristiana. A cambio de la inevitable distancia en que se sitúa el fanático, frente a los problemas concretos de la gente, sólo la disciplina rigurosa y la frialdad en la acción logran en último término el control de la masa, cuando es menester evitar una huelga inconveniente o prolongar y estimular artificialmente una situación de descontento. Los comunistas prefieren la eficacia del fanático.

El Pleno de ese partido, comprendiendo la resonancia que tiene en nuestro pueblo el espíritu de servicio de los democratacristianos, ha resuelto imitarlo. De acuerdo a esto, el comunismo se preocupará de atender a las necesidades "más sentidas de todas las capas de trabaja-

dores", y sus dirigentes máximos hicieron hincapié en el Pleno acerca de la necesidad de que el partido estreche sus contactos con las masas populares.

He aquí una confesión comunista que releva de pruebas acerca del alejamiento efectivo del pueblo en que está el partido de Lenin.

Pero ese partido tiene una capacidad prácticamente infinita de viraje y mimetización. Entrará, pues, ahora a mezclarse en los problemas concretos de los pobladores y campesinos. Lo hará sin fines humanitarios, sin preocupación por los hombres y mujeres concretos, inspirado sólo en la idea de utilizar políticamente nuevas herramientas para la comunización del pueblo.

Conforme a lo que han dicho los oradores oficiales del Pleno, los agitadores comunistas se incorporarán a las organizaciones que está creando la democracia cristiana, con el objeto de darles "su verdadero carácter de clase e infundirles combatividad".

Es indudable que los comunistas seguirán actuando a través de minorías entrenadas, que tratarán de provocar la confusión en los sectores populares y el divisionismo entre los propios democratacristianos. Esta táctica de violencia interna e inaparente en contra del Gobierno es mucho más peligrosa que la batalla a campo abierto.

EL SOCIALISMO Y LA
ESTRATEGIA COMUNISTA

Las resoluciones del Congreso Socialista de Panimávida, pese a la derrota de la corriente del senador don Raúl Ampuero, obligan a ese

partido a seguir las aguas del comunismo.

También se habla allí de una más intensa política de masas. Sus dirigentes adhieren al "internacionalismo proletario en lucha contra el capitalismo", consideran que el clima del país es favorable a una acción ideológica y doctrinal marxista y piensan orientar su trabajo a la persuasión de que la democracia cristiana "no se atreve a cortar vínculos con el imperialismo" y que es, en definitiva, la otra cara de la derecha, según el slogan que los socialistas han querido difundir sin éxito.

Se advierte, entonces, que los partidos del FRAP tratan de empujar a los elementos de la democracia cristiana a una definición marxista. Se la culpará de ser incapaz de hacer la política "antifeudal, antioligárquica y antiimperialista" que el FRAP presenta como panacea para los males de Chile. El comunismo y el socialismo procurarán llevar a los demócratacristianos a soluciones demagógicas, para aprovecharse después del fracaso de tales soluciones. Utilizando el marxismo temperamental que se incubaba a veces en los partidos democráticos, el FRAP buscará producir el abandono de la filosofía propia del partido de Gobierno, para desvitalizarlo con un planteamiento marxista.

Mediante estos expedientes, los vencidos del 4 de septiembre piensan lograr una victoria que las urnas les negaron.

EL SIGNIFICADO DEL 4 DE SEPTIEMBRE

Frente a la actitud obstruccionista del FRAP, es preciso tener en

cuenta la voluntad popular manifestada el 4 de septiembre de 1964, que dio el triunfo por mayoría absoluta al Presidente Frei.

Si se busca un denominador común de la mayoría nacional que dio el voto a la democracia cristiana, podría decirse que éste tiene tres elementos básicos: una decisión de cambios estructurales en lo social y en lo económico; una actitud de franco repudio al comunismo, y un firme deseo de mantener y perfeccionar las libertades ciudadanas.

El afán de cambio puede expresarse en todos los planos de la convivencia. Se trata de ajustar los mecanismos del país para que éste emprenda un desarrollo acelerado y, al mismo tiempo, se aspira a elevar la condición socio-económica de los sectores más postergados de país. Los cambios van desde el relevo de los dirigentes políticos tradicionales, pasando por la chilenización de la gran minería, por la duplicación de las exportaciones, por una política agropecuaria de alta productividad y de sentido social, hasta llegar a la organización ciudadana libre, a través de sindicatos, cooperativas, juntas de vecinos y demás grupos intermedios, consagrados a defender los intereses sectoriales y de promover el desarrollo social y económico.

La mayoría nacional votó además indiscutiblemente en contra del comunismo y tal decisión importa un compromiso para la democracia cristiana. No sólo perdió las elecciones el señor Allende o el FRAP, sino todo un sistema de vida: los paredones, las "liberaciones populares" de signo marxista, el colectivismo político, económico y cultu-

ral, el totalitarismo comunista en todas sus formas. Chile optó por el mundo libre el 4 de septiembre y las urnas configuraron en este caso una actitud internacional definida.

Esa línea internacional excluye por igual al "proimperialismo" y al "antiimperialismo" en relación a los Estados Unidos, pues ambas posiciones son propias de mentalidades colonizadas. Por graves y reiterados que sean los errores norteamericanos, es indiscutible que la posición de un país defiende una civilización puesta en jaque por los Fidel Castro, Ho Chi Min, Mao y demás dictadores que aspiran a orientalizar el mundo. Cuando se habla de Occidente o del mundo libre, muchos creen que se trata de expresiones propagandísticas, pero cuando está a la vista el increíble rebajamiento moral y material que el comunismo ha producido en las naciones que caen en sus manos, Occidente y la libertad vuelven a adquirir todo su sentido, precisamente porque el hombre aprecia más los valores cuando corre el riesgo de perderlos.

LA POSICIÓN DE LA SOCIEDAD LIBRE

Ni el "pro" ni el "anti" Estados Unidos son posiciones dignas de un pueblo libre. El país tiene que velar por sus intereses propios, por su futuro político y económico. Tales intereses y ese futuro están amenazados por la ofensiva comunista mundial. El país ha decidido libremente no sumarse a los pueblos es-

clavizados por el comunismo y es lógico que mire a la solidaridad continental y a la defensa del mundo libre como supuestos de un porvenir digno para los chilenos, aunque mantenga su propio juicio ante los sucesos concretos de la vida internacional.

Por último, los cambios anunciados el 4 de septiembre se plantean para realizarse en un clima de libertad política. Ello implica que el desarrollo social y económico se impulsa a través del esfuerzo propio y de la dignificación personal de los ciudadanos, y no por un colectivismo necesariamente materialista.

Ello envuelve fijar un papel definido a la órbita de acción del Estado, como promotor de aquellas actividades que superan al esfuerzo particular, debido a su naturaleza o a su magnitud; pero implica al mismo tiempo una moderación del estatismo, en términos que se reserve a los ciudadanos la primera responsabilidad en lo que toca a su sustento y al ejercicio de sus facultades. Tal concepción se opone igualmente al individualismo y al colectivismo. La piedra de toque, en este punto, es la propiedad privada. Sus limitaciones en beneficio social no pueden llegar a desnaturalizarla. Si tal sucede, el Estado se convertirá poco a poco en el único empleador, en el único cliente, en el único suministrador de bienes y servicios. Y la servidumbre económica está a un paso de la servidumbre política.

El Gobierno y los partidos frente al cobre

(12 de septiembre de 1965)

El Senado, por 26 votos contra 14, aprobó en general el proyecto del cobre destinado a expandir la producción y a compartir la propiedad de las empresas cupríferas entre el Estado y las compañías extranjeras (EM, 7 de septiembre, le dedica amplias informaciones al tema). Los partidos marxistas votan en contra del proyecto, señalando que debe irse directamente a la expropiación. Los radicales votan a favor de la idea de legislar al respecto, pero se oponen al proyecto en particular. Paralelamente se desarrolla en estos días la toma del Liceo 7 de Santiago y una serie de movimientos (EM, 9 septiembre, pág. 21). El día 12 de septiembre, el Presidente Frei firma el Proyecto de sindicación campesina (EM, 12 septiembre, pág. 47).

La Semana Política

La aprobación general del proyecto del cobre en el Senado constituye un paso decisivo en el esfuerzo por consolidar la economía nacional. El Gobierno está empeñado en conseguir que se duplique el monto de las exportaciones. El programa del cobre representa aproximadamente la mitad de esta meta. El resto corresponde a proyectos en curso de diversa naturaleza. Ha llegado, pues, el momento de acelerar la marcha económica del país. Si el Gobierno ha obtenido una victoria, debe también destacarse el papel desempeñado por el radicalismo y por los otros sectores democráticos. Ellos sostuvieron sus puntos de vista, lograron que fuesen considerados y permitieron que se abriera paso a una nueva legislación sobre el cobre, en cuyo perfeccionamiento colaboraron eficazmente. Los comunistas y sus aliados han sufrido un rotundo fracaso. El más serio de todos, después del 4 de septiembre de 1964. Continuarán su labor subversiva en otros frentes, con

más intensidad que nunca, infiltrándose en las organizaciones gremiales y otras esencialmente ajenas a la política, desquiciando la vida escolar mediante huelgas y ocupaciones de establecimientos de enseñanza y creando, en fin, toda suerte de obstáculos al Gobierno.

REFORZAMIENTO DE LA ECONOMÍA

El país ha vivido un prolongado suspenso de sus actividades normales a causa del predominio de la politización sobre las ocupaciones propiamente productivas. A una campaña presidencial paralizante del trabajo económico sucedió una campaña parlamentaria, y a ésta, la pugna por los proyectos de ley presentados por el Gobierno. Las medidas antiinflacionarias y los impuestos, que han adquirido un carácter polémico y despertado tensiones muchas veces innecesarias contribuyeron a producir una especie de clima de expectación reñido con la tranquilidad y estabilidad que

supone el esfuerzo productor eficaz. Una vez que el proyecto del cobre encuentra un cauce para su despacho y deja de ser una encrucijada política peligrosa, ha llegado el momento de echar a andar el sector más importante del país, el que produce los bienes indispensables para la colectividad, el que no formula declaraciones ni se hace presente de otro modo. Se trata de la gran masa ciudadana que espera su mejoramiento como consecuencia de su propio trabajo y del de los demás. Esta es la gente que piensa que hay que terminar los debates estériles, que el país debe ponerse de una vez por todas a trabajar, a emprender, a invertir, a construirse el futuro. El cobre es uno de los programas básicos de la expansión de la estructura productiva de Chile y, sin duda, el de más tamaño. Representa la mitad del aumento de divisas programado para 1970. Pero hay diversos proyectos menores que, en conjunto, suman la otra mitad, para llegar a los 500 millones de dólares adicionales al año que son indispensables para un efectivo fortalecimiento económico. Ese no es el único campo de trabajo. Es preciso impulsar la construcción, las actividades agropecuarias, la industria metalúrgica y toda la producción de bienes y servicios necesarios. En una palabra, corresponde recuperar el tiempo sacrificado a los suspensos políticos, multiplicando ahora el ritmo productivo. Dos ideas aparecen aconsejadas por la experiencia de este período de politización que se remonta a un tiempo inclusive anterior a este Gobierno. La primera es que las decisiones legislativas y administrativas deben estudiarse bien,

de una sola vez, y formar un cuadro estable, dentro del cual se trabaje sin incógnitas. La segunda es que el Estado debe intervenir lo menos posible en la economía, reservándose para las empresas de gran magnitud planeadas y ejecutadas con pleno conocimiento de la materia. Proceder de otra manera es esterilizar las iniciativas e impedir que despierten las energías necesarias para el desarrollo.

EL GOBIERNO Y LOS PARTIDOS FRENTE AL COBRE

La falta de una solución nacional clara para el problema del cobre ha impedido por muchos años que el país obtenga los recursos que debería generar esa actividad. Este vacío es el más propicio para arrastrar a la opinión hacia soluciones extremistas y demagógicas muy perjudiciales para el interés nacional.

Técnicos, dirigentes políticos y gobiernos han comprendido este problema e intentado solucionarlo. Pero sólo el Presidente Frei planteó en el ámbito popular, como candidato y como gobernante, una fórmula adecuada para expandir la mitad del cobre y que permite que el país no quede en el callejón sin salida de la confiscación o de la nacionalización de las empresas. Gracias a la acción del Jefe del Estado la ciudadanía ha comprendido el papel dinámico que el cobre ha de desempeñar en el desarrollo y la necesidad de incorporar a las grandes compañías a la economía nacional, respetándoles y alentando sus intereses legítimos.

El Presidente ha obtenido un triunfo al conseguir la aprobación

general de la iniciativa en el Senado. En esta tarea ha mostrado constancia, firmeza y flexibilidad a la vez para vencer los obstáculos por quienes hubieran deseado colocar al Gobierno en una situación propicia para cualquier desborde. Debíó contener los impacientes y distinguir con precisión entre el obstruccionismo marxista y el esfuerzo de los sectores democráticos por mejorar realmente las posiciones ya logradas con patriotismo por el Gobierno.

Las actuaciones del presidente del Partido Radical, senador don Humberto Enríquez, y de los demás representantes de ese partido en el Senado han sido dignas del mayor respeto. Ellos han dado un ejemplo de oposición constructiva. No sólo aportaron sus votos a una iniciativa valiosa para el presente y el futuro del país, sino que la estudiaron a fondo, consiguiendo mejorar la futura legislación.

Los hechos protagonizados por la oposición democrática en esta semana trascienden el asunto del cobre. En efecto, ha quedado demostrada la sabiduría del constituyente al establecer el sistema bicameral y la renovación parcial de la Cámara Alta. La independencia del Senado respecto a la opinión electoral más reciente, lejos de impedir la labor de Gobierno, favorece el estudio sereno de las decisiones legislativas y contribuye a perfeccionarlas. La libertad con que los senadores de la oposición democrática trataron el asunto del cobre honra a la alta corporación a que pertenecen y constituye el mejor argumento para defender a la institución misma.

La derrota del FRAP da confianza en la eficacia del sector demo-

crático. Una violenta campaña en los sindicatos y demás organizaciones, el empeño en denigrar a los representantes del Gobierno, las infiltraciones en los partidos democráticos tendientes a inquietarlos y dividirlos, la oratoria despectiva de sus parlamentarios, que llegó al lirismo en los últimos momentos, son algunos de los medios con que el comunismo y sus seguidores pretendieron frenar la marcha del país. Una vez más se confirma que la mayoría nacional repudia al marxismo porque ya le conoce.

PROSECUCIÓN DE LA OFENSA COMUNISTA

El FRAP ha perdido una batalla que era muy importante para el comunismo. Este imaginaba que, cortado el camino de la expansión del cobre, vendría el desaliento de la opinión pública, y que tal vez el Gobierno se vería forzado por las impacencias a tener actuaciones inconvenientes para el juego normal de las instituciones. El ambiente interno y las consecuencias internacionales que lo acompañarían iban a constituir un terreno fácil para el extremismo. Este es el cuadro que tuvo en vista el FRAP al atacar el programa del cobre como lo hizo.

Del cerco económico directo, el comunismo pasa ahora a otros objetivos.

Socialistas y comunistas controlan absolutamente la directiva de la Central Única de Trabajadores. Dicha entidad representa apenas parcialmente a las fuerzas del trabajo, pero los marxistas tienen medios de ejercer presión sobre los sindicatos y de arrastrarlos hacia el obstruc-

cionismo político. La importancia de la CUT no deriva de su carácter representativo sino de su valor estratégico. A través de ella el marxismo penetra en la organización sindical y en la vida obrera, en tanto que puede inferir grave daño a las tareas del desarrollo mediante el paro de industrias vitales.

Los comunistas se están enseñoreando de las organizaciones de estudiantes secundarios. Las ocupaciones de liceos y de otros locales de enseñanza tienen como pretexto el mal estado de los edificios, pero de hecho constituyen un entrenamiento para subversiones de más escala, aunque presentan a veces aspectos que atraen la simpatía del público. En los últimos días el verdadero carácter de esas manifestaciones ha quedado en evidencia con las agresiones concertadas que realizaron los estudiantes contra la fuerza pública.

No es fácil conocer toda la profundidad de la influencia comunista en el campesino y entre los pobladores situados en la periferia de las ciudades. Es un hecho, sin embargo, que la agitación campesina está presente en diversas zonas y que los que la azuzan son los comunistas. Innecesario es destacar los efectos que puede acarrear un sabotaje marxista a la promoción social del campesinado, perseguida por el Gobierno, y a los esfuerzos por aumentar con rapidez la producción de alimentos.

Aparte de las manifestaciones ostensibles del extremismo comunista, hay que señalar su labor secreta en el seno de las organizacio-

nes democráticas, mediante individuos pertenecientes al partido totalitario, simpatizantes de éste o colaboradores desprevenidos sobre la orientación marxista que se les imprime desde fuera. Partidos políticos, asociaciones gremiales y culturales, comités y centros locales están amenazados por este tipo de debilitamiento interno que les enerva su capacidad de lucha o los hace cómplices del avance adversario.

No puede ignorarse el giro que adopta la lucha marxista contra otros países latinoamericanos. Las llamadas guerras de liberación constituyen la táctica más eficaz del comunismo en el hemisferio, probada con éxito en Cuba y repetida con resultados inciertos en muchas naciones,

Se impone, pues, una estricta vigilancia de los elementos democráticos frente a los movimientos del marxismo en el campo sindical, estudiantil, campesino y de organizaciones sociales en general. Es más que probable que el cerco económico que el FRAP quiso producir en el cobre sea reemplazado por objetivos más difíciles de defender por nuestra democracia. Entre ellos está el de impedir que la economía se active al aprovechar las oportunidades que brinda el programa del cobre.

Más que nunca es urgente que los dirigentes y las bases de los partidos democráticos tengan una visión precisa de las metas que persiguen y una clara conciencia de que el comunismo ensayará, desde distintos frentes, hacer fracasar el empeño de los chilenos de acelerar su desarrollo en un régimen libre.

¿Peligro de la Reforma Constitucional?

(10 de octubre de 1965)

La amplia Reforma Constitucional presentada a discusión por el Presidente de la República es objeto de serias discusiones en el Senado, las que pueden llevar a su paralización.

Se continúa analizando en el Senado el proyecto del cobre, siendo discutido en particular en comisiones y luego en la Sala. Se rechaza la iniciativa de nacionalizar las empresas mineras propuestas por los partidos marxistas.

En el Salón de Honor del Congreso comienza el día 10 el Congreso del Partido Comunista.

El día 7 se envió a la Cámara de Diputados el proyecto de sindicación campesina (EM, de octubre, págs. 1 y 20, texto del Proyecto).

La Semana Política

El Gobierno ha avanzado dificultosamente esta semana en la aprobación de la reforma constitucional y del proyecto del cobre, a la vez que ha enviado el texto de lo que aspira a que sea la sindicación campesina. En la primera iniciativa se ha producido una tensión aguda, que cubre de nubarrones la referida reforma, a menos que la destreza y el espíritu firme pero conciliador del Jefe del Estado obtenga una fórmula de armonía equiparable a la que se consiguió en el cobre. En este proyecto específico, la discusión particular marcha muy lentamente y ha dado hasta ahora motivos para debates dignos de la discusión general. La sindicación campesina, materializada ya en la moción del caso, despejó la incógnita sobre lo que pretende el Ejecutivo y los alcances que esta medida estará llamada a tener en el sector agrario.

Pero, sin duda, el hecho más significativo de la semana ha sido la exteriorización de la pugna socialista-comunista, evidenciada ya,

desde hace mucho tiempo, ocultada por la doble necesidad de las campañas presidencial y parlamentaria, y hecha indispensable en estos momentos en que estallan conflictos nacionales e internacionales que eligen como escenario a uno y otro partido.

¿PELIGRO PARA LA REFORMA CONSTITUCIONAL?

El proyecto gubernativo no tuvo dificultades, como era presumible, mientras se tramitó en la Cámara de Diputados, sostenida por una mayoría segura y coincidente con las ideas y los propósitos de la reforma. La cosa cambió en el Senado, donde los votos demócratacristianos no alcanzan al tercio y existe un espíritu mucho más crítico y analítico que en aquélla.

Las discrepancias se han manifestado en muchos aspectos y con ocasión de múltiples materias. La abolición de la antigua garantía e inviolabilidad de la propiedad, el

reforzamiento de las facultades del Ejecutivo y la consulta plebiscitaria son los tres puntos candentes en que se centra la diferencia de opiniones.

Personeros del Ejecutivo habían considerado atendibles las observaciones hechas al texto propuesto para el artículo 10 de la Constitución Política y accedido a precisar y concretar su alcance. En la forma primitivamente propuesta elimina la actual garantía y deja el dominio entregado a lo que la ley determine. Puede ésta, por tanto, reconocerlo o desconocerlo, otorgarlo, suprimirlo o concederlo amplia o restrictivamente y, en fin, borrar una ley posterior lo que haya establecido la precedente.

A las objeciones referidas contestaron los representantes gubernativos que se quería disponer de normas flexibles y expeditas para la reforma agraria y la remodelación de determinados sectores urbanos ligados a planes habitacionales. Se les arguyó que esta preocupación quedaría resuelta si así lo establecía la Constitución, consagrando a la vez bases de expropiación equitativas y pagos garantizados por fórmulas que respondieran de su traducción en moneda estable.

Así quedó acordado en principio, pero circunstancias que no se conocen bien han obstaculizado la materialización del acuerdo y vuelto las cosas a su primitivo estado. Esto ha repercutido en la reforma misma, que hoy se halla sujeta a la eventualidad de no tener mayoría, a menos que se produzca algún entendimiento.

Al factor aludido se agregan las reticencias de otros partidos en

materia del plebiscito y lo que llaman las disminuciones de poder del Congreso, que pueden ser un nuevo elemento de incertidumbre y de amenaza para la innovación que se desea.

En otros comentarios hemos señalado dos hechos importantes. Uno de ellos es la obsolescencia de nuestro actual texto constitucional. Ninguna democracia moderna puede funcionar ni ser eficaz con las deficiencias y trabas del actual texto. Todos los partidos, desde el más tradicional hasta el más iconoclasta, lo reconocen. Cualquiera de ellos que estuviese en el Gobierno tendría que modificarlo, y así lo proclamó, reiteró y tradujo en un proyecto el anterior Presidente don Jorge Alessandri. De otro lado, es evidente que una reforma constitucional necesita nacer de un consorcio real de voluntades, so pena de representar el ocasional y poco convincente triunfo de quien detenta la mayoría y prescinde de la necesidad de expresión de los grupos minoritarios.

Sería profundamente equivocado de los partidos extraños u opositores al Gobierno el oponerse en globo a la reforma y cerrarle el paso. Pero no sería menor el error del partido de Gobierno de querer imponerla a rajatabla y sin buscar fórmulas justas y sensatas que expresen el sentir concordante de mayorías y minorías. No debe olvidarse que las Constituciones están llamadas a regir largo tiempo y que ningún partido tiene la certeza de eternizarse en el poder. Aparte de que lo lógico y patriótico es legislar para el país y su futuro, quienquiera que sea el que se encuentre en determinado momento a su mando.

PRO Y CONTRA DE LA
SINDICACIÓN CAMPESINA

El envío del proyecto sobre esta materia despejó la incógnita al respecto y dio a conocer el pensamiento del Gobierno. La sindicación propiciada es libre, amplia y absoluta. Se deja al campesinado la vía franca para escoger el sindicato que le plazca, pero se incita por todos los medios a crearlo y darle vida. La innovación tendrá peligros, pero, por lo menos, responde a una realidad laboral y social, y da salida a un problema que, sin duda, se agravó por la negativa de algunos grupos agrícolas a reconocer la existencia sindical y a admitir el ocaso de la rutina y del paternalismo.

Se ha objetado al proyecto de que emerge en una atmósfera cargada de tensiones en el campo, su falta de soluciones para evitar las huelgas incontroladas, las paralizaciones de actividades y la caída vertical de una producción que ya no alcanza a satisfacer el consumo. El reproche es justo. La iniciativa es en esta materia muy débil y si no se la complementa con criterio técnico, verdaderamente social y, por tanto, apolítico, será de temer que todos los planes de mejoramiento agrario sean frustrados por una agitación que ya tiene tonos agresivos y encontraría en el actual texto estímulos de proyecciones incalculables.

QUEBRADURAS EN EL FRAP

El FRAP fue siempre una hechura artificiosa, con febles pies de barro. Su único partido real y vigoroso es el comunista, al cual los socialistas han debido agregarse por necesidad de ocultar su escasez de adhe-

rentes y su debilidad política. Pero ninguno de los dos se mira bien, y, como ha sucedido invariablemente en todo lo que hoy es la "cortina de hierro", si el comunismo triunfara, al primero que eliminaría sería al socialismo.

Los separan mentalidades y tácticas inconciliables. El comunismo cree en el poder, cualquiera que sea la forma de conquistarlo, y sólo de éste espera los instrumentos para su política. Es, por tanto, paciente, frío, camaleónico, dispuesto hoy al disfraz democrático como resuelto mañana al golpe de Estado. El socialismo quiere, con un claro eco trotskista, la "revolución permanente", la agitación como medio, sistema y meta. La necesita, además, porque piensa que en ella están el secreto y la posibilidad de su lucha con el comunismo, al cual las masas miran con recelo por encontrarlo demasiado complejo y acomodaticio.

Hoy se inicia el XIII Congreso Nacional Comunista, que ha tenido como preliminares pugnas y disendimientos agudos con el socialismo. El informe político del senador Luis Corvalán dará pie, sin duda, a acrecentar disputas y a reproches de larga resonancia.

El fondo del problema es múltiple. La actitud comunista es consecuencia del convencimiento de que su enemigo es la Democracia Cristiana y que ésta, a través de su penetración en densas capas populares, ha llegado a lo que cree su propio territorio. La consigna, lanzada hace meses, de que el Partido Comunista deberá transformarse en un partido de masas, fue el primer reconocimiento explícito de este hecho. Ante esta realidad, sólo queda un camino: entrar en el

mismo campo, usar la misma táctica, pero hacerlo con el designio de desalojarlo y de minarle el terreno pulgada por pulgada.

Sería ilusa la Democracia Cristiana si confundiera esta repentina y casi sonriente coincidencia, disfrazada algunas veces con palabras de transitoria dureza, con una verdadera posibilidad de alianza. La historia europea, asiática y africana está llena de estas "compañías de ruta", convertidas muy pronto en odio inextinguible y en persecución desembozada.

El comunismo sabe que hay dos maneras de eliminar a un adversario; de frente y a golpe descubierto, si se sabe más fuerte y libre de todo riesgo, o tendiendo la mano y abriendo los brazos, si se da cuenta de que ese adversario debe ser adormecido y necesita una cierta anestesia que lo haga bajar sus defensas y abandonar toda precaución. Hasta hace poco usó con la Democracia Cristiana el primer procedimiento, porque se creyó más fuerte. Elecciones sindicales y experiencias de las poblaciones de la periferia le han demostrado que confió demasiado en sí mismo. Adoptará ahora la táctica de la conciliación, pero esta será mucho más peligrosa que la primera.

El camino es tan claro que puede ser dibujado de antemano. La acción social democratacristiana contará con una sombra inseparable, la comunista, y ésta la acompañará en el campo, en la industria, en la economía, en el sindicato, en la labor legislativa y administrativa. Tras la huella abierta por el militante de gobierno, pasará la agitación comunista y convertirá el proselitismo de su "camarada" en surco para depositar un germen de acción antago-

biernista. Lo hacen ya en el sector campesino y comienzan a organizarlo los grandes sindicatos. Lo harán también en el campo legislativo y de Gobierno.

¿Cuál es la manera más eficaz de inutilizar un proyecto de beneficio popular? Exagerarlo tanto que o no pueda ser aplicado o tenga que provocar el veto del Ejecutivo. En ambos casos el comunismo habrá aparentado ser un buen amigo, pero en ambos también habrá conseguido que el Gobierno fracase, quede en evidencia como que no quiere o no sabe cumplir sus promesas, y por fin, deje caer en manos comunistas el fruto hecho madurar por una demagogia diestramente manejada.

No debe olvidarse, finalmente, que a las razones de estrategia y de infiltración, debe el comunismo añadir otra de carácter interno. La pugna entre "pekineses" y "soviéticos" se hace día a día más aguda y ello se agrava por la divergencia de las políticas externas de ambas potencias. El socialismo está mucho más próximo a Pekín, y por tanto, es una punta de lanza del peor enemigo, dentro de la casa. El FRAP no puede contener ya a las dos facciones, y, antes de que su división se haga más patente y amenace al comunismo, todo parece aconsejar al sector moscovita el cierre de la casa y la mudanza a otro barrio.

El drama -o la comedia- tendrá varios actos. Estamos sólo en el primero, o quizás en el prólogo. En todo caso, hoy se levantará el telón sobre el escenario del XIII Congreso Comunista, en cuyo tablado resonarán muchas declaraciones, tácticas o expresas, que permitirán medir la hondura y la proyección de este conflicto.

Pro y contra de la clase media chilena

(31 de octubre de 1965)

El 25 de octubre se inicia una huelga ilegal en los minerales cupríferos de Chuquicamata y El Teniente, convocada por la Confederación de Trabajadores del Cobre, para oponerse a la "Ley del Cobre" que se tramita en el Congreso.

El homenaje a Pedro Aguirre Cerda rendido por el Partido Radical en el Teatro Municipal, el discurso del político Jorge Prat (EM, 28 octubre, pág. 20) y la convención de la Juventud Radical en Viña del Mar (EM, de octubre, pág. 37) sirven de base para el comentario sobre los valores de la clase media chilena.

La Semana Política

El país está en presencia de una huelga subversiva que afecta a los minerales del cobre de la gran minería, cuya gravedad no puede desconocerse. El movimiento mantiene su fuerza, pese a que no goza de ningún apoyo en la opinión pública. La mayoría frapista de la Confederación de Trabajadores del Cobre está mostrando que el marxismo opondrá dura resistencia a los intentos del Gobierno de solucionar los problemas estructurales de nuestra economía, como es el caso del robustecimiento de la balanza de pagos mediante la expansión de la minería.

En el homenaje que el radicalismo rindió a la memoria de don Pedro Aguirre Cerda se destacó la defensa de los valores de la clase media chilena. En el mismo sentido dio una charla el distinguido político don Jorge Prat. El tema ofrece interés actual y está lleno de consecuencias políticas dignas de meditarse.

LA SUBVERSIÓN MARXISTA

Quando se sostiene que el marxismo obedece a causas de orden

económico-social y que sólo puede vencerse mediante profundas reformas estructurales, no se dice toda la verdad. Es innegable que el comunismo prospera más fácilmente en una economía estrecha y estática, que no brinda perspectivas de bienestar a las grandes masas. Pero no es menos evidente que los partidos marxistas desarrollan una labor subversiva destinada a crear conflictos y contradicciones que impidan satisfacer las necesidades de las grandes mayorías nacionales a través de un régimen democrático.

El marxismo no es, así, un subproducto de una situación económica, sino una maquinaria política montada para destruir el régimen democrático aprovechando las debilidades de éste. Luchar con esta maquinaria en un régimen de competencia sin reservas y pretender quitarle la iniciativa en materia de agitación popular es una ilusión fracasada muchas veces, porque el comunismo, por construcción filosófica, será siempre un competidor desleal.

Un ejemplo de que el marxismo no es enfoque económico-social lo

tenemos en la presente huelga del cobre. El personal de las minas goza de un nivel de remuneraciones muy superior al del resto de los trabajadores. Un grupo de dirigentes frapistas, adiestrado, activo, con apoyos foráneos y dispuesto a usar todos los recursos para la perturbación social, toma la mayoría en algunos organismos sindicales y desde ahí presiona hasta obtener una huelga perjudicial e injustificada.

Las declaraciones de la Central Única de Trabajadores, expresión exclusiva de los partidos Comunista y Socialista, y la declaración de este último partido demuestran con elocuencia que la huelga no persigue objetivos económico-sociales. Ella se realiza para sabotear el proyecto del cobre y para prevenir al país que los esfuerzos y sacrificios que se hagan a fin de poner en marcha el programa de expansión de las faenas contarán con el obstruccionismo sincronizado de los elementos marxistas.

COORDINACIÓN DE LAS HUELGAS

La paralización de la producción del cobre en presencia de la aflictiva necesidad de divisas del país es una prueba de que el marxismo desea frenar el desarrollo y llevar al fracaso los planes del Gobierno.

El movimiento huelguístico afecta también a industrias de elaboración de cobre que tienen incidencia en la disponibilidad de artículos industriales de uso doméstico y para la construcción. Esta última actividad sufre el impacto de la huelga del cemento. La agitación

campesina cunde en estrecha consonancia con la labor para detener la producción industrial básica del país.

Debe comprenderse en todo su alcance este esfuerzo subversivo que ataca todos los puntos del programa del Gobierno. Detiene el mejoramiento de nuestra balanza de pagos, al paralizar la producción exportable y resistir la ampliación de ésta; ataca el plan antiinflacionista al romper la línea de contención de salarios y precios; impide el plan habitacional con huelgas en industrias fundamentales para el desarrollo de éste; perturba las labores agrícolas frustrando el propósito de acelerar el desarrollo agropecuario, y conspira para producir otras huelgas en sectores vitales de la economía.

En consecuencia, no se puede decir que esta actividad subversiva se detendrá atacando las causas profundas que frenan el desarrollo económico y social, pues el marxismo exhibe su más extrema virulencia precisamente contra la tentativa de desarrollar el país sobre bases más amplias.

El movimiento huelguístico tiene una clara inspiración política y está coordinado en forma rigurosa con la posición parlamentaria del FRAP. Queda así en evidencia que las tácticas apaciguadoras del Partido Comunista, destinadas a convencer a los demócratacristianos de que hay etapas comunes en la lucha de masas, miran a dividir el frente del Gobierno y a dejarlo en la indefensión política mientras prospera la maniobra para frustrar sus planes.

LOS VALORES DE LA CLASE MEDIA

En los instantes en que la Juventud del Partido Radical celebra su congreso es oportuno referirse a los valores de una clase social peligrosamente estrechada y que tiene en ese partido a su procurador político más genuino.

Debe decirse, desde luego, que no hay país desarrollado en el mundo libre sin una clase media poderosa. El grupo de profesionales, de técnicos, de empresarios medianos y pequeños, de empleados y obreros especializados representa el factor dinámico de la sociedad y a la vez es el que permite la solidez de sus instituciones.

Por otra parte, el nivel de productividad de un país está determinado por el que posee su clase media. Si ésta es laboriosa, emprendedora y orientada a la producción y al ahorro, la sociedad entera imita este ritmo enérgico y creador. A su vez, una clase media libresca y carente de sentido económico y provoca una existencia desmayada del país.

Este grupo es también el más apto para llevar a cabo en forma positiva los cambios sociales que requiere la evolución histórica. Ella es la que pone la técnica y la sensatez en las transformaciones, evitando al mismo tiempo el hieratismo de las estructuras y la destrucción irresponsable de éstas.

La clase media expresa lo mejor de sí misma en un clima de libertad política y económica. Allí el individuo que es resultado de su propio esfuerzo goza de la independencia necesaria para desenvolverse y ve compensados su trabajo productivo,

su seriedad y habilidad y su espíritu de ahorro. Un Estado que no interviene en la conciencia de los ciudadanos y que no intenta traspasarles consignas de carácter religioso, moral o político sienta la primera condición para el florecimiento de la clase media. La segunda condición es que el Estado no intervenga en la economía al punto de asfixiar las iniciativas y de desanimar el espíritu de empresa de los individuos que viven de su trabajo.

Por eso, el estatismo en el plano político o económico es un obstáculo para que la clase media saque a luz todos sus valores y desempeñe el papel fundamental que le corresponde en el desarrollo de la sociedad.

EL PRO Y EL CONTRA
DE LA CLASE MEDIA CHILENA

Desde el obrero que desempeña una labor calificada hasta el empresario mediano, hay en Chile un vasto sector en que se concentra lo más selecto en capacidad y en esfuerzo. Es la gente que ha logrado afanosamente una casa propia, que tiene un pequeño negocio, que con dificultades que sólo conoce el interesado hizo largos estudios y logró un título profesional o una especialidad técnica. Aquí está el motor del país, el elemento que construye y que progresa, el grupo que deja algo después de sus días: un hogar, un prestigio, un pequeño ahorro, es decir, una riqueza nacional.

Nada es más erróneo que introducir desaliento en este sector y darle motivos para presumir que la sociedad no respeta el fruto de su trabajo. Se justifica el anhelo de disminuir

las grandes diferencias en el ingreso de los chilenos. Pero este generoso afán no debe confundirse con el espíritu de nivelar por abajo y de empujar a un colectivismo en que naufragan los valores personales. Los sectores postergados de la sociedad deben salir de la condición en que se encuentran. Ello es posible mediante el desarrollo, pero éste se logrará, a su vez, estimulando a los elementos dinámicos del proceso, pues si éstos se desaniman los actuales postergados no mejorarán sino que aumentarán su número con la proletarización de la clase media.

Este es un momento difícil para el hombre de trabajo. Los impuestos, los problemas de abastecimiento y las incertidumbres pesan seriamente. Tal vez por lo mismo sea ésta la oportunidad para meditar sobre los valores que hacen falta en la clase media chilena y cuyos intérpretes han de encontrarse en los partidos políticos democráticos, como el Radical. La debilidad del sector a que nos referimos reside en una orientación educacional que aún no se adapta a las necesidades chilenas. El insuficiente aprecio al trabajo manual, la poca insistencia en las decisiones y reflexiones propias, la escasa formación del carácter, y el acento en una ilustración de barniz son factores negativos muchas veces denunciados. Esto ha llevado a la mentalidad dirigente a ignorar las realidades concretas del país y a enfocar incluso los problemas económicos con vagas ideologías.

El resultado es el legalismo excesivo, el espíritu burocrático y el estatismo. Hay una confianza imprudente en los efectos de la ley y

de la acción del Estado y no toda la fe necesaria en el esfuerzo individual.

Corresponde a los partidos democráticos desprenderse de ese socialismo de salón que sólo sirve para preparar el socialismo subversivo en tanto que impide el clima de trabajo y de iniciativas indispensable para el desarrollo.

Hace falta una defensa clara y desinteresada de la libertad política y de la libertad económica. Esta última se ve cada día más definitivamente ligada a la primera. Cabe destacar el valor del individuo y exaltar sus realizaciones superiores. Hay que alentar el éxito y el triunfo, así como el ahorro y el trabajo. Desde hace tiempo el trabajo viene entendiéndose como un problema general de salarios y de previsión social. Valdría la pena volver a su sentido estricto y destacar la defensa del trabajo libre, el estímulo a la labor bien hecha, la importancia de la moneda estable y del ahorro. Habría que señalar, en consecuencia, la dignidad del trabajo esmerado y el resguardo de los frutos de éste.

LA TAREA DE LOS PARTIDOS DEMOCRÁTICOS

Esa debiera ser, a nuestro juicio, la tarea de los partidos democráticos y muy especialmente del Partido Radical. La tendencia a preservar en el camino del socialismo creyendo que está allí la avanzada es un error que obedece a falta de información. De hecho, no hay más avanzada que la que impele el progreso del país y hace tiempo que las naciones industriales reaccionan

contra el estatismo y que aún las economías socialistas buscan medios para liberalizarse.

El sector más valioso de la población espera, sin duda, partidos políticos que lo interpreten. Se ha

llegado demasiado lejos en el énfasis sobre lo colectivo, olvidando que el país surgirá del trabajo individual de cada chileno. Es ya el momento de revisar, como se hace en todo el mundo civilizado.

Reforma Agraria Política (28 de noviembre de 1965)

El 22 de noviembre se firma en La Moneda el Proyecto de Reforma Agraria (EM, 24 noviembre, pág. 19 -Texto del Proyecto y sgs.) enviado al Congreso. De inmediato se conocen las primeras reacciones, del Partido Liberal (EM, 26 noviembre pág. 23); del Partido Radical (EM, 27 noviembre, pág. 31) y de los comunistas (EM, 28 noviembre, pág. 41) que reclaman una mayor celeridad en el proceso.

A fin de impedir demoras en puntos que el Gobierno no desea despachar con mayor rapidez, se desglosan de la Reforma Constitucional las llamadas "leyes normativas", para ser discutidas más adelante. (EM, 26 noviembre, pág. 21).

La Semana Política

Mientras la huelga del cobre erosionaba la economía del país, el Gobierno ha enviado al Congreso su proyecto de reforma agraria. Debe esperarse que él dé motivo para un examen desapasionado y profundo sobre la situación real de la agricultura, así como sobre los resultados de la legislación vigente sobre reforma agraria, cuyas normas han permitido al actual Gobierno expropiar 160 mil hectáreas en el curso de un año.

Algunos inspiradores del proyecto de reforma agraria dan a ésta un significado predominantemente político. Y, en efecto, el programa de creación de 100 mil propietarios agrícolas tiene un efecto electoral innegable. Conviene preguntarse a qué tendencia beneficiará el proceso, considerado desde este aspecto.

Los partidos están adoptando posiciones frente al nuevo proyecto sobre reforma agraria. Es lógico que los que contribuyeron con sus votos al despacho de la actual ley sobre la materia no se nieguen a mejorarla, pero que, al mismo tiempo, defien-

dan lo que ya está haciendo la agricultura para cumplir los dos objetivos básicos de la reforma en vigencia: aumentar la productividad y redistribuir el ingreso. Las actitudes de estos partidos estarán determinadas por el significado político que los propios promotores del nuevo proyecto atribuyan a éste.

El Senado empezará a tratar el proyecto de reforma constitucional, cuyo contenido plantea problemas políticos y jurídicos de la más alta trascendencia para el país. Todos desean una reforma constitucional que perfeccione nuestra democracia y que permita el funcionamiento de los poderes públicos. Desde ese ángulo deberá mirarse la reforma de la Carta Fundamental.

NI ANARQUÍA NI DESPOTISMO

La orientación que en definitiva tenga la reforma constitucional es decisiva para la suerte de nuestra democracia, para la vigorización de las libertades públicas y para el desenvolvimiento de la economía nacional. La propia Constitución Polí-

tica adopta normas especiales para sus enmiendas, porque los constituyentes tuvieron plena conciencia de que los cambios en la Carta Fundamental no podían surgir de inspiraciones partidarias a corto plazo, sino de concepciones muy meditadas y serenas sobre la evolución social y política del país.

En la Constitución Política vigente, las libertades y garantías individuales defienden a la nación contra el despotismo estatal, en tanto que la configuración presidencialista del mecanismo de poderes tiende a proteger al país de la anarquía.

La experiencia de las administraciones de los señores Ibáñez y Alessandri produjo el consenso amplio de la ciudadanía en torno a la necesidad de introducir ciertas enmiendas a la Constitución Política, con el primordial objetivo de que las decisiones legislativas se mantuvieran como mandatos generales y permanentes, dejando al Poder Ejecutivo la posibilidad de reglamentarlas y dándole la iniciativa sobre las proposiciones de ley que influyen en el manejo adecuado del programa gubernamental.

El proyecto de reforma enviado por el actual Gobierno al Congreso cumple este objeto, en cuanto simplifica la tramitación de las leyes, autoriza que el Ejecutivo ejercite facultades legislativas delegadas y amplía las materias económico-sociales en que al Gobierno se le reserva la iniciativa para promover disposiciones legales.

Estos cambios robustecen la influencia del Ejecutivo en puntos bien precisos, pero mantienen la idea de superar, al mismo tiempo, el despotismo y la anarquía.

NUEVA FAZ DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL

El proyecto del Gobierno y las modificaciones que hasta ahora ha sufrido introducen nuevos temas de carácter institucional. La consagración de las investigaciones parlamentarias respecto de todas las actividades del país es uno de estos puntos. El llevará la polémica política y la influencia partidista a la Administración Pública y al sector privado, en términos desconocidos hasta ahora.

El plebiscito, que todo aconseja usar con prudencia, porque es un instrumento de consulta sujeto a la manera en que ésta se plantee a la ciudadanía, se ensancha considerablemente en la reforma. Esto da a los Gobiernos y a los partidos que los apoyen un poder sin contrapeso sobre la suerte de las instituciones de la República.

El voto de los menores de edad introduce el elemento emocional e inconstante en la composición del electorado. Hay que recordar que la democracia subsiste en Chile merced a la prudencia y al sentido de estabilidad social de la mujer chilena. No sólo la democracia sino el sustento del hogar y la educación de los hijos dependen a menudo sólo de ella. El voto de los menores amortigua este factor de sensatez en la política y entrega nuestra discutida formación educacional en manos del extremismo, cercenando la laboriosidad de las futuras generaciones.

A esto debe añadirse el contenido vago que se confiere al derecho de propiedad. La vivienda, los ahorros, los derechos emanados de los contratos y todos los bienes patri-

moniales de la población quedan sujetos a ser traspasados al Estado, por obra de un legislador que cuente con la mayoría necesaria.

Sin duda, el fragor de las luchas políticas que el país vive desde la última contienda presidencial ha permitido que los autores del actual articulado del proyecto de reforma no se hayan detenido a meditar sobre sus consecuencias. Tal como está, las instituciones quedan sin espina dorsal, sin estructura propia. Todo es moldeable por una voluntad estatal que puede verse forzada a apoyarse en la demagogia. Esta última queda, en último término, como dueña y señora de nuestras instituciones democráticas.

REFORMA AGRARIA POLÍTICA

El Gobierno -según palabras de S.E.- ha planteado una reforma agraria destinada a aumentar la productividad agrícola y a dignificar al campesinado. Nadie podrá oponerse a que se logren esos fines, que son esenciales para nuestro desarrollo económico.

La reforma agraria debería ser, entonces, un proceso económico y técnico, con fuerte influencia en el desarrollo social del país. En este aspecto llama la atención que las cifras y datos oficiales sobre el estado de la agricultura se basen en estudios generales bastantes atrasados y no en el examen de la situación presente, tal como surge de indicadores que están a disposición de los propios organismos del Estado.

Así, por ejemplo, la última tasación de los bienes raíces, fundada en los estudios aerofotogramétricos, no permite continuar empleando el

censo agropecuario de 1955 como base de conclusiones. La información más reciente parece indicar que es más grave el problema del minifundio que el de la gran propiedad.

Tampoco se toma en cuenta que, según datos oficiales, desde 1960 a 1964 la producción agrícola aumentó considerablemente, lo que indicaría que la reforma agraria de la Administración anterior no fue inconsistente, como han sostenido el FRAP y la democracia cristiana, sino impulsora del desarrollo agrícola.

Pero es claro que resulta inoficioso argumentar sobre el sentido económico y social de una reforma agraria si ésta se encara como proceso político.

Si la reforma agraria no es un proceso económico, no es un proceso técnico, sino un proceso político, los partidos democráticos y la opinión independiente del país se encuentra ante un hecho nuevo y tienen derecho a preguntarse a quién aprovechará en último término esta costosa operación.

ACTITUD DE LOS PARTIDOS RADICAL Y LIBERAL

Las declaraciones públicas de los partidos Radical y Liberal sobre el proyecto de reforma agraria acusan evidentes diferencias entre sí, que corresponden a sus respectivas posiciones ideológicas y políticas. Coinciden, sin embargo, en dos puntos.

Los dos partidos apoyan -como ya lo hicieron en el Gobierno pasado- la legislación sobre reforma agraria, pero ambos están ligados al evidente progreso económico-social conseguido con el sistema que im-

plantaron con sus votos y no se les oculta el riesgo de que el proyecto se utilice políticamente.

El planteamiento radical es muy claro. Los votos de ese partido contribuyeron en forma determinante a impulsar la reforma agraria en Chile, de acuerdo a proyectos en que participaron Ministros de Estado, juristas y técnicos de dicha colectividad. Sostienen, con razón, que el proyecto es operante. Hay que agregar que, coetáneamente con la reforma agraria de la Administración anterior, la productividad del trigo subía en 16,63 por ciento, la de la avena en 14,07 por ciento, la

de centeno en 56,40 por ciento, la de maíz en 44,12 por ciento, y así sucesivamente.

Por su parte, el Partido Liberal, que apoyó, junto con el Conservador, la reforma agraria vigente, ve en el proyecto una inspiración colectivista y plantea la defensa de la iniciativa individual y la necesidad de estimular el espíritu de trabajo y de superación. Apoya, sin embargo, la reforma, es decir, la modificación de la legislación vigente, en cuanto vaya a aumentar la productividad, obtener explotaciones racionales y eliminar los déficit alimentarios.

¿Lucha generacional o lucha de clases?

(13 de febrero de 1966)

Mientras la huelga ilegal en el mineral de El Teniente cumple más de 40 días, entre el 9 y el 12 de febrero se desarrolla el Quinto Congreso de las Juventudes Comunistas, cuyos acuerdos fundamentales son: promover el acercamiento con los socialistas e impulsar el proceso de Reforma Agraria y la sindicación campesina (EM, 11 febrero, pág. 19).

La Semana Política

El XIII Congreso del Partido Comunista chileno, celebrado el año pasado, señala un viraje de ese partido en cuanto a su estrategia política. Las decisiones de tal Congreso sirven de punto de apoyo al proceso de expansión e infiltración en que están empeñados los comunistas.

Uno de los reflejos de esta línea es el Quinto Congreso de las Juventudes Comunistas de Chile, reunido en Santiago con la participación de representantes de Cuba, Unión Soviética, Alemania Oriental, Bulgaria, Checoslovaquia, Rumania, Yugoslavia y Hungría, entre otros.

El largo informe habitual, que consagra las prácticas soviéticas, fue leído por la parlamentaria doña Gladys Marín. Naturalmente, en esa pieza se da a conocer a los asistentes el pensamiento oficial del partido y el marco dentro del cual deben surgir las conclusiones.

La escasa resonancia del decimotercer aniversario de la CUT, celebrado con una concentración gremial indisimulablemente reducida, es índice de que el comunismo ha obtenido ya lo que desea de aquella Central y no tiene por ahora interés en darle mayor resonancia. Con o sin popularidad, la CUT controla los sindicatos vitales de la industria y

de la minería. Bajo su mascarón de proa, el comunismo se introduce en el sector agrario. Poco importa, entonces, que el ciudadano común no concurra a festejar el nuevo aniversario de la CUT.

Los objetivos comunistas a corto plazo son muy simples: estimular toda actitud que separe al Gobierno chileno de los Estados Unidos y de la convivencia democrática americana, y producir de hecho una reforma agraria marxista en el país, mediante una presión de masas que rebase a las autoridades constituidas.

¿LUCHA DE GENERACIONES O LUCHA DE CLASES?

Nada es tan aventurado como establecer una competencia con el comunismo en materia de audacia revolucionaria. La extrema flexibilidad de este partido para adaptarse a las circunstancias y torcerlas en su beneficio y su falta de escrúpulos para quemar lo que antes había adorado le permiten apropiarse de las ventajas políticas conseguidas por otros y convertirlas en aguas para su propio molino.

Uno de los resortes del poder de la Democracia Cristiana es el haber sabido crear y utilizar agrupaciones

que no responden al esquema tradicional de partidos y sindicatos. A través de movimientos locales y sectoriales, la campaña electoral del Presidente Frei y la parlamentaria posterior emplearon eficazmente a la juventud, a los pobladores, a los elementos del folklore y otros semejantes. Desde el Gobierno se ha seguido la misma línea, si bien la acción oficial no tiene la espontaneidad y el fervor de las iniciativas privadas en esta materia.

Pues bien, los comunistas comprendieron en los primeros meses de este Gobierno que la llamada organización comunitaria era un campo propicio para sus fines. Desde entonces se intensificó el trabajo comunista en las poblaciones marginales y en cuanto núcleo de atracción de masas estaba a su disposición.

El Partido Demócrata Cristiano creó la imagen de la "patria joven" y su presentación en gran escala ante el país se ha hecho exhibiendo un estilo que concuerda con esta época de grandes aventuras y experiencias sociales y técnicas. Lo anacrónico, lo arcaico aparecen, entonces, como los enemigos naturales del movimiento, y la juventud pasa a tener un sitio relevante en la historia del país.

Los comunistas toman de inmediato la onda juvenil y su último congreso no es más que el medio de divulgar la tentativa de arrastre de las juventudes. Doña Gladys Marín inicia su discurso elogiando a la juventud soviética por el alunizaje suave. Pero al punto, la oradora cambia los términos de la concepción demócratacristiana. No se trata de una lucha de generaciones, sino de una lucha de clases.

Insensiblemente, entonces, la rebeldía juvenil entra en el cepo marxista-leninista y sirve a los objetivos de la revolución totalitaria.

GANAR LA MAYORÍA PARA LOS CAMBIOS REVOLUCIONARIOS

A partir del XIII Congreso del Partido Comunista sus miembros mantienen la más pertinaz oposición en contra de las iniciativas del Gobierno que representan el cumplimiento serio de su programa, pero son frecuentes los elogios en favor de los elementos demócratacristianos que se dejan tentar por la demagogia en la política interna o externa. Más aún, en dicho Congreso como en el de la juventud se dice que "hay que ganar la mayoría para los cambios revolucionarios" que contiene la plataforma del Gobierno.

Invitan los comunistas a la juventud demócratacristiana a decidirse por los cambios o contra ellos, y a vencer "las actitudes conciliadoras y antipopulares que surjan de sectores del Gobierno y del Partido Demócrata Cristiano".

Se trata, pues, de un llamado franco a la rebelión, de las bases juveniles del partido de Gobierno, llamado que se realiza con fundamentos aparentemente sólidos, pues se acude para ello a lemas y conceptos que también están en labios de muchos elementos demócratacristianos. Fácil es comprender el eco que puede producir esto en la juventud. Mostrarles sus propias banderas y llamarlos tibios, inoperantes, conciliadores, a menos que acepten ser arrastrados por las directivas comunistas es, sin duda, una técnica de persuasión eficaz para los jóvenes.

La habilidad de los comunistas para atraer a este sector es indiscutible. Ya se han enseñoreado de la Federación de Estudiantes Secundarios y, a través de profesores y de alumnos activistas, promueven huelgas y ocupaciones de establecimientos en la educación primaria, secundaria y especial. Entre los universitarios, la Democracia Cristiana pierde terreno, que ganan los comunistas, sin contar con la extensa penetración de éstos entre los profesores y ayudantes de las distintas facultades y del control de los institutos de extensión u otros organismos universitarios.

La política internacional ha dado motivo para acciones en que participan jóvenes de distintas tendencias bajo la batuta de los comunistas. La situación de Santo Domingo, el último incidente fronterizo con Argentina fueron pretextos para unir a la juventud en objetivos internacionales comunes. Esta labor comunista se tradujo en el Frente Unitario de Organizaciones Juveniles, dedicado ahora a la reforma agraria.

LA REFORMA AGRARIA ES EL TEMA CENTRAL

El informe oficial del Partido Comunista, leído por doña Gladys Marín, declara enfáticamente que "la reforma agraria se ubica en el centro del acontecer nacional".

"Hay que acelerar -continúa el informe- la aprobación y aplicación de la reforma agraria, pero para ello lo fundamental será la decisión con que actúen las masas, en primer lugar los campesinos".

Estos conceptos confirman, con insistencia más directa e inmediata,

la estrategia que el comunismo va acelerando lenta pero firmemente. Se trata de impulsar un movimiento de masas que fuerce al Gobierno a aceptar el hecho consumado de una revolución marxista en los campos.

El título de "centro del acontecer", que el informe da a la reforma agraria, indica que el comunismo atribuye la primera prioridad a este proceso, y cuando ese partido coloca algo en el "centro del acontecer" es porque tiene los medios de aprovecharlo políticamente. La parlamentaria comunista informante no hace aquí una reflexión teórica, al estilo de las que con frecuencia se formulan en el ámbito público, sino que plantea un objetivo estratégico concreto.

Las alusiones al alunizaje suave, a los valores de la juventud y a la necesidad de que se una y organice van derecho al objetivo: "Los jóvenes de la ciudad deben lanzarse al campo para contribuir a la lucha y organización de los campesinos. Las acciones juveniles deben remecer el agro chileno".

En la práctica, este propósito se está cumpliendo. Activistas adultos y jóvenes, que se mezclan incluso con elementos de los organismos oficiales de la reforma agraria, a los cuales envuelven, o de organizaciones campesinas formadas para servir a los planes del Gobierno, están desarrollando una tarea eficaz de agitación.

Mientras los preparativos electorales de Valparaíso y el ambiente de vacaciones distraen a muchos de la gravedad de los sucesos cotidianos, los interesados en producir una irrupción masiva, drástica y rápida del campesinado sobre el control de

la tierra y de las aguas, los que piensan que la reforma agraria no es un proceso económico o técnico, sino un proceso político de subversión, trabajan sin descanso para desarticular las explotaciones agrícolas y para establecer agrupaciones de resistencia campesina.

La principal noticia, el suceso trascendental de estos días, "el centro del acontecer" es la erosión subterránea pero rápida del sector agrario que realizan los comunistas, empleando los mismos argumentos oficiales y frente a la perplejidad, cuando no a la complacencia, de los funcionarios llamados a cooperar con el Presidente de la República en sus funciones constitucionales de conservar el orden público y de dar cumplimiento a las leyes.

LA GRAN PRUEBA PARA EL GOBIERNO Y LA DEMOCRACIA CRISTIANA

La ofensiva comunista, que ha sustituido el ataque frontal por las maniobras envolventes, coloca al Gobierno en una situación particularmente difícil. Los comunistas no atacan el proyecto de reforma agraria, como lo hacen con el programa del cobre o con otras iniciativas; no acuden a la obstrucción parlamentaria o a huelgas visiblemente opositoras, sino que, por el contrario, están usando el proyecto y las razones del Gobierno en su apoyo, para expandir velozmente su influencia en el campo y para socavar desde dentro las posibilidades de las reformas democráticas.

En un terreno más general, el

control comunista sobre el campo pone al Gobierno y al país frente a la más grave amenaza. Si este proceso no se detiene oportunamente y llega a realizarse con todas sus consecuencias, habría que concluir que esto sería el peor de los fracasos para la democracia chilena, que eligió a este Gobierno como alternativa frente al comunismo y que se encontraría sumida en el marxismo totalitario porque se le facilitó ingenuamente la entrada.

Se impone, entonces, una acción nueva, tanto o más flexible que la que adoptó el comunismo frente a la situación que creó el Gobierno del Presidente Frei. Es preciso comprender y combatir las tácticas envolventes, así como el Gobierno logró triunfar de las hostilidades manifiestas del comunismo.

Cuando el líder italiano señor Fanfani visitó el país les recomendó a los demócratacristianos que volvieran siempre a las fuentes de su doctrina, es decir, al contenido espiritual de su mensaje, al espíritu de fraternidad y de libertad. Ahí puede estar el camino para evitar la infiltración comunista. Ni el revanchismo ni la ambición totalitaria ni el colectivismo están en las fuentes de la Democracia Cristiana. Este partido tiene inmensas posibilidades, si algunos de sus miembros comprenden que su idea básica es inmensamente superior al materialismo comunista y que conecta con los mejores impulsos de la civilización. Ni las impaciencias ni la falta de energía deben hacerlos traicionar el espíritu a que pertenecen.

La importancia política de la clase media (3 de abril de 1966)

El mes de marzo termina con el reintegro a sus labores de los trabajadores de El Teniente después de casi 3 meses. El Senado aprueba los convenios del cobre y la Democracia Cristiana se reúne en Cartagena. Se comentan aún los violentos ataques de Fidel Castro a los países de América, incluyendo a Chile, a los que calificó de "lacayos del imperialismo" (EM, 17 febrero, pag. 15). Liberales y conservadores designan una comisión de 50 militantes de cada grupo, junto a la Acción Nacional e Independientes, para ver la posibilidad de formar una nueva colectividad política.

La Semana Política

El arreglo de la huelga de El Teniente parece señalar el término de un período en que gran parte de las preocupaciones del Gobierno han tenido que concentrarse en el bloqueo sindical impulsado por el FRAP.

Por otra parte, la votación favorable del Senado a las disposiciones que permiten poner en marcha los convenios del cobre señala la posibilidad de que el país entre en una etapa realizadora positiva.

Es natural que, a esta altura, las tendencias democráticas que representan en conjunto a la gran mayoría del país hagan un examen de la situación nacional, para encontrar formas adecuadas de abordarla y para interpretar lo que la ciudadanía espera de los partidos.

Tanto el análisis informal que efectuaron personalidades representativas del radicalismo, como las convenciones que celebran los Partidos Liberal y Conservador, y el balance que realiza la Democracia Cristiana en Cartagena, obedecen al propósito de esclarecer las respectivas posiciones y de organizar la acción política de esas colectividades.

Desde el 4 de septiembre de 1964, la opinión pública ha visto las vigorosas afirmaciones de un Gobierno que posee una doctrina y una estrategia política nuevas. Ellas han tenido una fortuna electoral indiscutible. El proceso ocasionó desplazamiento de fuerzas y necesarias contradicciones y tensiones. Se ha consumido un largo tiempo en este período de ajustes, pero todo aconseja ahora que las pugnas ideológicas y partidistas cedan el paso a la acción constructiva, pues la opinión pública da largas oportunidades a las tendencias políticas, pero llega un momento en que desestima a aquellas que no satisfacen las verdaderas aspiraciones del país, es decir, que no redundan en un bienestar público concreto y tangible.

LA DEMOCRACIA CRISTIANA CONTRA EL MARXISMO

La inmensa mayoría del país acompaña al Gobierno cuando ve en éste una alternativa clara frente al marxismo. Así sucedió en la elección presidencial y en la última elección de Valparaíso.

Pese al despliegue demagógico

que se ha hecho en contra de las resueltas medidas que adoptó el Presidente de la República para contener la guerrilla de las huelgas, es indiscutible que la opinión pública apoyó a la autoridad y que no tuvieron eco las tendencias de aumentar la inquietud gremial con la explotación de los dolorosos sucesos de El Salvador.

Además, los insultos de Fidel Castro, representante oficial de la subversión marxista en América, destacaron la posición del Presidente Frei como líder democrático y como defensor de nuestro sistema republicano de libertades frente a la agresión comunista.

Como en todos los países, la demagogia y la agitación tienen eco en Chile. La propaganda insidiosa y las incitaciones a la lucha de clases son factores que producen votos, pero, a la larga, nuestro país se queda con la tendencia política que resguarda la libertad, que ofrece trabajo a todos y que permite el progreso diario de la nación.

En muchas ocasiones, el Presidente de la República ha aludido al buen juicio de nuestro pueblo. Este buen juicio puede alterarse momentáneamente bajo la acción demagógica, pero en definitiva sabe calibrar las ofertas que se le formulan y distinguir las que son válidas. Tal condición permite asegurar que el actual Gobierno y el Partido Demócrata Cristiano seguirán teniendo acogida popular, en cuanto se presenten como una alternativa nítidamente opuesta a la dictadura totalitaria marxista e impulsen una democracia que destaque y ponga en actividad a los mejores valores de la nacionalidad.

La alternativa democratacristiana tiene que ser más liberadora de los ciudadanos que los despotismos marxistas, más empeñados en alentar el despliegue de todas las iniciativas de la sociedad que cuidadosos de encuadrarlas en un marco rígido, y más atenta a construir con todos los materiales disponibles que a demoler bajo la ilusión utópica de que las naciones pueden rehacerse desde la nada.

Es explicable que algunos elementos del partido de Gobierno, sujeto como está a la acometida constante del marxismo, quieran ser más avanzados que éste, en el sentido marxista de entender el avance, es decir, más demagógicos y más perturbadores que el comunismo en la oposición. Dicha tendencia es fatal cuando se cede a ella desde el Gobierno, porque la obra de éste descansa en los recursos del país, que es preciso cuidar e incrementar a fin de que tenga base cualquiera transformación.

El riesgo del Partido Demócrata Cristiano es que, extremando su lucha con el marxismo, explote como caudal electoral a las masas menos maduras políticamente, perdiendo, entretanto, a la clase media y a los trabajadores manuales de más conciencia. Esta operación es altamente peligrosa, por cuanto la atención de los intereses de los más humildes requiere de la colaboración de los sectores verdaderamente dinámicos del país. Un populismo que prescindiera de grupos intermedios que impulsen el progreso de la sociedad está expuesto a excitar continuamente las urgencias de las masas sin tener equipos ni recursos para satisfacerlas.

LA IMPORTANCIA POLÍTICA
DE LA CLASE MEDIA

En Chile la clase media comprende una vasta gama de la población, singularizada en general por la propiedad sobre una vivienda familiar y por la posesión de conocimientos que van desde las técnicas manuales especializadas hasta las profesiones liberales. Uno de los datos más positivos del progreso social chileno en los últimos 25 años es la extensión y homogeneidad que va adquiriendo la clase media.

Muchos de los hombres que nacieron a la vida política en la década del 30 han influido desde el gobierno o desde la oposición para que este proceso continúe y se amplíe. No obstante, algunos de ellos han quedado con la imagen que les ofreció el país cuando se iniciaron en la inquietud política, sin percatarse de que éste se ha transformado y de que ellos mismos, con sus ideas e iniciativas, contribuyeron a hacer desaparecer la antigua composición social consistente en una pequeña minoría aristocrática, una también pequeña clase media de empleados y una enorme masa de trabajadores proletarizados. Este esquema hoy no funciona, pues en una población de ocho millones de habitantes hay más de un millón y medio de propiedades raíces enroladas, y el sueldo vital que fue el ingreso de sectores relativamente minoritarios hoy se recibe por un amplio número de trabajadores, muchos de los cuales han superado con creces esa renta.

Los partidos democráticos no pueden desconocer esta realidad. Las asociaciones de ahorro y préstamos, las cooperativas de vivienda y las sociedades de fondos mutuos aco-

gen a numerosos inversionistas pequeños. Los grupos más activos y conscientes de trabajadores luchan por sí mismos para salir de la proletarización e ingresan con título propio a la clase media. El grave problema de la incapacidad de la organización educacional para acoger a la población que desea y puede adquirir conocimientos en los diversos niveles y grados está demostrando el afán de progreso que existe en el país.

La fundamental aspiración es tener oportunidad de trabajo y de progreso individual. Esta masa estará con la tendencia política que le prometa el desarrollo económico y social cuando entienden por éste un estado de más oportunidades de empleo, de más alimentos, de más artículos industriales, de más renta disponible y de más amplios horizontes materiales y morales.

De ahí que los gastos públicos excesivos, que deben financiarse con elevados impuestos personales e indirectos; las medidas que inhiben el ahorro o que lesionan la propiedad, y el clima de tensiones políticas que no favorece el trabajo ni las inversiones, tienden a la larga a desanimar a la clase media, que es el núcleo más determinante de la opinión pública y el sostén natural de la democracia.

El radicalismo desempeñó un papel histórico en el país cuando fue intérprete de la clase media. Hoy se ve que la Democracia Cristiana vacila entre un populismo de éxito inmediato y el afianzamiento más permanente en los grupos medios. Sin embargo, estos últimos son los que han permitido el éxito de los sistemas libres en el mundo occi-

dental, fundados en la libertad individual, en la propiedad y en la fe en la iniciativa de los ciudadanos. No se diga que esto no rige entre nosotros porque somos un país subdesarrollado. Precisamente la existencia de una clase media que forma en las propias filas de la Democracia Cristiana demuestra que, para estos efectos, Chile es un país avanzado en su desarrollo.

LAS LINEAS DE LA OPOSICIÓN DEMOCRÁTICA

En la medida en que los individuos que aspiran a progresar con su propio esfuerzo sientan la presión del paternalismo estatal, con su cortejo de impuestos, de limitaciones y de amenazas a los frutos del trabajo privado, las corrientes políticas que se planteen contra el estatismo tendrán más oportunidades desde una oposición democrática.

Estas oportunidades dependerán, desde luego, del vigor y de la imaginación con que se propicie un camino auténticamente nuevo, capaz de ir más allá del estatismo inoperante sin regresar a fórmulas sociales y políticas anacrónicas.

Dependerán, además, y sobre todo, de la capacidad realizadora del actual Gobierno y del partido que lo acompaña. Si éstos logran vencer las inercias estatizantes y el hombre de trabajo encuentra un ambiente de estímulos para su progreso en una sociedad libre y abierta, la política gubernamental satisfará las aspiraciones de la gran mayoría de la opinión consciente del país, y las otras tendencias democráticas ejercerán un papel fiscalizador y colaborador,

pero no aglutinante de grupos numerosos.

Los Partidos Liberal y Conservador están celebrando convenciones simultáneas con el objeto de discutir la formación de una nueva colectividad política, con la suma de sus fuerzas y con un llamado a otros grupos o tendencias afines.

Las nuevas circunstancias políticas aconsejan que las tendencias que se disputan la opinión se constituyan en conglomerados del mayor volumen posible y cuyo ideario se reduzca a los temas esenciales que reclaman una decisión ciudadana.

Desde este punto de vista, el esfuerzo de los partidos tradicionales por unirse y por presentar un programa en concordancia con las aspiraciones del electorado de hoy ofrece un valor positivo para nuestra convivencia democrática.

En el esquema político falta, sin duda, un partido que defienda franca y firmemente, en forma moderna, la economía de mercado y la aptitud de éste para el progreso social en un país en vías de desarrollo como el nuestro. Las tesis que podríamos denominar desarrollistas en América Latina han estado precedidas de un diagnóstico sobre el subdesarrollo y de unas recetas para salir de él. Los hombres de empresa privada y las tendencias simpatizantes de la economía de mercado no han tenido, en general, ocasión de revisar a fondo este diagnóstico y de enjuiciar las recetas, con todos los antecedentes. La gran labor de un grupo político que afirma el valor de la economía libre y el papel propio de Chile en el concierto americano y mundial es hacer un examen profundo de la situación del país, que

demuestre que las fórmulas del oficialismo internacional no son aplicables al caso chileno y que nuestro avance efectivo debe seguir un camino propio, correspondiente al grado de desarrollo personal y económico logrado por los chilenos.

Cabe esperar, en suma, que las revisiones que practican las distintas colectividades políticas las lleven a trascender lo inmediato y a seguir el enorme afán de progreso efectivo que se advierte en el país.

La engañosa ofensiva comunista

(17 de abril de 1966)

El artículo hace mención de la Conferencia Tricontinental de La Habana, a la que adhirieron socialistas y comunistas, celebrada en febrero en Cuba, y en la que participó Salvador Allende, quien señaló que no debe excluirse a Chile de la lucha armada (EM, 3 febrero, pág. 19).

En el país, el Ministro de Hacienda, Sergio Molina, hace un llamado a crear nuevas fuentes de riqueza, aprovechando el alto precio del cobre. El FRAP y el Partido Radical proponen una reforma constitucional que afecta a las concesiones mineras.

La Semana Política

La inminencia de la puesta en marcha de los convenios del cobre y el ingreso adicional que traerán las ventas del producto en el futuro inmediato abren la posibilidad de ensanchar la economía del país y lograr la independencia de su desarrollo.

Los planes de ampliación de la industria del cobre están concebidos para alentar la participación dinámica de nuevas inversiones y para integrar sus actividades con la economía nacional. El cumplimiento de las metas implicará esfuerzos para el país y para las empresas, pero el cuadro de condiciones de ese programa está dado en la legislación promulgada y en la de los avales a las sociedades mixtas, que pronto se promulgará.

El ingreso extraordinario del precio del cobre viene a concurrir a esta situación favorable y reclama, como lo ha dicho el Ministro de Hacienda, don Sergio Molina, el esfuerzo interno necesario para desplegar y acrecentar las iniciativas económicas. En esta esfera es necesario que colaboren en una dirección bien definida tanto el Gobierno como el sector privado nacional.

Mientras el país viva una oportunidad única para dar un gran paso adelante en el camino del desarrollo, la democracia chilena está sufriendo el ataque del comunismo internacional en gran escala. Una propaganda popular destinada al descrédito de los partidos democráticos se suma a profundas infiltraciones en las filas de éstos. La oposición más implacable al Gobierno se disfraza con una distinción entre los sectores "avanzados" de la Democracia Cristiana y los que los comunistas califican de "grupos reaccionarios" dentro de los colaboradores y partidarios del Gobierno, usando a estos últimos de blanco para disparar contra toda la política del Presidente Frei. Los halagos al radicalismo tienen el mismo sentido divisionista, ya que las maniobras envolventes tienden a destruir los partidos y a utilizar sus fragmentos como piezas de la estrategia totalitaria. La violencia sin disimulo contra las voces que se levantan para advertir a la democracia los riesgos que corre no es obstáculo para que el Partido Comunista denuncie supuestos planes sediciosos y aparente un pacifismo nada fácil de concordar con su ad-

hesión a la Conferencia Tricontinental de La Habana. Se trata de una bien coordinada ofensiva, que parte de ciertos medios culturales y que llega hasta las masas campesinas, combinando la hostilidad física y verbal con la persuasión o el disimulo para la conquista de nuevas posiciones que debiliten la democracia.

LA POLÍTICA DEL COBRE

En lo que concierne al cobre, el Gobierno ha adoptado una política bien definida. Ella puede describirse como una defensa del valor de nuestras exportaciones esenciales, realizada a través de la participación activa en el mercado del metal que coloque a éste en las mejores condiciones posibles, y como un estímulo franco a la colaboración del capital privado en el desarrollo de la industria del cobre.

Hay, pues, un doble frente en el cobre: el de los precios y el de las inversiones.

En ambos, el Gobierno está actuando con un sentido económico. Poco se obtiene con las frases en favor de tratamientos privilegiados para nuestras exportaciones si el país no estudia y trabaja para operar comercialmente con su principal riqueza exportable. Se está haciendo este esfuerzo y de él deben resultar múltiples beneficios para el país.

En el frente de las inversiones ha primado el mismo criterio realista. Los grandes capitales, que están en condiciones de aportar su concurso financiero y tecnológico a la ampliación de la industria del cobre, aspiran a un trato jurídico seguro y estable. Sería ilusorio pensar en el desarrollo de un programa de tanta

magnitud como el del cobre con solo el esfuerzo interno. El aporte del exterior podría provenir de los gobiernos o del capital privado internacional. Ambos exigirán las mismas seguridades, pero el auxilio gubernamental exclusivo para explotar una industria básica trae la sujeción que sufre, entre otros, Cuba con respecto a Rusia. Se ha preferido, con razón, el capital privado extranjero, porque permite mayor independencia y, sobre todo, porque trabaja mejor para su propio beneficio y para el país en que opera, cuando el estatuto que regula su actividad es justo para ambas partes.

Siempre que se plantea una solución económica, es posible sostener en teoría que pudieran darse otras mejores. Ello es lo que ha motivado la larga discusión en torno al nuevo estatuto del cobre. En el hecho, éste permitirá una cuantiosa inversión extranjera, un aumento sin precedentes del volumen exportable, una mayor cuota de metal refinado y posibles nuevas elaboraciones y una importante demanda para productos industriales chilenos.

Todo este programa es viable porque el Gobierno logró superar las tendencias hostiles al capital privado en el sector de la minería e iniciar un esquema de economía mixta, en que las inversiones particulares se asocian con las del Estado, pero éste acepta las condiciones adecuadas para que prospere el esfuerzo privado.

LA POLÍTICA DE INICIATIVA Y AHORRO INTERNOS

Con ocasión del alza reciente del precio del cobre, el Ministro de Ha-

cienda hizo un nuevo llamado al sector privado para que impulse sus propias actividades y supere el factor limitante del escaso ahorro interno. "Es nuestra obligación -dijo el Ministro- aprovechar los períodos favorables precisamente para crear nuevas fuentes de riqueza que hagan al país menos vulnerable frente a los deterioros eventuales que pudiere experimentar la principal actividad nacional".

Terminó anunciando que "el Gobierno pondrá todo cuanto esté de su parte para impulsar esta política y espera una respuesta entusiasta y dinámica de aquellos que tienen la responsabilidad de poner su iniciativa, su capacidad y sus recursos para asegurar el progreso de su patria".

En el cobre, esta política está definida claramente. Es una economía de asociación o mixta, en que el Estado y los particulares se fijan reglas para alcanzar un objetivo común, respetando cada parte su propio interés y las modalidades específicas que requiere su operación eficaz.

La gravedad que tiene la modificación del Senado a la reforma constitucional que propusieron el radicalismo y el FRAP, en cuya virtud desaparece la propiedad minera y se transforma en mera concesión estatal, es que rompe el cuadro de condiciones necesarias para el aporte del sector privado en la minería. Sin duda, los diputados demócratacristianos serán advertidos de la inconsecuencia que esto representa, frente a la lucha del Gobierno por aprobar el programa del cobre y se restituirá la situación a la normalidad.

Esta precisión de la política oficial acerca de la gran minería ha de extenderse al resto del sector privado. Ello se desprende de las palabras del señor Ministro de Hacienda. El esfuerzo real de ahorro interno y el despliegue de las iniciativas económicas están subordinados a un cuadro de condiciones semejantes al logrado para el cobre. Una política de compresión de las utilidades de las empresas unidas al debilitamiento de la propiedad privada y al conjunto de controles estatales sobre el trabajo económico particular van mucho más allá de una política antiinflacionista. Falta, sin duda, delinear en forma estable el ámbito de los particulares. El ahorro que, con razón, anhela el Ministro de Hacienda no es más que utilidad disponible no gastada, que pertenece en dominio a su titular. El hostigamiento de las utilidades, los controles y el deterioro de la propiedad privada van, pues, contra el ahorro, pues vale más gastar lo poco que se obtiene si las rentas acumuladas son objeto de medidas que las disminuyen considerablemente o que las enervan. El esfuerzo de ahorro interno depende de una política de defensa de la propiedad privada y de las empresas económicas, porque ellas son el fin y la utilidad social del ahorro de los particulares.

En suma, en el cobre se tiende a establecer una economía mixta con perfiles nítidos. Hay que superar en el resto de la actividad nacional un estado de economía híbrida, en que ni el Estado ni los particulares conocen sus límites y sus verdaderas posibilidades.

LA ENGAÑOSA OFENSIVA COMUNISTA

Nada puede parecerle peor al Partido Comunista que el conjunto de factores capaces de sacar de su postración, a nuestra economía y asentar nuestra democracia sobre bases sólidas. De ahí que acentúa cada vez más su presión para lograr que el país fracasase en sus empeños de mejoramiento.

Frustrado, por la resuelta actitud del Gobierno, en su intento de destruir la economía con la guerrilla de las huelgas, especialmente en los minerales del cobre, el comunismo mantiene y organiza la agitación campesina, con el objeto de manejar la reforma agraria que despacha apresuradamente el Congreso. Unos cuantos paros de trabajadores agrícolas en diversas regiones del país, que abarcan a varios miles de campesinos, demuestran que los comunistas están logrando el control político en este sector, lo que presentará serios obstáculos a los planes del Gobierno.

La conocida táctica del partido internacional es ir destruyendo poco a poco a las fuerzas que se le oponen, aprovechando las debilidades de sus propios adversarios. Gracias a sus consignas logran imponer un clima de persecución hacia las tesis que pueden constituir una amenaza para su crecimiento. Así crean en el ánimo público una imagen desdeñable de los principios que más vigorosamente resisten sus avances. No pocos hombres influyentes caen en este marco cerrado de las consignas y se prohíben a sí mismos, por ingenuidad o por temor, los temas que son "tabú" para el comunismo.

En un segundo paso está la infiltración en las actividades culturales, sociales y políticas del país. Los dirigentes chilenos han llegado, en este punto, al grado máximo de perfección. Puede decirse que no hay centro de influencia que no esté penetrado en alguna medida por agentes comunistas. Ello les permite estar totalmente al día acerca de los movimientos y actuaciones de los distintos sectores del país, mientras ellos ocultan cuidadosamente sus pasos. Así, en la sesión plenaria del Comité Central del partido se leyó un extenso informe de la Comisión Política, que incluye declaraciones de un alto funcionario a una publicación aparecida el mismo día. Hay que reconocer, pues, que esa directiva está bien informada y que se le suministra el contenido de las publicaciones con una oportunidad de que no dispone el lector de ellas.

Nunca los comunistas atacan a un adversario fuerte. Lo aíslan o lo diezman primero, a fin de vencerlo con más seguridad. De ahí nace su táctica actual frente a las dos fuerzas más vigorosas de la democracia chilena, la Democracia Cristiana y el radicalismo. El procedimiento es similar en ambos casos: el halago a los elementos "progresistas y de avanzada" en esos partidos y el despliegue de toda suerte de acusaciones y difamaciones contra los elementos "reaccionarios", a los que se atribuyen todos los aspectos que distancian a esas colectividades del comunismo. En consecuencia, los celebrados son los sumisos a sus consignas, mientras que los que defienden la personalidad propia de sus instituciones o partidos son víctimas de todas las furias. Harían mal

los "avanzados" en creer que esto representa una ventaja política para ellos. La verdad es que el comunismo trata de dividir los partidos po-

líticos, de aislar a sus dirigentes y de aprovechar sus fuerzas al servicio de la dictadura totalitaria que propugna.

La batalla de las banderas

(24 de abril de 1966)

En las elecciones sindicales realizadas en los centros mineros de Potrerillos y Barquito, el FRAP obtiene entre el 72 y el 77 por ciento de los sufragios. Sobre el tema de las reformas constitucionales al derecho de propiedad se destacan las intervenciones en el Senado del Ministro de Justicia (EM, 20 abril, pág. 20) y del senador radical don Humberto Enríquez, quien desarrolla la doctrina del socialismo democrático (EM, 19 abril, pág. 22).

La Semana Política

La victoria comunista en las elecciones sindicales de El Salvador, Potrerillos y Barquito es una evidencia más del considerable crecimiento del Partido Comunista, que compromete la posición del Gobierno entre los trabajadores organizados, domina a los socialistas y desalienta a los que quisieran pactar con una fuerza que sólo trabaja para sí misma.

El extremismo justifica las ventajas comunistas en un supuesto repudio a la llamada política de la "mano dura", cuando lo cierto es que lo que está fracasando es la ilusión de "arrebatarle banderas al comunismo". Cada iniciativa programática que tiene en vista esa arriesgada empresa se convierte pronto en nueva brecha de penetración y ensanchamiento de la influencia comunista. Esta disputa de las banderas no favorece, al parecer, a la Democracia Cristiana, pues el comunismo avanza más rápidamente con las que posee y va adquiriendo otras.

En la discusión de la reforma constitucional de la propiedad algunos senadores democristianos aludieron a la idea de la propiedad comunitaria, en tanto que el Ministro

de Justicia esbozó más bien el concepto civilista del derecho de propiedad de acuerdo a las evoluciones legislativas contemporáneas. Parece ya de interés público que se dilucidan algunos conceptos doctrinarios de la Democracia Cristiana y que se muestren aplicaciones prácticas de tales principios a fin de que el país comprenda cuál es la orientación que la guía.

Ha sido oportuno el discurso pronunciado en el Senado por el presidente del Partido Radical, senador don Humberto Enríquez, que señala con firmeza la línea socialdemócrata de su colectividad y, por tanto, opuesta al marxismo, en vista de que ha trascendido internacionalmente el rumor de que algunos miembros de la Juventud Radical estarían inclinados al comunismo y de que se ha dicho en el país que habría otros elementos que impulsan una alianza política con el FRAP. El fundado planteamiento del senador Enríquez trata de colocar al radicalismo en su verdadero sitio.

LA BATALLA DE LAS BANDERAS

Las últimas elecciones sindicales del cobre constituyen un triunfo

comunista. El crecimiento de ese partido, a expensas del Gobierno y de sus propios aliados, es uno de los hechos políticos más determinantes del momento.

En otras ocasiones se ha señalado la sorprendente agilidad con que el comunismo captó el cuadro nacional que planteaba la victoria democratacristiana y el desplazamiento de las fuerzas tradicionales. Como el empuje popular de los vencedores estaba en los organismos de base, tales como centros de madres, juntas de pobladores y vecinos y otras entidades de masa, distintas de la estructura sindical que hasta entonces era la herramienta básica para mover los votos de los trabajadores, los comunistas entraron vigorosamente en este terreno relativamente nuevo para ellos. La bandera de los intereses locales y vecinales está siéndoles disputada a los democratacristianos por el Partido Comunista.

En cumplimiento de los acuerdos de la Conferencia Tricontinental de La Habana, dicho partido promovió la guerrilla de las huelgas. Obstaculizado en ese frente, se desliza entonces a la conquista pacífica de los sindicatos y a la organización y entrenamiento de entidades de lucha a escala provincial, sectorial y nacional. La maquinaria paralizante de la economía se prepara paciente y ofrece manifestaciones esporádicas sólo para probar sus fuerzas internas.

Un populismo sin trabajadores organizados es un juego difícil y todavía lo es más cuando opera desde las entidades oficiales, que, por su naturaleza, no pueden formar organismos vivos de masas, aunque

cuenten con más recursos para ello. El control de los sindicatos y la rápida infiltración en las masas no organizadas gremialmente es un peligro grave para el gobierno, aunque la persona del Jefe del Estado goce de notoria popularidad.

Entretanto, el propósito de quitarle banderas al comunismo se utiliza por la secta con gran ventaja. Las iniciativas que persiguen tal objetivo destruyen una organización económica que, como la agricultura privada, está funcionando y que, si bien admite reformas, al desaparecer debilita más aun a la democracia frente al marxismo. Abatiendo el poder de los particulares, el comunismo persigue dos objetivos: distanciar al Gobierno de una parte importante de su caudal electoral e impedir que existan ocupaciones, actividades y múltiples intereses asociados a la actividad particular.

No se arrebatan fácilmente banderas al Partido Comunista. Al menos en este caso se comprueba que el progresivo cerco al sector privado incita a nuevas medidas para acrecentarlo. Los comunistas empujan -según su expresión- para ir más allá, pues saben muy bien que sin una economía privada floreciente tienen la vía libre para apoderarse del país, porque se habrán quebrado todas las resistencias.

ESTATISMO O COMUNITARISMO

La Democracia Cristiana, como su nombre lo indica, responde en todos los países a una inspiración de libertad y de espíritu. Las transformaciones sociales que ella preconizaba aparecieron a la opinión pública como cambios dentro de un

régimen que afianza la autonomía de la persona y que la inserta libremente en diversos organismos intermedios, destinados a favorecer el desenvolvimiento de las iniciativas y de los valores de los individuos.

El comunismo tiene una doctrina revolucionaria, que se realiza mediante la dictadura del Estado, al cual denomina proletariado, y promete para una época que nunca llega la plena liberación individual y social.

Contrariamente, la Democracia Cristiana plantea como valor político inmediato el de la libertad, sin dejarlo para más tarde. De ahí que la absorción de los particulares por el Estado no tenga doctrina concreta en la Democracia Cristiana, y el fenómeno del estatismo que el país presencia se esté realizando sin fundamento ideológico aparente.

Muy a menudo se alude a una doctrina comunitaria, pero los proyectos de ley de la Democracia Cristiana no logran traducir ese ideal, sino que representan una acentuación enérgica del poder del Estado o fórmulas de propiedad colectiva cuyo tenedor y contralor real es el mismo Estado.

Se habla de "formas de apropiación social diferentes del individualismo y que la experiencia de una comunidad de hombres libres irá dando en su desarrollo". Pero, entre tanto, esas formas de apropiación no se definen en nada diverso a una vaga colectivización.

Mientras la Democracia Cristiana hace estatismo sin una doctrina que lo justifique, los comunistas tienen esa doctrina, lo que los sitúa en un claro nivel de superioridad ideológica en esta materia.

Parece urgente que el partido de Gobierno esclarezca ante la opinión pública su propia orientación. Ya pasó el tiempo en que esa tendencia pudo definirse negativamente diciendo que no es capitalista ni colectivista. La mejor definición de una idea política está en las realizaciones, y hasta ahora las de ese partido no logran configurar una dirección distinta del ensanchamiento constante de las actividades del Estado y de la presión de éste sobre múltiples manifestaciones de la vida ciudadana.

RESTRICCIONES AL TRABAJO LIBRE

Una sociedad democrática descansa materialmente en la iniciativa y el dinamismo de los hombres libres que la componen. Con razón las autoridades financieras reclaman el concurso del esfuerzo privado para ampliar las actividades económicas existentes y para crear otras nuevas. La aprobación del programa del cobre y el ingreso adicional de divisas que traerá el nuevo precio del metal son otras tantas invitaciones a multiplicar y diversificar las tareas productivas.

Sin embargo, ese cuadro favorable se presenta menos claro a causa de una doble amenaza. Por una parte, la guerrilla de las huelgas pasa por una etapa menos ostensible pero siempre activa. Los compromisos comunistas de la Conferencia Tricontinental de La Habana no han quedado sin efecto. Las huelgas en el campo aparecen y reaparecen en diversos lugares, mientras se completa una organización más perfeccionada de los campesinos. La conquista de las directivas sindicales del cobre y el control de todos los

sectores importantes de la minería y de la industria están preparados para movimientos huelguísticos amplios.

Se comprenderá que resulta difícil iniciar o ampliar actividades económicas estables en un clima de huelgas y prehuelgas y de constante inquietud laboral.

A esto se añaden las leyes y decisiones que comprimen la libertad de las empresas, que atenúan el derecho de propiedad, que presionan sobre actividades fundamentales de un sistema libre y que representan fuertes cargas tributarias.

Desde hace tiempo que es difícil en Chile el trabajo independiente, que crea otras ocupaciones y distribuye rentas que no provienen de las áreas fiscales; antes, al contrario, aporta a ellas una gran proporción de sus ingresos. Esa actividad libre e independiente se ha visto entrabada por circunstancias políticas y sociales. A las dificultades crónicas se unen ahora factores que las agravan, como son las huelgas y la regimentación cada vez más profunda del Estado.

En el instante en que es más necesaria que nunca la consagración del país al trabajo productivo, ambos factores lo desaniman y tienden a paralizar la realización práctica de los enormes anhelos de mejoramiento que despertó la última campaña presidencial.

LA SITUACIÓN DEL PARTIDO RADICAL

El radicalismo es la segunda fuerza democrática del país y su potencialidad depende, sobre todo, de que afirme su acción política en los principios de su doctrina.

La opinión pública ha visto una reafirmación de esa colectividad en

el discurso que pronunció su presidente, senador don Humberto Enríquez, delineando su doctrina como socialismo democrático y, por tanto, incompatible con el marxismo, que afirma al hombre, en su dimensión individual y social, como fin de la organización política.

Es útil el señalamiento de las grandes concepciones de este partido democrático, porque la propaganda comunista está confundiendo las mentes y desvalorizando sistemáticamente lo que sea expresión genuina de la democracia humanista. En el juego doble de empujar al partido de Gobierno a que desmantele la economía y de empujar entretanto a la oposición contra el Gobierno consigue que muchos elementos responsables colaboren a la faena de destrucción en que está empeñado el comunismo.

En otro momento pudieron ser comprensibles las veleidades y las supuestas posiciones "de avanzada", en el sentido en que las entienden los comunistas. Ahora se está viendo claro el ataque totalitario, y ni gobernantes ni opositores tienen derecho a deslizarse por la pendiente que les labra el marxismo-leninismo. Es lamentable, por eso, que hayan trascendido al exterior actitudes de la Juventud Radical que pudieran estimarse como favorables al comunismo. Cabe esperar que estas inconsecuencias se superen y que ellas no sean obstáculos para el ingreso del Partido Radical chileno a la II Internacional, que agrupa a los partidos socialistas genuinos, es decir, a los que no se dejan arrastrar a la trampa comunista, que está sólo montada para beneficio del partido de Lenin.

Peligro de un derecho basado en la ley

(15 de mayo de 1966)

La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de reforma al artículo 10, N° 10, de la Constitución sobre derecho de propiedad. Junto con discutir el tema central de la reforma, se incluyeron indicaciones que se refieren a otros aspectos constitucionales, como por ejemplo derechos sindicales, disposiciones sobre plebiscito, reforma a las inhabilidades parlamentarias, etcétera, temas que ya estaban siendo discutidos en otro proyecto del Ejecutivo pendiente en el Senado. Esto motivó serias protestas y una moción de censura a la mesa de la Cámara (EM, 4 mayo, pág. 1) (EM, 12 mayo, pág. 29).

El tema de fondo de este proyecto, que fue desglosado de la reforma general a la Constitución, es el derecho de propiedad, y a éste se refiere el comentario.

La Semana Política

Las Comisiones de Constitución, Legislación y Justicia, y de Hacienda, de la Cámara de Diputados, despacharon la reforma del artículo 10, N° 10 de la Constitución, que garantiza la propiedad, añadiendo, además, diversas otras materias que en la práctica configuran un nuevo proyecto de reforma constitucional, paralelo al que está pendiente en el Senado.

Son muchos los temas que suscitan interés en esta reforma, pero el que más polémica ha levantado es el relativo a la nueva modalidad de reconocimiento jurídico del derecho de propiedad. Y esto es explicable porque el régimen de propiedad atañe a la estructura misma de la sociedad. Como hay de hecho sólo dos titulares posibles del dominio sobre los bienes, el Estado y los particulares, la elección de una de esas dos alternativas en forma absoluta desplaza el poder y la libertad

hacia el polo respectivo y anula al otro. Eso es lo que sucede en los extremos del individualismo y del colectivismo.

Con todo, las etapas intermedias entre esos dos términos significan también limitaciones relativas de la influencia del Estado o de los particulares y determinan, por eso, cambios importantes en la sociedad.

El artículo 10, N° 10 de la Constitución Política no es, entonces, un precepto que interese sólo a los propietarios y cuya modificación afecte a un grupo de ciudadanos, sino uno de los ingredientes fundamentales de la convivencia nacional.

De ahí, entonces, que el debate sobre este punto haya sobrepasado el campo específicamente jurídico para centrarse en una pregunta básica, a saber, si los particulares podrán seguir trabajando, invirtiendo y creando ocupaciones libremente, o deberán esperar todo del Estado.

Para unos, la enmienda constitucional afianza y multiplica la propiedad privada; para otros, la nueva redacción pone en serio peligro este derecho; finalmente, hay tendencias colectivistas que gastan todo su empeño en que la reforma cercene directamente la garantía jurídica de la propiedad.

LO MEDULAR DE ESTA REFORMA

El proyecto de reforma cambia el tutor o protector de la propiedad privada. En la Constitución vigente, la garantía del propietario concreto está en el texto de aquélla. En la reforma, dicha garantía queda entregada a la ley.

En otras palabras, aprobada la enmienda, podrá legislarse sobre los bienes y derechos adquiridos por los particulares sin limitación constitucional alguna, del mismo modo en que pueden ahora regularse las situaciones futuras o cualquiera otra materia que no dice relación con el derecho de los individuos a los bienes que han incorporado a su patrimonio.

Este aspecto es el más importante de la reforma: la garantía constitucional de la propiedad se transforma en una garantía legal de ella.

El fondo de las objeciones al cambio reside en que esta nueva garantía es menos sólida que la anterior y que, por tanto, no podrá evitar el barrenamiento del régimen jurídico, que se funda en la propiedad privada, como todas las democracias occidentales.

En el caso concreto de nuestro país, donde prima la letra de la ley sobre los demás elementos de interpretación de ésta y en que la liber-

tad de los jueces para aplicar el derecho está restringida al texto, pues la costumbre tiene valor muy limitado, la presencia de una norma constitucional clara que diera amparo a la propiedad era, sin duda, la garantía más sólida de este derecho.

Sin embargo, el Ejecutivo y la inmensa mayoría del Congreso Nacional están por otorgar una garantía legal y no constitucional a la propiedad. En estas condiciones, hay que contar virtualmente con este cambio y crear el sistema que permita afianzar y multiplicar la propiedad privada sobre la nueva base.

PELIGRO DE UN DERECHO

BASADO EN LA LEY

La votación obtenida por la Democracia Cristiana en las últimas elecciones se explica porque los ciudadanos aceptaron el compromiso, que tomó este movimiento, de hacer transformaciones económicas y sociales profundas en un régimen de libertad. Ahora bien, la libertad de opinión, la libertad de trabajo y de industria, y todas las demás descansan en la posibilidad de los ciudadanos para incorporar a su patrimonio derechos y bienes físicos. Si no hay más trabajo que el que proporciona el Estado ni más empresas que las que pertenecen a éste, todas las libertades arriesgan convertirse en servidumbre. La libertad política está, pues, íntimamente ligada a la posibilidad material de ejercerla y, en consecuencia, quienes votaron por la democracia en contra del totalitarismo decidieron también en favor de la propiedad privada contra el colectivismo.

Ello explica que tanto el Presidente de la República, durante su campaña y una vez elegido, así como los Ministros de Estado y los personeros oficiales de la Democracia Cristiana hayan reiterado una y otra vez la importancia decisiva que atribuyen al concurso del sector privado al desarrollo económico y social del país. Este reconocimiento, que sería contradictorio en caso de desconocer la propiedad de los particulares, llega hasta la invitación insistente al ahorro y a la inversión que deben hacer las personas y las empresas privadas.

No podía ser de otro modo, porque las profundas transformaciones en libertad serían inconcebibles sin el esfuerzo y la iniciativa de los ciudadanos, en pleno ejercicio de sus derechos y, por tanto, verdaderamente dueños de lo que les pertenece.

La circunstancia de que la propiedad pueda desaparecer por una simple indicación parlamentaria, aprobada en el Congreso, constituye un grave inconveniente para los objetivos y los planes del Gobierno.

Sin duda, el FRAP tratará por todos los medios a su alcance de hacer demagogia con las amenazas a la libertad, colocando a los parlamentarios demócratacristianos en situaciones difíciles. Desde que esté en vigor la reforma constitucional, los comunistas o socialistas pueden en cualquier momento propiciar la expropiación de empresas o de patrimonios y hacer aparecer al Gobierno y al partido que lo apoya en una posición supuestamente anti-popular. Es fácil formar ambiente público en contra de cualquiera ac-

tividad económica y suponerle fallas que la hacen merecedora de desaparición, lanzando al mismo tiempo una indicación parlamentaria para obligar al Gobierno a que la expíe.

Parece lógico que los dirigentes demócratacristianos busquen una salida que les permita realizar su programa, pero que contrarreste al mismo tiempo la demagogia contra la propiedad, que enerva el esfuerzo y el ahorro particulares y arriesga así el éxito del programa.

La economía tiene que funcionar a toda su capacidad en este período para que se realicen las aspiraciones de la mayoría del país. Ello exige la máxima eficiencia del sector privado y tal exigencia requiere a su vez que el fruto del esfuerzo tenga garantías jurídicas. Parece indispensable que el mantenimiento de estas garantías no descapitalice políticamente a la mayoría parlamentaria de Gobierno al obligarla el FRAP a responder por sí sola en forma negativa a propuestas demagógicas.

INICIATIVA DE LAS LEYES EXPROPIATORIAS

El tenor actual de la reforma entrega a la ley la facultad de autorizar expropiaciones generales o especiales, de fijar las reglas a que deben sujetarse los Tribunales o la Administración para el monto y condiciones de pago de la indemnización y de calificar discrecionalmente ésta, tomando en cuenta no sólo los intereses expropiados, sino el bien común.

Se dice, sin embargo, que "el expropiado tendrá siempre derecho a indemnización".

Esto significa que la expropiación envolverá necesariamente un nuevo gasto público de carácter variable, que será preciso incluir en la ley general de presupuestos o en una suplementación de ésta, materias que la Constitución entrega a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Parece, entonces, necesario conciliar el pleno ejercicio de las facultades presupuestarias del Ejecutivo con el procedimiento que la reforma constitucional establece para las expropiaciones.

Se observa en ello una contradicción entre la tendencia inicial del proyecto de reforma enviado por el Ejecutivo y la redacción aprobada en materia de propiedad. Dice, en efecto, el mensaje del Presidente de la República en que propone las enmiendas a la Constitución que uno de los propósitos de la reforma es "hacer posible una verdadera planificación de la política económica y social, reservando al Ejecutivo la iniciativa para legislar sobre materias que puedan interferir con el cumplimiento de sus planes". A tal finalidad obedece la ampliación de los objetos de ley que quedan reservados, en el proyecto, a la iniciativa exclusiva del Ejecutivo.

La mayoría parlamentaria democratacristiana aprobó en su tiempo este proyecto de reforma e hizo suya la aspiración a planificar desde el Gobierno la política económica y social del país.

Es evidente que no hay ningún tema que se relacione más estrechamente con los planes del Gobierno que el de las expropiaciones. Ellas implican, desde luego, una decisión política sobre la órbita de responsabilidades que estima indispensable

asumir una Administración. Envuelven, además, una decisión económica acerca de los efectos que tales medidas producirán concretamente en los distintos factores productivos del país. Representan, también, una decisión financiera en lo tocante a los recursos fiscales para el pago de las expropiaciones y para la explotación por cuenta del Estado de los bienes que se traspasan a su dominio.

Es tal la incidencia que este problema tiene para los planes del Gobierno, que casi desaparece la gravedad del conflicto de atribuciones presupuestarias frente al hecho de que la responsabilidad de la conducción política, financiera y económica del país no podría planearse con seriedad por el Ejecutivo si el Congreso despacha leyes de expropiación y colectivización sin atender a la magnitud de sus consecuencias ni a los gastos y responsabilidades que recaerían sobre el Gobierno.

Si en noviembre de 1964 el Presidente Frei propuso una reforma constitucional que deja a la iniciativa exclusiva del Ejecutivo la concesión de toda clase de beneficios al sector público; el otorgamiento de pensiones de gracia y de abonos de tiempo servido; la fijación de sueldos y salarios mínimos y los aumentos de remuneraciones al sector privado, así como la implantación o reforma de regímenes previsionales, parece ineludible que la misma norma rija para materias de tanta o mayor influencia en la marcha del país.

Poco avanzaría la planificación del Ejecutivo si inesperadamente tiene que entrar en grandes gastos para poner en movimiento empre-

sas o actividades que el Congreso decide que el Estado adquiera, pague y explote obligadamente. Los efectos inflacionarios o depresivos de semejantes medidas podrían ser mucho mayores que los de las leyes de gastos que en la Constitución vigente o en la reforma son de iniciativa del Gobierno Hay que aña-

dir que, en muchos casos, las expropiaciones y colectivizaciones exigirán la creación de servicios públicos y empleos rentados, que el Parlamento no puede impulsar por sí mismo, de manera que las leyes así dictadas serían inoperantes y puramente perturbadoras si no se armoniza el sistema.

El socialismo comunitario

(21 de agosto de 1966)

Dos hechos sirven de base al comentario semanal: las informaciones sobre la participación del Presidente Eduardo Frei en una pequeña "Conferencia cumbre" con los Presidentes de Venezuela y Colombia y representantes de Perú y Ecuador en Bogotá, como parte de su gira por Colombia, Ecuador y Perú, y el Tercer Congreso Nacional de la Juventud Demócrata Cristiana, celebrado entre el 12 y el 15 de agosto, y en el cual se acordó pedir la incorporación de la ideología del "socialismo comunitario" a la declaración de principios del partido (EM, 19 agosto, pág.19). Se comentan las reacciones del senador Patricio Aylwin, de Rafael Agustín Gumucio y del diputado Bosco Parra frente a los acuerdos de este Congreso (EM, 20 agosto, pág. 25).

La Semana Política

El Presidente Frei está desplegando en el exterior sus brillantes condiciones personales. A través de sus discursos se revela un pensamiento moderno abierto a la técnica y al progreso, empapado de un ideal generoso de unidad entre los pueblos americanos y dirigido a afirmar la libertad y dignidad de cada hombre, así como su derecho al bienestar.

Ese mismo pensamiento, que reclama un esfuerzo solidario para expandir las posibilidades morales y materiales de los chilenos y que pide un análogo esfuerzo regional para desarrollar velozmente las economías latinoamericanas, es lo que dio el triunfo electoral al Excmo. señor Frei. La mayoría que lo llevó al poder percibió en sus tesis el camino para el engrandecimiento de la República, la superación del marxismo y de la luchas de clases y la oferta de una empresa común para "derrotar la miseria, la ignorancia y el odio".

Las elecciones de septiembre de 1964 dieron el triunfo a la libertad

contra el totalitarismo comunista y plantearon al nuevo Gobierno la enorme responsabilidad de asociar a toda la ciudadanía a las tareas del desarrollo económico y social en un clima de libertad "Juntar todos los brazos en un solo ariete para derribar la noche" es el ideal que proclamó el Presidente Frei en la Plaza Bolívar, de Bogotá, repitiendo la expresión del poeta.

La ciudadanía chilena recibió en su tiempo este pensamiento generoso con no menos entusiasmo que el que muestran ahora las multitudes de los países visitados por el Presidente.

Hay derecho a preguntarse, entonces, qué factores dilatan y aun contradicen la realización del pensamiento presidencial en Chile. Se diría, en efecto, que, en vez de la necesaria unidad, vivimos bajo el signo de las divisiones; que los controles y prohibiciones tienden a sustituir la pujanza de las iniciativas económicas; que las concepciones modernas en lo político y social

ceden su paso al estatismo y al socialismo anacrónicos, y que la empresa común aparece suplantada por tensiones sociales que esterilizan al país y disminuyen sus oportunidades.

EL PRESIDENCIALISMO CHILENO

El electorado votó por la persona del Excmo. señor Frei y consideró que su pensamiento libre y abierto iba a traducirse en sus colaboradores.

Esta convicción quedó confirmada en la opinión pública al designarse un Gabinete de personalidades relevantes en sus respectivas profesiones y actividades.

Sin embargo, la formulación práctica del pensamiento presidencial en los distintos niveles de la acción política y administrativa no ha resultado siempre adecuada a la imagen que hoy se percibe tan claramente en las informaciones de la visita de S.E. a Colombia, Ecuador y Perú.

Chile es esencialmente presidencialista, como acaba de reconocerlo el senador don Rafael Agustín Gumucio. Esto significa, desde luego, una disposición natural de la ciudadanía al respecto hacia el Jefe del Estado, que todos desean ver libre de las salpicaduras de la política menuda y siempre identificado con la tradición de su cargo. En segundo término, el presidencialismo chileno implica la seguridad de que el Jefe del Estado está luchando para sobreponerse a quienes le rodean y para ejercitar su autoridad, principalmente respecto de sus colaboradores y partidarios, a fin de que ellos se constituyan en los instrumentos

de una política al servicio del país entero.

En estas condiciones ha funcionado el régimen presidencial entre nosotros. Por eso, no es extraño que las últimas encuestas de opinión, al decir del senador don Patricio Aylwin, revelen que, mientras aumenta la popularidad del Presidente, disminuye la del Partido Demócrata Cristiano. Sin duda, el proceso de declinación del último se acrecentará en la medida en que el público perciba diferencias acusadas entre la actitud abierta del Presidente y las posiciones beligerantes de su partido o de algunos de sus dirigentes.

Una política ambiciosa, como la que describe el Presidente en sus últimos discursos, exige una alta eficiencia en su realización, no sólo, por cierto, en la cúspide del poder, sino también en los planos inferiores. La actitud amplia del Excmo. señor Frei, su insistencia en que es Presidente de todos los chilenos y el respaldo efectivo que tiene entre nosotros el presidencialismo, le permiten al Jefe del Estado acudir sin reservas a los mejores expertos y a los elementos más emprendedores y dinámicos con que cuenta el país, y planear con gran libertad la forma de llegar a las metas que persigue.

Sin embargo, presenciamos un estrechamiento casi inexplicable de nuestra vida política y económica, que no guarda relación con el espíritu animoso y audaz del Excmo. señor Frei, tal como se revela en sus actuaciones públicas más importantes. En el período en que verdaderamente los gobiernos pueden concentrar sus esfuerzos, sin estar conturbados por la perspectiva de la

elección próxima, no pocos demócratacristianos parecen seguir conservando los hábitos adquiridos en la oposición. Ellos son gobierno y, por obra de las divisiones de los partidos contrarios, han conquistado virtualmente el tercio del Senado a favor del Ejecutivo. No obstante, parecen no advertir muchos de ellos que el poder obliga a abandonar ya las discusiones y a emplear todos los medios posibles para el progreso inmediato del país.

CONGRESO NACIONAL DE JUVENTUD
DEMOCRATACRISTIANA

De las declaraciones de algunos parlamentarios de la democracia cristiana parece desprenderse que el pensamiento de la juventud de ese partido, expresado en los debates y conclusiones de su Congreso, que se dieron a conocer en la prensa, es el resultado del idealismo político. Pero no ha habido, hasta ahora, una opinión categórica que ilustre acerca de si los planteamientos juveniles están o no de acuerdo con la doctrina demócratacristiana.

Por el contrario, un senador declara que coincide con el espíritu de la juventud, que ha puesto el énfasis en la necesidad de romper con el orden vigente. Según otro parlamentario, se trataría de una elaboración del pensamiento, que no podría aplicarse por ahora porque no están dadas las condiciones. Un tercer dirigente habla de loable superación idealista y, aunque manifiesta su desacuerdo con algunas conclusiones, insinúa que el partido estaría perdido si su juventud se contentara con las elaboraciones doctrinarias ya alcanzadas.

Entre los comentarios sobre la materia, merece señalarse el del diputado don Bosco Parra, que dice que en el voto aprobado en el Congreso de la Juventud se dio "especial énfasis a ciertas transformaciones que en nuestro concepto no fueron planteadas en la campaña presidencial". He aquí un importante reconocimiento de uno de los factores que entraban la labor de este Gobierno. Elegido, en efecto, por una inmensa mayoría que incluyó independientes y otras colectividades políticas, se encuentra con que muchos elementos de la democracia cristiana formulan tesis que no se plantearon en la campaña presidencial, y empujados así y desfigurados aquel pensamiento generoso de que hablábamos. Más aún, lo llevan a confundirse con la posición marxista que el electorado repudió, olvidando que, en virtud de dicho repudio, logró el triunfo el Presidente Frei y se hizo posible la mayoría electoral de la democracia cristiana.

Dicen los jóvenes demócratacristianos que su doctrina se encuentra en un "proceso dinámico de enriquecimiento y creación" y que "el militante que se queda en etapas ya sobrepasadas de la doctrina pasa a ser un freno para el movimiento". Lo grave es que este proceso de enriquecimiento lleva por un camino demasiado conocido y que en nada se diferencia del marxismo.

En un acto de franqueza, se emancipan de la teoría y de la práctica de la democracia cristiana, tal como se la conoce en otros países, y también de la doctrina social de la Iglesia Católica. Ello sirve para evitar toda suerte de confusiones y

explica el carácter del voto aprobado en el Congreso de la Juventud Demócrata Cristiana.

EL SOCIALISMO COMUNITARIO

El pensamiento de la juventud, expresado en un acuerdo que contó con 122 votos a favor, 34 en contra y 70 abstenciones, tiene la virtud de ser lógico. El vago comunitarismo, que era difícil de interpretar, aparece ahora como socialismo comunitario, susceptible de implantarse por una revolución que no excluye la violencia y que somete a la sociedad a la dictadura política y económica de un partido que se dice representar al pueblo.

La colectivización del campo, a través de una reforma agraria rápida, drástica y masiva, y la nacionalización de las empresas que asegure "el control de la comunidad nacional sobre las áreas claves de la economía", es, precisamente, lo que persigue el totalitarismo marxista, y constituye ahora la aspiración oficial de la juventud democratacristiana. El voto contiene en forma explícita la afirmación de que el partido debe tener "el control ideológico y político de la Revolución en Libertad", de modo que las críticas opositoras a la supuesta tendencia democratacristiana al partido único aparecen confirmadas por los jóvenes que, según el senador Gumucio, "a veces dicen la verdad".

Propicia además el voto de la juventud "la movilización de los trabajadores y del pueblo en general, en un movimiento comunitario y combativo que nutra a la DC y a 'su' Gobierno en la marcha hacia el socialismo comunitario", y el estí-

mulo a la "autogestión de los trabajadores", con el espíritu de que "los gérmenes comunitarios comiencen a manifestarse desde ya".

La vía de desarrollo "no capitalista" y que ahora pasa a denominarse "socialismo-comunitario", admite la actividad de "un sector capitalista", pero sometido a severa vigilancia y con los días contados. Se le controlará hasta "su comportamiento político" y se tratará de aprovechar sus energías, "evitando al mismo tiempo su consolidación y asegurando su reemplazo".

Mientras el proceso dinámico de los jóvenes se enriquece en su marcha hacia un socialismo totalitario y clasista, se angosta el horizonte de los chilenos que ven cómo se dilapidan las posibilidades de desarrollo, de libertad y de dignidad contenidas en el pensamiento del Presidente Frei.

Resulta contradictorio el esfuerzo por abrir un mercado común latinoamericano si hay cada vez más hostilidad a la economía de mercado en lo interno, pues mientras el Presidente de la República recorre los países del Pacífico en busca de un ensanchamiento de la competencia, un organismo importante del partido que lo apoya propicia, sin ser refutado, el aniquilamiento de todos los factores idóneos para una economía competitiva. No menos contradictorio es la expresión libre, democrática y de dignidad humana que constituye el viaje presidencial con los afanes de implantar la dictadura de un partido y de someter el país "al control ideológico y político" de éste, como lo señala el voto.

Sería erróneo, considerar al socialismo comunitario como precipi-

tación de una juventud idealista. Hay allí un pensamiento congruente que, por desgracia, tiene otras manifestaciones menos marcadas, pero que coinciden en la inspiración y en la práctica con él. Debe esperarse que

la llegada del Presidente de la República permita un ajuste de estas declaraciones e iniciativas políticas a los grandes postulados que formuló en su campaña y que ahora ha repetido en el exterior.

Tendencias en la Democracia Cristiana

(18 de septiembre de 1966)

El domingo 10 de septiembre culminó la Junta Nacional de la Democracia Cristiana, con la reelección como presidente del Partido de Patricio Aylwin, luego del retiro de las candidaturas de Rafael Agustín Gumucio y Bosco Parra. Se plantearon discrepancias entre la actual directiva y sectores juveniles de la DC. La presidencia recibió críticas de Rodrigo Ambrosio, por la juventud, y del diputado Alberto Jerez.

La directiva quedó integrada además por el diputado Narciso Irureta, el senador Benjamín Prado y los diputados Julio Montt y Carlos Garcés (EM, 12 sept., pág. 41). Se discute como atentado a la libertad de expresión la compra de acciones de la cadena de diarios SOPEsur por parte de sectores vinculados al Gobierno y la concesión de la radio SAGO de Osorno a familiares del diputado Luis Papic de la DC (EM, 15 sept., pág. 23).

La Semana Política

TENDENCIAS EN LA DEMOCRACIA CRISTIANA

Diversos temas han atraído la atención pública en los últimos días, desde las graves incidencias de la Penitenciaría de Santiago hasta las tensiones resultantes de un clima que, con razón o sin ella, empieza a mirarse por un número creciente de sectores como contrario a la libertad de expresión.

Ese conjunto de sucesos ha hecho, tal vez, perder de vista la composición del nuevo Consejo de la Democracia Cristiana, en que se manifiestan las tres tendencias aparecidas en esa colectividad política.

La reelección del senador don Patricio Aylwin como presidente del partido y de los miembros de la Mesa directiva confiere grandes posibilidades al sector más ligado a La Moneda. A su vez, el Presidente de la República puede contar con personeros del partido mayoritario re-

sueltos a sacrificarse por mantener una línea de Gobierno, como manera de preservar el futuro de su colectividad, en vez de atender al mañana con descuido del presente.

Debe, sin embargo, advertirse que los sectores insatisfechos con la labor del Ejecutivo han logrado una representación considerable en el Consejo Nacional del Partido Demócrata Cristiano.

De la lucha de tendencias, definidas por su distinto grado de oposición a las estructuras económico-sociales del país, ha surgido una Mesa favorable al Gobierno, pero se ve que el sector más extremado tiene fuerte influencia en el partido.

Lo que separa a las corrientes es más que una cuestión de procedimiento, es decir, de fijar la oportunidad en que deban aplicarse determinados principios comunes, ya que estos mismos principios y sus consecuencias tienen un énfasis, aun un contenido distinto, en cada grupo.

La ideología demócratacristiana presenta muchos matices no sólo entre país y país, sino también dentro de la nación en que toma influencia política. A quien mira el fenómeno desde fuera le parece que los contornos doctrinarios de la Democracia Cristiana carecen del rigor y de la precisión de los grandes sistemas filosófico-políticos del siglo XIX. Eso no es de extrañar, pues este siglo tecnológico no es un clima propicio a las ideologías políticas, que van como emigrando de Occidente para adquirir su carácter más primario y extremo en el tercer mundo como se aprecia en el caso de China roja.

La plasticidad de las expresiones demócratacristianas, propias de hombres del siglo XX, que, muchas veces, partieron de anhelos éticos y religiosos, hace que las distintas personalidades o grupos de esa ideología se inclinen, en la política activa, hacia posiciones compartidas por otras tendencias universales. Propiedad privada o colectivización; economía de mercado o dirigismo; democracia representativa o socialismo totalitario son términos en que difícilmente puede adoptarse una línea media, y los demócratacristianos europeos han tomado sin vacilar la opción que creían conveniente entre esas alternativas, aunque no siempre han coincidido al elegir.

INTERPRETACIÓN DE LA REALIDAD CHILENA

Si la Democracia Cristiana se aviniera a utilizar fórmulas universales, adaptándolas a la realidad en que actúa, como lo hacen sus con-

géneres en otras partes y el resto de los partidos chilenos, existirían igualmente las tendencias, pero la colectividad entera traduciría en sus debates las inquietudes reales de la ciudadanía. El enclaustramiento ideológico priva de dimensión a los partidos y, además, los pone progresivamente en manos de los grupos más extremos, pues en todas las colectividades estos grupos se alimentan del rigor de los principios.

En distintos grados, las actuales tendencias demócratacristianas denotan características comunes. La primera de ellas es el pesimismo respecto de la eficiencia y calidad de las estructuras socio-económicas del país. Se cree por muchos que la mayor parte del sector agrario está atrasada y que damos un mal examen agrícola en el mundo. De una manera u otra se tiene escasa fe en la empresa privada y en las formas jurídicas que le son propias. Hay la idea de que el desarrollo económico está impedido por el supuesto anacronismo de todo un sistema. Partiendo de esa base, habrá quienes propondrán moderación y quienes, repulsa enérgica frente al complejo de instituciones que han permitido a la República llegar siquiera al modesto pie en que se encuentra. Esa desconfianza inicial acerca del valor de lo que creó y crea el esfuerzo privado puede expresarse en la búsqueda de controles y regulaciones que no desean ir muy lejos, pero que permiten mayores avances a los elementos más extremos; a los que sacan conclusiones del principio de la desconfianza.

Hay también una extraña identificación entre el vicio moral del

egoísmo con la necesidad de la empresa de obtener utilidades. Hace pocos días se criticaba la posición de un agricultor que sostenía la preferencia de los productores por los cultivos de mayor rentabilidad. Esto era calificado de egoísmo y afán de lucro. La actitud deseable sería entonces producir a pérdida o a una rentabilidad baja, en forma de impedir la capitalización, reducir el ritmo productivo, despedir trabajadores o contener sus aspiraciones, y, en caso contrario, optar por el endeudamiento y la quiebra.

Tal vez el ajetreo de la lucha política y la larga consagración a la tarea opositora no han dejado tiempo para experimentar y conocer la verdadera estructura económica del país y las condiciones de su funcionamiento. Lo primero que está a la vista, en efecto, es la falta de horizontes y el bajo tenor de vida de muchos chilenos, y entonces parece natural responsabilizar de ellos a los que han tenido el mando o la influencia, y suponer que todo se debe a su incuria o su falta de sentido de la responsabilidad social. Sin embargo, cuando se aprecian de cerca las tremendas limitaciones de los recursos del país, queda a la vista que sólo una hábil y prudente distribución de ellos entre el bienestar inmediato y la capitalización puede vencer a la pobreza. De ahí los reiterados llamamientos de S.E. al estímulo al capital privado, pues una política hostil a éste, dentro de un régimen democrático, deja al Estado sin recursos y a la población sin trabajo.

El sector privado puede demostrar que responde flexiblemente a las políticas de capitalización y de-

sarrollo. Son éstas, y no el pesimismo ni los controles, el camino hacia mejores horizontes y más altos niveles de vida.

EL FENÓMENO DEL EXTREMISMO

Sin duda, muchos demócrata-cristianos tienen perfecta conciencia de que el avance en el desarrollo económico y social no se consigue con un reemplazo de instituciones jurídicas o con un relevo de personas o grupos. Ellos han visto en otros países que el proceso es al revés. Son los grandes proyectos de inversión, las transformaciones económicas y tecnológicas, la labor del talento, de la audacia y del capital, los que han creado las condiciones para cambiar las normas jurídicas o producir el desplazamiento de las estructuras anacrónicas.

Pero en la expresión oficial de los dirigentes del partido de Gobierno se advierte muchas veces el ánimo de seguir concediendo importancia a las abstracciones ideológicas y al combate polémico contra sectores que no desean otra cosa que libertad para trabajar y producir. Hay en esta actitud el concepto de que, mostrando intransigencia y extremismo, los grupos responsables podrán conquistar en mejor forma el apoyo de su colectividad y vencer a los grupos verdaderamente extremistas. La táctica parece no dar resultados, lo que se explica porque los apremios económicos del erario y las dificultades cotidianas de la labor del Gobierno fuerzan a adoptar medidas de sentido común, muchas veces contrarias a la ideología, lo que sirve a los extremistas para imputar debilidad o espíritu de tran-

sacción al Ejecutivo y a sus partidarios más resueltos.

Por otra parte, esos sectores responsables se sienten empujados a ciertas iniciativas y las adoptan y defienden, creyendo que ellas bastarán para satisfacer a los más impacientes. Estos tienden a exigir cada vez más demagogia y no se calman con las concesiones; pero la ciudadanía que votó por el Presidente Frei,

con la mira en una política de desarrollo, de crecimiento, de creación, de estímulo a todas las capacidades y recursos del país, no comprende cómo un sector del Partido Demócrata Cristiano lleva a éste, por acción refleja, a planteamientos ajenos a la campaña presidencial y que deterioran las posibilidades verdaderamente únicas del actual Gobierno.

Dos años de gobierno

(6 de noviembre de 1966)

El comentario hace un recuento de lo que han significado en lo político los dos años de gobierno de la Democracia Cristiana, destacando entre los hechos más inmediatos la actitud firme del Gobierno, a través del Ministro del Trabajo, William Thayer, al designar un interventor para quienes no deseen continuar la huelga, y permitir incluso la contratación de nuevo personal.

La Semana Política

DOS AÑOS DE GOBIERNO

Un tercio del período constitucional de una Administración parece un plazo insuficiente para formular un juicio acerca de ella. Sin embargo, es posible caracterizar la obra realizada señalando sus rasgos fundamentales.

En el caso del Gobierno del Presidente Frei puede decirse que la característica más destacada de estos dos años es la tendencia a acelerar la apertura de la sociedad chilena mediante la incorporación de los grupos más postergados a los beneficios de un mayor ingreso y de una mejor educación. Nuestra democracia ha seguido un camino de marcada evolución social, por muchos años, pero en los dos últimos; este proceso adquiere notoria velocidad, especialmente en lo relativo al mejoramiento del sector campesino.

Tal vez la mayor parte de los indicadores económicos positivos obedezca a este fenómeno de ampliación y de apertura de la sociedad. Hay que decir, además, que no pocos de los problemas y dificultades tienen como raíz el paso apresurado que ha adquirido el proceso. Ha surgido un mayor número de

aspiraciones y los recursos disponibles se hacen escasos. Por otra parte, el acento en los sectores marginales ha debido implicar un sacrificio relativo de los grupos de ingresos medios.

Se diría que este rasgo general de los últimos dos años tiene un signo positivo, aunque seguramente deberá imponer algunos ajustes en el futuro, a fin de que la ampliación de las expectativas educacionales y sociales esté correspondida por un aumento equivalente de bienes y servicios, lo que supone que los grupos más dinámicos de la sociedad, es decir los técnicos, los profesionales, los empresarios, los obreros especializados, vean reconocido su papel sustancial en el desarrollo y encuentren alicientes para sus iniciativas.

Paralelamente con esta apertura social, se advierte un estrechamiento en el plano político. La participación cada vez más amplia de muchos sectores en los bienes educacionales y económicos de la colectividad no tiene su réplica en el campo político.

El Presidente Frei fue elegido por todo el electorado democrático. Tendencias que no participaban de

la totalidad de su ideario partidista le otorgaron su apoyo, en atención a la confianza que inspiraron sus dotes personales y su firme adhesión a los principios de la libertad. Sin embargo, las circunstancias han impedido que la acción política y administrativa del Gobierno descansen en la labor de otros sectores que los del Partido Demócrata Cristiano, pues son éstos los que aparecen con casi todas las responsabilidades e imprimiendo un sello doctrinario propio a gran parte de las tareas y programas.

Las fuertes tensiones que se aprecian en el escenario político tienen, al parecer, su causa en un fenómeno de desplazamiento de las tendencias que, hasta ahora, habían compartido, aunque fuera indirectamente, las tareas públicas.

EL PERSONALISMO EN CHILE

El gobierno impersonal creado por Portales rige entre nosotros en el orden de las instituciones, pero no en el de las opiniones. De hecho, el régimen republicano ha funcionado mediante el acatamiento de los poderes públicos a los límites de su jurisdicción en cuanto a la materia y en cuanto al tiempo. En ese sentido, el fenómeno del caudillismo no ha tenido las expresiones antijurídicas que adoptó en otros países, pero ello no es óbice para que nuestra historia haya girado más en torno de las personas que de las ideologías.

El montt-varismo, el balmacedismo, el alessandrismo, el ibañismo presentan los caracteres de verdaderas corrientes de opinión, a las cuales la ciudadanía se ha mantenido adscrita muchas veces en forma

tácita, ocasionando hasta sorpresas electorales. Es tal la autoridad y el prestigio de los Presidentes de Chile que algunas de sus figuras escapan al contorno de sus realizaciones y de su ideología para convertirse en símbolos representativos de la tendencia permanente del país a ser mandado por quienes demuestran ascendiente y autoridad y una alta independencia personal.

El Presidente Frei ha provocado también un movimiento en torno a su persona. Su triunfo electoral así lo demuestra, ya que el caudal de votos de su partido quedó superado en las últimas elecciones presidenciales. Las posteriores victorias democratacristianas se han hecho bajo las banderas del Presidente Frei, y son la personalidad y el programa de éste los que han llegado a todo el territorio del país.

Cuando ciertos sectores del Partido Demócrata Cristiano sientan la doctrina de que el Gobierno es un agente ejecutivo del Partido no sólo contrarían el espíritu de la institución presidencial chilena sino que arriesgan innecesariamente el capital político constituido por la personalidad del Presidente Frei, por el significado nacional e internacional de su figura y por el eco que tiene su palabra en las masas populares.

Debe decirse, además, que el Excmo. señor Frei ha respondido con singular tenacidad a la imagen contenida en los deberes de su alto cargo. Frente a los propósitos subversivos de ciertos grupos políticos, que han empleado las huelgas como guerrillas contra el régimen democrático, la posición del Gobierno ha sido firme y su energía ha tenido el

premio del éxito. Las actitudes resueltas frente a las huelgas del cobre, las de los campesinos de Colchagua y ahora la del Banco de Chile son algunas de las manifestaciones de la política presidencial de autoridad dentro de la ley. Ellas han tenido como resultado afianzar el prestigio del Gobierno y demostrar al país que las transformaciones que éste propicia son compatibles con la disciplina social; más aun, necesitan ineludiblemente de tal disciplina para convertirse en factores de progreso.

Es preciso reconocer que el empleo de un lenguaje asimilable por la gran masa, especialmente por los grupos hasta ahora marginados de la plena vida cívica, y mantener al mismo tiempo el respeto a la libertad y la observancia de la disciplina social, es una tarea muy difícil. Su éxito depende en gran parte de la confianza que inspire la personalidad del gobernante, y una de las preocupaciones de su partido debiera ser la de consolidar, no limitar, la influencia del Presidente en el país, en la seguridad de que con ello resguarda su porvenir como colectividad política.

EL PRESIDENTE Y SU PARTIDO

Se oye a veces decir que una de las formas de oposición al Gobierno es intentar la separación entre el Presidente y la Democracia Cristiana. Si se han tenido tales propósitos, ellos no podrían tener éxito ni tendría ventaja alguna que tal cosa sucediera. Precisamente una de las más favorables condiciones con que cuenta el actual Gobierno es la de disponer de un respaldo parlamen-

tario y de una maquinaria política como no se han conocido antes. Y tales herramientas son precisamente la consecuencia de la unidad entre el Presidente de la República y la colectividad política que él contribuyó a fundar en su juventud.

Sin embargo, no puede confundirse la profunda solidaridad política entre el Jefe del Estado y su partido con los esfuerzos de algunos miembros de éste por enclaustrar al primero en los límites de una tienda partidista. Podrá sostenerse que la existencia de un hombre es más frágil que la de una ideología, pero no hay que olvidar que la obra de un gobernante está destinada a trascender los días de éste y aún los de la organización a que pertenece. En la medida en que la clausura partidista perjudique el valor de la obra debiera optarse siempre a favor de esta última. Ello no compromete la vinculación entre Gobierno y partido, pero obliga a distinguir entre los intereses propiamente partidistas y los de la nación, que el Gobierno está destinado a atender.

Esta consideración es todavía más válida en presencia de la magnitud de las tareas asumidas por el actual Gobierno. Ellas están marcadas, como hemos dicho, por el designio de abrir aceleradamente la sociedad chilena. Tal apertura, en sus momentos iniciales, implica redistribución de ingresos y fuertes inversiones públicas de carácter social; pero todo esto debe mirarse como una etapa de un proceso que obligará a contar con mucho más capital y a producir en cantidades muy superiores al presente. En esta segunda fase es donde el Gobierno necesita contar con todos los em-

préstanos activos y con todos los especialistas capaces en las más diversas disciplinas, imponiendo un clima de trabajo, de respeto a las iniciativas y comprensión del valor de las actividades productoras. El

concurso de los elementos más dinámicos en el proceso del desarrollo debe exigir, entonces, una apertura del ambiente político, a fin de adecuarlo a las grandes transformaciones que se operan en el país.

Presión sobre los jueces

(20 de noviembre de 1966)

El artículo comenta tres hechos recientes que dicen relación con la justicia: el primero, que dos senadores fueron injuriados por el diario Clarín: Raúl Ampuero y Pedro Ibáñez. Este último obtuvo el encarcelamiento del director del medio, Alberto Gamboa, lo que motivó además injuriosos artículos de Clarín contra el ministro sumariante Manuel Rodríguez. En segundo lugar, un proyecto de amnistía a funcionarios municipales, que fue declarado improcedente por dictámenes de la Contraloría y del Consejo de Defensa del Estado.

En tercer lugar, se comenta que el interventor designado por el Gobierno en el fundo El Molino de Llay Llay se niega a reincorporar a trabajadores, no obstante una resolución de la Corte Suprema.

La Semana Política

JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO

La verdadera fuerza del Estado de Derecho no reside en la sumisión al mero legalismo sino en el acatamiento a la justicia. No hay sociedad civil organizada sin justicia, es decir, sin que se atribuyan y se aseguren a cada cual los bienes jurídicos que le pertenecen.

El nombre, la honra, las libertades y el patrimonio son esos bienes y forman la expresión de la persona. Ellos merecen un permanente y celoso amparo, y donde éste no existe ha desaparecido ya el Estado de Derecho y, en su lugar, imperan el despotismo o la anarquía, que son las dos formas de envilecimiento de la sociedad y de los individuos que en ella viven.

Se da por sentado que todos han de cumplir la justicia, pero como de hecho existen violadores de ella, surge la necesidad de que un poder público se constituya en defensa de la justicia conculcada. A ese poder público, al judicial, se le llama tam-

bién "la Justicia", con lo que el idioma corriente denota la alta misión de los tribunales y señala que ellos encarnan el valor supremo de la sociedad, que es la justicia.

Del prestigio, de la independencia y de la consideración que mantengan los jueces dependerá el grado efectivo de autoridad que posea el Derecho en una nación. Pueden dictarse las leyes más sabias, pero esto no basta. De la acción de los magistrados y del acatamiento riguroso que reciban sus fallos surgen la vigencia real de la ley y el respeto práctico a los derechos de cada uno. En la misma medida en que se obstaculice directa o indirectamente la labor de los tribunales se ataca al imperio de la ley y a las libertades y derechos de los ciudadanos.

Los jueces no tienen otro poder que el del Derecho mismo, pues hasta para forzar al cumplimiento de sus resoluciones a quienes las resisten, deben solicitar el auxilio de las autoridades administrativas. Es cierto que la Constitución Política

preserva la independencia de los magistrados, pero sólo el respeto profundo de parte de los otros poderes públicos y de los medios informativos que forman la opinión hacen que su alta labor pueda desempeñarse sin necesidad de recurrir al heroísmo.

Por eso puede decirse que la autoridad real de que dispongan los jueces es la mejor medida de la existencia práctica de la libertad en el país. Tal autoridad puede desconocerse abruptamente o sufrir mermas de distinta naturaleza. El resultado es el mismo.

De ahí que todos los elementos responsables de una democracia estén obligados a hacer un esfuerzo para situar a los tribunales en condiciones de cumplir su deber y para acatar los fallos que dictan en el ejercicio legítimo de sus atribuciones. Cuando por cálculo político, ambición o amedrentamiento se despoja a los jueces, aunque sea en parte, de la autoridad que invisten, empieza a peligrar el Estado de Derecho.

PRESIÓN SOBRE LOS JUECES

Dos senadores de la República, entre otros muchos ciudadanos, han sido vejados y escarnecidos por cierta prensa. Uno de ellos prefirió el enfrentamiento personal con el responsable de las injurias, precisamente porque desconfiaba de que los fallos de los tribunales tuvieran vigencia. La simple sospecha de que las decisiones de los jueces puedan quedar burladas trae graves derivaciones e impulsa a las víctimas de los delitos a la acción directa.

El otro senador acudió a los tribunales y obtuvo el encarcelamiento del injuriador, probando así que el Derecho se aplica en Chile y que los jueces no hacen discriminación entre personas para hacer justicia.

Bastó que la acción judicial se iniciara y una ola de adhesiones solidarias ensalzó al procesado. Entre tanto, la misma publicación discutida injuriaba a un Ministro de la Corte de Apelaciones, precisamente por actuaciones del proceso, cuya legitimidad se ha confirmado reiteradamente por la propia Corte. El reo pasó a tener estatura de procer y un colega de un diario llegó al grotesco extremo de compararlo con Camilo Henríquez, valiéndose de su transitoria tribuna en el Senado.

La labor de la justicia ha debido realizarse entonces entre presiones morales e injurias.

Si es delito toda acción u omisión penada por la ley, y los tribunales encuentran motivos para procesar a un individuo por un delito, ninguna consideración política o amistosa debiera primar sobre la circunstancia de que tal individuo está en poder de la justicia. No es entonces el momento para que políticos, sin medida de valores, depriman el poder de la prensa libre, ni para que Ministros y altos representantes del Ejecutivo vayan a felicitar a un reo de delito común. Todo esto podía esperar la sentencia a firme en el proceso, y tal anticipación en los apoyos envuelve, aunque no se quiera, una forma de presionar a los jueces.

Si a esto se une la injuria lanzada por el propio diario que encabeza visiblemente el reo preso, sin que se oigan entonces las calurosas ex-

presiones de solidaridad con el magistrado ofendido en su honor mientras ejerce las funciones de su cargo, es preciso concluir que el nivel moral en que debe actuar la justicia la fuerza a una abnegación casi heroica si no quiere ser vaivén de las pasiones y rehuir la noble vocación de la magistratura.

Como es tradicional, los jueces continúan aplicando el Derecho sin arredrarse. Ellos sirven valores permanentes y saben resguardar con energía su dignidad. La inmensa mayoría de los ciudadanos reconocen y aprecian esta actitud, y no ignoran que ella es prenda de su propia seguridad y del afianzamiento de régimen de derecho en el país. Los delitos y los delincuentes se suceden en los procesos, pero la Justicia queda, gracias al sacrificio de los magistrados que aplican la ley, por encima de todo interés o de todo temor. La democracia chilena debe mucho a esta labor valiente y callada de los jueces actuales, y de aquellos que dejaron en los tribunales la huella imborrable de su probidad y sabiduría.

OBSTÁCULOS A LA JUSTICIA

Están a la luz pública dos hechos que constituyen otros tantos impedimentos para la eficacia y el prestigio de las decisiones de los tribunales.

El primero de ellos se refiere a un proyecto de ley de amnistía a los alcaldes, regidores, funcionarios municipales y terceros responsables por delitos cometidos en el ejercicio de la función edilicia.

Tal proyecto importa borrar de una plumada las actuaciones del

Poder Judicial en la investigación y sanción de graves delitos comunes. Si prospera tal iniciativa, cualquier grupo o individuo con influencias políticas acudirá al Poder Legislativo para que deshaga lo resuelto por la justicia.

El segundo hecho se refiere al desconocimiento de una resolución de la Corte Suprema por parte de la autoridad administrativa. En una reanudación de faenas en un predio agrícola, reanudación que de suyo merece dudas jurídicas y que se impuso mediante decreto de Insistencia, el Interventor designado expulsó del fundo a unos trabajadores que estaban amparados por la inamovilidad de sus empleos. El juez acogió la petición de los operarios, pero su sentencia no pudo cumplirse porque no se le otorgó el auxilio de la fuerza pública para ejecutar el fallo.

Requerida la Corte Suprema, ésta declaró que la resolución debía cumplirse, que la autoridad administrativa estaba obligada a prestar el auxilio de la fuerza y que el juez tendría que requerirla directamente si fuere necesario.

Se concedió esta vez la fuerza pública, compuesta por dos miembros del Cuerpo de Carabineros, pero la autoridad administrativa otorgó a su vez amparo al interventor con la presencia de oficiales superiores, y de un mayor número de carabineros. En estas condiciones, los obreros no fueron admitidos al trabajo y el tribunal supremo de la República ha podido comprobar que lo resuelto por él en este caso no se ha cumplido.

Este último episodio es otra forma de convertir a la Justicia en un

ente sin peso y sin influencia práctica en la sociedad. Y una nación en que los jueces sean anulados por las presiones, por las injurias o por desconocimiento legislativo o administrativo de sus sentencias, renuncia al régimen jurídico y abre las puertas a la delincuencia pública y privada.

Los episodios a que nos referimos son dignos de destacarse porque envuelven peligrosos precedentes que podrían denotar una tendencia. Todo aconseja no continuar por la pendiente y restablecer en todos sus aspectos la autoridad de las funciones judiciales, unidas en forma ineludible a toda convivencia en libertad.

Falta la alternativa

(27 de noviembre de 1966)

El artículo no se refiere a hechos particulares que se hayan desarrollado en la semana, sino que trata de clarificar el panorama electoral que se está presentando con miras a la elección de regidores que se va a realizar el 2 de abril de 1967, y para las cuales faltan aún cuatro meses al momento de escribirse el comentario.

La Semana Política

ELECCIONES EN ABRIL

A poco más de cuatro meses de las elecciones de regidores, la estrategia de los partidos tiende a determinarse por este evento. La democracia cristiana espera confirmar en abril el favor electoral de que viene gozando desde la elección del Presidente Frei, y sus posiciones políticas parecen moverse con la mira de obtener un nuevo pronunciamiento de las urnas que respalde al Gobierno. Los partidos del FRAP, a pesar de su desunión, combinarán fuerzas para ayudarse en las elecciones. Entre tanto, la ofensiva del FRAP contra el programa oficial de reajustes, contra las juntas de vecinos, contra el veto a la reforma de la propiedad y contra las demás iniciativas gubernamentales reúne a veces un caudal opositor más grande que el correspondiente a los efectivos de esa agrupación política.

La política comunista de atacar puntos que conciten la unión del mayor número posible de fuerzas en torno a su línea fortifica al partido y permite, al mismo tiempo, a la democracia cristiana acusar a las demás colectividades de hacerle el juego al comunismo y de tener una conducta simplemente obstruccionista.

El elector no comprometido ve en primer plano la lucha de dos grandes conjuntos: uno de ellos definiendo un programa de Gobierno y el otro lo obstaculiza para abrir paso a la revolución marxista.

Los partidos Radical y Nacional tienen la difícil tarea de hacer oír sus voces en el estruendo de los choques entre los dos gigantes: la democracia cristiana y el FRAP. La menor representación parlamentaria de esos partidos, su actual falta de recursos y la dificultad de unirse en torno a principios claros en el momento en que viven los hace aparecer plegados a uno u otro de los polos de la estructura política visible.

Las elecciones de abril tienen importancia porque las municipalidades mantienen la representación política que correspondía al panorama anterior a la llegada al poder del Presidente Frei. Constituyen, pues, una nueva oportunidad de proseguir agrupando las tendencias en dos bloques poderosos. En efecto, la escasa representación actual de la democracia cristiana en los municipios deberá aumentar naturalmente. Aunque ese partido llegara a disminuir su fuerza, con relación a las elecciones parlamentarias de marzo de 1965, toda mejora sensible en el

frente municipal será ante la opinión pública reafirmación de su línea.

El Partido Comunista y sus aliados del FRAP no tienen posibilidades de bajar sus representaciones. Los sectores agrarios y la población electoral joven deben otorgar más bien su cuota al crecimiento de esos partidos.

Por el momento, entonces, la decisión electoral de abril parece llamada a acentuar la presente fisonomía del campo político.

FUERZA ELECTORAL Y RESPALDO DE OPINIÓN

Es preciso convenir que no ofrece ventajas para la obra realizadora de ningún Gobierno esta división en dos bandos que compiten entre sí en los mismos terrenos y con prácticamente los mismos temas. Este conflicto permanente crea la demagogia e impulsa a preferir la propaganda a las realizaciones. Las tareas financieras y administrativas encuentran obstáculos adicionales a los que tienen por naturaleza cuando sus resultados deben presentarse para triunfar en un espectáculo. Los aplausos o las rechiflas del momento tienen entonces más importancia que la obra durable, y quienes actúan en la escena toman por opinión pública a la parte más veleidosa y superficial de la ciudadanía.

Mientras el plano visible de la política acusa la presencia de las dos figuras dominantes: la democracia cristiana y el FRAP, existen grandes grupos ciudadanos que no se sienten interpretados por ninguna de las fuerzas mayoritarias.

El FRAP se identifica con la revolución marxista, lo que pugna con

el alto concepto de la libertad que posee el país. Si las experiencias dirigistas que se han estado haciendo promueven las resistencias más inesperadas, a pesar de que ellas no se han realizado como presiones policiales, se comprenderá que un gran número de chilenos, puestos a pensar seriamente en un futuro colectivista y regimentado, no pueden depositar su confianza en el FRAP. La sola actuación de la propaganda oficial, de las reglamentaciones de horarios, de los controles económicos acentuados, y de otras medidas que se ejecutan en plena democracia, tiene un efecto desfavorable al FRAP, pues el público empieza a comprender que la dictadura socialista no implica sólo la pérdida de la propiedad para unos pocos sino también de la libertad para todos.

La democracia cristiana ha aumentado considerablemente sus efectivos electorales porque se presenta como un ideal liberador para los sectores de más bajos ingresos y como una alternativa contra el marxismo para el resto de la opinión. Sin embargo, esos intereses que concurren a favorecerla no impiden que ella sea un partido político, cuya doctrina y cuyo estilo no tienen por qué ser patrimonio de todos los que la apoyan en la encrucijada. En la misma medida en que ciertos sectores de esa colectividad alejen el cumplimiento de las esperanzas populares, propiciando medidas contrarias al desarrollo económico, o planteen frente al marxismo una competencia de poder, pero no de principios y de metas, la vigorosa plataforma construida tan rápidamente puede debilitarse.

Hay, pues, dos grandes bloques con indiscutible fuerza electoral, pero ellos no logran llenar el vacío político en *que se hallan* muchos ciudadanos, situados en el FRAP por resistencia a la democracia cristiana, o ubicados en ésta simplemente por preferirla a él. Pareciera que la realidad de la democracia chilena y de su opinión pública fuera más rica que el esquema electoral.

FALTA LA ALTERNATIVA

Es posible que muchos desearan superar este esquema. Si no hubiera otra razón para ello, bastaría el simple anhelo de que el país llegue a un cierto equilibrio político, a un clima más pacífico y laborioso.

El ciudadano independiente no puede tomar la iniciativa para alterar la composición de las fuerzas políticas y optará en general por aquella que, con posibilidades de triunfo, esté más cerca de sus simpatías.

Otra alternativa que modifique el panorama del presente tiene que provenir de los partidos políticos. Mientras no surja en ellos, concretamente en los radicales y nacionales o en fuerzas afines, una interpretación válida para grandes conglomerados ciudadanos y desligada del obstruccionismo marxista, será difícil que la bipolaridad actual se reduzca apreciablemente.

Un movimiento de rebeldía contra la demagogia y de reafirmación práctica de la libertad, concretado en un tema que provocará la opción de electorado, como lo fue la decisión entre democracia y marxismo, en los comicios presidenciales de septiembre de 1964, es lo que no se

divisa de parte de la oposición democrática al Gobierno.

Lo que hacen los partidos opositores es tomar actitud contra los proyectos o iniciativas del Gobierno, pero no van más allá del planteamiento señalado por éste al país. Algunos creen superar ese planteamiento llevándolo a extremos demagógicos, cuando lo que necesitarían es presentar otro planteamiento, sacando la discusión de los términos en que se presenta.

La numerosa clase media del país no admitirá que se le ofrezca un programa de retroceso social. Por otra parte, la conciencia mayoritaria no está por volver a formas tradicionales de la política ni al espíritu de las antiguas combinaciones. Todo lo que se construya deberá realizarse partiendo de los hechos de hoy, pues no caben restauraciones.

Si se muestra a la opinión pública que los sectores políticos no representados en el dilema democracia cristiana-marxismo pueden concebir un camino de libertad y de eficiencia, y hacer una oposición fundada en una imagen clara de los problemas del país, las tensiones de estos últimos años no serían más que una etapa en la evolución progresiva de nuestra democracia. La simplificación drástica de las tendencias aparecería como un paso hacia formas nuevas, pero flexibles de la convivencia política.

Las directivas de los partidos marginados del dilema tienen la enorme responsabilidad de actuar en una situación nueva, en que ya no sirven las maniobras de pasillo. Es el momento de definir una línea política seria y definida, que afirme

vigorosamente la libertad y que renueve el temario de los partidos, a base de poner el acento en los problemas esenciales del país, en la

clase media, en las provincias y en la relación de la política y de la economía internas con la realidad exterior.

El parlamentarismo recobra sus fuerzas

(12 de febrero de 1967)

El Senado, convocado para calificar qué tipo de urgencia se le daría a la tramitación de un proyecto de reforma constitucional destinado a permitir la disolución del Congreso llamando a nuevas elecciones, decidió postergar hasta abril la discusión de ese proyecto, por no haberse producido acuerdo en interrumpir el receso parlamentario.

A favor del proyecto se manifestaron democratacristianos, nacionales y comunistas.

El Gobierno señaló que el acuerdo vulnera de hecho la facultad del Presidente de la República para convocar al Congreso, basado en disposiciones reglamentarias (EM, 8 febrero, págs. 1 y 16).

La Semana Política

NUEVOS EMBATES CONTRA LA CONSTITUCIÓN

"La ley de las leyes", como se ha llamado a la Carta Fundamental, por ser la fuente de toda legislación en un Estado de Derecho, sigue entre nosotros perdiendo categoría a causa de las querellas políticas y las presiones que desata la lucha prolongada entre el Congreso y el Ejecutivo. El Poder Judicial, al que en otros países corresponde impedir o corregir las trasgresiones constitucionales, carece dentro de nuestra organización jurídica de facultad para actuar en estos conflictos y no existe ningún otro tribunal que, en su defecto, dirima las contiendas.

Con insistencia se han denunciado en estas columnas las repetidas violaciones del espíritu y de la letra de la Carta Política a través de los últimos años. Después del reajuste que ella experimentó en 1943, para poner coto a las invasiones del Poder Legislativo, quiso el constituyente deslindar con claridad la función ejecutiva de la del Congreso.

Al mismo tiempo dotó al Jefe del Estado de armas para hacer operante su facultad de iniciar y acelerar el trámite de las leyes, disponiendo en el artículo 46 de la Constitución que "podrá hacer presente la urgencia en el despacho de un proyecto y, en tal caso, la Cámara respectiva deberá pronunciarse en el plazo de 30 días".

A través de las tres últimas Administraciones el Parlamento hizo tabla rasa de los nuevos preceptos, aprobando gastos en contra de la voluntad del Ejecutivo y anulando su atribución para acelerar el rápido estudio y aprobación de las leyes.

RECIENTE DESCONOCIMIENTO DE LA "URGENCIA"

Es innecesario enumerar los múltiples casos en que el Congreso desconoció el carácter imperativo de esas normas y aun llegó a colocar el mandato de la Constitución por debajo de preceptos legales corrientes (dictación de disposiciones cuya vigencia queda condicionada a que posteriormente se reforme la Cons-

titución, por ser ellas contrarias a sus preceptos).

Por este camino se ha llegado al extremo de que el Senado, por simple acuerdo de sus comités, resuelva que la corporación no conozca de un proyecto del Ejecutivo, aunque se le haya señalado urgencia, sino que cuando se cumplan los plazos en que esos organismos dispusieron que se podía legislar. Es innecesario recalcar la gravedad que envuelve esta determinación que ha permitido que la Alta Cámara se niegue a considerar de inmediato el estudio con trámite de urgencia de una reforma constitucional propuesta por el Ejecutivo. Esto equivale a dar mayor imperio a las decisiones tomadas por quienes representan la voz política de cada partido que a los precisos mandatos de la Carta Fundamental.

El absurdo de esta situación se aprecia si imaginamos que los comités resuelven que no se reúna la Sala para considerar proyectos que tienen plazo fijo, como el presupuesto de la nación; esto podría ocurrir perfectamente, ya que no hay diferencia entre la fijación de un plazo por el Ejecutivo para estudiar una ley, en uso de una atribución constitucional, y la existencia de ese plazo en la Constitución misma.

EL PARLAMENTARISMO RECOBRA SUS FUEROS

Si recordamos que los conflictos constitucionales más graves de nuestra historia, en los años 1891 y 1924, se produjeron a consecuencia de la negativa de una rama del Congreso o de ambas para despachar leyes que fijaban los contingentes militares y autorizaban su perma-

nencia en la sede del Gobierno, o aplazamientos repetidos de autorizaciones que requería el Ejecutivo para administrar el país, aparece claro que nuevamente rebrotan las imposiciones de un parlamentarismo que no tiene asidero en la Ley Fundamental y que sólo persigue poner cerco a la labor del Ejecutivo, a fin de que éste deje de ejercitar sus facultades ante situaciones de hecho y por el temor de presentarse ante el país discutiendo las resoluciones de los legisladores.

En el presente caso el Gobierno ha protestado del acuerdo senatorial que desconoce su derecho a fijar urgencia para el estudio de los proyectos de ley y ha insistido en que se revoque la resolución de los comités políticos que impidió el cumplimiento del plazo constitucional de 30 días para el despacho de la reforma que faculta al Presidente para disolver el Congreso.

Las explicaciones que han emanado oficialmente de la Mesa de la corporación dan a entender que un acuerdo de comité tiene más vigencia que cualquier otra petición del Ejecutivo fundada en la Carta Fundamental. Esta conclusión es deplorable y no puede mantenerse sin poner en suspenso prácticamente la vigencia de la Constitución misma.

RENOVACIÓN DEL CONGRESO Y MANDATO POPULAR

Ha coincidido este conflicto con el propósito de facultar al Ejecutivo para disolver el Congreso por una sola vez durante su mandato, lo que se haría por la actual Administración al despacharse la reforma. Tal circunstancia debería haber obligado a los comités de la Cámara Alta a ser

especialmente escrupulosos en el cumplimiento del trámite de urgencia constitucional, a fin de que no se formase en la opinión la idea de que se estaba defendiendo el interés directo de los afectados. Esta actitud era tanto más aconsejable cuanto que los partidos que aparecieron oponiéndose a discutir la reforma de inmediato (Socialista y Radical) habían expresado su conformidad con una consulta extraordinaria al electorado, a fin de establecer cuál era la verdadera posición de los efectivos políticos, gubernamentales y opositores. El rehusar el debate, bajo pretexto de un acuerdo unánime de los comités, además de adolecer de un vicio de inconstitucionalidad, ha colocado a esas colectividades políticas en actitud de defender bancas parlamentarias y de rehuir un veredicto en las urnas. Contribuye a reforzar este juicio la conformidad para dar curso al proyecto de democratacristianos, comunistas y nacionales.

Al finalizar la semana se han iniciado otras diligencias para la reconsideración de este estado de cosas y se buscan arbitrios reglamentarios que permitirían poner en movimiento la reforma para disolver las Cámaras.

ELECCIÓN MUNICIPAL Y RECTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL

El país se aproxima a una elección municipal cuya postergación no puede hacerse dentro de los preceptos de nuestro régimen político y de una consideración moral que obliga a auscultar periódicamente el estado de la opinión pública. Al Gobierno no le toca proponer una postergación porque las realizaciones de

su mandato han alterado profundamente el curso de la vida nacional y tiene comprometida su fe en el cumplimiento integral de un programa. Esos elementos son decisivos para que la ciudadanía se pronuncie en favor o en contra de la continuación de su política. Por otra parte los bloques opositores (FRAP, radicalismo y Partido Nacional) vienen expresando condenación, por diversos motivos, del rumbo de la democracia cristiana y han apelado a los electores para que él se cambie en busca de otras orientaciones. Tampoco pueden esas colectividades políticas eludir el pronunciamiento que está fijado por la ley para dentro de 50 días. Con respecto a la opinión independiente o no afiliada, no creemos que aprobaría una postergación, porque es seguro que desea, a través del apoyo a alguna de las colectividades en lucha, expresar su pensamiento.

En medio de tanta trasgresión a la letra y al espíritu de la Carta Política, de una confusa y perturbadora actuación del Congreso, el único recurso inmediato y directo para buscar un correctivo y encauzar nuevamente al país dentro de la normalidad constitucional es que se realice sin postergaciones la elección municipal.

IMPREVISIÓN EN TRABAJOS ELECTORALES

Al cumplirse la convocatoria a comicios municipales se va a producir más de una desagradable sorpresa en los sectores políticos, que han estado desde hace meses a la expectativa de una postergación. En efecto, los trabajos electorales apenas si se han iniciado, con la nomi-

nación de los candidatos en los diversos partidos. Esto obligará a redoblar los esfuerzos de propaganda para obtener el interés de la ciudadanía y posiblemente puede dar a la campaña el carácter de una decisión política que no ha sido propia de las luchas para constituir el Poder Municipal.

En cierto modo se realizará una elección de primer grado para ir a la renovación del Congreso, ya que una vez que se despache la reforma ella se hará ineludible.

Para el actual Gobierno ese objetivo ha pasado a ser básico, puesto

que el mantenimiento del desequilibrio entre ambas ramas del Poder Legislativo hasta 1969 multiplicaría los conflictos y mantendría una incógnita sobre lo que el país desea que se realice en los diversos planos de la vida nacional.

Sin que los comicios municipales puedan convertirse en expresión plebiscitaria, ya que la naturaleza del gobierno comunal se aleja del doctrinarismo político, ellos significarían un serio impulso para la acomodación de las fuerzas que hoy se disputan la opinión del electorado.

La demolición de estructuras

(12 de marzo de 1967)

El artículo comenta y analiza la conferencia de prensa ofrecida en un salón del Senado, en la cual el senador Luis Corvalán hace un llamado a la Democracia Cristiana, señalando que están dispuestos a apoyar algunos de los proyectos que propone el Gobierno, y desafía a éste para que impulse reformas más radicales.

La Semana Política

¿DESAFIO O INVITACIÓN?

"Algunas medidas concretas que hieran a los 'momios', fue la definición que dio el senador y secretario general del Partido Comunista, don Luis Corvalán, de los términos del curioso desafío lanzado el miércoles a la democracia cristiana, en una entrevista de prensa.

Los comunistas dicen estar dispuestos a aprobar siete proyectos de iniciativa del Ejecutivo, pendientes en el Congreso, tales como la primera reforma constitucional de este Gobierno, la legislación sobre juntas de vecinos, la reforma de las sociedades anónimas y la nacionalización de la Compañía Chilena de Electricidad. Comprometen, además, sus votos en favor de dos antiguos proyectos sobre accidentes del trabajo y sobre jubilación y piden que la democracia cristiana apruebe cinco proyectos de iniciativa comunista. Por último, el comunismo desafía el despacho de la reforma del Banco Central, de la reforma bancaria, de la reforma tributaria y la nacionalización del comercio del petróleo, junto a la construcción de 60 mil viviendas anuales, al otorgamiento de 50 mil sitios más en Santiago y al aumento de la capacidad

universitaria para recibir a todos los jóvenes aprobados.

"Esto no es todo, por cierto, lo que quisiéramos ver cumplido y esto no es la revolución ni cosa parecida", dijo el senador Corvalán.

Quien observa estas proposiciones tiene que pensar que el marxismo-leninismo está forzando a la democracia cristiana a ir más allá de su programa.

El asunto no es tan claro. Los comunistas saben que hay sectores muy importantes de la democracia cristiana que aspiran a una ruptura frontal con el orden económico y social subsistente. También conocen las vibraciones que experimentan las masas ante el programa de reformas del partido de Gobierno. Estos dos factores determinan que los comunistas quieran presentarse al electorado como el intérprete más fiel y consciente del programa de la democracia cristiana. Quieren administrarlo públicamente.

Como dicen ellos, no se trata aún de la revolución integral sino del período preparatorio, de la fase del populismo en que se demueven insensiblemente las tradiciones, las instituciones y los centros de poder que forman la estructura social en vigor. El comunismo trata de apro-

vechar la propaganda y la popularidad del actual Gobierno para mostrarse al pueblo subido a su carro, mezclando sus consignas con las oficiales y eludiendo el dilema, planteado al país en 1964, entre el Excmo. señor Frei y el gobierno del FRAP. De ahí que los únicos ataques duros del desafío van contra el "anticomunismo patibulario", es decir, contra quienes resisten el abrazo fatal de la secta marxista.

En el fondo, el "desafío" no es tal sino una invitación a sumar fuerzas. Así como el comunismo perforó y desfondó al Partido Socialista numeroso y miliciano del año 1938, que gozaba de popularidad entre las masas, ahora quiere repetir la experiencia con la democracia cristiana.

LA DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS

El comunismo chileno es uno de los más obedientes a Moscú y está compenetrado de la fría estrategia del Kremlin. Más que la violencia directa y el fervor revolucionario, sus métodos son la absorción de las fuerzas paralelas, la provocación de luchas entre movimientos que no puede controlar y la búsqueda del aniquilamiento de toda estructura o centro de poder que sea un obstáculo para el logro del dominio comunista en la sociedad democrática.

El comunismo chileno, bien entrenado en las tácticas de Moscú -por algo es el predilecto entre los partidos rojos de Latinoamérica-, consiguió absorber grandes capas del socialismo y disponer de los restos del partido de Matte dentro del FRAP. A través de un grupo del Partido Radical han logrado hasta

ahora debilitarlo y desorientarlo, aunque se advierte allí un movimiento de defensa de los principios radicales y un esfuerzo por recuperar para esa colectividad la posición que le corresponda dentro del sector democrático. Los comunistas han aprovechado de todas las tendencias de izquierda para arrinconar a la derecha en lo político y en lo económico. Han contribuido, además, a desprestigiar a todos los gobiernos, creciendo y consolidándose a expensas de amigos y de adversarios.

La democracia cristiana se ha presentado como alternativa frente al comunismo, propugnando un cambio de las estructuras económicas y sociales. Por ser alternativa única, ganó el apoyo de quienes deseaban reformas y de quienes resistían al comunismo. Este último desea ahora quebrar dicha alternativa utilizando a su favor el impulso reformista. La campaña contra el anticomunismo, a propósito de la CIA, aspira a mellar la oposición al marxismo en que están situados muchos dirigentes democratacristianos. A través de la explotación hábil de las reformas propuestas por el Ejecutivo y con otras agregadas que están dentro de las aspiraciones de la izquierda democratacristiana, los comunistas persiguen su tercer objetivo. Absorbidas o fragmentadas muchas fuerzas políticas, el ataque se dirige a todo centro de poder que les impida el control del país: propietarios de la tierra, propietarios urbanos, bancos, sociedades anónimas, comercio privado, estructura universitaria, fuerzas armadas y de orden y, en general, todos los elementos que integran el edificio económico y social. En el orden in-

ternacional, dan la misma lucha para apartar al país de toda tendencia que resista el avance del comunismo en el mundo.

EL PODER ECONÓMICO EN CHILE

La propaganda comunista y la que sigue sus inspiraciones procuran convencer a la opinión pública de que en estos momentos el manejo de la economía del país está en manos de los partidos de derecha y otros grupos que constituirían una fortaleza que hay que derribar en nombre del pueblo. Esto no es extraño, pues aun en la convulsionada y extremista China de Mao se buscan reaccionarios y agentes del capitalismo y del imperialismo entre los miembros del Partido Comunista.

Entre nosotros, la democracia cristiana tiene el poder político y maneja los eficaces resortes económicos que proporciona la tenencia del Gobierno. A través de estos últimos, la libertad de decisión del sector privado está considerablemente reducida y la posesión de bienes está sujeta a altos impuestos y a disposiciones legales y reglamentarias cada vez más limitantes.

¿Qué sector es realmente decisivo en la economía del país? El que maneja una máquina es el que puede echarla a andar y detener su marcha. La Federación Minera controla las vitales producciones del cobre, del hierro, del acero y del carbón, y obedece a los comunistas. Ellos manejan la Central Única de Trabajadores y sus diversas federaciones que, además de la minera, abarcan los sectores más estratégicos de la economía. Las actividades exportadoras básicas del norte del país, las

industriales y comerciales del centro y el núcleo minero e industrial de la zona de Concepción, al que hay que agregar la electricidad y el petróleo, están controlados, o en vías de serlo, por el Partido Comunista. Reforzando sus posiciones en esos sectores, la acción se extiende ahora a la agricultura y crece allí con alta velocidad.

El progreso electoral de los comunistas, siendo objetivo importante, lo es menos para ellos que el gobierno sindical. Estando en condiciones de paralizar al mismo tiempo las minas, el sistema bancario y las cosechas, para citar sólo algunos ejemplos, parece claro que el control económico del Partido Comunista es más eficaz que el que puedan ejercer el Gobierno o los empresarios.

Anulando y criticando la impaciencia socialista y hasta mostrándose a menudo dóciles en ciertos arreglos, no dan pie para que el público mida todos los alcances de su poder. Progresivamente y con su característico sigilo unen las piezas de su máquina sindical y se preparan para inmovilizar completamente a cualquier Gobierno democrático que, en el próximo futuro, no se muestre sumiso a sus dictados.

La nacionalización del comercio del petróleo no es más que la manera de trasladar a los poderosos sindicatos de la ENAP la decisión última sobre las reservas de combustibles en casos de huelga y sobre la entrega al público de kerosene, bencina, petróleo y gas licuado. El proyecto de juntas de vecinos, desprendido de los controles gubernamentales que propuso el Ejecutivo, le entregaría el manejo de los barrios al comunismo, en tanto que el apoyo a las re-

formas del sistema bancario y del tributario tienden a conseguir el aniquilamiento de los resortes que aún accionan la economía y la libre empresa.

El "desafío" comunista es, pues, una invitación extendida a los demócratacristianos a que colaboren a aumentar el predominio del partido de Lenin.

Nuevo panorama electoral

(9 de abril de 1967)

Terminadas las elecciones de regidores, el artículo analiza el panorama electoral que se desprende de sus resultados, los cuales fueron, en porcentajes, los siguientes: Democracia Cristiana, 36,5%; Partido Radical, 16,5%; Comunistas, 15%; Nacionales 14,6%; Socialistas, 14,2%.

La Democracia Cristiana realiza el 6 y 7 de abril un cónclave en Las Vertientes, emitiendo luego una declaración oficial (EM, 8 abril, pág. 29), en la que se manifiesta un deseo de diálogo con el FRAP. También el Partido Radical quiere un entendimiento con la izquierda, lo que es apoyado por el senador Julio Duran (EM, 6 abril, pág. 19).

La Semana Política

NUEVO PANORAMA ELECTORAL

De acuerdo a los últimos cómputos entregados por el Ministerio del Interior, la democracia cristiana forma la primera mayoría relativa del país, con 830.670 votos. Le sigue el FRAP, con 677.330 votos. Luego vienen el Partido Radical, con 377.934, y el Partido Nacional, con 330.522 votos.

Entretanto, las abstenciones llegaron a 730.566, es decir, a una cifra superior a la votación del FRAP y que dista menos de cien mil respecto de la marca que obtuvo la democracia cristiana.

Las interpretaciones del significado de este nuevo cuadro de fuerzas difieren mucho entre sí, aunque es unánime la evidencia de que se ha producido un cambio de relieve. La declaración oficial del Consejo del Partido Demócrata Cristiano, al poner término a su cónclave de Las Vertientes, expresa que esa colectividad tiene el 36 por ciento del electorado nacional, entendiendo por éste el número de sufragantes. Añade la declaración que los votos

democratacristianos disminuyeron en un 6 por ciento, porcentaje que toma en cuenta el número total de votantes, pero si se considera el porcentaje de votación que obtuvo el Partido Demócrata Cristiano en las elecciones parlamentarias de 1965, su cuota en los comicios del domingo último disminuye en 16 por ciento, respecto de la proporción anterior.

En todo caso, la democracia cristiana aparece como la primera fuerza electoral, a mucha distancia de cualquier otro de los partidos tomados aisladamente.

Cabe preguntarse si esta votación corresponde al partido en sí mismo o al prestigio del Presidente de la República, que hizo causa común con la colectividad a que pertenece; recorrió el país exponiendo las obras y el programa de su gobierno y llamó al electorado a pronunciarse en contra o a favor de aquellos contenidos.

No parece haber duda de que el mantenimiento de la democracia cristiana como primera fuerza política debe atribuirse en gran medida

a la acción personal del Presidente. Intimamente convencido de que su popularidad es mayor que la de su partido, se jugó a fondo por éste y demostró así una vez más su lealtad hacia esa tienda política.

Terminado este proceso electoral, el Partido Demócrata Cristiano está en la necesidad de demostrar su respeto y su gratitud hacia el Presidente, aceptando el papel de arbitro y de supremo conductor del Estado que le corresponde. La concepción de que el Gobierno es un mero ejecutor de la voluntad del partido cede ahora al peso de los hechos. Toca en verdad al Presidente la tarea de gobernar, y sus verdaderos partidarios habrán de dejarlo libre para que busque la mejor forma de cumplir los propósitos de desarrollo económico y social que animan al Gobierno, visto el reajuste político que se ha producido.

Las directivas políticas están estudiando la nueva situación, y la democracia cristiana se ha adelantado a propiciar fórmulas de entendimiento con el FRAP.

POSICIÓN POLÍTICA DEL JEFE DEL ESTADO

Pese a los comentarios internos y externos pesimistas respecto a estas elecciones, la posición política personal del Presidente de la República se coloca ahora en un nuevo plano, más positivo para el país que si se hubiera establecido la competencia entre sólo dos grandes fuerzas, encabezada una de ellas por el Jefe del Estado.

El país dio una respuesta cautelosa a la consulta sobre el conflicto surgido entre el Ejecutivo y la ma-

yoría del Senado. En primer término, demostró que el Presidente podía tener a su lado el mayor número de votos entre los distintos partidos que concurrieron a la elección. No obstante, el programa de radicales y nacionales indica que hay una línea media no considerada como influyente en estos dos últimos años y que reafirma que la moderación es una constante de nuestra democracia. Por último, el crecimiento de comunistas y socialistas hace ver que el extremismo de izquierda no es una política que convenga a la democracia cristiana, pues, le resta fuerzas del centro y no le permite avanzar en sectores populares, donde el FRAP crece a expensas de los partidarios del Gobierno.

Todavía más. Una abstención cercana al 25 por ciento de los registros electorales constituye también una advertencia. Es difícil que en ese porcentaje tengan una gran cuota los frapistas o demócratacristianos convencidos. Debe suponerse que las colectividades más poderosas y con más recursos en esta elección consiguieron movilizar a la gran mayoría de sus adeptos. Entre los 730.566 electores que no sufragaron, cabe divisar un fuerte potencial favorable a las otras tendencias, que no se pronunció por indiferencia o por indecisión en esta oportunidad y que, en todo caso, no estuvo conforme con resolver un supuesto dilema entre la democracia cristiana y el FRAP.

Estos factores dan al Presidente de la República la posibilidad de interpretar con justeza la imaginaria voluntad de "cambios" que los comunistas le suponen al país. Si hay una elección con poco sentido revo-

lucionario es la que se verificó el último domingo. El Presidente obtuvo una mayoría muy importante, pero las preferencias se diversificaron entre los partidos, y un gran número de ciudadanos no se pronunció por ninguno de ellos.

En otras palabras, hubo una manifestación de confianza en el Presidente Frei, un progreso comunista que se refleja en la votación total del FRAP, un restablecimiento de los partidos de centro y derecha y una abstención elocuente. El grueso de la votación demócratacristiana y radical, el conjunto de la votación nacional y parte apreciable del abstencionismo no pueden contabilizarse honestamente a favor de los "cambios" comunistas.

El Jefe del Estado se encuentra presidiendo una democracia evolutiva, muy consciente de serlo, y esa realidad le permite emanciparse de las querellas partidistas y hacer la tarea constructiva que le franqueen los apoyos políticos posibles.

EL FRAP CONTRA EL PRESIDENTE

Como consecuencia de las elecciones, tanto el Consejo Nacional del Partido Demócrata Cristiano como las personalidades más relevantes del radicalismo manifiestan deseos de entendimiento con el FRAP.

La elección complementaria de O'Higgins y Colchagua, en que el FRAP lleva como candidato a la viuda del senador don Salomón Corbalán, doctora María Elena Carrera, es una oportunidad de que se asocien los radicales a los comunistas y socialistas, aunque más no sea invocando el mejor derecho de es-

tos últimos a llenar la vacante del malogrado senador Corbalán.

En el cónclave de Las Vertientes resultó en forma inesperada el acuerdo de los demócratacristianos de aceptar el ofrecimiento comunista, contenido en el desafío con que el marxismo-leninismo hizo la última campaña electoral.

Ello constituirá un motivo de extrañeza para la opinión pública, pues contradice abruptamente la posición demócratacristiana reiterada con amplio despliegue de propaganda hasta el domingo último, y abre las puertas a que su programa de reformas sea sobrepasado y conducido por el FRAP.

La reunión de una mayoría favorable a los "cambios" que propicia el comunismo es la maniobra más hostil contra el Presidente de la República, y podría constituir un error político definitivo de la democracia cristiana.

El FRAP ha comprendido que la voluntad real del electorado no está a favor de los "cambios" y busca, entonces, aprovechar rápidamente la oportunidad que le brinda su posición para acelerar su obra demoleadora. No aprovecharán de este proceso ni la democracia cristiana ni el Gobierno. Mientras declina el precio del cobre y la opinión pública se inclina hacia la moderación, el despacho de proyectos que perturben a las empresas, al sistema bancario, a los programas de la minería y a la producción agrícola traerían en el hecho la paralización del país.

No debe olvidarse que la reforma de la garantía constitucional de la propiedad deja los derechos patrimoniales todos a merced de las mayorías legislativas, y que, en

consecuencia, por firme que sea la voluntad de un Gobierno para continuar los programas de desarrollo de la economía, las continuas perforaciones de éstos, a causa de iniciativas aprobadas o meramente anunciadas, se traducirán a corto plazo en un recrudecimiento de la

inflación y de la escasez, con graves consecuencias sociales y políticas.

Una mayoría con el FRAP es, entonces, la oposición sistemática a la persona del Presidente de la República y a sus posibilidades de gobernar.

Desarrollo no capitalista

(21 de mayo de 1967)

El artículo se refiere a las posiciones ideológicas dentro de la Democracia Cristiana, y en especial a la llamada "vía no capitalista de desarrollo" que propician los grupos llamados "rebeldes" y "terceristas" dentro del partido. Por estos días sale a la luz pública un folleto denominado "Documentación ideológica y política", editado por los parlamentarios demócratacristianos Alberto Jerez, Julio Silva Solar y Vicente Sota, cuyo contenido es declarado oficialmente por el partido como no coincidente con su línea política.

La Semana Política

INSEGURIDADES DE UNA MAYORÍA

El Partido Demócrata Cristiano es un fenómeno singular en la política chilena. Inspirado en las doctrinas sociales de la Iglesia Católica, pudo parecer que le esperaba un destino minoritario en un país laico como Chile. Tuvo, sin embargo, la elasticidad para absorber las concepciones y métodos de los partidos cristianos de la post guerra, combinándolos con una interpretación del subdesarrollo y de las formas de superarlo, tal como los entendía la izquierda moderada en América Latina. Seguro de sus finalidades, creció en el aislamiento político, en la vigorosa oposición hacia los partidos históricos, y en la forja de una doctrina y de un programa integrales.

Cuando las circunstancias le fueron propicias, es decir, en la campaña presidencial de 1964, mostró la autodisciplina necesaria para imponerse sin transacciones a los partidos que deseaban evitar el triunfo del FRAP.

La elección del Presidente Frei con una holgada mayoría absoluta y la victoria parlamentaria de pocos

meses después dieron a los demócratacristianos una gran seguridad. Ella les permitió concebir su acción política sobre la base de ser y mantener la mayoría absoluta de la ciudadanía. Tal actitud hacía difícil atraer aliados y pactar con los contrarios. La seriedad doctrinaria y programática estuvo muy cerca de reproducir el mismo aislamiento de los años de oposición, ahora desde el poder. De ahí que incluso no pocos funcionarios destacados prefirieran acudir a la propaganda en vez de la discusión fría de sus propósitos, y que los técnicos tendieran a traducir el programa de Gobierno en leyes de facultades especiales para el Ejecutivo, en lugar de proponer al Congreso normas específicas y de alcance limitado.

Los planteamientos demócratacristianos parecían así inspirados en una política de la mitad más uno. Por eso los resultados municipales del 2 de abril produjeron algún desconcierto, y lo que fue seguridad pasó a transformarse en su contrario. Si la actitud inicial era una interpretación exagerada del sentir de la opinión pública, no lo es menos el nuevo clima que parece imperar

en la democracia cristiana. Esa colectividad mostró en los últimos comicios una fuerza muy superior a cualquiera de los otros partidos, y por sí sola representa más que las otras combinaciones políticas. A ello debe agregarse la posesión del Gobierno y de una mayoría parlamentaria sin precedentes.

Cualquier otro partido estaría satisfecho de las herramientas de que dispone y de la acogida que el electorado dispensa a su Gobierno. Sin embargo, se advierte que algunos democratacristianos manifiestan inseguridad política o doctrinaria, debido tal vez a que no se han adaptado a las condiciones reales que determina el sentir de la ciudadanía. Se ve que el país tiene el instinto del equilibrio, y a ello obedece su resistencia a inclinarse en forma permanente y absoluta a una sola orientación. La mayoría democratacristiana tiene un papel decisivo que jugar dentro de estas condiciones y todo lo que tienda a alterarlas arriesga la subsistencia de esa misma mayoría.

DESARROLLO NO CAPITALISTA

Una de las manifestaciones de la inseguridad de la mayoría se encuentra en la presencia de grupos democratacristianos que cultivan una actitud opositora frente al Gobierno. No se trata, por cierto, de divergencias tácticas u ocasionales, sino de planteamientos de fondo que implican la asociación con el FRAP, la renuncia de hecho a la originalidad doctrinaria del partido y la confesión implícita de que en tomo a la elección del Presidente Frei habría habido un malentendido

sensible que se prolonga durante su Administración.

Esta última parte es la más seria y obligaría a decisiones en cualquier colectividad política de Gobierno. En efecto, los llamados "rebeldes", con el apoyo directo o indirecto de los "terceristas", manifiestan su repudio a "las burguesías progresistas". Se oponen a la Reunión Cumbre, califican de "lacaya" a la política de los gobiernos latinoamericanos, como lo haría Fidel Castro, y llaman a "la unidad de masas del continente", para la liberación, el progreso y la integración.

Sorprende la crítica directa a la política internacional del Gobierno y el carácter despreciativo e irrespetuoso con que se la formula. Llama la atención también el rechazo de "las burguesías progresistas", confirmado por otros documentos en que se ataca al Ejecutivo por contemporizar con el capitalismo o con el neocapitalismo, cuando la tarea es favorecer "la lucha de los pueblos" en términos análogos al marxismo que propicia la guerra social y la dictadura del proletariado.

Por minoritario que sea este pensamiento dentro del Partido Demócrata Cristiano, parece inevitable que se llegue a una definición, pues ella afecta a una gran mayoría de quienes sufragaron por el Presidente Frei y de los que apoyan su gestión de gobernante. No cabe disminuir la trascendencia del hecho si se tiene presente que el 15 de abril, como resultado de los comicios municipales se designó una comisión político-técnica, con nutrida representación rebelde y tercerista, cuya finalidad es el estudio de siete puntos de una "estrategia no capitalista del

desarrollo". La comisión tiene por materias el control de los mecanismos básicos del sistema económico, la determinación de las áreas que deben incorporarse al dominio público, la fijación de un estatuto para el sector privado con normas sobre precios, utilidades, reinversiones obligatorias y otros tópicos similares.

La cuestión que se plantea consiste en que el programa presidencial del Excmo. señor Frei señala reformas económico-sociales, pero su intención permanente es que ellas contribuyan a un afianzamiento de la libertad y sean un apoyo a los empresarios progresistas. Frente a la lucha y a la dictadura de clases, esa candidatura llamó a una transformación y renovación en la legalidad, y tuvo el respaldo de muchos hombres de empresa, los que pensaban y piensan que este proceso se encamina al desarrollo económico y social, es decir, a un clima compatible con las iniciativas productoras, con la propiedad privada y con el desenvolvimiento de empresas particulares grandes, medianas y pequeñas. Eso explica que el enfrentamiento electoral de 1964 haya conmovido al país y a la opinión extranjera, pues allí se decidía entre la dictadura de clases y el régimen libre, en lo político y en lo jurídico.

Cuando los "rebeldes" fustigan al Gobierno por capitalista o neocapitalista, están obligando a precisar si son ellos los que forman un cuerpo extraño en el campo freista, o si, a la inversa, los que no desean la dictadura de clases y confían en la libertad y en la propiedad habrían equivocado su camino. Hay momentos en que es preciso adoptar

una decisión que aclare las tareas futuras, y parece llegado ahora este momento para los democratacristianos.

LA SEGURIDAD DE UNA MINORÍA

Los partidos del FRAP representan en conjunto una cuota modesta y estable del electorado. Para aumentar sus fuerzas no cuentan ya con su crecimiento en las urnas con personalidad propia, sino que presentan dos alternativas para rehuir la verdadera expresión de la voluntad ciudadana. Los comunistas trabajan sobre la base de atraer o debilitar a otros partidos y exhibir entonces un poder político superior al que les otorga el mandato popular. En los socialistas y en otros grupos extremos cunde la idea de prescindir de la vía electoral y de pasarse a la acción directa, en vista de que no consiguen un vuelco decidido de los electores hacia sus propósitos revolucionarios.

En todo caso, el FRAP trata de ganar influencia entre elección y elección, y crea la atmósfera psicológica necesaria para que la opinión pública y el Gobierno sigan su juego, tendiente a encajonar a nuestra democracia y a hacer imposible una política sana y progresista.

Las presiones ejercidas en el debate del programa del cobre, en la discusión de la reforma agraria y en torno al proyecto de juntas de vecinos son ejemplos de una actitud opositora que consigue arrastrar hacia ella a grupos adversos y a complicar los propósitos legislativos del Gobierno.

En la misma línea de avasallamiento dentro de la confusión se

encuentra la campaña frapista para horadar la política internacional del Ejecutivo, entremezclando la necesaria defensa respecto de los ataques de Bolivia, en el aspecto territorial, con el movimiento guerrillero. Así resulta que el FRAP ha venido a preocuparse de las aspiraciones marítimas de Bolivia sólo cuan-

do intenta impedir el auxilio a la resistencia contra las guerrillas, y aprovecha para distanciar de Chile a países amigos.

La paradoja política del momento es la improcedente seguridad de la minoría frapista enfrentándose a la inseguridad, al menos aparente, de la mayoría democratacristiana.

La disyuntiva radical

(18 de junio de 1967)

El artículo comenta los resultados de la elección complementaria de un senador en las provincias de O'Higgins y Colchagua, para llenar la vacante producida por el fallecimiento del senador socialista Salomón Corbalán. En ella triunfó su viuda, la doctora María Elena Carrera, con un 46%, y los candidatos Jaime Castillo, de la Democracia Cristiana, y Víctor García, del Partido Nacional, obtuvieron el 35% y el 17,5%, respectivamente. El parlamentario radical don Carlos Morales Abarzúa propicia el integro del partido a un nuevo "Frente Popular" (EM, 13 de junio, pág. 19).

La Semana Política

ELECCIÓN DE O'HIGGINS Y COLCHAGUA

El radicalismo, como factor determinante de la victoria del FRAP; el leve repunte de la democracia cristiana, respecto de sus resultados del dos de abril; el retroceso de los nacionales sobre lo conseguido en la misma elección, y la incógnita de los votantes que se abstuvieron, son las principales características de la consulta popular del domingo último.

En otras palabras, el FRAP triunfa con la ayuda radical; la democracia cristiana no puede contar sólo con sus propias fuerzas en las futuras batallas políticas, y los nacionales tampoco provocan aisladamente alguna situación.

Cierto es que una elección extraordinaria de senador por O'Higgins y Colchagua puede no reflejar la composición exacta del electorado del país, pero si se atiende a los resultados de los comicios municipales del dos de abril, se llega a un cuadro muy similar al de esta nueva confrontación: ni el FRAP por sí mismo ni ninguno de los partidos democráticos tienen arrastre para conformar una mayoría.

De ahí la notoria importancia asumida por el Partido Radical, que se recuperó considerablemente el 2 de abril y que el domingo último entregó con disciplina sus votos a la candidata del FRAP, lo que ha sido causa de la ventaja obtenida por ésta respecto de don Jaime Castillo.

Puede decirse, entonces, que la posición del radicalismo es fundamental para el destino del país y que su poder político puede seguir consolidándose y avanzando si quienes dirigen ese partido abren los ojos a la realidad presente. En otro momento pudo pensarse que el camino de la demagogia era el único que tenía resonancia electoral.

Ahora las cosas han cambiado y es probable que se modifiquen mucho más aún: la demagogia pura y simple está agotando sus posibilidades, pues destruye las de la nación misma. Se ve, entonces, que podrán hacer demagogia sólo aquellos que van hacia la dictadura marxista y que esperan, en consecuencia, que la policía política y el sofocamiento de las libertades pongan fin al desorden económico y contengan la agitación que ellos mismos están

provocando. Pero la enorme mayoría de los ciudadanos no aspira a la dictadura. Ellos verán cada vez más claro que la libertad de que disfrutaban exige eficiencia política y técnica, y que la demagogia conduce a la frustración y a la servidumbre. Si el Partido Radical pretende, como es lógico, afirmarse en las urnas, tendrá necesariamente que contar con el cansancio de los electores democráticos respecto de las promesas ilusorias y con el derecho que ellos tienen de dar su confianza a colectividades políticas libres, seguras de su labor en beneficio de la república y capaces de afrontar los problemas concretos de Chile sin sujeción a las consignas marxistas, que sólo conducen a agudizarlos. Si, por el contrario, los dirigentes del Partido Radical han perdido la fe en sus principios y en la democracia representativa, podrán sumarse a los partidarios de la Conferencia Tricontinental de La Habana y a los organizadores de OLAS y seguir haciendo la demagogia que aprovecha a éstos, pero entonces el radicalismo habrá perdido todo el peso que las circunstancias le están otorgando. Una que otra ventaja transitoria es un precio muy módico, para que se arriesgue la existencia de un partido con futuro.

LA DISYUNTIVA RADICAL

Como consecuencia de la pérdida brusca de su influencia en el electorado, el Partido Radical ha estado expuesto desde 1964 a la desconfianza en sus expectativas. Ello alimentó en algunos sectores minoritarios la esperanza de que, vistiéndose con colores marxistas,

el partido podría recuperar su antiguo prestigio político. Hasta abril último pudo parecer difícil el hallazgo de la verdadera ruta. Un partido nuevo en pleno crecimiento y con el poder en sus manos, enfrentándose a una combinación marxista llena de osadía teórica y práctica, dejaba en apariencias poco espacio al radicalismo. Las condiciones no fueron favorables entonces para una actitud opositora independiente y todo llevaba al radicalismo hacia el FRAP.

Por lo demás, cualquiera posición política propia requiere trabajo y esfuerzo para formularse y ser llevada a los hechos. De ahí que el grupo frapista del radicalismo tuviera la ventaja de la comodidad: cerradas todas las puertas al entendimiento y aun a la coexistencia con el partido de Gobierno, era fácil instalarse en el confortable ideario del marxismo, el cual no requiere plantearse los problemas reales del país, sino que instala a los individuos en un esquema de "antis" que los desliza a la lucha contra las instituciones y, por ende, contra la libertad. La tarea de pensar acerca de lo que Chile necesita hoy y de encauzar las conductas hacia el mejoramiento moral, social y económico de la nación es mucho más ingrata que la de subirse al carro marxista, donde nuestro país es sólo uno de la serie y objeto de la aplicación del mismo recetario de todas las dictaduras del proletariado.

La victoria radical del 2 de abril abrió las posibilidades de una línea independiente para esa colectividad, que tiene todos los elementos para presentar una concepción moderna y certera de la realidad política na-

cional. Sin embargo, la directiva nacional no interpretó cabalmente el sentido de la recuperación y quiso creer que las asambleas pedían una apertura hacia el FRAP. Luego, aceptando con paciencia inexplicable los menosprecios de socialistas y comunistas, esa directiva apoyó a la candidata del FRAP en la Quinta Circunscripción. Los radicales de la zona mostraron su disciplina y la firmeza de su oposición al Gobierno al dar el triunfo al FRAP, lo que no prueba nada acerca de las profundas diferencias entre el radicalismo y la combinación castro-comunista.

En la próxima Convención Ordinaria del Partido Radical podrá verse si el derrotismo incubado en 1964 sigue haciendo estragos en esa colectividad, al punto de dejarla sin brújula y a merced del FRAP, o si se acentúa una política de independencia, a base de la fe en los principios y perspectivas de un radicalismo que no renuncia a la democracia y que acoge a todos los que están de vuelta del extremismo estéril que sólo conduce a la violencia y a la destrucción.

LOS VERDADEROS ATRASADOS

Hace algunos días un diario publicaba sendas declaraciones de un senador comunista y de un parlamentario radical acerca de las consecuencias de la elección del último domingo. Podía leerse allí que para el senador comunista no caben ya los frentes populares y que el FRAP, esto es, el Frente Revolucionario de Acción Popular, debe ser la fuerza polarizadora de la izquierda en Chile a incluir, por tanto, a los radicales.

Casi a renglón seguido el diputado radical daba a conocer su añoranza del Frente Popular de 1938 e insinuaba una alianza democrática de los partidos de izquierda.

Veinticinco años constituyen mucho tiempo en la era actual. Quienes piensan retrospectivamente en términos del Gobierno del Excmo. señor Aguirre Cerda están sin duda atrasados. Para no citar sino algunos hechos que entonces no se soñaban, diremos que el duro enjuiciamiento de la era estaliniana, la división entre Moscú y Pekín, las teorías y las tácticas guerrilleras y la presencia del Fidel Castro, de la Conferencia Tricontinental de La Habana y de OLAS han modificado por completo el panorama del marxismo y alejado a éste del campo democrático mucho más profundamente que antes.

Por eso, los radicales que piensan ahora en la resurrección de un frente popular dan muestras de una mentalidad francamente atrasada, a menos que la falta de fe en su doctrina y en su partido haya llegado al punto de que la alianza que proyectan no sea ya la antigua sino que envuelva la rendición del radicalismo, el ocultamiento de las banderas democráticas y libres y la voluntad de desaparecer políticamente, a cambio de algún éxito individual por corto plazo.

Los antecedentes disponibles indican que en el FRAP no hay clima para frentes populares al viejo estilo y que la tendencia insurreccional y totalitaria está robusteciéndose en esa combinación.

Queda así en claro que si los radicales van hacia el FRAP se sumarán sin pena ni gloria a dicha ten-

dencia, sacrificando las expectativas políticas que su partido tiene en la mano y aceptando resignadamente que comunistas y socialistas acallen la voz propia del radicalismo, persigan a sus militantes leales y conviertan a esa colectividad en una simple fachada.

Finalmente, la importancia asumida por el Partido Radical envuel-

ve una gravísima responsabilidad. Una fuerza democrática vigorosa e independiente, colocada en la oposición, constituye el muro de defensa de la ciudadanía que muestra una y otra vez su negativa a los extremos y su convicción de libertad. La responsabilidad radical es servir nuevamente de trinchera contra el despotismo.

La doctrina de la insurgencia

(25 de junio de 1967)

En una ceremonia que contó con la presencia del Presidente del Senado, Salvador Allende, del senador comunista Luis Corvalán, del diputado comunista Jorge Montes, del dirigente sindical Luis Figueroa, del senador socialista Clodomiro Almeyda y otros en la mesa de honor, se constituyó el Comité Chileno de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), organismo creado en Cuba.

El senador Tomás Reyes, de la Democracia Cristiana, plantea la censura a la mesa del Senado, por admitir a tramitación un proyecto de ley para suprimir las restricciones a las relaciones con Cuba, debido a que se trata de materias que son de responsabilidad del Presidente de la República (EM, 22 de junio, pág. 19).

Hay huelgas y disturbios en el Instituto Pedagógico, Universidad Católica de Valparaíso, Correos, Caja de Empleados Públicos y Periodistas, Liceos Comerciales, Compañía de Acero del Pacífico y otros.

La Semana Política

LA DOCTRINA DE LA INSURGENCIA

Mientras los partidos Socialista, Demócrata Cristiano y Nacional inician reuniones de importancia y el Partido Radical prepara su convención próxima, se ha constituido el comité chileno de la OLAS y la agitación cunde en los medios estudiantiles y laborales.

Un comentarista de prensa ha dicho que le parece "muy probable" que la "vía electoral" perdure hasta 1970, con lo que implícitamente se está reduciendo la existencia del régimen jurídico a una mera probabilidad y vaticinando su próxima desaparición.

Las organizaciones partidistas tienen que tomar en cuenta que, dentro y fuera de ellas, están proliferando la doctrina y la práctica de la insurgencia en contra del orden institucional. Debajo de las convenciones, de los debates y de las pug-

nas entre las corrientes internas de los partidos por influir en la conducción de éstos crece un sistema de poder que se construye fría y metódicamente para introducir la violencia y aniquilar mediante ella la acción de los partidos democráticos.

El comité chileno de la OLAS se ha formalizado y elegido como su presidente al senador Aniceto Rodríguez, que también lo es del Partido Socialista. Dicho senador ha explicado públicamente los objetivos de la organización revolucionaria, inspirada en el castro-comunismo y que surgió como fruto de la Conferencia Tricontinental de La Habana. La presentación de la OLAS por sus organizadores le señala como finalidad el combatir al imperialismo y llama a una nueva lucha por la independencia americana, que sería un segundo capítulo de la emancipación. El papel de España estaría ahora representado por el imperialismo nor-

teamericano, y Fidel Castro y sus agentes habrían de ser los libertadores, continuando la tarea de Bolívar, de San Martín, de O'Higgins y de los otros patriotas ilustres.

Este ropaje histórico es una burda desfiguración de la verdad. El "antiimperialismo" y la "liberación" no son más que consignas para implantar la dictadura socialista en los países latinoamericanos, sometién-dolos al más férreo partido único y al imperialismo político y económico de la órbita comunista. Ahí tenemos la ficción de la independencia de Cuba, financiada y sostenida por la URSS, y el colonialismo que ésta ha ejercido y ejerce sobre Europa oriental, hasta el punto de que cada disparidad manifiesta de alguno de esos satélites respecto de la política de Moscú hace noticia.

El verdadero enemigo de la OLAS no es el "imperialismo" sino el orden legal y la estructura de poder que dan forma a nuestros pueblos, reflejo, a su vez, del trabajo de muchas generaciones y de los valores morales, culturales y económicos forjados a lo largo de la historia. La campaña subversiva, cuya dirección asume la OLAS, lejos de continuar la obra de los libertadores de América, se dirige a destruir esa obra y a entronizar una servidumbre política y económica sólo comparable a las antiguas tiranías del Oriente.

INCITACIÓN A LA INSURGENCIA

Un senador socialista dijo hace días que "nuestro partido ha ido configurando cada vez en mayor medida, una posición clara, precisa y tajante frente a la compleja realidad

latinoamericana y chilena. Por eso no hemos dudado en emitir una declaración pública manifestando resueltamente nuestra coincidencia con la concepción general de la estrategia cubana para enfrentar el imperialismo". Calificó además de absurdo el deseo de "revivir etapas ya superadas en el proceso político y social chileno, como fue el del Frente Popular del año 1938".

Esta identificación con Cuba supone adherir a la doctrina fundamental del castrismo, formulada por el mismo senador como una lucha contra el imperialismo norteamericano, una lucha continental, una lucha armada y una lucha de guerrillas, que culmina en "la insurrección instantánea y general de la montaña y de la ciudad". Se refirió el senador socialista al gran dilema que, a su juicio, se plantea a "las vanguardias políticas continentales" y que consistiría en "cómo derrotar a los ejércitos profesionales nativos y a sus tutores armados yanquis", para lo cual propone la doctrina castrista que él mismo describe. "Llamamos a la juventud -terminó diciendo el senador- a participar en este gran desafío histórico, en este gigantesco enfrentamiento entre explotados y explotadores, entre naciones imperialistas y pueblos oprimidos. Cuba nos ha entregado su respuesta heroica y desafiante. Nosotros debemos hacer otro tanto".

Tal es la oratoria que se está empleando por miembros del Senado de la república para estimular "la lucha de masas". Nada tiene de extraño, entonces, que grupos de trabajadores y estudiantes protagonicen desórdenes, tomas de locales y hasta escenas de franca violencia.

Todos olvidan que la Ley de Seguridad Interior del Estado castiga a "los que propaguen o fomenten, de palabra o por escrito o por cualquier medio, doctrinas que tiendan a destruir o alterar por la violencia el orden social o la forma republicana y democrática de Gobierno", así como "a los que inciten, induzcan, financien o ayuden a la organización de milicias privadas, grupos de combate u otras organizaciones semejantes con el fin de substituir a la fuerza pública, atacarla o interferir en su desempeño, o con el objeto de alzarse contra el Gobierno constituido.

La subversión es un delito en Chile y en todo país organizado, por lo que resulta incompatible con la actividad política y parlamentaria normales. Los parlamentarios del FRAP que pertenecen a la OLAS y reconocen su filiación castro-comunista, adhiriendo por tanto a la doctrina de la insurgencia y al concepto cubano de la "lucha de masas", han adoptado una actitud que no se concilia con el orden republicano y democrático y que tenderá a alejar de la combinación marxista a quienes creen en el régimen legal y en la libertad política.

LAS DOS INDEPENDENCIAS RADICALES

Las dos corrientes que se perfilan en la próxima Convención Radical levantan la bandera de la independencia. Para una de ellas, la doctrina democrática, laica y racionalista del radicalismo está en contra de los fanatismos y de las violencias sectarias. Por eso repudia los compromisos tácitos o expresos con el marxismo totalitario del FRAP, y está segura que el crecimiento electoral de

su partido depende de la fidelidad a su doctrina.

En respuesta a ese planteamiento, los radicales que buscan entenderse con el FRAP, ya sea por razones teóricas, ya sea en vista de metas a corta distancia, plantean también ahora la tesis de la independencia. Para ellos, dicha posición consistiría en decir no a la democracia cristiana y al Partido Nacional, tratando al FRAP de distinta manera.

La fórmula de acercamiento a la combinación marxista consiste en hacerles señas para que ella se aproxime. En efecto, los independientes partidarios del FRAP proclaman su lealtad a la doctrina radical, pero describen un conjunto de aspiraciones que calza como anillo al dedo con los "cambios" que patrocina el Partido Comunista. Luego, dicen públicamente que no pondrían obstáculo a la coincidencia del FRAP en esos puntos que ellos han calcado de la actual plataforma marxista.

Todo lo que dicen estos nuevos independientes radicales es que desean aliarse con el FRAP, manteniéndose democráticos, lo que constituye un anacronismo vista la formación de la OLAS y las doctrinas castro-comunistas que imperan en la extrema izquierda. Pretender que en el presente clima político los radicales pudieran atemperar el totalitarismo del FRAP es algo que la opinión pública descarta por imposible. Es evidente que los eventuales compromisos de los radicales con el marxismo-leninismo y con el castro-comunismo no favorecerán electoralmente a un partido con arrastre genuinamente democrático.

La censura de la Mesa del Senado dará una oportunidad para que el país

conozca qué sectores democráticos son partidarios de Cuba, cuya prédica subversiva tiene alcance continental y envuelve la destrucción de nuestro sistema republicano por medio de la violencia. El asunto se ha planteado en torno a una indicación senatorial que invade ostensiblemente los atributos constitucionales del Ejecutivo, como para subrayar que el espíritu que la anima es de ruptura con el

orden jurídico. El Partido Radical ha dispuesto que su representación vote en favor de la Mesa, en que se encuentra el impulsor e integrante de la entidad casuista OLAS. Esta era, sin duda, una ocasión para mostrar una posición radical independiente y de defensa de nuestro régimen constitucional y democrático. No es clara, pues, esta nueva independencia radical.

Presidente y partido

(6 de agosto de 1967)

El artículo se refiere a una declaración de la directiva del Partido Demócrata Cristiano, encabezada por el senador Rafael Agustín Gumucio, que señaló que los Ministros de Estado y en general los funcionarios públicos de alto nivel deben contar con la confianza del partido para ejercer sus cargos.

Los ministros pertenecientes al partido conversaron durante 6 horas con la directiva, debatiendo este tema (EM, 3 agosto, pág. 24).

La Semana Política

EL PRESIDENTE

La declaración de la directiva demócratacristiana que, junto con reconocer las atribuciones privativas del Presidente de la República para designar sus Ministros, afirma que los militantes que ocupan esos cargos u otros de importancia en el Gobierno deben mantenerse mientras cuenten con la confianza del partido, toca un punto esencial de la estructura de nuestro régimen republicano.

Como el tema tiene consecuencias políticas, ha sido abordado por el Presidente en declaraciones exclusivas que formuló a este diario el domingo último; motivó además un análisis por parte de los Ministros demócratacristianos y los dirigentes de su partido, y ocasionará también un debate entre los parlamentarios de la colectividad de Gobierno.

Más allá de la doctrina relativa a la designación de los Ministros está implícito aquí el alcance de las facultades del Presidente de la República y de sus relaciones con el partido que lo apoya.

Puede decirse que nuestro sistema de derecho público descansa en la institución de la Presidencia, por

las amplias facultades que la Constitución entrega al ciudadano que la ejerce y por el sufragio que le confiere el título supremo.

El Presidente de la República arranca su autoridad de una elección en que participa toda la ciudadanía, a diferencia de los otros elegidos que cuentan con el voto de una sección territorial. Sólo el Congreso Pleno tiene el mismo origen democrático nacional, pero el Presidente reúne en su persona esa decisión popular.

De ahí entonces que cuando el Presidente de la República " nombra a su voluntad a los Ministros de Estado " concurre a la formación de las leyes, ejercita su potestad reglamentaria, tiene el Gobierno y la Administración del Estado, dispone de las fuerzas de aire, mar y tierra, dirige las relaciones exteriores y cumple los demás cometidos que la Constitución y las leyes le encomiendan, es la propia democracia chilena la que se expresa a través del Jefe del Estado.

El mandato del Presidente emana de la ley y está enmarcado en las disposiciones de ésta, y, por lo mismo, cuando ejercita sus facultades privativas y discrecionales cumple

la ley. No la cumpliría en cambio si renunciara a su competencia exclusiva, cediendo la autoridad que el pueblo le ha entregado a él, y a nadie más.

"He sido elegido Presidente de todos los chilenos, sin excepción, y el Gobierno tiene la misión de conducir al país entero", ha expresado S.E. en la entrevista que publicamos el domingo último. Y, en efecto, es de la esencia del cargo de Presidente de la República su carácter nacional. El ciudadano elevado al poder supremo adquiere en sí mismo una calidad institucional, que representa a la voluntad de todo el pueblo y que importa el servicio a la causa permanente de éste.

PRESIDENTE Y PARTIDO

Con algunas excepciones, los Presidentes de Chile han pertenecido a una tienda política, que les ha dado o restado su apoyo según las corrientes de opinión surgidas en ella.

Estando en vigencia el régimen presidencial, siempre ha primado en los gobernantes su carácter de tales respecto de su sujeción al partido a que pertenecen. Esto no significa renuncia a la doctrina partidaria ni falta de adhesión al hogar político, sino reconocimiento de que la disciplina de un partido tiene menor rango que las obligaciones constitucionales del Presidente. El Jefe del Estado se debe, durante su mandato, a los valores que configuran la nación. Ella es más durable que los partidos, comprende el trabajo de muchas generaciones y camina hacia el futuro. Las doctrinas políticas son interpretaciones de un tiempo

determinado y de un sector ciudadano. La nación es más amplia y permanente. Esto explica que la más alta y entusiasta fidelidad de un Presidente de Chile a su partido no sea obstáculo para el pleno y libre ejercicio de la autoridad de que está revestido.

La directiva democratacristiana reconoce la facultad del Presidente para designar "a su voluntad" a los Ministros de Estado, pero, al plantear una cuestión de confianza política respecto a los militantes que ocupan esos cargos, de hecho lesiona los atributos presidenciales, ya que la colaboración de su partido es la base parlamentaria con que cuenta el Jefe del Estado. El Presidente ha manifestado su seguridad de que la inmensa mayoría del Partido Demócrata Cristiano, sus parlamentarios y su directiva darán esa colaboración, respaldando así al primero de sus militantes que llega al poder supremo.

AUTORIDAD PRESIDENCIAL

Las características del régimen chileno otorgan una gran importancia a la autoridad superior del Presidente. Es su persona la que se eleva a un rango de institución. Su sello propio se imprime a la historia del país durante el período en que ejerce el cargo y deja huellas duraderas en el espíritu y en el territorio de la nación.

Por eso, la autoridad presidencial no consiste sólo en firmar resoluciones sino precisamente en mandar por sí, dentro de la amplia esfera de su competencia.

La amenaza contra las prerrogativas del Presidente que envuelve la

cuestión de confianza política de los Ministros, sugerida por su partido, es una de las tantas manifestaciones de un ánimo generalizado de resistir a la autoridad presidencial. Se ha visto a algunos senadores pretendiendo tomar a su cargo la conducción de las relaciones internacionales, a diputados que intentan romper los planes habitacionales del Gobierno o su política de reajustes, y a los gremios queriendo imponer sus puntos de vista con grandes presiones.

El brote de parlamentarismo que aparece en algunos dirigentes demócratacristianos ha de mirarse como un nuevo síntoma de la tentativa de doblegar la autoridad del Presidente. Se le ha entregado incluso un programa político-técnico, en la errada creencia de que el Presidente de Chile es ejecutor de los acuerdos de una directiva política. El tono y el contenido del informe de la comisión político-técnica corresponden a esa equivocada concepción de la dignidad del cargo del Presidente. Implícitamente dicho informe envuelve la aceptación del "desafío" lanzado por el Partido Comunista a la democracia cristiana, visto bueno que se da con prescindencia de la voluntad presidencial.

En varios niveles del Estado y en muchos sectores de la actividad nacional se advierte este fenómeno de

rebeldía a la autoridad máxima del país, que se evidencia en las continuas alteraciones del orden por manifestantes de todo género, en las huelgas ilegales y hasta en la actividad perturbadora de ciertos organismos públicos que interfieren la labor de pacificación social indispensable al Gobierno.

Frente a estas fuerzas que pugnan por romper la estructura institucional del país se encuentra un hombre solo, a quien "está confiada la administración y Gobierno del Estado" y cuya "autoridad se extiende a todo cuando tiene por objeto la conservación del orden público en el interior, y la seguridad exterior de la República, de acuerdo con la Constitución y las leyes". De sus decisiones personales y del empleo de los instrumentos de poder que le entrega el régimen jurídico dependen el bienestar y la tranquilidad del país. El sabe que, más allá de las presiones que se ciernen sobre el Gobierno desde el campo político y desde los sindicatos politizados, hay toda una masa que calla y que tiene la imagen exacta de lo que es un Presidente de Chile, de sus dificultades y de la necesidad en que se encuentra de imponer su propia voluntad sobre colaboradores y adversarios. Esa masa silenciosa ha sido siempre el verdadero capital político de los grandes Presidentes de Chile.

Uno cultiva y otro cosecha

(27 de agosto de 1967)

Tres hechos noticiosos son analizados esta semana: la solución de un conflicto campesino en Molina, que mantuvo en huelga desde el 18 de julio a campesinos de 54 fundos; un proyecto de legislación bancaria propuesto por parlamentarios demócratacristianos (texto: EM, 26 agosto, pág. 34) y la solución a la "toma" del recinto de la Universidad Católica. La "toma" se había iniciado el 11 de agosto y en ella se pedía la reforma de los estatutos universitarios. El 21 de agosto la Santa Sede designa Mediador al Cardenal Raúl Silva Henríquez. El 22 de agosto se designa Prorrector a Fernando Castillo Velasco, y se anuncia la constitución de un Claustro Pleno, con representación de profesores y estudiantes. El Rector Alfredo Silva Santiago presenta su renuncia.

La Semana Política

LAS "COINCIDENCIAS"

El país asiste con sorpresa al desarrollo de un frente de coincidencias entre distintos grupos que se autocalifican de izquierda y de avanzada. El frente se desenvuelve en las demandas campesinas, en ciertos conflictos de empleados y obreros urbanos, en las exigencias estudiantiles de participación o cogobierno de las universidades y en el terreno parlamentario.

Solucionado el conflicto campesino de Molina, devueltos los trabajadores marchantes en un tren especial que pusieron a disposición de ellos las autoridades, y acogidas las extremas imposiciones de los alumnos de la Universidad Católica de Chile que ocupaban ilegalmente el establecimiento, se diría que han aflojado las tensiones en los puntos más críticos.

Sin que se hayan apagado del todo los ecos de aquellos acontecimientos, la presión disolvente parece ahora dirigida en especial hacia

el terreno legislativo. Parlamentarios demócratacristianos han presentado un proyecto de reforma bancaria, que se inspira en el informe sobre "la vía no capitalista de desarrollo". Más importancia que el texto mismo de la reforma tiene el hecho de que empiece a ponerse en ejecución la vía comunitaria o "no capitalista", que coincide con el desafío que el comunismo lanzó a la democracia cristiana.

El mencionado informe, comentando la elección de 1964, dice que ella "permitió esclarecimientos y convergencias que rebasaron a las dos candidaturas más dinámicas que aspiraban al Gobierno, dando origen a una verdadera ideología nacional que por primera vez en nuestra historia permitió una categórica definición en favor de cambios profundos en la economía y en la sociedad chilena".

Dicha "ideología nacional" se silenció durante la elección del Presidente Frei, en que chocaron abruptamente las tendencias de los

partidarios de éste con los del FRAP. La oposición entre ambos sectores continuó agudizándose hasta el dos de abril, en términos que provocaron una especie de crisis institucional. El resultado sorpresivo de la consulta ciudadana de las elecciones municipales permitió a un grupo minoritario del Partido Demócrata Cristiano exhumar esta desconocida "ideología nacional", que consulta "esclarecimientos" y "convergencias" con los adversarios de extrema izquierda.

UNO CULTIVA Y OTRO COSECHA

La anterior directiva del partido de gobierno jugó con todas sus fuerzas la carta de la mayoría absoluta del electorado. No tuvo éxito en el empeño, y se atribuyó el suceso a que no se habían efectuado suficientes "cambios", es decir, a que no se dio oídos a los cantos de sirena del comunismo.

Un análisis nervioso de los resultados electorales de abril dio el paso a una estrategia totalmente contraria a la sostenida con firmeza hasta esa fecha. La tesis de las "convergencias" viene a surgir después de más de tres años de dura oposición entre las fuerzas que ahora sostendrían una "ideología nacional" de cambios profundos. El adversario que creció en la lucha no inspira, como sería natural, un mayor ánimo de combate, sino que empieza a sentirse como participante de una ideología común. Siempre se ha considerado que la coincidencia con el adversario es una capitulación, pero en nuestro país las cosas parecen funcionar de otro modo.

El extremismo democratacristiano plantea los temas revolucionarios, los mismos de todas las revoluciones socialistas, y el FRAP aprovecha esas oportunidades. Durante el debate legislativo, los parlamentarios marxistas se esmeran en dejar a sus colegas como indecisos y tímidos.

En diversos terrenos ciertos elementos del partido de Gobierno toman la iniciativa reformista. El FRAP los apoya con su propaganda, no sin mantener una crítica firme a las tentativas de moderación emandas del Ejecutivo o de amplios sectores de la democracia cristiana. En pocos meses la "convergencia" se ha convertido en "coincidencia", y quienes pusieron en marcha el mecanismo destructor no pueden detenerlo ni controlarlo.

"Más que hacer un buen gobierno debíamos echar a andar una revolución", dice el informe "no capitalista" de la democracia cristiana.

Echar a andar o sembrar la revolución no es lo importante. Ya se está viendo quién hace la cosecha.

EL EPISODIO ESTUDIANTEL

El anárquico desenlace del conflicto de la Universidad Católica de Santiago es una pequeña muestra de lo que pueden las coincidencias, convergencias e ideología nacional de cambios en la vida política de hoy.

La "democratización" era exigida por ciertos medios clericales. El mismo lenguaje se emplea en la propaganda universitaria comunista. La prensa marxista elogia el movimiento de democratización. En

nombre de este proceso de cambios un sector estudiantil ocupa sorpresivamente la Universidad y la defiende con alambradas. Un grupo comunista estimula a los ocupantes ilegales y los ayuda a impedir que otros estudiantes recuperen el establecimiento. Dirigentes universitarios comunistas hablan en apoyo de los amotinados desde un balcón de la Universidad. Se trata simplemente de coincidencias o convergencias, al decir de los promotores del episodio.

La "democratización" es impuesta desde el Vaticano y no por la "comunidad universitaria". El Cardenal Arzobispo, a pedido de la Santa Sede y en virtud de una carta del Primer Mandatario, arregló sumariamente el conflicto, accediendo con largueza a lo que solicitaban los estudiantes amotinados, bajo la bandera del Seminario de Buga.

De las recientes explicaciones que el Cardenal mediador ha dado de su intervención en la Universidad se desprende que los sucesos desbordaban el margen de la vida uni-

versitaria, comprometiendo el orden público. La Santa Sede y la Comisión Episcopal en la persona del Cardenal Arzobispo de Santiago habrían sido requeridas entonces para actuar en un problema de orden público del Estado chileno. Es comprensible que el señor Cardenal, al obrar premiosamente en un plano distinto al de sus elevadas funciones, haya "cedido más de lo conveniente", como lo teme el mediador de la Santa Sede, según sus propias palabras.

Solucionado de este modo el conflicto, la prensa comunista elogió la victoria estudiantil y la democratización universitaria, sin mencionar cómo lograron sus anhelos los dirigentes que días antes hablaban desde un balcón de la Universidad.

La "ideología nacional de cambios" opera con todos los medios y no trepida en ejercer las presiones más inadecuadas. Sus partidarios están lejos de interpretar el consenso del país, pero se mueven con eficiencia y emplean muy bien la táctica del hecho consumado.

Un informe del "no desarrollo"

(22 de octubre de 1967)

El senador Patricio Aylwin distribuye a los integrantes de la Junta Nacional del Partido Demócrata Cristiano un informe de 17 carillas en que analiza el documento elaborado por la comisión político-técnica del partido, y que se refiere a la vía no capitalista de desarrollo.

En su informe, el senador Aylwin critica dicho documento señalando que no interpreta la voluntad mayoritaria del PDC, que se aprecia en él inmadurez y confusión doctrinaria, que sobrevalora el estatismo y menosprecia el cooperativismo, etc. (EM, 19 de octubre, pág. 23).

En la comisión redactora del documento participaron, entre otros, Jacques Chonchol, Carlos Massad, Luis Maira y Julio Silva Solar.

La Semana Política

REALISMO ECONÓMICO-SOCIAL

Un partido con tres años de experiencia de gobierno tropieza necesariamente con la realidad del país. Los esquemas teóricos, ensayados a la luz del movimiento de los precios, de las inversiones y de las tendencias electorales, se muestran como eran, es decir, bocetos que la práctica debe pulir y configurar con más precisión.

Son grandes las limitaciones de Chile. No es menor el desconocimiento de los factores que inciden en su desarrollo y aun de la psicología popular. Pese a los avances de las estadísticas económicas y sociales, ellas muestran grandes márgenes de error a causa de la insuficiencia de los datos de que parten. Por eso la práctica del Gobierno y de la Administración constituye un elemento que no se reemplaza con las ideologías ni con las técnicas.

El análisis del senador don Patricio Aylwin sobre el informe de la vía "no capitalista" de desarrollo

es una prueba de que la experiencia de su autor, como presidente de la democracia cristiana y en las diarias tareas senatoriales, le permite mirar con lucidez el papel que debe juzgar su partido en las circunstancias presentes.

A raíz de las elecciones del 2 de abril, interpretadas bajo un prisma teórico, un sector de la democracia cristiana se dejó llevar por el pesimismo. Un artificial clima de derrota lo empujó no sólo a variar las tácticas sino a comprometer los principios, en un intento de acercarse al FRAP. Esas circunstancias determinaron la elección de una nueva directiva que hizo suyas las proposiciones para una vía "no capitalista" de desarrollo.

La repercusión que tuvo ese informe en el desenvolvimiento económico del país no necesita demostrarse. Desde el momento en que su tesis era entregar al Estado la suma de la responsabilidad del desarrollo y someter a estricta vigilancia la acción productiva de los

particulares, aumentaron los riesgos de las inversiones privadas en el territorio y estuvo a punto de que se produjera un sensible desaliento de consecuencias graves.

Ha bastado, en cambio, la pre-sunción de que La Moneda no seguiría las pautas señaladas en el informe del señor Chonchol y que, por el contrario, se vaticinara un trato más equitativo a las inversiones bursátiles, para que estos últimos valores mostraran un alza muy significativa y de carácter general.

En el plano político, el informe no señaló ningún camino positivo, como no fuera el entendimiento con el comunismo, que en el hecho está convirtiéndose en el huésped solitario de la casa del FRAP, a causa de la división socialista.

Un partido que obtuvo renombre internacional y amplia mayoría nacional por su victoria sobre el comunismo en 1964 no puede, sin contradicción grave, deslizarse a una alianza con su adversario. Sólo una ingenuidad de gran tamaño o una acción antipartido podrían explicar dicho renuncio.

UN INFORME DEL "NO DESARROLLO"

Entre los muchos aspectos del análisis del señor Aylwin, hay uno que va muy a fondo en la crítica de la vía "no capitalista", como se enuncia en el informe político-técnico.

Este sostiene, a juicio del senador, la tesis de que si no han de lograrse simultáneamente los cinco objetivos que busca la vía "no capitalista", sería preferible que no haya desarrollo.

En efecto, en el acápite 2.1 del informe se dice que "resulta perfec-

tamente posible, por ese camino (el del crecimiento de las industrias privadas) y al margen de los propósitos de quienes dirigen el país, que Chile pase de una estructura capitalista rudimentaria y poco eficiente a una estructura moderna y eficiente. Esto es lo que constituye el peligro (sic) de reedificación capitalista o implantación del neocapitalismo, en contra del cual todos los militantes del partido nos hemos pronunciado".

El informe estima "improcedente" el desarrollo que aumentara la dependencia externa, o que no favoreciera a toda la comunidad, o que no aumentara la participación popular, o que no democratizara el sistema económico y social y las estructuras de poder. Si no cumple todas estas condiciones, es preferible que no haya desarrollo.

A eso contestó el señor Aylwin: "Deseamos un desarrollo con apellido, pero no podemos olvidar que más importante que el apellido es el desarrollo".

Esa breve frase ilustra más que largos tratados sobre el irrealismo del informe político-técnico. El temor al apellido "capitalista" y el temor también a ponerle otro directo hace que la vía propuesta esté simbolizada por un "no", que es la negación al propio desarrollo.

Ha transcurrido ya tiempo suficiente para que los líderes de la democracia cristiana se ocupen del sustantivo y no del adjetivo. El desarrollo es lo que hace falta, y el señor Aylwin demuestra que el Estado tiene ya cargas excesivas, con las tareas de la educación, salud, vivienda, reforma agraria y promoción popular, a las que cabe añadir

las impostergables inversiones de la seguridad nacional, de la justicia, de las comunicaciones, de la vialidad y muchísimas otras. No hay entonces recursos para actividades empresariales que pueden acometerse por el sector privado.

Apenas puede el Estado impulsar el desarrollo con modestas inversiones de infraestructura. En lo demás, su papel debiera ser crear el régimen de aliento al ahorro y al empuje de los particulares.

No es posible entonces el desarrollo "no capitalista", si por tal se entiende el sometimiento del sector privado a un régimen sospecha y de hostilidad. De ahí que los autores del informe propician de hecho el "no desarrollo" bajo el nombre de "no capitalismo".

"SEAMOS LO QUE SOMOS"

El informe político-técnico es más político que técnico. Si su enfoque económico es ilusorio no lo es menos su interpretación política.

El cuadro que hace de la última elección presidencial está fuera de la realidad. Dice que "constituyó un auténtico proceso público a la situación en que se debatía nuestro país y permitió esclarecimientos y convergencias que "rebasaron" a las dos candidaturas más dinámicas al Gobierno, dando origen a una verdadera ideología nacional..." Con este prelude el informe empieza a justificar la tentación frapista de sus inspiradores. Ahí empieza el sueño de "encabezar la izquierda", a través de "un diálogo democrático y cons-

tructivo con las diversas fuerzas políticas nacionales y en especial con aquéllas respecto de las cuales podíamos reclamar apoyo para la ejecución de este programa".

Se preconiza además "un enfrentamiento activo con la derecha".

Bastaría preguntar por la composición de fuerzas que llevaron al Presidente Frei al poder para advertir un cambio en ciento ochenta grados entre lo que los electores vieron en 1964 y lo que ahora preconiza el informe.

Una lección de honestidad política y de sentido de la realidad suministra el senador Aylwin a quienes sostienen el informe político-técnico. "La experiencia parece demostrar -dice- que el mejor camino es el de la autenticidad. Mostremos nuestro propio rostro. Seamos lo que somos, democratacristianos, y no otra cosa. Sin aislamientos, pero sin buscar entendimientos forzados o imposibles. Dialogando democráticamente y sin soberbia con todos, pero sin renunciar a nuestros principios. Buscando siempre un camino nacional y popular, ambicioso, pero realista, para hacer posible el logro de las aspiraciones mayoritarias del pueblo".

No ha habido hasta ahora comentarios oficiales de la directiva democratacristiana sobre la carta del señor Aylwin. En todo caso, la opinión pública espera que se quiebren los espejismos y se abra paso a la realidad. Un testimonio de ello es el análisis crítico del senador por Talca.

Año de tensiones

(31 de diciembre de 1967)

El día 29 de diciembre, el Presidente Eduardo Frei ofrece una conferencia de prensa en que analiza lo que ha sido el año 1967 en el aspecto político (Texto completo: EM, 30 dic., pág. 1).

El comentario hace un análisis global de lo que ha sido el desarrollo de las tensiones dentro del partido de Gobierno y la actividad desplegada por los sectores marxistas.

La Semana Política

AÑO DE TENSIONES

Las visibles discrepancias entre La Moneda y el Partido Demócrata Cristiano han determinado la convocatoria a una junta nacional de esa colectividad para el día 6 de enero. El año termina, pues, con la incógnita acerca de la posición que asumirá ese partido en lo que atañe al respaldo a las medidas de Gobierno.

El 17 de enero pasado el Senado rechazó el permiso constitucional necesario para que el Presidente de la República viajara a Washington. La tensión entre el Ejecutivo y el Senado llegaba con eso a tener trascendencia internacional y a hacerse evidente para el gran público. El rechazo provocó la iniciativa de reforma constitucional, tendiente a permitir al Jefe del Estado la disolución del Congreso. La enmienda no tuvo éxito, y con ello se alejó la posibilidad de que un plebiscito dirimiera el conflicto planteado entre los poderes públicos.

Las elecciones municipales del 2 de abril dieron, sin embargo, la oportunidad de auscultar a la opinión pública, tanto porque se trataba del veredicto popular más próximo al conflicto como porque el Pre-

sidente de la República instó en forma personal a un pronunciamiento del electorado en un recorrido a diversas regiones del país.

Los resultados de los comicios mantuvieron a la democracia cristiana en su sitio de primera fuerza política, a gran distancia de las demás, pero con una mayoría relativa inferior a la anunciada. Tuvo lugar, entonces, un proceso de desánimo en las filas del partido de Gobierno, manifestado en la reunión de Las Vertientes de los días 6 y 7 de abril. De allí salió robustecida el ala extrema del partido. Una invitación a las fuerzas del FRAP y los principios generales del informe sobre la "vía no capitalista" de desarrollo surgieron en esa oportunidad.

La elección complementaria de un senador por O'Higgins y Colchagua, que tuvo lugar el 11 de junio, permitió confrontar nuevamente a los partidos. Las desuniones entre comunistas y socialistas a formar filas con el FRAP no fueron obstáculo para que esas fuerzas se unieran en dicha jornada, proporcionando un senador al Partido Socialista. La votación obtenida por el candidato de Gobierno demostró la solidez de la democracia cristiana.

Los preparativos para instalar la sede chilena de la organización castro-comunista OLAS crearon un clima de inquietud política que se prolongó por varios meses y que tuvo efectos internacionales aun peores que la negativa del permiso al Presidente para viajar a Washington.

EL CASTRO-COMUNISMO

La presencia de OLAS permitió advertir a la opinión pública el progreso de los movimientos extremistas de izquierda que desdeñan la legalidad porque ven en ella una expresión de las clases dominantes y del imperialismo norteamericano. La influencia de Fidel Castro y del pekinismo en la juventud intelectual de izquierda apareció entonces con evidencia.

No prosperó la censura contra el Presidente del Senado por su participación en OLAS y al poco tiempo la directiva democratacristiana emitió un pronunciamiento sobre dicha organización y sobre las guerrillas en América latina, que produjo sorpresa. Los partidos democráticos de izquierda en los países que sufren la violencia casuista vieron en esa declaración un testimonio de debilidad o de demagogia que entibiaba sus simpatías hacia el Gobierno del Presidente Frei.

Distintas expresiones doctrinarias y políticas parecieron demostrar que nuestro país toleraba actividades preparatorias de la violencia. Si hay en el exterior interesados en promover mal ambiente para Chile, los lamentables episodios de OLAS, las apologías de la violencia y el clima de inquietud que vivió el país dieron

base a críticas provenientes de diversos sectores y lugares, sin que ello pudiera interpretarse como una acción concertada.

El Gobierno aplicó las medidas legales para mantener el orden público en todo momento y para sancionar a través de la justicia a los que resultaran responsables de delito.

Las querellas internas socialistas, la división de dicho partido y el creciente prestigio de las vías de la violencia en esos y otros grupos extremistas empujaron al comunismo hacia el Partido Radical.

UNIDAD GUBERNATIVA

Las nulas expectativas políticas que pudieron ofrecer los radicales de la llamada línea independiente, debido a que no tenían fuerzas paralelas con las cuales combinar, llevaron al triunfo de la corriente partidaria de unir tácticamente al radicalismo con el FRAP.

Los nacionales, colocados en una oposición intransigente, se vieron movidos a reforzar su actitud con motivo de la detención ilegal de algunos de sus dirigentes, medida precipitada que se transformó en un verdadero servicio político al partido recién organizado.

Entretanto, la democracia cristiana eligió una directiva dispuesta a imponer a La Moneda un programa ideológico-político, propio, traducido en el informe sobre la "vía no capitalista" de desarrollo. Este programa de marcado tinte socialista y estatista, unido al avance de la reforma agraria, tuvo sin duda influencia en la desaceleración económica que se aprecia este año.

La discusión actual sobre el llamado derecho a disentir de los funcionarios de la confianza del régimen refleja más bien el conflicto entre la aspiración del partido a "cogobernar" y los atributos constitucionales del Presidente de la República.

Los problemas internos de la democracia cristiana, la inclinación de su directiva hacia el extremo del cuadro político y el endurecimiento de los grupos opositores trajeron por consecuencia que el partido de Gobierno se presentara sólo unido a los democráticos nacionales en la elección complementaria de un senador por Biobío, Malleco y Cautín. La ventaja lograda por el candidato radical-comunista y la fuerte votación del representante nacional demuestran que las disensiones y los extremismos cercenan las grandes posibilidades de la democracia cristiana.

En su conferencia de prensa de fines de año el Presidente de la Re-

pública se mostró optimista, seguro y decidido en sus planteamientos. Al parecer confía en encontrar la comprensión en su partido y en conseguir la ayuda que requiere para resolver los difíciles problemas del país.

Varias veces, durante su mandato, el Presidente de la República ha tenido que definir su autoridad frente a los grupos y tendencias que quisieran desconocerla. Tuvo que formular esa definición ante los empeños por movilizar los sindicatos en contra del Gobierno y mantener sus prerrogativas en las tensiones que se le suscitaron con el Congreso. En estos días el problema se repite, pero ahora con su propio partido "Un gobierno no puede vivir con dos cabezas y con dos criterios", expresó a los periodistas. Y sin duda la próxima junta de la democracia cristiana tendrá que decidir la cuestión del poder. Hasta ahora, siempre ha resultado afirmada la autoridad presidencial.

Ebullición interna

(14 de enero de 1968)

Se comenta esta semana la "Junta de Peñaflor" efectuada por la democracia cristiana, en la que intervino en forma destacada el Presidente Eduardo Frei (EM, 8 enero, pág. 1).

El Presidente del Partido, Rafael Agustín Gumucio, rindió cuenta de su gestión, señalando que el Partido no debía subordinarse al Gobierno, y criticó a éste por no ceñirse al documento de la comisión político-técnica que definió la "vía no capitalista de desarrollo" (EM, 7 enero, pág. 33). Se procedió luego a elegir una nueva mesa directiva presidida por Jaime Castillo Velasco, e integrada por Tomás Reyes, Fernando Sanhueza, José De Gregorio y Carlos Garcés.

El dirigente Jacques Chonchol, derrotado en la elección de directiva, señaló que la división del partido era profunda.

La Semana Política

JUNTA DE PEÑAFLOR

El Presidente de la República empleó todos los recursos que le confiere su posición de líder democratacristiano a fin de conseguir el apoyo de su partido a la línea del Gobierno. La convocatoria a la Junta de Peñaflor y la intervención decisiva que en ella tuvo el Presidente Frei estuvieron determinadas por los acontecimientos producidos por la directiva que renunció el domingo pasado.

La mesa que no consiguió en Peñaflor el respaldo de su partido estaba generada por el sentimiento que se apoderó de la democracia cristiana a raíz de la baja de su cuota electoral en las elecciones de regidores del 2 de abril de 1967. El pesimismo hizo brotar los descontentos y encontrar en los grupos rebelde y tercerista una bandera de protesta.

Tales grupos se dieron a la tarea de enunciar aspiraciones programáticas, que desnaturalizaban la difícil labor del Gobierno. Mientras el empeño de éste era luchar por el control de la inflación y por el desarrollo económico, el programa que agitaba la nueva directiva, es decir la "vía no capitalista", estaba dirigido de hecho contra inversiones y hacia el robustecimiento del poder sindical de la CUT, que la democracia cristiana no controla. En el orden económico, dicho programa no ocasiona más que entorpecimientos para el logro de las metas gubernativas y, en el orden político, deja a la democracia cristiana en una peligrosa indefinición frente al comunismo, despojándola de su carácter de alternativa democrática que le dio el triunfo en 1964.

El proyecto de reajustes y ahorro obligatorio fue el punto que reveló la magnitud de la distancia que se

paraba a La Moneda de la directiva tercerista-rebelde. A propósito de tal iniciativa se hicieron presentes disidencias de altos funcionarios del Gobierno respecto a la marcha de éste y los dirigentes del partido pusieron en duda el derecho del Ejecutivo para pedir la renuncia de sus cargos a funcionarios que públicamente lo combatían. La dificultad se ahondó cuando la directiva pareció estimar que el pase partidista era requisito tanto del ingreso como de la remoción de funcionarios que fuesen militantes demócratacristianos.

La Junta de Peñaflor tenía, pues, por objeto dirimir las diferencias producidas entre el Gobierno y el partido, evitando la dualidad de iniciativas y responsabilidades en la ejecución del programa de 1964.

Los resultados de la Junta pusieron en sus verdaderos términos la colaboración del partido al Presidente. Al contrario de lo que profetizaban ciertas voces, la Junta no aprobó ninguna supeditación inconveniente de una de las partes del conflicto respecto de la otra. El partido definió con claridad como partido de Gobierno, pero la trayectoria demócratacristiana de los integrantes de la nueva directiva asegura que su colaboración se prestará en la forma digna, independiente y responsable con que siempre han actuado en su vida partidaria.

EBULLICIÓN INTERNA

Un dirigente derrotado en Peñaflor ha declarado a la prensa que la división de la democracia cristiana es profunda, y que una fracción es "no capitalista" y la otra, encabezada

por el Presidente de la República, confía en movilizar las instituciones y estructuras existentes. Esta declaración demuestra que los sectores rebelde y tercerista no han dado por resuelto el conflicto mediante la Junta sino que parecen empeñados en señalarlo y subrayarlo.

La directiva de la juventud demócratacristiana revela también deseos de agrandar las distancias respecto de la línea y estilo del Gobierno.

Se ve que los interesados en la segregación se encuentran en los grupos extremos, los que ahora se empeñan en hacer resonantes sus posiciones y en arrastrar hacia ellas a las bases del partido. Más que el ejercicio del "derecho a disentir" se advierte una intención de propaganda política opositora tendiente a frustrar la solución elegida democráticamente en la Junta de Peñaflor.

Entretanto, el Gobierno busca soldar las diferencias y olvidar las actitudes que pusieron en peligro la unidad de su acción. Estima que así podrán evitarse mayores divisionismos. El tiempo dirá si los gestos conciliadores son capaces de ahogar el espíritu de oposición visible en muchos rebeldes y terceristas.

Nadie esperaba que la consolidación política del Gobierno; obtenida en la Junta, fuera el comienzo de una conducta persecutoria de los disidentes. Ello habría sido incompatible con las tradiciones de la democracia cristiana y con la mentalidad del país mismo. Más aún, cabía esperar reconciliaciones y perdones dentro del espíritu de amistad que ha sido característico de la vida interna de ese partido.

Así parece estar sucediendo, si bien el restablecimiento de la confianza en los funcionarios que ostensiblemente *aparecieron* en contra de la línea del Gobierno no ha sido precedido por gestos también ostensibles de parte de éstos, que reflejaran un cambio de actitud.

La tarea de la nueva directiva será lograr que la definición de Peñaflor *se transmita fielmente* a todos los niveles del partido, de modo que la voluntad de cooperar en forma responsable al Gobierno predomine sobre las querellas divisionistas. Mientras éstas sean fomentadas por algunos grupos, el partido no conseguirá la coincidencia doctrinaria indispensable para proseguir en la unidad de acción.

SEIS AÑOS FUNDAMENTALES

Las especulaciones en torno a que la actual Administración debe durar seis años y que la democracia cristiana aspira a prolongar su existencia mucho más allá, extraen de ese hecho evidentes conclusiones excesivas.

En efecto, los dos tiempos de que se habla, eso es el período presidencial vigente y el futuro demócrata-cristiano, están íntimamente ligados entre sí. Dicho futuro depende del régimen presente en una estricta relación de causa a efecto. La democracia cristiana está representada en el Parlamento y en el Gobierno con una cuota de tal magnitud que los acontecimientos políticos y económicos de estos seis años en curso serán atribuidos casi por entero a dicha colectividad. Con razón o sin ella los niveles de bienestar, de cre-

cimiento económico, de empleo y de paz social que se marquen en este período influirán en forma decisiva en la confianza que la democracia cristiana inspire a los electores. Dicho partido ha tenido la oportunidad única de contar con grandes instrumentos de acción y, como contrapartida, se ha hecho depositario de no mayores responsabilidades frente al país.

De ahí entonces que la vigilancia del futuro del partido se identifica con el celo por transformar estos seis años en los mejores que ha vivido la república. Tal identidad impide sostener políticas a largo plazo que sean incompatibles con las que se ejecutan a corto plazo. El sello estatista y las profundas reticencias hacia la empresa privada, que acusa el informe sobre la "vía no capitalista", no resguardan el futuro del partido, desde que contradicen abiertamente el afán del Ejecutivo de alentar el ahorro y la inversión privados y de echar mano de todos los aportes para el desarrollo económico y social. Como las actividades productivas se programan para un número razonable de años ellas no pueden descansar en las promesas de un Gobierno, si los partidarios del mismo anuncian un futuro próximo que destruirá las bases de aquellos programas productivos.

Por eso, el esfuerzo del Presidente Frei por consolidar su propio Gobierno es el mejor camino para la defensa del porvenir de su partido. En cambio, las indefiniciones ideológicas en el Gobierno y en el partido constituyen el mayor riesgo de la experiencia demócrata-cristiana.

Una reforma clave (24 de marzo de 1968)

En la primera quincena de marzo se produce la renuncia del Ministro de Hacienda, Raúl Sáez, asumiendo la Cartera Andrés Zaldívar (EM, 16 marzo, págs. 1-35).

La causa de esta renuncia fue la eliminación de un tope máximo establecido en la ley de reajuste de remuneraciones, que se efectuó a fin de obtener el apoyo de los comunistas para despachar el Proyecto.

Sáez señaló que no se podía seguir viviendo del alto precio del cobre ni sobre la base de préstamos, sin tener reservas para el futuro.

La Semana Política

UNA REFORMA CLAVE

Tras el breve paso de don Raúl Sáez por el Ministerio de Hacienda, el país quedó públicamente notificado de la seriedad de la situación fiscal y económica. Nunca deben admitirse los desalientos, pero ya no resulta posible alimentar ilusiones en presencia de la grave amenaza inflacionaria y del descenso de la velocidad del crecimiento económico, que anotó el ex Ministro.

El diagnóstico del señor Sáez fue que el avance social en los últimos tres años no se costeara con el crecimiento económico.

Sería preciso añadir que la causa de este desequilibrio en el avance reside en que la democracia cristiana ha enfocado primero las reformas de la sociedad, relegando a segundo término la reforma del Estado. En los primeros meses de esta Administración se envió al Congreso un proyecto de reforma constitucional, pero ella incluía muchas materias y declaraciones programáticas, lo que permitió que no se acentuara lo esencial, es decir, las medidas conducentes al trabajo armónico y positivo de los poderes públicos.

Cuando las reformas de la sociedad no van acompañadas de condiciones para que toda la estructura del Estado funcione eficazmente, las primeras corren el peligro de vaciarse de contenido o de actuar como fermentos de desorden.

Ha continuado el proceso de gigantismo del aparato gubernamental, mientras persiste la indefinición de las responsabilidades entre el Ejecutivo y el Congreso sobre materias básicas. Esto provoca mutuas recriminaciones entre ambos poderes públicos, pero ninguno de ellos tiene posibilidades reales de conducir racionalmente la política social, económica y financiera.

La realización del programa del Presidente Frei, en términos compatibles con la estabilidad monetaria y el equilibrio del presupuesto, exigía que se depositara exclusivamente en el Ejecutivo la iniciativa para aumentar o reducir por ley todo gasto o carga social en el sector público o privado, ampliándose al efecto las disposiciones constitucionales restrictivas de las facultades del Congreso en materia económica. Los gastos previsionales, los reajustes obligatorios, los

tributos de cualquier índole debieran iniciarse sólo por moción del Ejecutivo.

De este modo los partidos no utilizarían los impuestos, los reajustes y los gastos públicos con fines electorales, pues sus parlamentarios serían llamados a aprobar o rechazar los que propone el Ejecutivo. Por su parte el Presidente de la República, como Jefe del Estado y del Gobierno, sería el único responsable de toda medida estatal que tenga influencia sobre la economía del país, dadas las herramientas que le proporcione el Congreso.

Ni siquiera el partido o los partidos que apoyan al Presidente de la República podrían ser acusados de interferir en forma negativa en la conducción económica y social del país, pues, dentro de los recursos que el Congreso proporcionara al Ejecutivo, la exclusiva responsabilidad en dicha conducción pertenecería al Presidente.

Con esa sola reforma constitucional, planteada en forma previa a los demás proyectos de esta Administración y sin otros contenidos programáticos o ideológicos, el avance planeado por el Gobierno habría tenido el equilibrio que le falta y, por tanto, condiciones de verdadera permanencia.

POLÍTICA A LARGO Y A CORTO PLAZOS

Contradiciendo el sentido tecnológico de la época, el país se sume en el abstraccionismo fácil y en el ideologismo inoperante. Las grandes palabras tienen más atracción que los hechos. Por eso se descuidan los problemas elementales, para atender a la oratoria.

Entre esos problemas elementales está el financiamiento del nivel de vida de los chilenos y de sus expectativas de mejorarlo en el futuro. Las finanzas están ligadas a la habitual pugna entre los ingresos y los gastos. Toda su ciencia consiste en gastar lo que se tiene o lo que se puede reembolsar en tiempo razonable a los acreedores.

La naturaleza de los asuntos financieros obliga a solucionarlos en un plazo largo y supone que el encargado de ellos adopte oportunamente las decisiones necesarias. Esta es la razón por la cual todos los países que avanzan se dan una administración financiera estable, independiente y vigorosa. Los Ministros de Hacienda que están sujetos, quieranlo o no, a las exigencias de los partidos y cuya permanencia en el cargo depende de caprichos políticos a veces insignificantes, tienen grandes dificultades para realizar su obra.

En nuestro país, las distintas Administraciones han cambiado Ministros de Hacienda con la frecuencia que determinan los vaivenes partidistas. La actual mantuvo por tres años a don Sergio Molina, pero durante su desempeño éste no gozó de la libertad que requería para ajustar los gastos a las entradas. Los tropiezos de su sucesor no fueron económicos y financieros, sino políticos. El tercer Ministro de Hacienda del régimen, don Andrés Zaldívar, es él mismo un político, que cuenta con el respaldo de su partido y que espera con razón que éste lo acompañe en la difícil labor de reordenamiento financiero que afronta. Pero quedan los otros partidos opositores a la espera de frustrarlo.

La estabilidad e independencia de los Ministros de Hacienda están ligadas estrechamente a la reforma constitucional que entregue sólo al Ejecutivo la iniciativa sobre gastos y cargas sociales. En tanto que los parlamentarios, presionados por sus electores, lleven al Congreso temas financieros con intención política, el país seguirá malbaratando recursos y perdiendo oportunidades de desarrollo.

El Estado moderno tiene necesidad de mantener políticas a largo plazo, como la de relaciones exteriores, la de defensa y la de economía y finanzas. Estas tienen que desligarse en lo posible de las políticas a corto plazo, influidas, sobre todo, por los episodios electorales.

Por otra parte, no distinguir entre los dos órdenes de asuntos es una de las maneras de perder o disminuir su electorado, que espera las consultas cívicas para saldar cuentas y castigar errores.

AUTOCRÍTICA DEMOCRATACRISTIANA

Se ha conocido un informe político de un senador demócratacristiano que, pasando por alto las causas reales de la desorientación que sufre el partido, no rehusa el entendimiento de éste con el comunismo.

"No repudio un entendimiento con sectores políticos de avanzada -dice- y me complacería saber que ha sido posible suscribir un acuerdo del Gobierno con partidos populares".

En el lenguaje en boga, los sectores de avanzada y los partidos populares son evidentemente los de la izquierda. Sería difícil que la alusión a ellos comprendiera a los radi-

cales y socialistas, que no encuentran caminos o terrenos para avenirse con el Gobierno. De ahí es que se deduzca que los aliados posibles son los comunistas, que sorpresivamente revelan una actitud colaboradora.

Cuesta creer que el pesimismo de ciertos grupos demócratacristianos los lleve hasta complacerse en la posibilidad de un acuerdo con los comunistas. Esta posición suicida ha sido adoptada por demócratas de muchos países, que llevan largos años bajo la dictadura totalitaria. Los demócratas que así actuaron se recuerdan como protagonistas de la entrega de las libertades de sus patrias. No parece posible que, después de tan larga y dolorosa experiencia mundial acerca de las alianzas con el comunismo, haya demócratacristianos chilenos que no ofrezcan otra alternativa que repetir la experiencia, abandonando la "alternativa histórica" que reivindicaban para su partido.

Esa actitud es una lamentable consecuencia. La opinión pública no olvida que en la última campaña presidencial la democracia cristiana se presentó como el único camino para derrotar al comunismo y que en esta virtud triunfó en las elecciones, con el concurso de fuerzas independientes y de derecha.

La flexibilidad política no puede extremarse hasta el punto en que el partido que la propugna se desconoce a sí mismo y niega la imagen que ha proyectado en el país y en el extranjero.

La flexión que propicia este político demócratacristiano autorizaría para que miles de votantes del Presidente Frei se sintieran víctimas de un engaño sin precedentes y que,

esta vez con justicia, merecería el calificativo de histórico.

El corolario de esta "autocrítica" envuelve un augurio de abdicación

doctrinaria que señala a dónde van a parar los abstraccionismos o ideologismos que se alejan de la modesta realidad del país.

Trabas presidenciales

(7 de abril de 1968)

El artículo hace referencia a las reformas constitucionales, destinadas a fortalecer el régimen presidencialista, que fueron planteadas al comienzo de la Administración Frei, pero que debieron desglosarse para impulsar sólo algunos aspectos más urgentes.

Lo anterior a raíz de un análisis efectuado en el Senado por el Secretario General del Partido Comunista, Luis Corvalán, en que critica justamente el régimen presidencialista, con ocasión del trámite del proyecto de reajuste (texto completo: EM, 6 abril, pág. 23).

La Semana Política

TRABAS PRESIDENCIALES

"Prisionero de las leyes" se denominó a sí mismo el Presidente Ibáñez, a causa de las trabas que, a su juicio, le surgían desde la Administración misma y desde el Parlamento. Su sucesor, el Presidente Alessandri, experimentó en especial las dificultades que se plantean entre un Ejecutivo que dura seis años y que es responsable de administrar el país por ese largo período y un Congreso que se renueva con mayor rapidez y en que los partidos necesitan atender a las presiones del electorado. Por eso este último Mandatario creyó indispensable una reforma constitucional que limitara la iniciativa parlamentaria en leyes de trascendencia económica a fin de que el Ejecutivo tuviera la exclusiva acción en este campo preciso así como tiene la responsabilidad exclusiva de la política fiscal y económica.

El señor Alessandri sólo envió al Parlamento el proyecto de reforma constitucional en el último año de su período, oportunidad en que no

era políticamente posible despa-charla, pero dejó insinuado el camino a sus sucesores.

El Presidente Frei envió su reforma constitucional al Congreso en el segundo mes de su Administración. Ella contiene disposiciones análogas a la reforma Alessandri, dentro de muchas otras que obedecen a propósitos políticos, o programáticos diversos.

De este proyecto, la única norma aprobada es la reforma de la garantía constitucional de la propiedad, cuya tramitación fue posible porque un senador demócratacristiano dio su voto a un proyecto del FRAP sobre la materia. El extenso debate sobre la propiedad ocupó de tal modo la atención de los poderes públicos que hizo imposible atender a la reforma constitucional básica, a la destinada a impedir que el Parlamento genere por sí solo normas que barren la labor del Ejecutivo.

Aunque el Presidente Frei llegó al poder supremo con una larga experiencia parlamentaria, no tardó en encontrarse en conflictos análogos a los que habían sufrido sus an-

tecesores, pero aún de mayor gravedad.

Es explicable que estas dificultades hayan hecho renacer en el Gobierno la idea que planteó al empezar sus labores, pero las circunstancias políticas de hoy son todavía más incompatibles con una reforma constitucional presidencialista que las que existieron en las postrimerías de la Administración Alessandri.

Si el Gobierno encuentra dificultades muy serias para el despacho de un proyecto financiero y de reajustes, es fácil apreciar las que encontraría para obtener una reforma constitucional que limitara el margen que hoy tienen los partidos para ejercer oposición legislativa.

Lo probable es que dicha reforma no prosperara o que su despacho entregara, como ya ha sucedido, una iniciativa desnaturalizada y hasta contradictoria con su intención inicial.

AUMENTANDO LAS DIFICULTADES

El secretario general del Partido Comunista, senador don Luis Corvalán, ha demostrado en la discusión del proyecto de reajuste la hostilidad de su partido hacia el régimen presidencial chileno. "Desde hace tiempo, ha dicho el senador Corvalán, el régimen presidencial viene permitiendo que a poco de constituirse un gobierno, se cree un divorcio muy grande entre los pasos del Ejecutivo, y lo que quiere la mayoría de los chilenos y, en ocasiones, el o los partidos que lo sustentan".

Ha añadido que "una sola persona con el título de Presidente de la República, por muy capaz o inteli-

gente que sea, está expuesta a errores muy graves y no se puede seguir dejando en sus manos tantas atribuciones".

"No somos partidarios que mande de una sola cabeza, ni tres o cuatro", continúa. "Somos partidarios de que mande el pueblo a través de los partidos y corrientes que representan sus aspiraciones e intereses".

Incurriendo en la habitual contradicción comunista, el senador exige para Chile un gobierno parlamentario, o mejor dicho, una asamblea confusa, en que manden partidos y "corrientes", mientras en los países comunistas se da de una manera u otra la rígida dictadura personal y de partido único. Este partido tiene la originalidad de hacer en el poder todo lo contrario de lo que plantea antes de llegar a él.

El discurso del senador Corvalán no perseguía sólo el planteamiento de una tesis constitucional, sino principalmente hacer recaer sobre la persona del Presidente de la República la responsabilidad por la inflación, acusándolo al mismo tiempo de separarse de su partido y de obedecer sugerencias "reaccionarias". Hasta ahora los comunistas habían respetado al Presidente de la República, limitándose a atacar a sus colaboradores inmediatos que no siguen las consignas extremistas. Esta es la primera oportunidad en que el blanco elegido es el Presidente Frei, pues la nueva táctica es aislar al Gobierno y buscar aliados en el partido que lo apoya. La crítica al sistema presidencial constituye una forma velada de decirles a los demócratacristianos que su Presidente y líder se aparta de la doctrina y de la militancia, a pesar de que

formó su partido y lo condujo a la victoria.

Los conceptos comunistas ilustran además sobre el destino que tendría una reforma constitucional presidencialista en el momento presente. Ella sería objeto de extenuados debates, para llegar al fracaso o a la asamblea heterogénea que se ha insinuado.

Pese a las trabas a que está sometido el Gobierno, es preferible para el país mantener el régimen presidencial, con sus imperfecciones, que exponerse a que el Ejecutivo quede todavía más maniatado.

LA PROPOSICIÓN COMUNISTA

Establecer en la cúspide del Estado una asamblea de plenos poderes implica la destrucción de toda posibilidad de orden público, de eficiencia administrativa y de progreso económico.

En este gobierno colectivo en que podrían entrar no sólo los partidos sino las "corrientes", nadie tendría el mando, pero la confusión sería bien dirigida por la férrea disciplina interna comunista. Ello sería de hecho la instauración de los comunistas en el gobierno, que siempre empieza con un período de profunda anarquía.

Si el cauto secretario general del partido no ha vacilado en disparar contra el régimen constitucional chileno, que rige desde Portales, con sólo un intervalo de parlamentarismo aristocrático, hay motivo para pensar que el comunismo se siente seguro de su poder y que ya no se contenta con reformas sociales sino que se dirige a las estructuras

políticas más sólidas y respetadas del país.

El régimen presidencial chileno no ha ofrecido dudas acerca de su plena justificación. Nuestro sistema democrático y la evolución social y política ordenada han sido posibles gracias a esta fórmula, que combina la autoridad con la libertad. Si el presidencialismo fue sabio en la organización de la República, que contrastó en sus primeros tiempos con el despotismo y la anarquía reinantes en naciones hermanas, su eficacia se comprobó en el período de los decenios y el fracaso del parlamentarismo impuso su restauración.

Este régimen, profundamente arraigado en el alma nacional, resulta ser además la fórmula de gobierno contemporánea. Los escasos sistemas parlamentarios que sobreviven, o se debaten en el desorden o deben entregar grandes poderes a un primer ministro. La complejidad del mundo moderno, en que la mayor parte de los problemas no son de carácter ideológico sino de técnica social y económica, no se presta para los discursos de asamblea sino para la acción de un gobernante, asistido de equipos eficaces para programar y realizar.

El hecho de que los comunistas las arremetan ahora contra el Presidente de la República y contra el régimen presidencial debiera poner en alerta a las fuerzas democráticas. Los ataques al Jefe del Estado están demostrando que no lo necesitan y que están seguros de encontrar acogida en sectores democratacristianos, a espaldas y en contra de quien los formó y elevó al poder. La embestida contra el régimen presiden-

cial es la declaración de guerra contra la democracia chilena y la evidencia de que el Partido Comunista se propone realizar en Chile, a no

muy corto plazo, el cambio del régimen de libertades que enorgullece al país por la dictadura que sofoca actualmente a tantas naciones.

Partido frente a Gobierno

(11 de agosto de 1968)

Nuevamente el tema de la actualidad política es la Junta Nacional celebrada por la Democracia Cristiana.

La directiva encabezada por Jaime Castillo no postuló a la reelección, lo que a su vez determinó el retiro de la lista del denominado "tercerista" (Jacques Chonchol, Julio Silva Solar, Luis Maira), para dar paso a una directiva encabezada por el senador Renán Fuentealba, presidente; vicepresidentes, Bernardo Leighton y Eduardo Cerda; secretario, José de Gregorio y tesorero Carlos Garcés (EM, 5 agosto, pág. 30).

La primera actividad de la nueva directiva fue obtener que el Presidente Eduardo Frei dejara sin efecto la petición de renuncia a su cargo de Jacques Chonchol, vicepresidente de Indap (EM, 7 agosto, pág. 23).

La Semana Política

JUNTA NACIONAL DC

En la Junta Nacional democratacristiana que terminó sus labores en la madrugada del domingo se designó a la directiva encabezada por don Renán Fuentealba. Esa fórmula de avenimiento se produjo cuando ya era claro que la reelección de don Jaime Castillo, candidato afecto a la línea del Gobierno, presentaba dificultades después del amplio triunfo de rebeldes y terceristas en el consejo nacional y de la importante participación conquistada por éstos en el tribunal de disciplina. Más aun, la candidatura Fuentealba trajo el retiro simultáneo de las listas encabezadas por los señores Castillo y Chonchol. El eventual triunfo de este alto funcionario del Gobierno habría sido un revés muy ostensible para La Moneda, ya que él se ha destacado por su oposición a la política del Presidente Frei.

El señor Chonchol tuvo en la junta una intervención severamen-

te crítica para el Gobierno. Además presentó un voto, que fue aprobado por unanimidad pero cuyos considerandos han quedado en la más estricta reserva, por el cual se propone la celebración de un congreso del partido después de las elecciones parlamentarias de marzo próximo.

Sin que la directiva nueva se identifique absolutamente con la derrotada en la Junta Extraordinaria de Peñaflor, merced a la acción directa del Presidente de la República, puede advertirse que terceristas y rebeldes controlan los organismos del partido y que hay en éste una tendencia a invalidar políticamente los resultados gubernativos de Peñaflor.

Cuando el Jefe de Estado tuvo noticias de que un alto funcionario de su confianza exclusiva encabezaba la oposición contra el Gobierno dispuso que se le pidiera la renuncia. En el ánimo del Presidente jugó sin duda la consideración de

que el ejercicio de la libertad de crítica dentro del partido debía ser compatible con el ejercicio de la libertad del propio Presidente para mantener a sus colaboradores mientras cuenten con su confianza.

En la mañana del lunes último se confirmaba que el primer resultado de la junta era la renuncia del señor Jacques Chonchol. No obstante, el mismo día se reunieron a almorzar con S.E los miembros de la nueva directiva y algunos Ministros de Estado. El resultado de estas conversaciones fue revocar la petición de renuncia y negar trascendencia a lo sucedido.

La opinión pública quedó, en el primer momento, con la impresión de que el señor Chonchol había dado explicaciones satisfactorias al Gobierno, pero realmente fueron los miembros de la directiva demócratacristiana los que justificaron las actitudes antigobierno del discutido funcionario como propias de la libertad de opinión reinante en el partido. Por lo demás, el interesado dejó entender en la prensa que no había sido él quien había retrocedido en estos episodios.

Es visible el esfuerzo de la directiva demócratacristiana y del Gobierno por olvidar el grave sismo político de la junta y las actitudes y distancias que han estado produciéndose en el seno del partido, pero las expresiones amistosas no logran superar diferencias de criterio, que parecen resolverse en contra del Gobierno y de su equipo.

PARTIDO FRENTE A GOBIERNO

La sustancia de lo discutido en la Junta Nacional era el apoyo del partido a la política del Presidente Frei,

expresada sobre todo en la persona del Ministro del Interior, don Edmundo Pérez Zujovic.

Aun prescindiendo de todo aspecto doctrinario, puede comprenderse que un Gobierno sostenga con la mayor energía el orden público y que se muestre dispuesto a enfrentar toda forma de subversión. Sería una conducta contradictoria la de aquel gobernante que defendiera el desorden y la revuelta, porque ello es lo mismo que buscar su propio derrocamiento.

Los Ministros que acompañan al Presidente Frei se presentaron a la Junta Nacional de su partido seguramente con la firme creencia de que la colectividad de Gobierno, pese a tener corrientes discrepantes, podría coincidir en el interés común de conjurar la anarquía y la subversión. Sólo en los opositores a un Gobierno podría darse la indiferencia y hasta la irresponsabilidad frente a las fuerzas destructoras de la democracia. Sin embargo, hay sectores en el Partido Demócrata Cristiano que aceptan no sólo como ineludible sino como favorable la convivencia con el totalitarismo marxista, al punto de que no ven sino progresos en el avance pacífico o violento de la extrema izquierda. Tal es la razón por la cual el problema del orden público no tiene la misma fisonomía para los demócratacristianos gobiernistas que para los rebeldes. Y ello explica que la posición del Gobierno haya carecido del respaldo que pudiera esperarse.

La trascendencia política de estos hechos es evidente. La línea del actual Gabinete no coincide con la de la mayoría de la junta del partido de Gobierno. Para soslayar esta di-

ferencia se la da en primer lugar por inexistente y, en segundo término, el equipo gubernativo se ve forzado a ceder frente a las presiones del partido, con el argumento de evitar daños mayores. Las trizaduras y aun las grietas hondas se recubren en la superficie, pero es innegable que hay un deterioro que aísla al Gobierno de las capas nuevas del partido y que lo aleja también de los antiguos amigos.

Podría decirse que el actual Ministerio ha quedado virtualmente como de Administración, a pesar de que lo forman demócratacristianos cuyo partido es el apoyo político del Gobierno. Pero la creciente falta de homogeneidad en la democracia cristiana obliga a distinguir grupos y subgrupos dentro de ella, incluyendo a aquellos militantes que por sobre todo son amigos y viejos compañeros de lucha del Presidente Frei. Corresponderá, sin embargo, a éste decidir si los difíciles problemas políticos, económicos y sociales que lo esperan pueden abordarse con un equipo que, a falta de apoyo partidista, cuenta con el afecto y la fraternidad de sus correligionarios.

LA VICEPRESIDENCIA

El Ministro del Interior, don Edmundo Pérez Zujovic, es el llamado a ocupar la Vicepresidencia de la República en los días en que el Presidente Frei realice su visita oficial a Brasil.

Este Ministro no sólo se ganó la creciente confianza del Jefe del Estado mientras le cupo actuar como subrogante en la Cartera del Interior, sino que ha desempeñado desde ese

cargo un papel decisivo en la orientación general del Gobierno. Eso explica que la Junta Nacional Demócrata Cristiana se planteara en el fondo en contra de la política del señor Pérez Zujovic.

Si toma el mando supremo por los días en que el Presidente Frei esté fuera del territorio, habrá recibido del Jefe del Estado una nueva confirmación de la confianza política en él depositada, gesto que implicaría que el Presidente opta por el Ministro pese a los resultados de la Junta.

En el temperamento nacional tan inclinado a las vacilaciones y tardanzas, un político amigo de decidir con rapidez se impone a la opinión pública y a los círculos políticos. Tal parece ser la causa del rápido prestigio logrado por el señor Pérez Zujovic, prestigio que no se forma sólo de elogios sino también de ataques e incomprensiones, todo lo cual contribuye a destacar a las figuras políticas y a dar vigor a sus rasgos.

El Presidente de la República ha mostrado con hechos su profunda coincidencia de criterio con el Ministro del Interior.

Por el contrario, el partido, no sólo mediante los discursos y votaciones de la Junta sino ahora a través de las palabras de los miembros de la nueva mesa, muestra con no menos claridad su desacuerdo con la línea del Ministro del Interior, que interpreta hasta ahora la voluntad presidencial.

Vuelve a presentarse la posibilidad de un gobierno de doble comando, como el que aspiraba a hacer la directiva demócratacristiana vencida en Peñaflor. El otro camino

es consolidar el aislamiento político del Gobierno, evento que éste teme con razón. En todo caso, están a la vista posiciones inconciliables en

la democracia cristiana. Ellas deben repercutir en el Gobierno y en el esquema de fuerzas de la elección presidencial de 1970.

La Catedral

(18 de agosto de 1968)

El 11 de agosto, un grupo encabezado por 7 sacerdotes, algunas monjas y cerca de 200 laicos, entre los que se cuenta el dirigente sindical Clotario Blest, realizan una "toma" en la Iglesia Catedral de Santiago (EM, 12 agosto, págs. 1-23-33).

Los sacerdotes Diego Palma, Andrés Opazo, Paulino García, Francisco Guzmán, Carlos Lange, Ignacio Vergara y Gonzalo Aguirre son suspendidos de sus cargos por el Cardenal Raúl Silva Henríquez, pero luego a petición de éstos la medida es levantada.

La Semana Política

LA CATEDRAL

El público se aglomeró en la Plaza de Armas el último domingo interrogando e interrogándose acerca de lo que sucedía en la Catedral de Santiago, ocupada por un grupo de sacerdotes y de laicos.

Lo que pensó el feligrés consuetudinario, el que asistía por años a misa en la Catedral, en los días de precepto, es que el acontecimiento no tenía precedentes. "¿En qué país estamos?", era la pregunta de algún creyente, sorprendido ante el hecho de que, tras la ocupación de la Universidad Católica de Chile y de establecimientos escolares diversos, de fábricas y de empresas agrícolas, hubiera sobrevenido nada menos que la ocupación por nocturnidad del templo metropolitano, transformada en ocupación violenta cuando después las puertas de la Catedral fueron cerradas para los fieles y para las autoridades eclesiásticas a cargo de la arquidiócesis de Santiago, en ausencia del Cardenal Arzobispo que estaba dedicado a tareas pastorales fuera de la capital.

Los periodistas de todos los órganos de información debieron movilizarse el domingo pasado, cualquiera que fuesen sus planes personales en aquel día, a fin de captar el extraordinario suceso que ocurría en la Catedral santiaguina. Los representantes de la prensa extranjera y de las agencias noticiosas se apresuraron a enfocar el evento y a transmitir sus versiones al exterior, de donde, por otra parte, se advirtió rápidamente el interés por recibir un mayor número de palabras descriptivas acerca de los acontecimientos que se desarrollaban en el principal templo católico chileno.

A lo largo de ese día domingo, tan violentamente sorpresivo para la opinión chilena y extranjera, así como para los criterios católicos, y no católicos, nuestro diario intentó ponerse en contacto con las autoridades de la Iglesia Católica. El Obispo Auxiliar de Santiago y los Vicarios de la arquidiócesis emitieron una declaración en la que afirman que "acontecimientos como los ocurridos en el día de hoy, que da-

flan a la Iglesia, ni en su fondo ni en su forma pueden ser justificados". Por su parte, el Cardenal expresó en el puerto de San Antonio que por el momento nada tenía que decir en relación con lo sucedido en la Catedral; pero los que realizaron el asedio periodístico del Primado advirtieron su incomodidad ante un hecho tan inusitado que colocaba a la Iglesia chilena, de la cual el Cardenal tiene la suprema rectoría, en posición desmembrada en la prensa mundial.

El lunes 12 el Cardenal Arzobispo emite una declaración pública en que proclama que ha sido informado por sus Vicarios "de todos los dolorosos detalles de la toma de nuestra Iglesia Catedral". Manifiesta el Cardenal que "unos pocos sacerdotes, olvidados de su misión de paz y amor, han llevado a un grupo de laicos y de jóvenes a efectuar uno de los actos más tristes de la historia eclesiástica de Chile". Añade el Cardenal que "se ha profanado nuestra Iglesia Catedral" y reitera que "se han profanado hermosas tradiciones de nuestra patria en materia religiosa". En otra parte de su declaración manifiesta que "han primado las pasiones sobre los ideales evangélicos" y, en tono de solemne admonición declara: "Queremos que nuestros fieles sepan que condenamos con toda energía estos hechos y que los sacerdotes que han intervenido en ellos se han separado de la comunión con su Obispo".

La declaración del Cardenal Arzobispo, después de urgir al pueblo chileno a que "no se deje influenciar por quienes pretenden llevarlo por los caminos de la violencia", dice en forma textual: "Invitamos a todos

nuestros fieles que el próximo día 15 de agosto, día de la Asunción de la Santísima Virgen, Patrona de Nuestra Iglesia Catedral, ofrezcamos a Dios el Santo Sacrificio, en todas las iglesias, como un desagravio por los lamentables acontecimientos del día de ayer".

Al día siguiente los sacerdotes que ocuparon la Catedral expresaban que les ha causado gran dolor el que su actuación se haya tomado como dirigida contra el Cardenal y piden a éste que les levante la suspensión de sus poderes, en la cual se concretó la falta de comunión de aquéllos con su Obispo. El Cardenal accede y llama a celebrar la Eucaristía el miércoles 14.

El mismo miércoles los sacerdotes suspendidos de sus funciones y rehabilitados por el Cardenal declararon públicamente que su entrevista con el prelado y el levantamiento de la suspensión de sus funciones no debían interpretarse como un "arrepentimiento" del acto realizado el domingo.

"BENDITOS COMUNISTAS"

La prensa ha debido registrar el concepto de "profanación" pronunciado por el Cardenal Arzobispo y por el periódico oficial de la Santa Sede, "L'Osservatore Romano", y darse por entendida de que el Primado de la Iglesia chilena invitó a un acto de "desagravio" para el día 15 de agosto. No es culpa de los periodistas el haber interpretado que el indulto de la suspensión de poderes era "perdón" y que éste seguía al "arrepentimiento".

En fin, es incómodo que la prensa refleje día a día las expresiones de

quienes están en la actualidad. Se quisiera borrar algunas declaraciones que son, por desgracia, irreversibles. Muchos se enojan con los diarios que cumplen su deber de informar y tienden a culparlos de faltas a la verdad. Este sentimiento se presta para la campaña totalitaria marxista, cuyo propósito es silenciar la prensa libre, empezando por su desprestigio. A ello colaboran con entusiasmo otros órganos informativos que, por causas políticas o por afán de lucro, forman filas contra la libertad de prensa.

Cuando nuestro diario denunció la influencia marxista en la ocupación de la Universidad Católica fue víctima de la más injuriosa ofensiva publicitaria. Ha transcurrido un año en que el país ha visto el desarrollo de las fuerzas del desorden y de la violencia. Por la razón que sea, entre los ocupantes de la Catedral se encontraban algunos de los que capitanearon la ocupación de la Universidad Católica. Además, quienes participaron en este último hecho acaban de celebrar su aniversario con un foro sobre las guerrillas, en que intervinieron expertos comunistas y socialistas. Apenas en un año han desaparecido muchas caretas y hay "neo-cristianos" que no temen ya hablar y actuar como marxistas, en tanto que el comunismo da acogida en su propaganda a los cristianos que predicán la revolución eclesiástica y política. "Hermanos marxistas", dice piadosamente uno de estos últimos, y alguien que se dice católica llega a "benditos sean los comunistas", agradeciendo con arrebató el apoyo que brindaron a la ocupación de la Catedral.

Las aseveraciones responsables de este diario acerca del espíritu y carácter de la ocupación de la Universidad Católica han resultado, desgraciadamente, confirmadas por los hechos, como lo saben ya quienes, en agosto del año pasado, creían de buena fe lo contrario. El afán de la propaganda marxista y de la prensa corsaria por desprestigiar a un diario independiente se explica con facilidad. Sólo con el silencio de la opinión pública pueden ahogarse poco a poco e insensiblemente nuestras libertades.

INQUIETUDES COMUNISTAS

Al cumplir el Partido Comunista chileno la respetable edad de 56 años su secretario general se dirigió a sus militantes para desahogar el ánimo frente a las pugnas y enemistades que el partido revolucionario tradicional provoca en la izquierda marxista.

Viéndose vapuleado por el socialismo y los nuevos movimientos de ultraizquierda, fenómeno que no sólo es chileno sino mundial, el comunismo vuelve sus ojos a otros terrenos, que pueden convertirse en una cantera política abundante. "Cualquiera que sea el impacto que en los católicos haya tenido la ocupación de la Catedral, se trata de algo que habla de la crisis de las viejas instituciones y del surgimiento, en todos los órdenes de la vida, de fuerzas que están por la renovación", dice el senador don Luis Corvalán, secretario general del Partido Comunista. En seguida añade: "Conmociones similares sacuden al propio partido de Gobierno, cuya Juventud ya casi no se

puede contener en los marcos de la disciplina".

Estas palabras confirman que el marxismo, explícito o implícito, está penetrando profundamente la atmósfera chilena y no teme dejar atrás a su arisco y reducido aliado socialista. Oficialmente, los comunistas atribuyen el fenómeno a una maduración natural de las conciencias, pero conociendo cómo trabajan ellos aquí y en todo el mundo cuesta creer

que la contención difícil de "neocristianos" no se relacione con activistas y propagandistas que favorecen dicha comunidad.

En todo caso está claro en el discurso citado que los comunistas se sienten en la obligación de conducir el movimiento revolucionario, que comprende, para ellos, la efervescencia católica y democratacristiana, además de la que existe en "la clase obrera y el pueblo".

Decantación radical

(8 de septiembre de 1968)

La invasión soviética a Checoslovaquia, del 21 de agosto de 1968, suscitó en Chile una áspera polémica en el interior del Partido Radical, que se hace pública con la renuncia presentada al Partido por la diputada Inés Enríquez y el senador Humberto Enríquez, quienes en su carta pública al Partido señalan su disconformidad con la alianza del radicalismo con el comunismo chileno, que apoyó sin reservas la mencionada invasión (EM, 1 de sept., pág. 23).

Los dirigentes Hugo Miranda y Orlando Cantuarias, presidente y secretario del Partido Radical respectivamente, defienden su colaboración con los comunistas, y se procede a la expulsión de algunos de los disidentes (EM, 3 sept., pág. 21).

Destaca en la semana previa a este comentario la entrevista de El Mercurio a Salvador Allende (EM, 1 sept., págs. 39-45).

La Semana Política

DECANTACIÓN RADICAL

Los dramáticos sucesos de Checoslovaquia continúan produciendo fenómenos de decantación en diversos países y en distintos sectores políticos dentro de aquéllos.

El fondo del problema consiste en la sinceridad con que las distintas tendencias respetan la libertad de los pueblos para autodeterminarse y, en consecuencia, el derecho de los países comunistas a dejar de serlo, así como antes permitieron el acceso al poder del régimen totalitario.

Era natural que en nuestro país el esclarecimiento de este problema se diera agudamente en el seno del Partido Radical, colectividad que se ha distinguido por su defensa de las libertades públicas y del régimen democrático.

La discusión se planteó con motivo de la renuncia del senador don

Humberto Enríquez y de su hermana, diputada doña Inés Enríquez, a representar al partido en las elecciones de marzo próximo. Los citados parlamentarios declinaron sus postulaciones en vista de que consideraban que la directiva de su partido no tuvo una actitud precisa y categórica ante la invasión de Checoslovaquia por los rusos.

Plantear este debate como un enfrentamiento entre "derechistas" y "progresistas" sería desconocer sus verdaderos términos. Las discrepancias provocadas por la cuestión checoslovaca no han seguido los deslindes habituales de los frentes de la guerra fría internacional. La línea divisoria no corre entre imperialistas y no imperialistas, o entre derechistas y avanzados, sino prácticamente entre el comunismo estalinista de Moscú y sus satélites por una parte, y por otra, los grupos más diversos de Oriente y Occidente, de

comunistas y de anticomunistas, que han visto en la invasión rusa un acto de regreso a las viejas políticas coloniales.

Quienes han tomado parte a favor de Moscú, fuera de los protagonistas de la invasión, son los satélites o en trance de ser satelizados por fuerza o por interés. Todo el resto de la opinión mundial, desde la más extrema derecha hasta la ultraizquierda, por distintos motivos y aun con fundamentos opuestos, han repudiado la ocupación forzosa del territorio checoslovaco.

La terminante condena de los parlamentarios Enríquez hacia la actitud difusa de la directiva de su partido en esta materia obedeció a simple consecuencia política. Ellos vieron desde el primer momento y con la mayor claridad que su partido no podía dejar de definirse ante un dilema universal, colocado más allá del marxismo o del capitalismo. Ese dilema es el de la libertad de los pueblos para adoptar sus propias decisiones. Lo que se discute es si los países necesitan tutores o padrinos que les defiendan su régimen político, o si el mantenimiento de éste queda al albedrío popular. Como se ve, el asunto toca la entraña de la democracia y justificadamente ha conmovido la opinión de todo el mundo.

Un partido de honda raigambre democrática, como el Radical, no podía permanecer en posiciones invisibles en un debate en que estaba comprometida la esencia de la democracia.

"PARTIDO" Y "RADICALISMO"

En la carta en que los señores Enríquez mantienen su decisión de

renunciar a sus candidaturas ante la insatisfactoria respuesta del presidente radical en la cuestión que ellos le formularon, se contienen conceptos dignos de meditar.

Distinguen ellos entre el "Partido" Radical, como entidad oficial y como estructura burocrática, y el "radicalismo" como posición ideológica, como categoría de pensamiento y de acción en la política chilena. Esta distinción, aseveran esos parlamentarios, "es de extraordinaria importancia, desde el punto de vista práctico, porque mientras el Partido registra un limitado número de militantes -los únicos que se expresan en las asambleas y los cuadros partidistas-, el radicalismo vital dispone de un electorado considerable que es el que, en última instancia, elige".

Cualquier observador imparcial concuerda con esta comprobación. La inmensa mayoría de los chilenos no está ni se siente en posiciones extremas de derecha o izquierda, abomina de la violencia y de la tiranía, defiende el valor de la ley y de las libertades públicas, cree prácticamente en la dignidad humana, propugna el avance evolutivo en lo económico y social, y quiere la igualdad real de los ciudadanos en sus ingresos, en sus derechos y en sus oportunidades.

Este es el conjunto de valores chilenos que el radicalismo ha interpretado a lo largo de su historia. Al reflejarlos fielmente, ha perdurado en la conciencia ciudadana y ha recibido en las elecciones una respuesta proporcional a la forma en que sus parlamentarios y dirigentes tradujeron el ideario democrático de la mayoría nacional.

Ese radicalismo de fondo es el que se ha expresado en las manifestaciones contrarias a la directiva oficial del partido. No importa el aspecto material de las protestas y su posible disconformidad con la disciplina del partido. El oficialismo podrá siempre accionar el aparato represivo de las sanciones y expulsiones, pero es discutible que de este modo se consiga que el partido oficial represente en forma genuina al radicalismo vital.

Aunque el fermento de resistencia a la directiva tome formas copiadas de la rebeldía de otros sectores, no hay aquí sino un movimiento de recuperación del radicalismo. Las mujeres y los jóvenes podrán expresarse en términos desordenados y apasionados, pero su sentir no está lejos de lo que con elevación afirman los señores Humberto e Inés Enríquez en su segunda carta a la directiva: "Nosotros creemos -dicen- que, por sobre toda consideración política circunstancial y episódica, el partido debe defender, desde su presidente hasta el último y más modesto de sus militantes, la integridad de los principios radicales y que, al aplicarlos a las contingencias de la vida nacional o internacional, debe hacerlo con la flexibilidad requerida por los hechos, pero con la firmeza, el genio y la personalidad propios de nuestras tradiciones partidistas, sin esos complejos de inferioridad derechista o izquierdista que explotan siempre los adversarios".

UNA POSTURA ANACRÓNICA

La directiva radical ha sacrificado mucho por auspiciar un nuevo

Frente Popular. Detrás de la evasiva posición en el caso checoslovaco, todos han visto el afán de no perder la amistad con el partido que representa en Chile la política rusa.

Los señores Enríquez demuestran que ese intento es anacrónico. Los socialistas, "buenos y leales aliados para los gobiernos radicales, se empeñan en una competencia para agredir, denostar y desprestigiar a nuestro partido", dicen. Por añadidura, los socialistas repudian la vía electoral y propician la violencia. "¿Dónde podemos encontrar con ellos un punto de coincidencia?" se preguntan los hermanos Enríquez.

Y en cuanto a los comunistas, "¿cómo conciliar una acción común frente a su imperialismo y colonialismo, a su atropello en Checoslovaquia y a la amenaza que se cierne sobre Rumania? ¿Cómo hacer compatible nuestro credo democrático y libertario, nuestra actitud frente a la vida, con una conducta que es la negación de nuestra manera de sentir y de pensar?".

En otras palabras, las alianzas que hace años unieron a las fuerzas de izquierda en lucha contra grandes fuerzas de derecha, corresponde a un cuadro superado. La derecha ha disminuido sensiblemente su poder en todo el mundo. Su lugar ha sido ocupado por la izquierda y esta última, como su antecesora, reconoce alas, tendencias y hasta contraposiciones francas. No hay ya una sola izquierda ni siquiera un solo comunismo o un socialismo único.

Además de ello, Moscú ha dejado de ser atrayente para la avanzada política mundial. Se trata en estos momentos de un régimen nacido de una vieja revolución, encamado en

una potencia nacionalista de gran capacidad expansiva y que utiliza a los partidos obedientes, a las naciones y a las colectividades satélites para sus fines políticos de predominio.

Al plantearse la cuestión checoslovaca, es decir, la pregunta acerca de si debe haber potencias pater-

nalistas guardianes de la ideología democrática o comunista, el Partido Radical oficial guardó silencio, con el ánimo de resucitar el Frente Popular. Incurrió así en el doble anacronismo de regresar a 1938 y de callar ante viejas prácticas imperiales. Hay motivo, entonces, para la inquietud del radicalismo profundo.

La unidad en la Democracia Cristiana

(13 de octubre de 1968)

La directiva de la Democracia Cristiana, encabezada por el senador Renán Fuentealba, mantuvo durante la semana conversaciones con los ministros de Hacienda, Vivienda y el Ministro del Interior, los dos primeros recién designados, a fin de que éstos explicaran las políticas que estaban desarrollando en sus respectivas carteras. Especial relieve tuvo la entrevista con el Ministro del Interior, relativa a la política para mantener el orden público (EM, 13 octubre, pág. 43).

El artículo se refiere también al Pleno Nacional del Partido Comunista, que apoyó la invasión de tropas soviéticas a Checoslovaquia (21 de agosto de 1968) e hizo llamados a los sectores juveniles y rebeldes de la Democracia Cristiana.

La Semana Política

CAMBIOS MINISTERIALES

La gestación de los acuerdos entre el Ejecutivo y la democracia cristiana sobre renuncias y nombramientos en dos Carteras ministeriales fue prolongada debido a disparidades en el seno de esa colectividad política.

Prescindiendo de la muy clara facultad del Presidente de la República para nombrar y remover a sus Secretarios de Estado, hay que fijar la atención en la actitud de la directiva democratacristiana. La pugna que se planteó en torno a la renuncia del Ministro de la Vivienda y Urbanismo, Juan Hamilton, obedece a motivos personales y políticos. Los primeros se relacionan con el cambio de criterio del señor Hamilton, quien había declarado su propósito de dejar la Cartera, y en el momento en que debía hacerse efectiva su renuncia cambió de modo de parecer. Esta actitud no puede atribuirse en ningún caso a una consideración egoísta, reñida con el

carácter del ex Ministro, sino más bien a un deseo del Presidente de la República de conservar a un colaborador muy estimado. La directiva democratacristiana no aceptó esta modificación de criterio y logró finalmente imponer el acuerdo por la postulación senatorial del señor Juan Hamilton por la Décima Circunscripción.

Para los actuales dirigentes democratacristianos el problema no era tanto medir fuerzas con el Jefe del Estado o discutir su prerrogativa constitucional, sino dar al país la imagen de un partido que adopta acuerdos en razón de sus conveniencias y que además obliga a los militantes, por elevada que sea su jerarquía, a someterse a dichos acuerdos.

Como consecuencia de las razones que tuvo la democracia cristiana para señalar a los ex Ministros Juan de Dios Carmona y Juan Hamilton a puesto en la lucha senatorial de marzo, debió someterse a la voluntad presidencial para el nom-

bramiento de los reemplazantes de esas Carteras, que fueron escogidos por el Presidente dentro de las filas de la democracia cristiana, pero a base de su relación personal con los nombrados. Es así como ascendió a la Cartera de Economía el Subsecretario del Interior, Enrique Krauss, y entró a servir la de Vivienda Andrés Donoso. La condición doctrinaria se cumplía, pero dentro de la libertad constitucional de que goza el Presidente de la República para hacer estos nombramientos.

En los círculos políticos ajenos a la democracia cristiana los movimientos ministeriales a que nos referimos dieron origen a especulaciones sobre la creciente oposición interna que encuentra en su partido el Presidente Frei. Sin ponderar el grado de importancia de los sectores inconformistas, el senador Renán Fuentealba, en reciente declaración pública, precisó que el extenso debate a que habían dado lugar las renunciaciones y nombramientos de Ministros se debía a que el sector llamado "rebelde", haciendo uso legítimo del derecho que le concede una colectividad democrática, expuso su criterio disconforme con las resoluciones presidenciales.

Ese mismo sector, según lo reconoce el presidente de la democracia cristiana, es el que planteó la invitación al Ministro del Interior para discutir con él la política aplicada en el mantenimiento del orden público.

LA UNIDAD EN LA DEMOCRACIA CRISTIANA

Al nombrarse la última directiva se desplazó la que había ascendido con el respaldo personal del Presi-

dente de la República. Sin embargo, el nuevo presidente, senador Fuentealba, fue explícito para declarar que haría los mayores esfuerzos en favor de la unidad interna. Este programa se está cumpliendo gracias también a la circunstancia favorable que significa la proximidad de las elecciones parlamentarias, que obligan a los militantes a una mayor subordinación, sobre todo si postulan a ocupar bancas en el Congreso.

Esto no significa que desaparezcan las discrepancias doctrinarias y la inclinación de algunos sectores hacia una línea más izquierdista que la que ha seguido el actual Gobierno. A través de las declaraciones hechas por el ex Embajador Tomic, que aparece como el candidato de vanguardia de la democracia cristiana a la Presidencia de la República, trasciende la opinión de que la democracia cristiana ha representado un gran avance en el campo social, pero "que la estructura propiamente conocida de país no ha sido modificada en profundidad". Agregó en sus declaraciones que era personalmente partidario "de intentar a fondo un entendimiento entre todas las fuerzas políticas y las fuerzas sociales que creen en la necesidad de dar a Chile instituciones fundamentales más adecuadas que las que sobreviven del pasado y que están, además, dispuestas a substituir las estructuras capitalistas por la de una economía, empresa y sociedad comunitarias".

Estas manifestaciones del destacado político interpretan, si no a la letra, por lo menos en espíritu, el informe técnico político de la vía no capitalista. Su planteamiento permite, pues, esperar que si su pos-

tulación para las elecciones de 1970 se oficializa en el próximo congreso demócratacristiano, el partido estará ideológicamente en sintonía con los sectores inconformistas de hoy y en general con lo que se muestran llanos a buscar apoyos en partidos de extrema izquierda.

LOS COMUNISTAS SALEN AL PASO

El Partido Comunista chileno puede exhibir hoy, como nunca, control férreo sobre sus afiliados. A un mes de los acontecimientos de Checoslovaquia que han producido desorientación y posiciones encontradas en el comunismo internacional, puede mostrar que sus huestes siguen ciegamente las consignas de una directiva sumisa a Moscú. La posición monolítica le ha permitido realizar un Pleno Nacional en que no se oyó voz alguna disidente, a diferencia de lo que ocurre en las organizaciones congéneres de Europa y otras latitudes. Las consignas del Pleno han sido repetidas con impresionante semejanza por el relator principal y por todos los oradores que participaron en la reunión. Se ve que el documento básico está hecho con el mismo leit motiv que inspiró el discurso del secretario general, y los llamados de este último se identifican plenamente con las posiciones más oportunistas de esta hora de la política nacional. El pensamiento central está expresado en la idea de que el comunismo debe ser el monitor de todas las fuerzas que piden el cambio, y yendo aún más lejos, se lo señala como al único partido capaz de superar la dispersión de las fuerzas populares. A coro reitera que siendo el partido

que está cohesionado es el que le ofrece al pueblo una perspectiva real de victoria. "Unidad en la lucha y a superar la dispersión" es uno de los lemas; "son factibles y necesarias las acciones comunes" es otra de las consignas del flexible Partido Comunista. Luego aparecen los llamados a esas tareas afines, envueltos en terribles amenazas para el porvenir de los partidos de avanzada. Sin eufemismos se dirige a las fracciones socialistas que luchan irreconciliablemente, diciéndole a cada cual su frase de advertencia. En este movimiento envolvente el Partido Comunista ya no tiene inhibiciones frente al Partido Radical, al que admite de lleno para constituir un nuevo Frente Popular.

"Para nosotros es claro -dice el orador oficial- que está mayoritariamente constituido por gente de izquierda, modesta y que quiere entenderse con el FRAP...". En cuanto al partido de Gobierno le busca el flanco más abordable. "Los jóvenes demócratacristianos y el sector rebelde de ese partido -expresa la Comisión Política en el Pleno- no han ocultado su opinión discrepante respecto de la conducta política del Gobierno y de los sectores reaccionarios de su partido".

Los estrategos tienden todos los puentes para que las fuerzas democráticas hallen el camino de la unión con el marxismo.

A los comunistas no les preocupa tanto el objetivo de aumentar sus puestos en ambas Cámaras como manejar el timón de un movimiento que bajo distintas banderas les permita introducirse en el poder, como lo introdujeron transitoriamente en épocas del pasado.

La confesión a este respecto es clara: "Al concebir nuestra participación en el Parlamento, los comunistas tenemos siempre presente el principio leninista acerca de la importancia de la acción parlamentaria con la acción extraparlamentaria, es decir, la que se realiza en el seno mismo de las masas en lucha". Y en otra parte del informe: "Las próximas elecciones parlamentarias adquieren un relieve aún mayor al estar estrechamente unidas al desarrollo del proceso revolucionario chileno".

El colofón de esta pieza, confeccionada con la astucia de elementos políticos para quienes el fin justifica los medios, es una apertura sin condiciones doctrinarias. "Concebimos la unidad socialista-comunista como la base de la más amplia unidad popular, del entendimiento de los partidarios de los cambios..."

El Pleno se ha celebrado en un momento en que las voces de sirena del comunismo necesitan ser más seductoras que en otras ocasiones, a fin de borrar la mancha de Checoslovaquia.

Labor de cuatro años

(10 de noviembre de 1968)

Con motivo de cumplir 4 años en el Gobierno, el Presidente Eduardo Frei realiza una reunión de prensa con periodistas de todo el país (EM, 5 nov., págs. 1-11).

Por su parte, los aspectos económicos son tocados por el Ministro de Hacienda, Andrés Zaldívar, en su exposición ante la Comisión Mixta de Presupuesto del Congreso. En ella señala 3 problemas económicos fundamentales: una carrera redistributiva exagerada; falta de ahorro y exceso de gasto público (EM, 3 nov., pág. 29).

Mientras tanto la Juventud Demócrata Cristiana plantea su línea de acción, señalando que el dilema es: revolución socialista o regresión derechista. El informe del Presidente de la JDC, Enrique Correa, tiene como slogan "a terminar con los momios, estén donde estén" (EM, 4 nov., pág. 35)

La Semana Política

LABOR DE CUATRO AÑOS

Al cumplir cuatro años de Gobierno, el Presidente Frei se reunió con periodistas de los diversos medios de información a fin de dar respuesta a las preguntas que éstos le formularan previamente.

La opinión pública ha podido tener así nuevamente una imagen clara de las realizaciones gubernamentales. Sabemos por el Presidente que han quedado echadas las bases para una transformación del país y que, a su juicio, podría hablarse ya de socialismo de Estado.

En concreto, las matrículas educacionales han subido en promedio un 26,3 por ciento; se ha legislado en favor de la sindicación, en términos que permiten organizar a un 30 por ciento de la población chilena; se dictó la ley sobre juntas de vecinos para organizar, a su vez, a los pobladores y a los habitantes de los barrios; se ha constituido la Promo-

ción Popular, encargada de activar la organización e integración de la comunidad; existen 19.889 organizaciones sociales de base, y está en marcha la reforma agraria, con una expropiación de 1 millón 290 mil hectáreas, que incluye el 13 por ciento de la superficie regada del país.

Continuando un proceso que venía de administraciones anteriores, el Estado ha tomado para sí un enorme campo: realiza el 71 por ciento de inversión nacional y tiene a su cargo totalmente o con muy importantes porcentajes actividades financieras, bancarias, mineras, industriales y comerciales.

Chile es un país en que el Estado había adquirido notoria influencia en la promoción, en el financiamiento y en la orientación de la economía. En estos cuatro años esa tendencia se ha acentuado y parece seguir acentuándose, a juzgar por los proyectos en carpeta.

Por otra parte, la distribución de la renta nacional, entre nosotros, era en 1960 muy semejante a la que existía en Estados Unidos en 1950 y se acercaba a la de Francia en 1962. La acción redistributiva del actual Gobierno hizo que en 1967 pudiéramos vanagloriarnos de tener escalones de ingreso iguales a los de Inglaterra, Suecia, Dinamarca y Noruega, como los tenían esos países hacia 1963, y de haber sobrepasado a Francia en igualitarismo económico.

Pero lo que no ha podido acercar nuestro pueblo a los niveles de vida de las grandes naciones occidentales es lo menguado del ingreso general que, se reparta como se reparta, no alcanza para atender a las necesidades mínimas de todos.

Tenemos, pues, amplia redistribución del ingreso, creciente participación estatal en la economía, inversión masiva en educación y en otros objetivos sociales, leyes y organismos comunitarios, y reforma agraria. He aquí un conjunto incompleto de políticas e iniciativas del actual Gobierno, en cuatro años.

No menos importante que todo ello era el crecimiento del producto nacional, esto es de la riqueza global del país susceptible de emplearse en la satisfacción de las necesidades presentes y futuras de los chilenos. Como se sabe, la tasa media de crecimiento de nuestra economía, entre 1940 y 1960, fue de 3,66 por ciento al año, tasa que aumentó considerablemente entre 1960 y 1964, donde llegó a 4,95 por ciento.

Pues bien, en los dos primeros años de este Gobierno el producto geográfico bruto experimentó un alza media anual de 5,26.

En 1967, el producto sólo crece en un 2,5 por ciento, o sea, por debajo del promedio anual de 1940 a 1966.

De la exposición del Ministro de Hacienda se desprende que 1968 no presentará perspectivas que cambien la tendencia declinante.

La merma en el ritmo del crecimiento económico está acompañada por una inflación que no ha podido ser detenida.

En otras palabras, el costo del socialismo ha sido elevado. El avance y la igualdad sociales tienen por tope la débil expansión del volumen de bienes y servicios disponibles, en tanto que el gasto público generado por los amplios programas estatales encuentra un límite en la inflación devoradora de sueldos y salarios.

Sería ciego desconocer que el país ha cambiado y que aún pueden sobrevenir transformaciones más profundas. El problema que se plantea al hacer el balance de cuatro años de experiencia democratacristiana es el costo social efectivo de esa política, o, en otras palabras, el beneficio concreto que las grandes mayorías obtengan de un reparto de bienes forzosamente exiguo por causa de la estrechez de la economía.

ACTOS IRREVOCABLES

Los beneficios que se esperan del ensanchamiento de la educación y la mayor conciencia que han adquirido los chilenos de su propio valor individual parecen ser los factores más destacados de estos cuatro años. Podrá discutirse una gran parte de la política agropecuaria del actual

Gobierno, pero es preciso reconocer que los campesinos han pasado a merecer otra consideración que en períodos anteriores. Lo mismo puede decirse, en general, del mundo del trabajo y de los grupos más postergados de la sociedad. Todos ellos han ascendido en su propio concepto y en su relación con los otros estratos sociales.

La democracia cristiana se ha empeñado a fondo en favor de la igualdad y de la nivelación de los chilenos. Han quedado atrás muchas antiguas subordinaciones y de aquí en adelante toda política y toda acción pública, cualquiera que sea su naturaleza, habrá de contar con estructura más abiertas y flexibles que las establecidas por largos años en el país.

Hay que volver, no obstante, al costo de esta política. Si bien es irrevocable lo hecho por despertar la conciencia del propio valor y el conocimiento de los derechos de quienes no tenían papel apreciable en la sociedad, llega el instante en que no basta todo aquello y en que empieza a urgir un aumento durable de la dieta alimenticia, del vestuario, de la actividad cultural o del entretenimiento.

Estamos aumentando la seguridad de las masas en sí mismas y el número y calidad de sus aspiraciones, pero no incrementamos al mismo ritmo la cantidad y el contenido de los bienes adecuados a la satisfacción de las necesidades que se apresuran.

Una mirada imparcial sobre estos cuatro años lleva a la conclusión de que ellos deben considerarse bienvenidos, de que son una experiencia fecunda. Pero la misma in-

tensidad del fenómeno aconseja que él no se prolongue indefinidamente. Una redistribución más extremada significa repartir y consolidar la miseria. Un gasto público de más volumen equivale a desencadenar la inflación más incontrolada. Un ataque indiscriminado y constante a las empresas privadas tiene que disminuir la inversión interna y aumentar nuestra dependencia del exterior. Una prédica de la lucha de clases debe dividir a la familia chilena y desanimar el esfuerzo común por triunfar de nuestras dificultades naturales y políticas.

Quienes creen equivocadamente que vivimos un neocapitalismo y que la revolución democratacristiana ha fracasado deberían tener presentes los cambios operados en estos cuatro años, cambios enormes dadas nuestras limitadas posibilidades y que han significado en la práctica entregar al consumo bienes que estaban en el área del ahorro.

Sin duda es plausible la ascensión de los postergados a un nivel de más consideración y bienestar, pero no es menos evidente que nuestra sociedad chilena necesita crecer al doble o triple de su potencial económico para ser capaz de brindar parte siquiera de los bienes que ofrece cualquier país europeo y una gran porción de los países americanos, algunos de África y de otros continentes.

El hermoso ideal redistribucionista choca en algún momento con la tendencia de la comunidad nacional al mejoramiento de sus ingresos, con la aspiración de los ciudadanos al aumento de los bienes y servicios de que pueden disponer. Esa es la situación en que el país se

encuentra y muchos ciudadanos inclinados a aceptar los ideales redistribucionistas sienten en sí mismos o en sus hogares los efectos de la limitación de horizontes.

Si ha de salvarse el progreso moral y social logrado, el frente de de-

fensa más importante es el del robustecimiento de la producción de bienes y servicios útiles. Hay motivos, sin embargo, para dudar de que el mecanismo productor se afiance en medio de las dudas sembradas acerca de su razón de existir.

Las imprecisiones

(8 de diciembre de 1968)

El artículo comenta algunos hechos que manifiestan las discrepancias internas que existen en el Partido Demócrata Cristiano, entre las cuales la principal es una manifestación ofrecida a Jacques Chonchol con motivo de su alejamiento del cargo de Vicepresidente de INDAP, desde el cual dirigió la reforma agraria. En esa oportunidad hubo manifestaciones de repudio al Gobierno y a Radomiro Tomic por parte de algunos adherentes al acto. Se unieron a las críticas los oradores Rafael Agustín Gumucio, senador, y Luis Maira, diputado (EM, 1 dic., pág. 51).

El departamento campesino de la Democracia Cristiana también critica al gobierno, y su jefe es llevado al tribunal de disciplina del partido.

Por su parte el diputado Lorenzini critica a Chonchol y al proceso de reforma agraria en foro televisivo, concordando con el representante del Partido Nacional (EM, 6 dic., pág. 33).

En un acto público en que Tomic proclama a las candidatos del Partido a las próximas elecciones, recibe aplausos y muestras de adhesión, mientras que Rafael Agustín Gumucio recibe manifestaciones de repudio (EM, 2 dic., pág. 41).

La Semana Política

PERPLEJIDAD

La opinión pública asiste con cierta sorpresa al desenvolvimiento de los últimos sucesos demócratacristianos. Las propias autoridades y los elementos responsables de ese partido experimentan las tensiones que van a definir la conducta futura de sus miembros. A ellos debe atribuirse el acuerdo de celebrar un congreso nacional del partido, de carácter eminentemente doctrinario y programático, con posterioridad a las elecciones parlamentarias de marzo próximo y como preludio de las elecciones presidenciales de septiembre de 1970.

Se diría, sin embargo, que lo más importante del planeado congreso se está cumpliendo en estos días. Las grandes líneas que distinguen a

los distintos sectores dentro del partido y que los dividen unos de otros están evidenciándose. La reserva acerca de las agitaciones partidistas internas, tan explicable en las etapas iniciales de una obra de Gobierno, está cediendo el paso a la manifestación apasionada de las pugnas.

Imposible es desconocer la legitimidad de este debate y el síntoma de salud envuelto en la confesión franca de las desavenencias. Quienes baten palmas ante la existencia de desacuerdos entre los demócratacristianos no sólo reflejan su enemistad hacia ellos, sino que demuestran una incomprensión del momento.

Las contradicciones y choques entre los demócratacristianos se han producido cuando estos experimentan la seguridad de su permanencia

política como primera fuerza parlamentaria e ideológica y como voz determinante en la próxima elección presidencial. De ahí entonces que la fermentación democratacristiana esté en la trayectoria más típica y tradicional de las fuerzas políticas chilenas, desde el conservantismo en tiempos de Montt hasta el radicalismo de Aguirre Cerda hasta González Videla.

No obstante, hay motivos para la perplejidad de la opinión pública ante la clase de disidencias del partido de Gobierno. Los radicales u otros sectores políticos podían, en otros tiempos, diferir internamente y aun dividirse, pero las metas básicas de los militantes eran las mismas y generalmente el escollo tenía que ver la doctrina y el programa de las respectivas colectividades.

El tema del comunismo es el que exterioriza con mayor claridad las diferencias en la democracia cristiana. No se trata sólo de que hay en ese partido distintos puntos de vista o, mejor dicho, distintos grados de distancia frente a la política envolvente del comunismo chileno, sino que se presentan diferencias teóricas de consideración, y algunos de esos matices se confunden en la práctica con lo que afirman los sutiles teólogos de Moscú.

Como la democracia cristiana se presentó al electorado chileno y ante la opinión pública del hemisferio como una alternativa frente al comunismo, se explica la sorpresa que provocan las sospechas y acusaciones en torno a que dicho partido se hubiera dejado infiltrar por el movimiento que ella derrotó en 1964 y que ha pretendido reemplazar. Lo

serio es que tales sospechas y acusaciones no provienen de los adversarios o de los indiferentes, sino que se generan dentro de la colectividad de Gobierno.

LAS IMPRECISIONES

La democracia cristiana ha formulado una interpretación completa de la realidad presente del país en el plano económico-social. Según ella, los más graves problemas de la nación derivan de la existencia de estructuras económico-sociales rígidas y anacrónicas, que corresponde sustituir por otras nuevas. Esa interpretación crítica de la sociedad vigente coincide con muchas otras críticas que, entre nosotros y en el exterior, se plantean por grupos ideológicos y políticos de signo diverso, y que van dirigidas contra la sociedad de consumo, contra el capitalismo, contra el imperialismo, etc.

La precisión en el diagnóstico se debilita, por razones obvias, cuando se trata de ensayar la receta. Esta última se la ha llamado una "revolución", pero "en libertad", es decir, dentro del respeto a la ley y a las garantías constitucionales.

Al someter a la artillería ideológica un amplio frente de instituciones y de normas sociales, se han desencadenado fuerzas que no se sienten solidarias del orden nacional y que no han sido movidas tampoco a colaborar en otro orden o estado revolucionario. El mantenimiento del sistema jurídico y, por tanto, de la libertad se hace mucho más difícil en estas circunstancias. De ahí que tal vez nunca en la historia del país la fuerza pública haya

tenido un trabajo más extendido y continuo que en la actualidad, así como nunca había presenciado el país un escalonamiento de ocupaciones de locales escolares, de predio rústicos y de fábricas como el ocurrido últimamente.

La propaganda marxista quiere ver en la acción policial un intento represivo arbitrario, cuando no es más que el esfuerzo por conseguir que las reformas en marcha y las anunciadas se realicen dentro del marco del derecho, es decir, de la libertad.

Los comunistas, por su parte, trabajan en el plano doctrinario y en el táctico para acentuar las imprecisiones de sus adversarios y para atraer a algunos de ellos a su camino. La "vía no capitalista" es un intento de establecer la alianza entre comunistas y democratacristianos a través de un programa posible para el avance de los primeros. No es efectivo que todo contradictor del capitalismo deba estar en la "vía no capitalista", pues ésta es una bien meditada estrategia que mira a detener el desarrollo libre de la nación, a destruir sus organismos intermedios, a estatizar y colectivizar el mayor margen posible de actividades y a afianzar un mando comunista, que pueda tener o no este apellido, según convenga. Ya se ve, por lo demás, que la consigna de la "vía no capitalista" está siendo recogida por las organizaciones que controla el comunismo y ha salido ya de la órbita propiamente democratacristiana.

En el plano táctico también están presentes los hombres fieles a Moscú. Sabemos que los comunistas se han negado a individualizar sus pre-

ferencias presidenciales, y que aparecen empeñándose sólo en la pretendida unidad de las fuerzas que les son afines. Sin embargo, los personeros de ese partido han sido terminantes para rechazar dos aspectos de la colaboración con los democratacristianos, a saber el entendimiento entre las directivas de ambos partidos y la persona del líder democratacristiano don Rado miro Tomic.

Puede ser que se trate de una simple coincidencia, pero los mismos grupos que aparecen más apasionados por la "vía no capitalista" son los que resisten subterráneamente a la actual directiva democratacristiana y han manifestado de una manera u otra su oposición a que se hable de candidaturas o su preferencia por otros políticos.

Se dirá que todo el Partido Demócrata Cristiano es "no capitalista", y hasta es posible que los acusados de "derechizantes" o de "neocapitalistas" se apresuren a dar excusas y explicaciones. Sin embargo, es preciso tener presente que *"el informe sobre la 'vía no capitalista de desarrollo', insistimos, no constituye sino un programa pro comunista, consentido y, tal vez, sugerido por Moscú"*. Por consiguiente, los democratacristianos no pueden sentirse forzados a suscribir el riesgo de dicho programa, con el pretexto de que ellos son contrarios al capitalismo. Ese falso dilema es producto de una simple consigna.

Las bases democratacristianas parecen estar experimentando la presencia de este cuerpo extraño, que es, a no dudarlo, la infiltración comunista. Un parlamentario tan poco afín a la derecha, a la agricultura

tradicional y al capitalismo, como es el diputado don Emilio Lorenzini, llamó la atención a los televidentes en un foro con el vicepresidente ejecutivo de la CORA, pues en lugar de defender a éste contra el rudo ataque a que lo sometió el dirigente nacional don Mario Amello Romo, expuso sus objeciones en contra del funcionarismo y del colectivismo de la reforma agraria. Los juicios de este diputado surgen del contacto habitual con los campesinos de su provincia, que aspiran a la propiedad

y a la libertad. Podrán tacharse de ingenuas las aseveraciones de ese inquieto diputado que defiende la pequeña propiedad, pero detrás de todo eso están los primeros signos de que la inspiración filosófica y jurídica de la reforma agraria de este régimen brotó de suelo ajeno a la democracia cristiana.

Un esfuerzo doctrinario y político semejante al que hacen sus enemigos internos podrá unir y robustecer a la democracia cristiana en este momento decisivo.

Origen de la vía no capitalista

(15 de diciembre de 1968)

El comentario se refiere a un documento, publicado en forma exclusiva por El Mercurio el día 8 de diciembre (págs. 49-52), en el cual se prueba que la "vía no capitalista de desarrollo" es una teoría elaborada en la Unión Soviética.

Se hace mención al informe elaborado el año 1967 sobre la vía no capitalista por una comisión del Partido Demócrata Cristiano, y la crítica que le mereció al senador Patricio Aylwin dicho informe, lo cual fue motivo de un comentario en su oportunidad.

La Semana Política

ORIGEN DE LA VIA NO CAPITALISTA

La publicación de un documento que prueba el origen soviético del método de acción económico-social conocido como "vía no capitalista de desarrollo", que propicia el Partido Demócrata Cristiano chileno, ha dado lugar a comentarios de representantes de esa colectividad política.

Dicha concepción programática nació pública y oficialmente en Moscú, en noviembre de 1960, durante la reunión internacional de partidos comunistas convocada por el Partido Comunista de la Unión Soviética.

En el diario "Pravda" del 3 de abril de 1964 se reprodujo un discurso de Mijail A. Suslov, miembro del Presidium y secretario del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, en el cual expresa: "La idea de la vía no capitalista se abre paso cada vez más entre los pueblos de Asia, África y América latina y se ha convertido en consigna de actividad práctica para los pueblos de diversos países.

¡Esto significa un gran triunfo para el socialismo!".

El día 4 de agosto de 1966 el Primer Ministro soviético Alexei Kosygin declaró: "Nuestra simpatía está, ante todo, con aquellos que han elegido la vía no capitalista de desarrollo".

En abril de 1967 la Junta Nacional del Partido Demócrata Cristiano chileno, después de examinar los resultados de las elecciones de regidores que habían tenido lugar pocos días antes, decidió designar una Comisión Político-Técnica para que en un plazo no mayor de sesenta días preparara un informe dirigido a la orientación de las tareas partidarias hacia la inmediata apertura en Chile de una "vía no capitalista de desarrollo".

La Comisión Político-Técnica estuvo presidida por el señor Jacques Chonchol y sus miembros fueron, además, los señores Tomás Reyes, Luis Maira, Vicente Sota, Julio Silva Solar, Carlos Massad y Pedro Felipe Ramírez.

A mediados de 1967 quedó redactado el informe, bajo la deno-

minación de "Proposiciones para una Acción Política en el período 1967-70 de una Vía no capitalista de Desarrollo".

Las reacciones que despertó su aparición fueron variadas. Para algunos sectores él no constituía otra cosa que un acercamiento democratacristiano a las posiciones de la izquierda marxista; para esta última, hizo posible que dentro del partido gobernante se contara con un cartabón capaz de determinar quiénes formaban entre los "partidarios de los cambios" en los "sectores democratacristianos progresistas" y quiénes pertenecían dentro de dicha colectividad a las filas del "imperialismo, la oligarquía y la reacción", según la actitud de cada cual frente al informe de la Comisión Político-Técnica.

Pero también hubo lugar a opiniones vertidas sobre el informe dentro del propio Partido Demócrata Cristiano.

Las más meditadas surgieron por una parte del senador Patricio Aylwin, ex presidente del Partido, y por otra de un grupo de parlamentarios que en 82 carillas fijó su posición frente al texto aludido y la hizo llegar al entonces presidente de la colectividad, senador Rafael A. Gumucio.

"NO CAPITALISMO" Y SOCIALISMO

El senador Aylwin expresó en relación al informe que él no cumplía la misión de adecuar el programa de gobierno a los criterios aprobados en el Segundo Congreso del partido. "Constituye un intento de hacerle -dijo- que, a mi juicio, no interpreta fielmente la voluntad

mayoritaria expresada por el partido en ese congreso, y suele apartarse ostensiblemente de la orientación propia de nuestras concepciones doctrinarias". Un capítulo de sus críticas expresaba: "El informe sostiene una concepción estatista que no se encuadra dentro de los criterios del programa de Gobierno".

La presentación de los parlamentarios democratacristianos fue, en muchos aspectos, coincidente con la posición expresada por el senador Aylwin. Así señaló respecto al informe que "este paso hacia la colectivización total es esencialmente contrario a la filosofía demócratacristiana, contrario al programa propuesto al país y contrario a la realidad nacional".

Al calificar a estas proposiciones para adoptar la vía no capitalista de desarrollo como "una concepción estatista" y como un "paso a la colectivización total" los críticos democratacristianos del informe no se apartaban del concepto que los creadores de la señalada vía de desarrollo tienen respecto a la misma. El teórico ruso Aliexandr Soboliov, dedicado particularmente al estudio y elaboración de esta tesis, la califica como "un estado revolucionario, una etapa de transformaciones concentradas y cada vez más rápidas que conducen al socialismo".

Y por socialismo, en el lenguaje comunista, sólo se entiende la propiedad exclusiva por parte del Estado de los medios de producción y el monopolio político del Partido Comunista, con exclusión de todo otro grupo ideológico.

Ante la publicación en nuestra edición del domingo anterior de un documentado estudio sobre el ori-

gen soviético de la vía no capitalista de desarrollo, el presidente del Partido Demócrata Cristiano, senador Renán Fuentealba, ha señalado que dicho camino puede conducir tanto a una sociedad comunista, estatista, totalitaria y antidemocrática, como a una sociedad libre, democrática y no capitalista, sino comunitaria. Sería en este último sentido en el que su partido dirigiría la aplicación práctica del concepto.

Los comunistas chilenos, sin embargo, no perciben esa disyuntiva de destinos de la vía no capitalista de desarrollo. A mediados de 1966, en la revista del Movimiento Comunista Mundial, el diputado Orlando Millas escribió: "Crece el número de los jóvenes que identifican el concepto muy vago y ambiguo de "régimen comunitario", considerado como ideal cristiano, con el socialismo y el comunismo. El diputado demócratacristiano Julio Silva Solar escribió un libro dedicado a desarrollar esta tesis, en el que propicia el "pluralismo ideológico", como él denomina a la emulación e incluso una presunta colaboración de marxistas, católicos y otros sectores, en la construcción del socialismo y del comunismo en cuanto regímenes sin propiedad privada de los medios de producción. Este anhelo es compartido por numerosos diputados y por la mayoría de los dirigentes juveniles de ese partido".

EL DERECHO A LA CLARIDAD

Ha preguntado el presidente del Partido Demócrata Cristiano por qué a su colectividad se le piden definiciones a cada momento, sin que se

haga lo mismo respecto de otros sectores.

Una razón es que frente a la ciudadanía tanto los partidos de la izquierda marxista como los del centro y de la derecha han definido claramente la acción que llevarían a cabo desde el gobierno.

Otra razón es que el Partido Demócrata Cristiano se encuentra en el Poder, y es, en estos instantes, la primera fuerza política en el Congreso Nacional. Es decir, tiene en sus manos en gran medida la configuración del futuro político, económico y social de nuestra patria.

Existe el derecho a que la ciudadanía pida de esa poderosa colectividad democrática una definición sobre el sistema económico social que ha de regir el país en caso de que los destinos de éste continúen en sus manos.

No basta para que los chilenos se formen ese juicio indispensable que se prometa "la participación creciente, hasta llegar a ser preponderante, del pueblo organizado, dentro de las estructuras políticas, económicas y sociales del país". No basta tampoco que se describa a la sociedad comunitaria como un régimen que no será "una organización empresarial exclusivamente estatal, ni tampoco exclusivamente en manos de los capitalistas privados".

Ello no responde la pregunta concreta que se hace el campesino asentado acerca de si llegará algún día a ser el propietario exclusivo de la tierra que trabaja, sin vínculo de dependencia funcionaria; ni la que se formula el comerciante acerca de si su establecimiento seguirá siendo suyo bajo el régimen comunitario; ni la del hombre de empresa que no

sabe si sus futuras inversiones serán administradas por él o por un comisario estatal; ni la del obrero o el empleado que desean saber si mañana será el Estado quien determine el monto de su sueldo o salario o podrá continuar proponiendo sus pliegos de peticiones a una empresa particular; ni, en fin, la del artesano que aún no resuelve si debe conformarse con su pequenez o dar rienda

suelta a su empuje personal sin riesgo de que el fruto de sus esfuerzos pertenezca mañana al Estado.

La demanda de definición no surge sólo de los extremistas deseosos de impulsar una revolución, sino también de todos los chilenos que laboran silenciosamente, desean la democracia política y económica y quieren saber quiénes realmente se la van a proporcionar.

Después de las elecciones

(9 de marzo de 1969)

Se analizan aquí los resultados de las elecciones de parlamentarios recién efectuadas, destacando las votaciones individuales logradas por Silvia Alessandri y Gustavo Alessandri, quienes obtuvieron la primera mayoría en sus respectivos distritos.

Como dato comparativo en materia de diputados podemos dar el siguiente: número de diputados en ejercicio y número de diputados recién electos: Partido Nacional: 8 y 34; Partido Radical, 19 y 24; Partido Comunista, 18 y 22; Partido Socialista, 9 y 15; Partido Demócrata Cristiano, 82 y 55; Partidos Social Demócrata, Democrático Nacional y Socialista Popular: 11 y 0.

La lista definitiva de los parlamentarios electos en esta oportunidad se publicó en El Mercurio del 14 de mayo.

La Semana Política

DESPUÉS DE LAS ELECCIONES

Las declaraciones oficiales de las directivas políticas después de la jornada electoral del domingo van desde el regocijo hasta la digna resignación ante los resultados.

La democracia cristiana destacó "su calidad de fuerza política ostensiblemente mayoritaria" y dijo que observaba "con serenidad el panorama de nuestra vida nacional". Los nacionales recalcaron el éxito electoral obtenido, su propósito de "trabajar por el país sin sectarismos ni rencores" y su decisión de "colocarse a la vanguardia de un vasto movimiento renovador destinado a elegir un Mandatario independiente para 1970".

El Partido Radical sumó sus diputados y sus senadores para concluir que el número de sus parlamentarios había aumentado, expresando brevemente que haría después un análisis del resultado de la elección.

Los comunistas destacaron la baja democratacristiana, el repunte de la derecha, la unidad con los socialistas y el aumento de la votación de su partido. El socialismo, a su vez, llamó "a los miles y miles de trabajadores, hombres y mujeres, que votaron por sus candidatos" a fortalecer el partido y la unidad del FRAP.

Los resultados conocidos hasta ahora determinan una baja sensible de la democracia cristiana en la votación total, aunque ella queda como primera fuerza electoral; un aumento importante de los nacionales, constituidos en la segunda votación por partidos, en la segunda fuerza parlamentaria en la Cámara y beneficiados con un rebrote de cinco senadores, después de haber perdido todos los cargos por llenarse en 1965; un crecimiento moderado pero sólido de los comunistas, que quedan como la tercera fuerza en sufragios y en parlamentarios; un avance apreciable del Partido Socialista de Chile, restablecido de su

división; un estagnamiento de los radicales, y la desaparición de los partidos minúsculos.

La tendencia general del electorado fue la búsqueda de posiciones definidas y consecuentes. Así, el sector demócratacristiano que obtuvo el favor público corresponde a los candidatos que apoyaban francamente al Gobierno. Las pérdidas sufridas por rebeldes y terceristas se explican por su oposición abierta o solapada al Gobierno y por sus coqueteos con el marxismo.

Una inconsecuencia análoga parece la causa de la parálisis radical. Los votos de arrastre de ese partido no lo acompañaron en el intento de formar una "unidad popular" buscada y respaldada por los comunistas. Sufragios que en otras elecciones se contabilizaron en el activo radical pasaron ahora a incrementar a los nacionales o a la izquierda marxista, prefiriendo así la definición en uno y otro sentido.

El mismo colapso del sector socialista disidente es índice de que la opinión de la izquierda chilena se concentra en los partidos Comunista y Socialista, que presentan líneas diversas pero representativas ambas de una continuidad política y de una definición ideológica visible.

Debe registrarse también una mayor selección personal de los parlamentarios elegidos en esta jornada. Algunos partidos, sobre todo, llevan representantes que destacarán en los futuros debates legislativos.

La elección mostró el peso de la clase media chilena, sector que es el que más ha sufrido con el aumento de los impuestos y con el alza del costo de la vida. Los partidos que socialmente deberían interpretar a

la clase media no supieron comprenderla en estos años; el empeño del radicalismo por unirse a los comunistas no puede tranquilizarla como perspectiva de bienestar y seguridad futura; pero si los radicales no captaron la situación afflictiva de esa masa ciudadana media, determinante en un país de elevada redistribución de la renta como es el nuestro, los demócratacristianos creyeron asegurar su permanencia en el poder y su control electoral atendiendo a los sectores campesinos y de pobladores marginales, sin dar oídos a las muchas señales que advertían la necesidad de considerar al poderoso estrato de la clase media.

Incluso la propaganda oficialista aparece como contraindicada para los grupos medios del país, tanto por constituir un gasto impopular para los que sufren las estrecheces conocidas de los empleados modestos, de los obreros consolidados pero llenos de exigencias familiares, de la vasta escala de profesionales y técnicos jóvenes apremiados por el gasto cotidiano insoslayable, como porque la versión del Gobierno que dicha propaganda ha proporcionado no está a la altura de la madurez mental y social de nuestra clase media. Pensando siempre en niveles marginales, dicha propaganda olvidó que tenía oyentes y espectadores de agudo sentido crítico, irritados por el carácter sumario de algunas afirmaciones y conceptos.

LAS PERSONALIDADES

Tal vez con alguna tardanza el Partido Demócrata Cristiano descubrió que electoralmente era a esta

altura "freísmo". Las clarinadas publicitarias para revivir los tiempos heroicos y solitarios de la Falange, así como la rememoración de la espléndida oratoria del líder y candidato Eduardo Frei no dejaron duda de que la sustancia de las postulaciones demócratacristianas tenía nombre y apellido.

La democracia chilena no simpatiza con la idea de caer en los personalismos, pero en el hecho las formaciones partidarias y la sucesión presidencial están marcadas fatalmente por el signo de una o dos personalidades.

El Presidente Frei no ocultó su participación indirecta pero real en las elecciones del domingo. Recorrió el país, haciendo una inspección útil y hasta gestos históricos a lo largo del territorio chileno. Nadie duda de que ese recorrido fue oportuno y cumplió finalidades que trascienden la simple lucha electoral. Sin embargo, tampoco podría negarse que esa tarea del Presidente sirvió de estímulo y de auxilio inmediato a quienes defendían electoralmente las banderas del Gobierno. Era obvio que el apoyo presidencial no estaba encaminado en favor de los que combatían, desde la izquierda o desde la derecha, su Administración, y que los aplausos tributados al Jefe del Estado pudieron volcarse en todo o parte hacia los candidatos demócratacristianos más visiblemente afectos a su persona.

Algunos candidatos demócratacristianos no encontraron grata la declaración del Presidente Frei de que su voto había favorecido al candidato por el Primer Distrito y ex Ministro del Interior, don Bernardo

Leighton. Pero el Jefe del Estado entiende que su cargo no lo inhabilita para buscar una mayoría política favorable a sus planes de bien público ni lo inhibe de hacer gravitar sin presiones indebidas su influencia en favor del partido que lo apoya o de sus personeros destacados.

En suma, así como la votación sin precedentes de la democracia cristiana en marzo de 1965 se debió en medida considerable a la presencia de don Eduardo Frei en La Moneda y a los proyectos de reforma que planteó al país antes de esos comicios, no cabe duda de que sin la persona y la acción del Jefe del Estado el contingente electoral de su partido no habría alcanzado el volumen que tuvo. La posición de los rebeldes y terceristas, ansiosos de formular una línea independiente de la personalidad presidencial, quedó derrotada. Sólo el "freísmo" se ha defendido en las filas demócratacristianas.

A la inversa, la imagen del ex Presidente Alessandri logró que candidatos que son de su familia y que llevan su apellido llegaran a resultados espectaculares. Sin discutir los méritos personales de los así favorecidos, a nadie escapa que su extraordinaria votación es una forma de insinuar el apoyo del electorado al Mandatario anterior.

El ex Presidente, desde que abandonó su cargo, ha guardado el más completo silencio y no se ha detenido a recoger ni las críticas a su gestión ni los ataques injuriosos que con frecuencia se le han lanzado por ciertos adversarios que han contribuido paradójicamente a prestigiarlo.

Las ventajas logradas por el Partido Nacional han de atribuirse, al menos en gran parte, a la popularidad del señor Alessandri, pues dicho partido ha hecho suyos algunos de los planteamientos del ex Presidente, y sus personeros aparecen dispuestos a propiciar un Gobierno que se sitúe por encima de los partidos y a trabajar en un movimiento más amplio que la colectividad a que ellos pertenecen.

En fin, sea en el silencio, sea en la acción polémica y el movimiento, dos personalidades han destacado en esta elección: el Presidente Frei y el ex Presidente Alessandri.

Una y otra figura tienen estilos diferentes y suscitan reacciones dispares en el público, pero todo parece indicar que ambos líderes preocuparán en el futuro a los políticos y a la ciudadanía.

Decadencia de los partidos (23 de marzo de 1969)

Continúan las divergencias en la Democracia Cristiana, esta vez a raíz de severas críticas de ex dirigentes juveniles a la directiva de la JDC por propiciar la formación de un "frente revolucionario de masas". Quienes criticaron fueron sometidos al tribunal de disciplina (EM, 17 marzo, pág. 31), y los directivos fueron suspendidos de sus cargos, por declaraciones en contra del Gobierno (EM, 20 de marzo).

Las disidencias también se manifestaron en la Junta Extraordinaria celebrada por el partido.

Los radicales también realizan una reunión de análisis de su descenso electoral (EM, 20 marzo, pág. 24).

La Semana Política

DECADENCIA DE LOS PARTIDOS

A medida que se acorta la distancia a que nos encontramos de la elección presidencial, se acentúa la descomposición interna de los partidos libertarios.

Democratacristianos y radicales son los que evidencian mayores signos de erosión interna, acelerada por resultados electorales que no consolidaron sus directivas. La baja de votación de estas dos colectividades, aunque se trató de encubrirla con habilidosas explicaciones y exhibiendo sólo los aspectos favorables de la última elección, es algo que ya nadie discute. Y el motivo del descenso no es otro que la insatisfacción cívica frente a las actuaciones que, en el Gobierno y en la oposición, exhibió cada una de ellas en los últimos cuatro años.

El pronunciamiento negativo o débil, para esos partidos no implica tanto un rechazo doctrinario como el desagrado de la opinión por falta de línea definida de los dirigentes y

por la preeminencia de los intereses de círculo sobre las grandes aspiraciones nacionales.

Conocida la escasa conscripción de electores en los cuadros partidistas (15% de los inscritos), el debilitamiento de las votaciones no significa sólo que se apartan de las tiendas partidistas los hombres de fila, sino que la repudia una vasta porción ciudadana que tradicionalmente apoya postulaciones que interpretan sus necesidades o esperanzas y se abstiene o vota en contra de las que no aparecen en esa línea.

La votación democratacristiana en 1964 y 1965 estuvo adicionada con apoyos que hoy ya no cuentan y que fueron disminuyendo en las elecciones de regidores y parlamentarios. Esta disminución sería hoy más acentuada si no hubiera mediado la defensa que representó la acción personal del Presidente de la República a través de giras preelectorales destinadas a demostrar las realizaciones del actual Gobierno.

En cuanto a la votación radical, que apareció recuperada en la elección de municipios, volvió a deteriorarse por el convencimiento de que sus directivas guiaban al partido a una alianza que no se aviene con el espíritu democrático.

Toca la coincidencia de que ambos partidos aparecieron siempre como intérpretes de la clase media, que en el país es mucho más poderosa y organizada que los sectores de extrema izquierda y extrema derecha. Hasta tal punto que, como sostuvimos a la vista de los resultados de la elección municipal de 1961, una unión de radicales y demócratacristianos habría afianzado el régimen democrático por muchas décadas.

Durante el actual Gobierno las medidas económicas se han dedicado principalmente a mejorar a los sectores marginales del trabajo, que si bien son numerosos, carecen de organización y están siempre a disposición de la extrema izquierda. La clase media es progresista y desea avances, pero no tiene ánimo dispuesto para que se aprovechen sus fuerzas en abrir la senda al marxismo; es, por su misma ansia de mejoramiento, enemiga de la colectivización y de toda amenaza a los derechos individuales. El Excmo. señor Frei participa de esa mentalidad y ha hecho los mayores esfuerzos por resistir las corrientes demagógicas de su partido, llevando a cabo programas concretos en favor de la clase media, los que fueron oscurecidos por las estridentes actuaciones de los demócratacristianos que participan de convicciones marxistas y que han actuado en puestos claves de la administración, dando

sello a una reforma agraria que no condujo a hacer propietarios, sino participantes de una forma de explotación estatizada de la tierra, en que los cultivadores tomaron la condición de asignatarios o asentados. El chileno que tiene una profesión u oficio y aspira a obtener y a conservar un patrimonio para su familia se siente defraudado por la política demócratacristiana que siembra la incertidumbre sobre la permanencia de la propiedad agraria o urbana. Por más que ella sea asegurada una y otra vez por el gobernante, subsiste el temor de que lleguen a prevalecer las políticas comunitarias, cuya separación del colectivismo ha resultado imposible definir.

Fueron esos sentimientos de desacuerdo con el ala extrema de la democracia cristiana los que restaron al partido oficial votos de la clase media en la última elección.

Análogas causas hicieron perder al radicalismo oportunidades que parecía haber ganado en los comicios municipales. Su adhesión de hecho al movimiento marxista no concordaba con su clientela tradicional en el país, que en gran parte abarca a profesionales responsables, trabajadores calificados, comerciantes e industriales de distintos rangos y, por sobre todo, hombres y mujeres convencidos de que la democracia no es una postura para presentarse a las elecciones, sino que un modo de vida en que la libertad tiene una primordial calificación.

La directiva del radicalismo dio en los dos últimos años un espectáculo en que perdió su identidad doctrinaria, con empeños reiterados de asociarse a los partidos marxis-

tas, en los cuales la clase media es repugnada por el obrerismo que adhiere a la dictadura del proletariado. Ese intento de unión híbrida, que hasta hoy quieren aceptar sólo los comunistas por conveniencias transitorias y que rechazan en forma terminante los socialistas de Chile, disminuyó el activo electoral de los radicales. Y es un hecho político extraño que los responsables de este fenómeno no saquen las conclusiones adecuadas y traten de seguir usando la maquinaria política que tienen en sus manos como si fuera instrumento de radicales inscritos en los escuálidos registros de la colectividad y no herramienta para realizar doctrinas propias y que en años anteriores no sólo hicieron crecer al radicalismo, sino que le dieron la calidad de partido mayoritario y acceso al Poder.

LUCHAS INTERNAS QUE DEBILITAN

Un nuevo análisis de situaciones tan evidentes resulta innecesario. Lo que interesa señalar es que tanto la democracia cristiana como los radicales llevan en su seno el germen de la disolución, en cuanto entreguen sus determinaciones a doctrinas que no son las propias. Aquélla alcanzó el Gobierno luchando en contra del marxismo, al cual algunos de sus sectores recurren ahora para buscar inspiración y soluciones. Y en cuanto al Partido Radical yerra el camino malbaratando su capital democrático y uniéndose al carro del comunismo.

Las últimas disensiones internas muestran que ambas agrupaciones políticas, con distintas magnitudes, están profundamente convulsiona-

das al acercarse las reuniones generales de sus organismos superiores. La Junta Extraordinaria convocada por la Democracia Cristiana en la semana que termina no obedece a un examen de las realizaciones gubernativas ni a una revisión de programa; es solamente la apertura de un tablado para que disputen las ya irreconciliables tendencias oficiales con las rebeldes. Los radicales, por su parte, en las proximidades de una convención, muestran a las directivas en lucha abierta con algunos de sus organismos, como el femenino, en el que se agrupan los más prestigiosos sectores de la causa de los derechos de la mujer en Chile, de los que hicieron posible para ella la igualdad jurídica, el voto en las elecciones generales y la modernización de las leyes sobre constitución y resguardo de la familia.

Las violencias intestinas y los golpes de autoridad no fortalecen a los partidos democráticos. Si bien el comunismo tiene como método la purga periódica de sus filas, para afirmar la autoridad de los dirigentes, semejante sistema no calza con ideologías que nacieron en nombre del libre examen y del respeto a la persona humana.

El espectáculo ahora montado, en que sobresalen los tribunales de disciplina y las expulsiones, está contribuyendo a acentuar el desprestigio de la organización política en el país, y los límites que aquél alcanza son peligrosos para la estabilidad constitucional.

Ya no es lícito hablar de que los chilenos no están en los partidos porque tienen mentalidad apolítica o independiente. Lo verdadero es que se ausentan de ellos porque ta-

les partidos no satisfacen las aspiraciones de una inmensa mayoría que carece de entusiasmo para afirmar registros y que se abstiene en gran proporción de acudir a las urnas.

Esta consecuencia de la incompreensión partidista del interés nacional es fomentada por la hueste comunista en que milita una pequeña minoría cohesionada y capaz de barrer con audacia a las montoneras grandes o pequeñas de un régimen democrático debilitado y sin prestigio.

Mucho se habla de los independientes en política. Hora es ya de que se los designe con su verdadero nombre: son los insatisfechos por la falta de interpretación de las agrupaciones que llegan al Gobierno en nombre de programas para conseguir el bienestar de la sociedad y actúan para satisfacerse a sí mismas. Esto es lo que el país ha palpado una y otra vez en tres decenios, que comienzan con el Frente Popular de 1938.

Los independientes son los asqueados por la falta de línea doctrinaria de los que conducen la política, con olvido de las grandes fuerzas que hicieron posible su

elección y con el desenfado para hacer hoy lo que condenaron altivamente ayer.

Esos independientes que se retraen de las tiendas políticas no tienen otro refugio que fortalecer la imagen de las personas que garantizan por lo menos con su acción y su trayectoria.

Las últimas elecciones demostraron que, por sobre los candidatos y las confusas ideologías, campeaban sin contrapeso los prestigios personales. Hubo demostraciones palmarias de que los nombres eran más decisivos que las organizaciones, y también se comprobó que, tanto en el Gobierno como en la oposición, los electores marcaban preferencias para señalar que estaban de acuerdo con preconizaciones de figuras políticas.

Si nos preciamos de ser un país arquetipo de democracia, ¿cómo no sentir aprensión por el futuro de las instituciones y de las garantías constitucionales si en treinta años, con todo nuestro acervo cívico, sólo logramos que se disuelvan progresivamente los partidos, sin los cuales no hay legítima representación popular?

La crisis de la DC (11 de mayo de 1969)

Los resultados de la Junta Nacional del Partido Demócrata Cristiano motivan el comentario semanal. En ella se rechazaron las alternativas tanto de la formación de un frente revolucionario, como la de alianzas con el Partido Nacional, triunfando la tesis del "camino propio". La nueva mesa directiva, que triunfó con dicha tesis, es presidida por Jaime Castillo Velasco, e integrada por Juan Hamilton, Manuel Fernández, Claudio Huepe y Carlos Garcés. Se señala que se postulará un candidato propio a la presidencia y que se confeccionará un programa ni capitalista ni colectivista. Como consecuencia de esta Junta se anuncia el retiro del partido de los parlamentarios Rafael Agustín Gumucio, Julio Silva Solar, Alberto Jerez y el dirigente Jacques Chonchol. También la directiva de la Juventud renuncia en masa (EM, 10 mayo, págs. 1-16). Todos ellos formaban parte del grupo denominado "de los rebeldes". Por su parte el grupo de los "terceristas", entre ellos Renán Fuentealba, Luis Maira y Bosco Parra, piden un congreso nacional del partido para que se defina ideológicamente (EM, 12 mayo, pág. 35).

La Semana Política

LA CRISIS DE LA DC

El triunfo del llamado "camino propio" en la Junta Nacional de la democracia cristiana ha generado una crisis importante en el partido de Gobierno. Aunque para los observadores de la Junta era más que probable que el triunfo favoreciera a la corriente representada hoy y por la directiva que preside el señor Jaime Castillo parece que los líderes rebeldes y terceristas esperaban el triunfo de la "unidad popular" proclamada por el Partido Comunista, que fue su bandera de lucha en ese torneo.

Sea por la frustración de esa supuesta esperanza o por cálculo rupturista anticipado, el hecho es que, a raíz del triunfo de la línea del camino propio, ha empezado el desgajamiento del sector rebelde.

Se anuncia el retiro de dos senadores y de cinco diputados del partido, así como de varios dirigentes. Resulta claro que se alejan de su tienda algunos personeros conspicuos del extremismo ideológico demócratacristiano. Es todavía prematuro avanzar estimaciones sobre el arrastre que tengan las sucesivas renunciaciones. En todo caso es natural que sus firmantes procuren provocar con ellas el máximo de consecuencias favorables a su causa.

Llama la atención, por ejemplo, la renuncia de la Juventud como departamento, es decir, globalmente y sin individualización de sus miembros. Mucho más efecto habría producido el conocimiento público de largas listas de militantes con todos los datos necesarios para identificar a cada uno de ellos, incluyendo la inscripción en la respectiva asamblea.

Las dos ideologías detectadas por los rebeldes y señaladas como causa de la indefinición y de la acción lenta del partido, empiezan a divorciarse.

Lo que el país todavía no conoce es con cuál de ambas ideologías se quedará la mayor masa partidaria y, en consecuencia, dónde estará la más contundente eficacia electoral.

Una crisis doctrinaria y práctica susceptible de decantar las ideas y de fijar un programa de acción para el partido parecía inevitable. La convivencia entre grupos que poseen fundamentos teóricos distintos y que reconocen metas diferentes para su trabajo político plantea la estéril disyuntiva de una guerra interna destructora o de una paz de transacciones generadora de inercia. Desde este punto de vista, la segregación de los rebeldes contribuye a la sinceridad del cuadro político del país.

Por eso no parecen ajustados los esfuerzos del nuevo presidente designado en la Junta Nacional, don Jaime Castillo, para convencer a amigos y a adversarios de que las corrientes que se enfrentaron en aquel torneo divergían sólo en las respectivas tácticas. Como tentativa de apagar los apasionamientos y de normalizar la situación puede ser válida de momento la actitud de reducir la desunión a un asunto de táctica. No obstante, en una perspectiva más amplia, el mantenimiento de las disparidades en ese terreno elude la formulación doctrinaria que es visiblemente la base de las líneas tácticas. Y tal evasión puede ser el fermento de nuevas crisis. Así, los llamados terceristas anuncian ahora su propósito de lu-

char dentro del partido para el triunfo de sus postulados y se transforman en la nueva izquierda de la colectividad democratacristiana. La falta de definición de la postura del camino propio en el plano doctrinario arriesga la repetición de lo que está ocurriendo ahora con los rebeldes.

Más aún, el peligro que amenaza a la corriente que triunfó en la Junta Nacional es que por aminorar las repercusiones de la crisis y por sacudirse de motes ingratos por parte de la izquierda marxista, sus líderes atiendan de hecho a las insinuaciones del extremismo de quienes se alejan del partido o de quienes permanecen en él conformándose a una línea opositora. La experiencia demuestra que hay políticos y partidos capaces de llegar a las mayores contradicciones y a verdaderos absurdos políticos con tal de no sentirse tachados de derechistas o de indecisos en el ademán revolucionario.

Sin duda los democratacristianos más activos y vigilantes comprenden que no tienen obligación alguna de pagar un precio doctrinario o político por su victoria dentro del partido. Por el contrario, ellos ven con claridad que las concesiones a la demagogia con el ánimo de aplacar ataques no hacen más que agravar la posición siempre difícil de los que han conquistado el poder y se deciden a ejercerlo realmente.

ONDAS SÍSMICAS

La supuesta "unidad popular" que, como muy bien lo ha expresado el presidente democratacristiano, señor Castillo, pretende ser una combinación de partidos políticos y

concretamente una alianza de comunistas, socialistas y radicales, a la cual se trató de llevar a la democracia cristiana, sufre también su propia crisis.

En vano se le quiere recubrir con vibrantes colores de espontaneidad. De hecho es una difícil costura de piezas de trama, edad y calidad diferentes, donde no juega ningún papel el pueblo, sino las directivas políticas.

La crisis democratacristiana alcanzó a las pacientes maniobras de los comunistas. Para éstos no es buena noticia que el divorcio interno en el partido de Gobierno se traduzca en la formación de uno o más grupúsculos de utilidad escasa para la larga estrategia unionista del comunismo oficial. Entretanto, los entendimientos entre el sector dirigente del radicalismo y los comunistas despierta reacciones ingratas en el socialismo.

Como si estuviera forzado a ser la contraparte mecánica de la democracia cristiana, el FRAP entra en crisis en conjunto con su adversaria y cae en las mismas confusiones, revelando que los protagonistas de una querella política y parlamentaria de cinco años tienen más semejanza entre sí que las que se imaginarían los espectadores.

El país está en presencia de una especie de sismo político difuso y contradictorio. De ahí que los emigrados de la democracia cristiana vayan a caer a una zona de corrientes entrecuchadas aun más tumultuosa, que es el FRAP.

Los jóvenes que están por un izquierdismo violento y antiparlamentario pasarán a ocupar su sitio entre los grupúsculos de la ultraizquierda. Quienes piensan en la

"unidad popular" de corte electoralista, siguiendo la idea comunista, entrarán a tomar su puesto junto a radicales y a socialistas, exponiéndose a que los vaivenes del poderoso partido de Moscú los sometan a contratiempos semejantes a los que sufran los actuales aliados de este último.

En este momento una sola figura aparece con posibilidades serias de ser candidato presidencial para 1970, el señor Jorge Alessandri Rodríguez. Pese al silencio del ex gobernante, su figura crece en los sectores no comprometidos con la política. Eso inquieta a los partidos que no lo apoyan y los mueve a suponer una resurrección de la derecha, consigna que sólo sirve para prestigiar a grupos políticos que no son ni pretenden ser todo el electorado de Alessandri.

Entretanto, la democracia cristiana debe designar candidato en un par de meses, y el FRAP debe estar esperando aclarar sus propios conflictos, ver más despejado el proceso democratacristiano y conocer el nombre del candidato de esta última fuerza.

Si las cosas permanecen en esta confusión, los predominantes de la política chilena corren el peligro de debilitarse. De ahí que es probable que sus estrategias se empeñen en crear hechos políticos nuevos, de orden interno o internacional, que permitan una reacción de los cuadros partidistas y una movilización de la opinión pública en torno de ellos.

Todo indicaría que políticamente el país navega por mares agitados y deparadores de sorpresas. Las dispersiones partidistas, el desgaste de

las fórmulas doctrinarias, la búsqueda de hechos que quiebren el panorama establecido, el afán de operar políticamente fuera y contra de los partidos clásicos y, por último, la presencia de una posible candidatura presidencial de tipo independiente y de corte enérgico proporcionan una imagen fluida de

la evolución política en este momento.

Pero pese a que los sismógrafos de los expertos registran conmociones en los partidos y en las ideas, todo ello acontece ante la mirada casi indiferente del país, para el cual la inflación y el desempleo son problemas.

Defensa del orden

(15 de junio de 1969)

El desalojo por parte de la fuerza pública de ocupantes de terrenos en Puerto Montt, y que tuvo como resultado la muerte de 8 personas, motivó una acusación constitucional contra el Ministro del Interior, Edmundo Pérez Zújovic, que fue rechazada en la Cámara de Diputados. La acusación había sido patrocinada por 10 diputados comunistas, y fue defendida con violencia por diputados socialistas y comunistas en la cámara. Con el mecanismo del "pareo" (que consistía en un pacto entre un parlamentario ausente, que iba a votar de determinada materia, y otro que tenía la tesis contraria, para que se abstuviera en la votación) evitaron el tener que votar en esta oportunidad los parlamentarios demócratacristianos "terceristas" Pedro Felipe Ramírez, Luis Maira y Pedro Urra. El Ministro Pérez Zújovic concurrió personalmente a formular su defensa, (EM, 13 junio, págs. 1- 14).

La Semana Política

RECHAZADA UNA ACUSACIÓN

Por 78 votos en contra, 54 a favor y 3 pareos fue rechazada la acusación constitucional que diez diputados comunistas presentaron en contra del Ministro del Interior, don Edmundo Pérez Zújovic, a raíz del desalojamiento por la fuerza pública de ocupantes ilegales de terrenos en Pampa Irigoín, Puerto Montt.

Las causales de la acusación fueron abuso de poder, atropellamiento de las leyes e infracción de la Constitución. Débil era el libelo acusatorio en cuanto a sus fundamentos de hecho y a sus conclusiones de derecho. En un análisis objetivo de la situación no podían encontrarse antecedentes sólidos para acusar al Ministro ante el Senado por estas actuaciones.

El aserto de que el número de víctimas era mayor, apoyado en

dudosos testimonios, fue desvirtuado en términos contundentes.

La causal de abuso de poder no existe en nuestra Carta Fundamental como constitutiva de acusación, en vista de que cualquier actuación de los gobiernos en defensa de la autoridad y en resguardo del orden público puede calificarse mañosamente de abuso de poder.

No existió atropellamiento de las leyes por parte del Ministro, porque éste no tuvo injerencia en los hechos que se suponen delictivos y porque tales hechos no revistieron en realidad el carácter de delitos.

Por último la causal de infracción constitucional fundada en que el desalojo se practicó sin orden previa de la justicia ordinaria está contradicha por la circunstancia de que estaba perpetrándose el delito de usurpación de terrenos y por el hecho de que el proceder en estas materias ha sido habitualmente el

mismo por muchos años, dada la imposibilidad práctica de requerir un pronunciamiento del juez con la urgencia necesaria.

En fin, la acusación no fue planteada ni con razones ni con fines propiamente jurídicos, sino políticos.

Por el bando comunista se pretendía establecer, de una vez por todas, el precedente de que una respuesta enérgica a los desórdenes y desmanes, por parte de los personeros del Ejecutivo, podía acarrear graves responsabilidades a éstos. En una desgracia anterior el FRAP pretendió castigar con la negativa del ascenso al jefe militar que, en cumplimiento de disposiciones del Gobierno, debió hacer algunas víctimas entre los atacantes de las tropas que mandaba. Entonces se demostró la improcedencia y la injusticia que comportaba realizar una especie de vindicta en contra de un oficial que no había cometido falta ni delito alguno, aunque estaba envuelto en una desgracia que no pudo evitar. En esta oportunidad, siendo diferentes las circunstancias, los comunistas y sus aliados volvieron al mismo empeño: castigar al Ministro que, velando por el orden público, debió impedir una ocupación de terrenos. Como en las numerosas actuaciones de la fuerza pública, la Pampa Irigoín tenía el riesgo de provocar víctimas. La desgracia se produjo en tal oportunidad, aunque el desenlace fue afortunado en 74 desalojos practicados por la fuerza policial. Ello ha bastado para que el FRAP y sus seguidores lleven al Ministro del Interior al banquillo de los acusados.

La fundada defensa del Ministro y la brillante exposición del general Director de Carabineros, don Vicente Huerta, acerca de los hechos protagonizados por las fuerzas que dependen de este último no doblaron el bloque político que apoyó la acusación.

Los parlamentarios del partido de Gobierno soportaron una andanada de injurias dirigidas contra el Ministro del Interior, que iban, en el fondo, contra su propio régimen. Salvo escasas excepciones, la conducta de dichos parlamentarios no se señaló por su firmeza para contestar los denuestos del FRAP y de sus socios.

La acusación se ganó con los votos demócratacristianos, pese a que algunos terceristas se parearon para no pronunciarse en este caso de solidaridad al régimen de que participan, y con el apoyo de los nacionales, suministrado con serias reservas. Fue un triunfo menguado para el Gobierno, un éxito personal para el Ministro acusado y un síntoma de que en el nuevo Congreso los parlamentarios demócratacristianos están actuando con mucho menos brío que en el anterior.

DEFENSA DEL ORDEN

Los nacionales han sido objeto de un aislamiento si precedentes en las comisiones del Senado y de la Cámara de Diputados. Este acontecimiento ha roto una tradición de respeto a todas las fuerzas representadas en las Cámaras. No obstante, ello ha permitido también que la opinión pública vea al Partido Nacional como una fuerza ajena a compromisos con el actual *status*

político en que es evidente el predominio ideológico del comunismo.

Ajenos a las combinaciones en que están participando todas las otras colectividades políticas, los nacionales pudieron abstenerse en la votación de la acusación constitucional del Ministro Pérez Zújovic, con lo que ésta se habría aprobado. Sin embargo, la afirmación del prestigio de Carabineros y tal vez, más que nada, el interés de que no se cree el precedente de que el ejercicio de la autoridad, aunque sea ocasional, pueda dar motivo a castigo cuando se atiene a la prudencia y a la ley, llevaron a los nacionales a rechazar la acusación. Lo hicieron no sin manifestar con claridad su oposición terminante al régimen demócratacristiano y expresar las graves reservas que les merecen las actuaciones del Ministro del Interior.

La democracia cristiana no tiene interés político en ganarse el apoyo del Partido Nacional y no disimula ya la incomodidad que experimenta al ver que esta fuerza crece.

Demócratacristianos y nacionales son partidos que han llegado a ser extremadamente opuestos entre sí, tanto en doctrina como en práctica. Por tal motivo no es de extrañar que el partido de Gobierno no haya acogido a su opositor en la composición de las Comisiones del Parlamento, y tampoco asombra que la negativa nacional a respaldar con la abstención el libelo contra el Ministro del Interior haya obedecido a razones distintas que el apoyo a la democracia cristiana, al Gobierno o al propio Ministro.

La crítica fundamental de los nacionales ha estado en que la autori-

dad del Ejecutivo se habría ejercido esporádicamente en esta Administración y no en forma continua, regular y pareja para todos. Pero, aunque se aceptara esta aseveración, habría que reconocer que el Ministro del Interior fue acusado en el caso en que indiscutiblemente el Gobierno ejerció su autoridad y tan sólo por el hecho de haberla ejercido. La misma acusación habrían planteado los comunistas en cualquier otro caso similar, pero sólo en éste los instigadores lograron que cayeran víctimas, y la propaganda orquestada logró hacer de los sucesos de Puerto Montt una herramienta para presionar al Ejecutivo con el ánimo de conducirlo a desprenderse del Ministro.

La acusación plantea entonces el problema de la defensa del orden.

Si los agitadores continúan organizando ataques contra la fuerza pública y provocando ocupaciones de terrenos y locales o desórdenes callejeros graves, el riesgo de nuevas desgracias aumentará. Importa mucho entonces establecer desde luego que la responsabilidad de estos hechos recae directamente sobre los promotores del desorden y no sobre los defensores del orden, que han exhibido una moderación y una eficiencia incomparables. Exponer a estos últimos a ser acusados e insultados por consecuencias de su acción de bien público resulta muy grave para el presente y el futuro del país.

El desorden es la peor enfermedad que puede atacar una sociedad organizada, es decir a una sociedad viva y ordenada, lo que es lo mismo. El desorden ensombrece el panorama de trabajo de los individuos y sus expectativas de felicidad per-

sonal y familiar. Pero, sobre todo, el desorden ensombrece el horizonte de la patria, su seguridad exterior, su normalidad interior. El desorden compromete la eficiencia creadora, la eficiencia defensiva, la eficiencia productora de una nación.

La anarquía que sufren las universidades es una muestra de lo que, en grande, va a significar el desor-

den público, la no vigencia de las normas, el retroceso de la autoridad ante los desafíos de la violencia, el descontrol de quienes deberían ser ejemplo de moderación y disciplina. En la medida en que el rechazo de la acusación al Ministro del Interior ha sido un decir no al desorden, muchos aplaudirán en silencio la votación de la Cámara de Diputados.

Toma de posiciones

(13 de julio de 1969)

El artículo comenta el comienzo de la carrera electoral presidencial para 1970, con la proclamación de las precandidaturas del senador radical Alberto Baltra y del senador independiente Rafael Tarud. Una mirada al resto del panorama político muestra al senador socialista Aniceto Rodríguez refiriéndose favorablemente al alineamiento del Partido Radical con los cambios (EM, 11 julio, pág. 27); al senador Salvador Allende propiciando la creación de un "Frente de la Patria"; a Radomiro Tomic, quien acaba de regresar de una visita a Moscú y países de Europa Occidental, entrevistándose con el Presidente Frei y manifestándole su desacuerdo con la llamada "nacionalización pactada" del cobre, (EM, 13 julio, pág. 29).

La Semana Política

TOMA DE POSICIONES

El 4 de septiembre del año próximo los electores deberán designar al ciudadano que ocupará la Presidencia de la República por el período constitucional 1970-1976.

Falta un año más cincuenta y tres días para el acontecimiento.

Hay plazo más que suficiente para el desarrollo de una campaña electoral, pero va siendo tiempo de que las tendencias que van a disputarse el triunfo empiecen a definirse y a presentar sus correspondientes alternativas a la opinión pública.

Los comunistas han pedido con insistencia que la unidad de las fuerzas de la izquierda se realice en torno a un programa y no a un hombre, pero se está viendo que esa postura ha sido más bien una manera de postergar una decisión apresurada que un convencimiento sincero de que la próxima elección será de tipo programático.

El primer candidato que presentó su postulación fue el senador Rafael Tarud, en calidad de independiente de izquierda.

Los radicales aspiran a que un hombre de sus filas encabece la postulación presidencial de un grupo de fuerzas políticas robustecidas y dinamizadas por los partidos del Frente de Acción Popular. Sus estrategias creen que las victorias radicales han contado en el pasado y no pueden sino contar en el futuro con el aporte de la izquierda marxista, factor que estiman determinante para la posición de su partido.

Adelantándose a otros interesados de la combinación frapista-radical el partido que preside el diputado don Carlos Morales proclamó como candidato al senador don Alberto Baltra.

Se trata de una prestigiosa personalidad del radicalismo, profesor estudioso, Ministro de Estado en la Cartera de Economía durante el Gobierno de concentración nacional del Presidente señor González Videla, e ideólogo que ha ido conectándose cada vez más estrechamente con interpretaciones económicas y políticas que pueden utilizarse como la avanzada del radicalismo.

El presidente del socialismo, senador don Aniceto Rodríguez, calificó a la convención radical como hecho positivo de la política chilena, en recientes declaraciones a la prensa. Ello permite a los radicales que apoyan al senador Baltra abrigar esperanzas de que no sólo los comunistas sino los socialistas pueden asociarse en torno a la postulación del ex Ministro de Estado y actual senador radical, si bien don Aniceto Rodríguez dejó entrever en sus declaraciones que las preferencias de los socialistas estaban en primer lugar por uno de ellos y en segundo término por un militante del FRAP, pero estimó "perfectamente posible" que la persona tuviera otra filiación política.

La vuelta apresurada del senador don Salvador Allende, en vísperas del plenario nacional del Partido Socialista, desafiando los resultados de la convalecencia de una enfermedad que contrajo en Cuba, hace pensar que hay en él otro candidato presidencial.

Desde La Habana el senador Allende esgrimió el lema del Frente de la Patria, paralelo al de la unidad popular que levantaron los comunistas y que tiene la ventaja de aludir en forma directa el tema de la reconquista nacional y del antiimperialismo, que tanto preocupa a casi todos los partidos políticos.

Los comunistas tienen, pues, para elegir entre un radical, como el senador Baltra, o un socialista, como el senador Allende, personalidades ambas susceptibles de conciliar a la izquierda en la difícil lucha electoral de 1970.

El ex Embajador de Chile en

Washington, don Radomiro Tomic, ha vuelto después de una visita a Moscú y después de comprobarse que su renuncia a la postulación como candidato de la democracia cristiana no había tenido más efecto que avivar las adhesiones de ese partido hacia su persona.

Aparece, pues, el señor Tomic como el candidato virtual e indiscutible del partido de Gobierno. Cuenta él con las posibilidades que le ofrecen la división de las otras fuerzas políticas, el poder y ascendiente de la Administración democratacristiana y las condiciones personales de quien es considerado unánimemente como el segundo líder de su partido.

El lanzamiento casi coincidente de los tres últimos candidatos nombrados está forzando a los alessandristas a apresurar una decisión categórica de su abanderado. El caudal de adhesiones que logren los demás grupos dependerá en forma importante de que participe en esta lucha don Jorge Alessandri Rodríguez. De ahí entonces que la reserva y el silencio guardados hasta ahora por el ex Presidente no podrán continuar por mucho tiempo más sin que introduzcan una incertidumbre en el cuadro político. Tanto los alessandristas como los adversarios de esta postulación necesitan que aquella candidatura muestre sus potencialidades y plantee su propia visión del presente y el futuro del país.

La exhibición de las metas del alessandristismo y la apreciación de su arrastre electoral influirán en forma positiva en la conformación de las fuerzas que darán la batalla de 1970.

TEMARIO PARA 1970

Si en poco tiempo más deben conocerse los nombres definitivos de los candidatos proclamados por varias colectividades, la ciudadanía habrá de tener pronto a la vista las agrupaciones de fuerzas y los objetivos que éstas se fijan a su acción gubernativa.

Con distintos matices, los señores Baltra, Allende y Tomic afirman la necesidad de agrupar a las fuerzas políticas marxistas y no marxistas para producir "una revolución popular y democrática". De una manera u otra, esas tres personalidades coinciden en estimar que el capitalismo y el neocapitalismo han culminado su vida histórica en Chile y que la tarea del año 1970 será reemplazar todo eso por una nueva sociedad.

En el orden de las realizaciones sociales y económicas específicas el actual Gobierno parece haber sentado las premisas básicas del programa de cualquier candidato de izquierda: reforma agraria, organización popular, creación de numerosas empresas estatales nuevas, nacionalización del cobre, democratización de la enseñanza.

Por animado y tenso que aparezca el debate en este período preparatorio de la próxima campaña electoral, las fuerzas políticas partidistas, con la excepción de los nacionales, han adquirido gran similitud y no difieren en la práctica en sus objetivos sino en las modalidades para alcanzarlos. La dispersión de

partidos no obedece, pues, a razones programáticas de fondo sino a las tácticas personales o locales, que pierden significado en un enfrentamiento presidencial.

Las postulaciones para 1970 habrán de contar con los cambios introducidos por el actual Gobierno o que han resultado indirectamente de ciertas reformas de estructuras.

El cuadro no será ya el de 1964. El Gobierno y el partido de Gobierno constituyen hoy un núcleo de influencia económica y política que no tiene precedentes. Los campesinos están en un proceso de toma de conciencia que no siempre favorece a quienes promueven dicho proceso, pero que sin duda confiere una gravitación distinta a los trabajadores agrícolas en la próxima jornada electoral. El control político-partidista sobre la organización sindical del país se ha estrechado considerablemente. Los partidos extremistas han conseguido acceso amplio a los medios de información y de propaganda.

En este panorama deberá jugar nuevamente su suerte la democracia chilena, apoyada en último término en el hombre común, en la dueña de casa, en el elector no comprometido. La gran masa ciudadana está resuelta a que el país avance, pero no desea quebrantos ni odiosidades y aspira a la evolución democrática dentro del orden. Los próximos días deben esclarecer las opciones ideológicas y personales que se ofrecerán al electorado.

Candidato de la DC

(17 de agosto de 1969)

Luego de una reunión de más de 6 horas, el Partido Demócrata Cristiano designa oficialmente a Radomiro Tomic como candidato a la Presidencia de la República, y se elige una directiva "de unidad", presidida por el senador Benjamín Prado e integrada por Jaime Castillo, Ricardo Valenzuela, José de Gregorio y Carlos Garcés, entrando así de lleno en la lucha electoral (EM, 16 agosto, pág. 27).

La Semana Política

CANDIDATO DE LA DC

Con la designación de don Radomiro Tomic como candidato oficial de la democracia cristiana y con el nombramiento de una directiva de unidad en la Junta Nacional de ese partido, celebrada el viernes, la campaña presidencial para 1970 entra a una etapa decisiva.

La definición de programa y de candidatura a que ha llegado el partido mayoritario gravitará considerablemente sobre el panorama político. La ciudadanía, deseosa de consolidar económicamente las reformas sociales logradas hasta ahora y de oponerse políticamente al avance marxista, queda notificada de que el candidato acentuará las reformas y buscará el apoyo de la izquierda sin distinguos. Por su parte, las colectividades de la izquierda marxista han quedado notificadas de que la construcción de una amplia unidad popular o de cualquier frente unido contra el alessandrismo deberá contar con el señor Tomic como abanderado oficial de la democracia cristiana.

Ciertamente los adversarios del partido de Gobierno están lejos de

desdeñar la fuerza de éste. Por una parte, el llamado desgaste del poder queda compensado con creces por la influencia que proporciona el mismo poder a través de los numerosos y vigorosos resortes de que dispone hoy la maquinaria estatal. En segundo término, es de presumir que las sucesivas decantaciones electorales experimentadas por la democracia cristiana la hayan desprendido de sus agregados artificiales y transitorios para dejarla en su fuerza genuina, que le ha dado la mayoría parlamentaria de que goza.

La trabajosa designación interna del señor Tomic marca, al parecer, una victoria personal de éste sobre su partido.

Las relaciones entre caudillo y partido seguidor han tenido entre nosotros larga historia. Para no ir más atrás, los presidentes radicales sostuvieron luchas tensas con las directivas de su partido, pero en todos los eventos el Partido Radical mantuvo una altiva independencia frente al Mandatario y correspondió más bien a este último luchar por sus fueros constitucionales frente a las presiones de sus correligionarios. También ha tocado al Presidente Frei

vivir momentos difíciles en la colaboración con su partido, pero la circunstancia de que la democracia cristiana haya permanecido como partido único en esta Administración, así como la índole peculiar de esa colectividad y de los hombres formados en ella, han dado al Primer Mandatario una influencia preponderante en su hogar político, aunque es cierto que ha empleado pocas veces a fondo este poder. A su vez, puede decirse que la fiel colaboración prestada a La Moneda por la democracia cristiana no registra precedentes claros en nuestra historia política.

El candidato para 1970 ha dado un paso más en el camino de asegurarse la colaboración de su partido. Ha deseado una directiva adscrita a su personalidad. La fórmula de unidad le otorga participación suficiente a sus partidarios personales y le da una facilidad que no tuvo el candidato Frei, acompañado en 1964 por el severo presidente Fuentealba.

Aparte de que la figura de don Radomiro Tomic es reconocida por todos los demócratacristianos como la del segundo hombre después del Presidente Frei y con derecho indiscutible a la sucesión de éste, en el momento de pensar en otros nombres, vistas las dificultades del candidato para aceptar su postulación, el partido cayó en la cuenta de que no los tenía. No significa esto que escaseen aspirantes con mérito para el cargo, sino que ninguno de ellos dispone del arrastre intra y extra democracia cristiana como para competir victoriosamente en una campaña de pocos meses con candidaturas de gran popularidad.

La disminución de la independencia política de la democracia cristiana frente a su candidato puede ser una característica de la época. Por disolución, por división o por desnaturalización de los partidos se advierte que ellos tienden a ocupar menos lugar que en otros tiempos en la atención pública. No sólo en Chile, sino en muchos países, se imponen personalidades fuertes que toman sobre sí la dura tarea de satisfacer las aspiraciones populares a través de programas racionales de prioridades, lo que excluye el localismo partidista y sus ambiciones. La misma gravitación del Presidente Frei sobre su partido responde a esta tendencia.

EL PROGRAMA

Empezará ahora el trabajo de los demócratacristianos para dar a entender su programa a las masas.

La candidatura Frei tuvo contornos de fácil comprensión pública. Su programa pudo entenderse de muchas maneras, pero el grueso de sus electores vio que se trataba de superar las estrategias políticas y económicas de los partidos tradicionales y de luchar con éxito contra el marxismo militante. Había sin duda interpretaciones más sutiles y profundas del contenido programático de esa candidatura, pero a la masa electoral le bastaron aquellos escasos datos para formar la mayoría absoluta en favor del señor Frei.

La candidatura Tomic surge en un momento diferente. No cuenta, desde luego, con la fuerza electoral que veía en la democracia cristiana una respuesta sustitutiva del colec-

tivismo marxista. Por tanto no cuenta con el empuje emocional vigoroso representado por la resistencia de una nación contra las amenazas a su libertad política, a sus tradiciones, a su fe y a todo cuanto representa el modo de vivir nacional. La disyuntiva entre comunismo y anticomunismo no satisface a la democracia cristiana, pero sin duda fue uno de los factores que le dieron el poder en 1964. Dicha simplificación no puede aplicarse por el momento a la candidatura Tomic.

Por lo demás, el ex Embajador en Washington estima que sólo puede llegar al poder con un ideario de izquierda acentuada y, además y sobre todo, que sólo puede gobernarse el país con el apoyo de una mística de izquierda. La primera premisa es válida si aceptamos que el abanderado de la democracia cristiana no está en condiciones de plantearse esta vez como una alternativa contradictoria a la que representa el colectivismo totalitario. La segunda premisa parecerá discutible, pues la mística de izquierda estará muy posiblemente al servicio de los partidos marxistas que la proporcionen y no del líder que se apoye en las sugerencias programáticas de éstos.

En fin, el hecho es que el candidato demócratacristiano para las elecciones presidenciales de 1970 parte doctrinariamente del supuesto de que el capitalismo y el neocapitalismo han fracasado en el país como fórmulas de desarrollo, afirmación que coincide con la que vienen haciendo los teóricos y políticos de la interpretación marxista del desarrollo latinoamericano.

Esa tesis es la que fundamenta los múltiples esfuerzos que se realizan para continuar un proceso ya largo de reformas estructurales, iniciado con la idea de que las viejas estructuras eran la causa de la inflación y que ahora continúa, aunque el mismo proceso reformista se haya revelado como acelerador inflacionario. El añadido de que lo que viene no serán reformas, sino la revolución pura y simple, no deja en este caso de ser un continuismo, pues son los temblores sociopolíticos de diversos grados los que están avivando la inflación, y sin moneda estable no hay verdadero desarrollo, por lo cual el propósito revolucionario aparece como contraindicado para desarrollar de veras este país.

Es claro que puede seguirse reformando, revolucionando y destruyendo, pero el fundamento de ello habrá de estar en razones políticas, en la esperanza de ganar votos o en el afán de ganar voluntades para una gran empresa colectiva, pero no en razones económicas. La sola consideración de que la tendencia del país a los sistemas híbridos lo ha privado de experimentar en serio el capitalismo y el neocapitalismo, es decir, lo ha dejado sin rutas claras como las de Suecia, Japón o Australia, bastaría para no desechar un camino que en realidad no se ha seguido sino en forma casi simbólica. No hay en Chile nada o casi nada del capitalismo europeo o del norteamericano y tampoco hay nada del neocapitalismo de la economía social de mercado que aplicó la democracia cristiana en Alemania. Vivimos un limitado socialismo burocrático, que se diría construido para

una existencia parasitaria sobre actividades económicas cada vez más aquejadas de anemia.

Ese socialismo burocrático y parasitario es el verdadero orden establecido, el verdadero asiento de las minorías opresoras. Hacer la revolución tradicional contra un supuesto orden burgués y capitalista es copiar una operación conocida y abs-

tracta, pero renunciar en el hecho a liberar a las genuinas fuerzas del desarrollo chileno. El candidato señor Tomic no ha explicitado suficientemente el contenido concreto de la revolución que preconiza, pero en todo caso el debate que se abre con el proceso electoral habrá de abarcar el temario que él ha planteado.

Escalada subversiva

(31 de agosto de 1969)

Se analizan en esta oportunidad diversos hechos de violencia que han ocurrido en los últimos días: robos y asaltos, entre los que destaca el espectacular atraco a la camioneta recaudadora del Banco Continental, frente al Supermercado Portofino, cuyos autores fueron estudiantes universitarios de izquierda (EM, 26 agosto, pág. 1); atentados a cines donde se exhibe la película "Che Guevara", atribuidos por la policía a los comunistas (EM, 20 agosto, pág. 31); violencia estudiantil en las calles protagonizada por secundarios pero promovida por universitarios, algunos de los cuales son detenidos (EM, 23 agosto, pág. 33).

En la misma semana, el Partido Socialista proclama como candidato presidencial al senador Salvador Allende (EM, 30 agosto, pág. 31).

La Semana Política

ESCALADA SUBVERSIVA

Resulta difícil apreciar cuál de los hechos de esta semana reviste más gravedad. En todo caso, la confirmación de que varios robos y asaltos a mano armada han sido medios con que la ultraizquierda se provee de fondos para su acción revolucionaria; la confirmación también de que los focos de insurgencia estallan sincronizadamente en diversos puntos del país; la complicidad ostensible de los comunistas o la activa participación de ellos en la violencia; la cosecha de víctimas entre carabineros y civiles; la colocación de barricadas en una arteria vital de Santiago, como es la Gran Avenida; el apedreo del automóvil del Ministro del Interior, para no citar sino algunos de esos graves hechos, demuestran que la capacidad subversiva de la extrema izquierda está a punto de amenazar la estabilidad del régimen democrático.

Parece ingenuo ya satisfacerse pensando que estos acontecimientos

son protagonizados por una minoría en el país y que "la opinión sana y democrática" los condena. Precisamente, el carácter alarmante que reviste la propagación de los focos de insurgencia es que grupos minoritarios ponen en jaque a la mayoría ciudadana. Ello es, por lo demás, un distintivo de las acciones revolucionarias profundas. Nunca una revolución se hace con la iniciativa de la generalidad de un pueblo sino mediante el aprovechamiento que grupos audaces logran hacer de la indiferencia o de la debilidad de las mayorías.

Es cierto que en las universidades, en los sindicatos, en las poblaciones y en los demás sectores los comunistas, socialistas y miristas son una fracción no mayoritaria de las opiniones, pero la extrema izquierda se está imponiendo por su audacia y su insolencia frente a inseguros adversarios políticos y frente a la pasividad de la gran masa.

Los hechos han derribado la alegación tradicional de que la vio-

lencia reaccionaria genera la violencia revolucionaria, alegación que ha sido favorita de los personeros de la izquierda como excusa de los delitos de sedición y otros que son inseparables de la vía revolucionaria violenta.

Fueron los estudiantes secundarios los que apedrearon la semana pasada un vehículo policial e hirieron a un carabinero, en circunstancias de que ese personal era completamente ajeno a las incidencias estudiantiles y cumplía otras misiones.

Podrían multiplicarse los ejemplos de claras provocaciones de los protagonistas de la guerrilla urbana, así como no han faltado casos de extraordinaria tolerancia de las autoridades ejecutivas *y judiciales para con una situación que se ha dejado empeorar por largo tiempo.*

Pese a los esfuerzos de ciertos medios de comunicación y de grupos universitarios y gremiales para convertir en víctimas a los pistoleros del supermercado Portofino y para convencer a la opinión pública del "furor vesánico" de Carabineros y de los "refinamientos demoníacos" de Investigaciones, basta la exhibición de los últimos acontecimientos para llegar a la evidencia de quiénes son los verdaderos agresores y los causantes del dolor de las víctimas de estos días.

Sigue la campaña destinada a desprestigiar y desanimar las actividades de las fuerzas de Carabineros y de Investigaciones, lo que envuelve una ofensa al Gobierno, cuyas órdenes se limitan a cumplir esos cuerpos policiales.

La misma campaña silencia las lesiones sufridas por carabineros,

como si los policías no fueran dignos de más comprensión que los elementos subversivos que los atacan.

La organización publicitaria de la extrema izquierda, que ocasionalmente cuenta con la complicidad de otros medios informativos, está adulterando los sucesos y cooperando con innegable eficacia a intimidar a quienes podrían resistir a la subversión.

Las claras y terminantes disposiciones de la Ley de Seguridad Interior, aplicables a muchos hechos ocurridos y que siguen ocurriendo en diversos planos, no se saben usar por la defensa jurídica del Gobierno, o no se desean emplear o se consideran como normas obsoletas *y sobrepasadas. Mientras tanto la escalada subversiva sube de nivel con matemática sincronización.*

EL BANDOLERISMO

Políticos de buena voluntad afirman que los enfrentamientos callejeros de estos días son una "cortina de humo" para ocultar la participación de grupos marxistas en una serie de robos y asaltos a mano armada.

Se diría, por el contrario, que los estallidos de violencia urbana son más una confirmación de la solidaridad con los pistoleros que un ocultamiento de sus acciones.

A todo se acostumbra el público, piensan con razón los extremistas. Ahora se trata de habituar a los chilenos a que la práctica de delitos comunes contra las personas y los bienes forma parte de la estrategia de los revolucionarios. Se han levantado voces para solidarizar pú-

blicamente con los muchachos pistoleros, aunque lo lógico habría sido actuar con misericordia silenciosa y privada hacia sus personas, pero juzgar sus delitos como corresponde.

Una entrevista periodística a uno de los jóvenes prófugos que aparecen como dirigentes del MIR consiste en una apología descarnada de los asaltos que han alarmado a la población últimamente.

Este mirista no deja de tener lógica. El ataque a la propiedad privada y a los poseedores de capital es tan continuo e implacable que el robo y el hurto empiezan también a debilitar sus contornos específicos. Sin duda es lícito, desde el punto de vista de estos revolucionarios, conseguir fondos para derribar la sociedad aun a costa del crimen. El viejo mandamiento de la Humanidad "no robarás" está dejando de tener vigencia. Los ladrones y pistoleros se consuelan al imaginar que roban a los capitalistas, pero no sólo éstos han sido sus víctimas. Por el camino de denigrar el derecho de propiedad se ha llegado con rapidez al elogio del robo y a la familiaridad con los más corrientes delitos que castiga el Código Penal.

El surgimiento concertado de desórdenes y los grandes avances en la audacia de los extremistas son la orquestación de una nueva melodía revolucionaria. El país queda informado de que los establecimientos comerciales y tal vez los bolsillos de los transeúntes tienen por finalidad posible el financiamiento extraordinario de la revolución. La noticia proviene de los propios delincuentes, los cuales, pese a haber confesado sus delitos e identificado a sus

cómplices o coautores, no ayudan a que se recupere el dinero robado ni a que aparezcan los líderes del MIR que la policía busca afanosamente. Es posible que el dinero esté ya sirviendo para el fin con que se le robó y también es posible que la aparición de los miristas fugados esté consultada para un momento más extremo de la tensión que sus propios hechos estimulan.

Tanto se ha evocado a la revolución por diversos políticos y partidos que al fin parece esbozarse en el horizonte la roja figura clásica de ésta, con sus señales de sangre, fuego, pillaje, destrucciones y víctimas inocentes.

Desde la derogación de la llamada Ley de Defensa de la Democracia, ésta es la primera vez que el Partido Comunista entra a la acción revolucionaria violenta. Sus juventudes se muestran armadas, sus grupos estudiantiles participan directamente en las luchas cañuejeras y su prensa invita a la insubordinación sin disimulos de ninguna clase. Entre tanto, los centros universitarios controlados por los comunistas figuran como núcleos activos de la resistencia a las autoridades. El ataque al automóvil del Ministro del Interior, donde viajaban dos senadores democratacristianos, se perpetró en las inmediaciones de la Universidad Técnica del Estado por jóvenes que reconocieron al vehículo como del Gobierno, que hirieron a su chofer y que amenazaron al diputado don Bernardo Leighton.

La "unidad popular", tal como la deseaban los comunistas, se está pues forjando en la violencia en estos días, desencadenada por los pistoleros extremistas.

La designación de don Salvador Allende como candidato de los socialistas para 1970 contribuye a esclarecer el panorama electoral pero no las verdaderas intenciones de la

izquierda marxista. A ésta se la ve apresurada por romper el tablero en que deben jugar las candidaturas presidenciales y demoler el orden institucional que las hace posibles.

Situación de las Fuerzas Armadas

(16 de noviembre de 1969)

Se refiere en esta oportunidad el artículo a los acontecimientos ocurridos el 21 de octubre anterior en el Regimiento "Tacna", que se autocuarteló, a las órdenes del general Roberto Viaux, pidiendo mejoramiento económico para las Fuerzas Armadas.

El senador Rafael Tarud había propuesto una ley de amnistía que beneficiara conjuntamente a los oficiales del Tacna y a los extremistas procesados por asaltos, agregando los socialistas que debía ser extensiva a los obreros de la industria "Saba" y a otros procesados. El Presidente del Senado. Tomás Pablo, declara improcedente el proyecto (EM, 16 de nov., pág. 35).

La Semana Política

SITUACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS

El Senado despachó el viernes el proyecto destinado al mejoramiento de las Fuerzas Armadas, Carabineros y otros servicios de seguridad pública, cuya discusión ha sido el centro de las preocupaciones parlamentarias y partidistas.

La iniciativa entrega facultades limitadas al Ejecutivo para mejorar las rentas castrenses. El Gobierno no podrá disminuir el monto total de las actuales sumas destinadas a ese objeto y habrá de preferir en los mejoramientos a las rentas más deterioradas. El reajuste deberá ser automático, íntegro y simultáneo para el personal activo y pensionado. El mejoramiento no podrá ser inferior al alza del costo de la vida durante 1969. El Presidente de la República no podrá modificar el régimen de previsión ni alterar la proporción entre la parte imponible y la parte no imponible de las rentas en perjuicio del personal pasivo. Los decretos con fuerza de ley sobre mejoramiento deberán dictarse

en el plazo de 30 días y, en todo caso, entrarán a regir el 1^{to} de enero de 1970. Deberá establecerse en ellos qué remuneraciones anexas al sueldo serán no imponibles. Tales son, resumidamente, las normas con arreglo a las cuales tendrá el Gobierno que mejorar las rentas de las Fuerzas Armadas.

Según el Ministro de Hacienda, el proyecto tiene un financiamiento de 305 millones de escudos, pero se sabe que el costo del mismo sube de 850 millones.

Así va el proyecto a la Cámara de Diputados para que cumpla su tercer trámite.

Los distintos partidos no han dejado de revelar su preocupación por este grave problema.

Y sus inquietudes se justifican. Los sucesos del 21 de octubre en el regimiento "Tacna" han interrumpido la tranquilidad con que muchos políticos y partidos se entregaban a la demagogia. El tema de las Fuerzas Armadas ha sido un convidado de piedra en la mesa de la política nacional. Obliga, en efecto, a aban-

donar las frivolidades y a solucionar con rapidez una necesidad pública seria y urgente.

Del debate aparece que no resulta fácil apreciar el monto efectivo de los gastos que representa este mejoramiento. Surge también que los arbitrios para financiarlos son escasos y, además, extraordinariamente gravosos para la economía nacional.

Todo esto implica una considerable imprevisión y quiere decir que nuestro régimen político ha estado operando desde largo tiempo sin tomar en cuenta todas las necesidades de las Fuerzas Armadas, en términos de que la cifra necesaria para atenderlas no aparezca casi como un gasto extraordinario y sorpresivo.

Hubo múltiples advertencias públicas en cuanto a la obligación de que no se descuiden los servicios y funciones fundamentales del Estado, entre ellos a las Fuerzas Armadas, por el afán de llevar adelante planes más llamativos y de mayor efecto político.

Y cada vez que la prensa ha reflejado de algún modo la urgencia de las necesidades castrenses los periodistas respectivos han tenido dificultades. Debe recordarse, por ejemplo, que el senador don Salvador Allende, como Presidente, entonces, del Senado, obtuvo que se sometiera a proceso al Director de este diario por haber publicado una carta de un coronel de las Fuerzas Armadas, cuyo contenido no era más que la descripción del drama económico de los subordinados de dicho jefe.

Desde entonces coincidieron sectores de Gobierno y de oposición para dar una especie de carácter se-

dicioso a las informaciones que se relacionaran con el grave problema público de la defensa nacional y para calificar de "golpismo" cualquiera aproximación.

A la hora en que es evidente e impostergable resolver dicho problema, al menos en lo que se refiere a un aumento de las rentas de las FF.AA., los partidos rivalizan en demostrar sus esfuerzos y simpatías en favor de ellas, pero el tono del debate de esta semana indica que sin los sucesos del "Tacna", por reñidos que ellos estén con la disciplina militar, los poderes públicos no habrían dado celeridad a la solución de este problema. Ello debilita a dichos poderes públicos, como se dijo en el debate, pero la principal responsabilidad no ha estado en los militares que se impacientaron, sino en quienes giraron demasiado a cuenta de la obediencia de las Fuerzas Armadas.

DESCONOCIMIENTO INEXCUSABLE

Después de la irrupción ocasional de los militares en la vida política, entre los años 1924 y 1931, se produjo la relegación de los hombres de armas a sus tareas profesionales específicas, pero tanto éstos como los civiles entendieron que ese profesionalismo era casi un "apartheid" social. Ni los soldados hicieron esfuerzos por hacer comprender su trabajo, más allá de los aspectos externos de éste, ni los civiles se preocuparon de dar a las Fuerzas Armadas la vital importancia que tienen.

El formalismo rutinario recubrió de una gruesa capa de lugares comunes las relaciones entre el sector

civil y el sector castrense. Detrás de esa retórica se ha asilado una profunda incomprensión recíproca.

El hecho básico y evidente de que sin Fuerzas Armadas no hay soberanía y de que sin soberanía no hay Estado chileno, escapa con frecuencia a muchas mentes. La ilusión de que superpotencias internacionales tomaran a su cargo los aspectos más importantes de nuestra seguridad, o la esperanza de que ideales supranacionales permitieran encaminarse hacia una paz regional desarmada, o la creencia de que un país como el nuestro puede desarrollarse económicamente sin cuidar de sus fronteras, ha permitido que elementos responsables del país no hayan atendido en la magnitud necesaria los problemas de las Fuerzas Armadas.

La extrema izquierda (guerrillera o no) ha mirado siempre con hostilidad a los ejércitos regulares. Hay otros sectores que pensaron que las actividades castrenses eran punto más que un ornato tradicional y consideradas casi como gasto suntuario en un país pequeño. No han faltado quienes, desdeñando la madurez de la doctrina de las Fuerzas Armadas nacionales, han creído contar con elementos de ellas para una mezquina aventura.

Es evidente que una incomprensión de los dirigentes del país acerca del valor real de las Fuerzas Armadas ha traído la subestimación de las necesidades económicas de éstas, tanto para instalaciones y material de instrucción como para rentas de su personal.

A la vez, la cuestión de las remuneraciones es, para los miembros de las Fuerzas Armadas, no sólo una

necesidad vital, sino un asunto de prestigio, pues los sueldos insuficientes aparecen como una confesión inequívoca de que la comunidad no aprecia lo bastante los servicios a que tales sueldos corresponden. Esa desvaloración es tanto más injusta cuanto que ese personal, mal estipendiado en las filas, es recibido con gran interés por la producción civil y ocupa en ella situaciones de responsabilidad cuando abandona las armas, y muy particularmente las de las especialidades técnicas.

El mismo desconocimiento que determina postergaciones económicas de largo tiempo ha sido causa del trato sigiloso y hasta temeroso de las cuestiones relacionadas con los institutos armados. De ahí también que el país esté aquejado de una política castrense errónea o inexistente.

Las indicaciones para conceder amnistía a los militares procesados por los sucesos del Tacna están afectadas de la misma incomprensión. Apresurar una amnistía que, junto con borrarlo todo, evite el análisis judicial de las actuaciones de los jefes que encabezaron el autoacuartelamiento del Tacna, no se ajusta ni a los deseos de éstos ni a su prestigio ni al interés de los institutos armados. A través de dicho proceso debe resultar un balance de responsabilidades concernientes a la situación del Ejército y de las demás ramas de la Defensa, aunque directamente sólo acarree un pronunciamiento acerca de la conducta de los oficiales inculcados.

Además, el propósito de que la amnistía cubra las acciones de asaltables de supermercados y de terroristas conjuntamente a las de

los oficiales que hicieron una manifestación que desgraciadamente no encontró expedito el conducto regular como medio de resolver un gravísimo problema del Ejército y de la nación constituye otra prueba de confusión parlamentaria inexcusable. Enturbiar con preocupaciones políticas de corto alcance una cuestión tan grave demuestra que el

remezón del 21 de octubre no consiguió despertar a la realidad a todas las mentes.

En fin, aunque la visión de las necesidades castrenses llegue tan bruscamente a los medios políticos, es importante que naufraguen ciertas ilusiones y no persistan las tramitaciones elusivas en este problema esencial del país.

Programa de izquierda

(28 de diciembre de 1969)

El comentario da a conocer los aspectos más relevantes del llamado "Programa Básico de la Unidad Popular", que señala las aspiraciones políticas del bloque al que se está dando forma para presentar un candidato de izquierda a la elección presidencial de 1970.

La Semana Política

PROGRAMA DE IZQUIERDA

Después de largas, difíciles y agitadas deliberaciones los representantes del Partido Comunista, del Partido Socialista, del Partido Radical, del Partido Social Demócrata, del Movimiento de Acción Popular Unitaria y de la Acción Popular Independiente han dado a conocer su programa destinado a presentar unidas esas fuerzas en la campaña presidencial de 1970.

El "programa básico" ha sido seguido por un "pacto" que describe las modalidades de tipo político que debiera tener el gobierno que esos partidos aspiran a formar.

Luego ha venido otro escrito sobre "conducción y estilo" de la campaña, que parece querer codificar la estrategia electoral de esos partidos.

Tan nutrida documentación se considera como previa a la designación oficial del candidato, que debe darse a conocer muy en breve.

Tal vez el carácter heterogéneo de las fuerzas congregadas para la "unidad popular" y la necesidad de llegar a algún fin obligaron a restar vitalidad a la línea de izquierda para entrar en concesiones electorales. Muchas palabras y poco nervio es la primera impresión que deja

esta abundancia documental y normativa.

El segundo instrumento o "pacto" afirma que "el gobierno de la unidad popular será garantía para la abrumadora mayoría de la población, para el 90 por ciento o más de ella", después de haber aseverado que no será garantía para los demás ciudadanos.

Sin embargo, no se ve dónde puede encontrar garantía ese enorme sector mayoritario de la población cuando, aparte de la debilidad doctrinaria y de la fragua lenta de esta combinación política, sus postulados vienen a desembocar en una especie de repetición de los errores ya enmendados por Uruguay, en un régimen colegiado de características sumamente confusas.

Un tercer rasgo de la posición de los partidos de izquierda es que ella está inspirada más en la presencia de la candidatura del señor Alessandri que en convicciones verdaderamente comunes y sólidas. Se diría que el programa, en lo político por lo menos, es más "antialessandrista" que izquierdista.

Como postura "antialessandrista" puede registrarse la declaración enfática de que harán gobierno del pueblo y no de un hombre; que no elegirán a un monarca; que han fra-

casado los gobiernos que tienen como único factor o centro la persona del Presidente; que ese poder ha sido siempre expresión de los reaccionarios, y otros conceptos análogos, aparte de las críticas abiertas al gobierno y a la persona del señor Alessandri.

Al atacar lo que llaman el "personalismo", dedican también un párrafo hostil al candidato de la democracia cristiana, señor Tomic.

En fin, pese a la insistencia en que hay novedades doctrinarias y de estilo en las abundantes frases de la llamada "unidad popular", los documentos han desilusionado y no logran definir vigorosamente en qué consiste la amalgama de partidos y qué pretende ella. El nombre del candidato mismo será el verdadero mensaje y el programa. Al saberlo, el país se impondrá de si se trata de una nueva o de una vieja línea y de si el panorama todavía oscuro de este sector del partidismo nacional se aglutina y se presenta con algo más que con una "anti" candidatura del señor Alessandri.

GOBIERNO COLEGIADO

El programa básico de la izquierda anuncia una nueva Constitución Política, que establecerá "como órgano superior de poder" a la Asamblea del Pueblo. En ella "confluirán y se manifestarán las diversas corrientes de opinión". "La Asamblea del Pueblo -sigue el programa- será la Cámara Única que expresará nacionalmente la soberanía popular".

La potestad de esta Asamblea será superior a la del Presidente de la República. Ella formará el Poder Judicial, pues nombra a los magis-

trados del Tribunal Supremo y éste a su vez designa al resto de la magistratura.

En el nuevo proyecto de programa del comunismo chileno se dice: "los comunistas proponemos que el pueblo elija sus representantes por sufragio universal, directo y secreto de los hombres y mujeres mayores de 18 años, civiles y militares, alfabetos y analfabetos (exactamente la misma redacción contiene el programa básico de los partidos de izquierda); que se establezca una Cámara Única, entre cuyas facultades figuren las de designar al Presidente de la República, los Ministros de Estado y los miembros de los Tribunales Superiores de Justicia".

Tal vez pareció excesivo el importar enteramente un régimen tan contrario a la idiosincrasia nacional: se calló la idea de que la tumultuosa Asamblea del Pueblo eligiera al Presidente y a sus Ministros y cautamente se mantuvo sólo la idea de que la Corte Suprema denominada también en forma extranjerizante "Tribunal Supremo" por el programa de las izquierdas, se designara por el voto de los asambleístas.

Pero evidentemente la "unidad popular" está concebida como un paso hacia la realización de un régimen comunista. La antigua animosidad de los comunistas chilenos moscovitas hacia el presidencialismo chileno ha encontrado aliados izquierdistas en la inquietud que los produce el fenómeno del alessandristismo. De ahí es que, si no proponen francamente elegir al Jefe del Estado por la Asamblea del Pueblo, los redactores de estos programas encuentran caminos para limitar

drásticamente la autoridad presidencial.

"En el Gobierno de Unidad Popular -dice el documento llamado "pacto"- la acción del Presidente de la República y la de los partidos y movimientos que la formen será coordinada a través de un Comité Político integrado por todas estas fuerzas".

El freno de la autoridad del Presidente se llamaría, entonces, "Comité Político", el cual junto a la "Asamblea del Pueblo" haría imposible todo Gobierno. Los autores del programa de izquierda confían en superar los inconvenientes del presidencialismo chileno sustituyéndolo por un manejo colegiado en que las responsabilidades se disuelvan y la inacción encuentre nuevos pretextos.

Lo más grave es que el régimen colegiado se hará sentir en todos los planos, pues "en las esferas decisivas de la administración estatal estarán presentes todas las fuerzas que generen el Gobierno Popular, actuando conjuntamente entre sí y con las organizaciones sociales...".

Este sistema anárquico y a todas luces ineficaz que proponen los partidos de izquierda tendría por única razón auténtica el hecho de que los comunistas, aplicando su vieja experiencia en el control de masas y asambleas, conviertan el colegialismo en el mando único de un silencioso secretario general, o el asambleísmo en el cumplimiento ciego de las órdenes de un enigmático comité central.

En otras palabras, el colegialismo propuesto o es pura anarquía o es el comienzo del régimen soviético en Chile.

EXPROPIACIONES Y COMPLACENCIAS

El programa de las izquierdas tiene un punto bien concreto: las expropiaciones en gran escala.

Este es el expediente más socorrido de la política de los países subdesarrollados, sobre todo cuando los gobiernos no asumen obligación alguna de pagar el valor justo de los bienes que han adquirido por simple decreto.

Hacerse de negocios importantes sin dinero, sin trabajo y sin sacrificio es una expectativa halagüeña para falanges de pequeños políticos y funcionarios, ansiosos de bienestar pero poco dados al esfuerzo que impone el trabajo en el frente minero o la tensión que va envuelta en los difíciles avances de las fortunas privadas. Heredar de pronto grandes patrimonios, sin las cargas y riesgos propios de las sucesiones regulares; entrar por las vías burocráticas a la administración de negocios expectables, y pasar al mundo de las finanzas con careta revolucionaria, todo ello constituye un sueño ambicioso, revestido de nobles colores al comienzo pero que fatalmente se traducirá en la formación de una nueva minoría privilegiada, con títulos sin duda harto más discutibles que los de los actuales poseedores.

Simultáneamente con la expropiación de cuanto negocio lucrativo se conoce en el país sobreviene el halago a "los profesionales y técnicos, estudiantes, maestros, intelectuales, pensionados, jubilados, artesanos, hombres con capacidad organizadora, la gran mayoría de los propietarios, productores, comerciantes...", aunque de cumplirse el

programa todos ellos serán funcionarios públicos.

El despojo de algunos y el halago a los más, la anarquía como criterio de gobierno y el temor al señor

Alessandri son los ingredientes del programa transaccional de una izquierda unida en torno a grandes palabras, en que los únicos organizados y que saben dónde van son los comunistas.

Segunda candidatura

(18 de enero de 1970)

El 15 de enero se oficializa ante el Registro Electoral la candidatura de Radomiro Tomic a la Presidencia de la República, representando al Partido Demócrata Cristiano. En la noche previa dirigió un discurso por radio al país en el que criticó el sistema de democracia representativa (EM, 18 enero). La Unidad Popular tiene hasta el momento cuatro candidatos: Salvador Allende, Alberto Baltra, Pablo Neruda y Rafael Tarud. El Mapu retiró a su candidato, Jacques Chonchol (EM, 1º enero, pág. 1).

La Semana Política

SEGUNDA CANDIDATURA

El primer candidato oficialmente inscrito, el señor Jorge Alessandri, ha iniciado su campaña con gran vigor y actividad, como lo demuestran sus giras y sus polémicas intervenciones públicas.

La democracia cristiana, por su parte, inscribió el jueves a su abanderado, señor Radomiro Tomic, quien desarrolla desde hace meses un activo trabajo electoral.

Al oficializarse la candidatura demócratacristiana, el candidato pronunció un discurso en el que dijo: "Esta candidatura no es la coronación de una carrera política sostenida por ambiciones personales. No las he tenido antes ni ahora, aunque desde siempre he aceptado claramente los deberes públicos que impone el privilegio de haber nacido chileno"... "Soy hombre de convicciones y no meramente de opiniones. Digo lo que pienso y hago lo que digo".

Reafirma así el candidato demócratacristiano su lealtad a una ideología y a un partido. "Mi candidatura se apoya por igual en lo que hemos hecho durante el Gobierno de

Frei en conformidad al programa del 64 y en lo que vamos a hacer durante el gobierno de Tomic en conformidad al programa del 70", ha expresado. El cree que sus planteamientos y los del candidato de 1964 son complementarios y responden a "una diferente realidad concreta".

En el planteamiento doctrinario formulado por el señor Tomic a la junta nacional demócratacristiana, en mayo de 1969, se alude a "cuatro estadísticas estremecedoras", a saber: 1) "la inflación ha alcanzado ya un promedio anual de 23,2 por ciento para los primeros cuatro años de nuestro gobierno"; 2) "el monto global de la deuda externa ha continuado aumentando y, calculada por habitante, llega casi a 200 dólares, es decir, es la segunda en el mundo, siendo la primera la israelita"; 3) "a pesar del esfuerzo tributario interno, de los altos precios del cobre, de los importantes créditos externos y del efecto estimulante en lo inmediato de las inversiones extranjeras, es un hecho estadístico que en 1967 y en 1968 el índice de desarrollo económico por chileno fue bajo cero. Fue negativo. Lo consignan ODEPLAN, la

CEPAL y el CIAP", y 4) "el agudizamiento del desequilibrio entre la presión social y la escualidez de la economía chilena para satisfacerla".

Estos cuatro elementos le sirvieron al señor Tomic para sostener que está demostrado "de un modo palmario el agotamiento final del sistema capitalista y de las estructuras jurídico-políticas que le dan expresión en Chile".

Los mismos datos estadísticos le sirven al candidato demócrata-cristiano para demostrar el fracaso del "neocapitalismo", fórmula en que los empresarios privados se hacen socios del Estado y hacen intervenir a éste en su favor, a fin de que les asegure monopolios legales, garantías, franquicias, exenciones, incentivos, estímulos, "draw backs" y otros beneficios semejantes.

El fracaso del capitalismo y del neocapitalismo, aseverado por el señor Tomic, lo lleva a formular una "revolución popular", chilena, anticapitalista y antimperialista.

La lealtad partidista impulsa al candidato demócrata-cristiano a manifestar que son "etapas distintas aunque complementarias" la constituida por la Administración Frei y la eventual del señor Tomic. Pero en el hecho sus tesis no significan sólo un avance sino una cierta revocación de algunas de las normas y realizaciones del Gobierno actual. "Hemos hecho mucho; pero no hemos hecho la revolución", decía el candidato en mayo de 1969, y esta última no se habría hecho, a su juicio, porque contenía una contradicción fundamental: mientras el desarrollo social impulsaba los cambios, el programa de desarrollo económico se ha apoyado en la es-

tructura capitalista y neocapitalista y hasta la ha robustecido aún más.

El segundo candidato inscrito oficialmente para las elecciones presidenciales de septiembre próximo promete pues con claridad la revolución, añadiendo que "el proceso revolucionario significa igualmente un 'estado de emergencia', una etapa necesaria de tránsito entre la vieja 'normalidad' de instituciones periclitadas... y la futura 'normalidad'".

EL TERCER HOMBRE

Los partidos de la izquierda marxista, después de haber hecho públicos programas y tácticas relativos a la forma de desarrollar el proceso revolucionario que, a su vez, patrocinan, se han detenido en la persona del candidato.

Son los comunistas los que más han insistido en que lo importante era el programa y no el candidato. Sin embargo, y a pesar de las repetidas declaraciones hechas por los voceros de los cinco grupos de que no ha surgido veto hacia ninguno de los precandidatos presentados, el hecho real es que aún no se logra encontrar al hombre de la "unidad popular".

Hasta ahora la fisonomía de la izquierda no queda muy a salvo en este forcejeo que se ha prolongado hasta provocar cansancio en la opinión pública después de haber sido un suspenso políticamente aprovechable.

Se ve ya que a los comunistas les interesa más la consigna de la "unidad popular" que un triunfo electoral de la izquierda para 1970. Como el partido más obediente a Moscú

entre sus colegas de todo el mundo, el comunismo chileno ha afrontado pacientemente los más asombrosos virajes. En cada uno de ellos ha ido perdiendo la confianza de alguna parte de sus aliados, pero sus hombres siguen impertérritos... y controlan más puntos estratégicos. El reciente libro de un ex senador de la izquierda marxista acerca de la inmovilización de ésta ilustra con nitidez particular sobre la estrategia comunista aplicada a los episodios de la "unidad popular".

Nadie duda de que si los comunistas estuvieran decididos a impulsar una línea de izquierda y a hacerla triunfar en las urnas, ya habrían conseguido la unidad deseada y tendrían candidato hace tiempo.

Ellos tienen sin embargo otras preocupaciones. Formando "comités de unidad popular" en las organizaciones de base, en los barrios, poblaciones y otros núcleos, procurarán controlar a sus aliados y conducirlos hacia sus propios objetivos.

A los comunistas les interesa más la infiltración insensible en los otros partidos y el fomento de una mentalidad procomunista en la población que todo el debate programático y de candidaturas que forma la historia de la "unidad popular" hasta el momento.

Otro objetivo de la ortodoxia de Moscú es el aplastamiento de los grupos rebeldes o progresistas dentro de las naciones socialistas y dentro y fuera de los partidos comunistas locales. La dramática excomunión de Roger Garaudy, teórico del Partido Comunista francés, excluido del Comité Central por sus herejías antisoviéticas, es una prue-

ba de la fuerza represiva que se ejercita desde Moscú. El aplastamiento del comunismo checoslovaco por los rusos fue un símbolo y tal vez un gran preludio de una crisis profunda en el llamado "campo socialista". En las modestas proporciones chilenas, aquí la ultrazquierda es motivo de obsesiva beligerancia por parte de los comunistas oficiales, fenómeno que se extiende a todos los grupos de izquierda apegados a un esquema de lucha de clases: quien no está a favor de la "unidad popular", es decir, de una combinación partidista heterogénea, formada sólo con los socios que los comunistas admitan, pasa a recibir la habitual granizada de improperios y a ser objeto de presiones abrumadoras.

Todo indicaría, sin embargo, que se ha producido en la izquierda el anhelado acuerdo sobre el nombre del candidato. En los medios políticos circula la versión de que el favorecido será nuevamente el senador don Salvador Allende. Es de suponer que el antiguo líder socialista habrá resultado el más idóneo para evitar las dispersiones de votos del Mapu hacia don Radomiro Tomic, y del radicalismo hacia don Jorge Alessandri.

Pero con o sin candidato de izquierda, están trabajando ya los "comités de unidad popular" de los comunistas, empeñados en el completo monopolio del poder sindical y de las fuerzas sociales de masa. El gobernante de 1970 encontrará, pues, el campo minado, lo que es por cierto aplicable también al caso en que triunfara el eventual candidato de la "unidad popular".

Programa impersonal

(15 de febrero de 1970)

El comentario de esta semana vuelve sobre el tema del llamado "Programa básico de la Unidad Popular", que junto con otros documentos complementarios constituye la plataforma política del mencionado grupo de partidos, y a la cual adhirieron antes de designar el candidato presidencial.

La Semana Política

PROGRAMA IMPERSONAL

La izquierda marxista ha entrado a la campaña presidencial con innovaciones importantes respecto de lo que han sido sus anteriores tácticas en el país, y sobre todo respecto de las experiencias de victoria por parte de fuerzas análogas en naciones extranjeras.

Según expresa uno de los acuerdos de la llamada Unidad Popular, "la campaña debe ser el medio para educar políticamente a las masas sobre la base del programa". Y añade que "hay que desarrollar en el pueblo la conciencia de crear una sociedad socialista, la que no surge de la sola propaganda, sino mediante la lucha de las masas y un proceso de efectiva democratización".

Los partidos que interpretan el marxismo-leninismo se han visto forzados, evidentemente, a llevar un candidato a la elección presidencial próxima, pero los acuerdos programáticos previos a la designación de dicho candidato recalcan más la finalidad educativa y de agitación revolucionaria de la campaña que la firme voluntad de llevar a su abanderado a la Presidencia de la República.

A no dudarlo, el propio candidato que por cuarta vez aspira a la

Primera Magistratura no desearía servir sólo como ocasión educativa o como mensaje revolucionario. Es natural que él se proponga el poder como objetivo directo, pero todo indica que las fuerzas políticas que lo apoyan están deseando al ejecutor de un programa abstracto, al suscitador de encuentros que reflejen la lucha de clases y al forjador de una conciencia "antimperialista" y "antioligárquica" antes que al candidato resuelto a triunfar en la elección presidencial y a convertirse en el sucesor del Presidente Frei y de todos los que, desde el sillón de O'Higgins, han ejercido la autoridad de su cargo más por inspiración propia que atendiendo a los dictados programáticos de sus partidarios.

Esta es la innovación más importante respecto de las jornadas precedentes. Ahora no hay propiamente una candidatura personal. No podría sostenerse con honestidad que el abanderado de izquierda va a recoger votos debido a su atracción individual, sino por la divulgación de una plataforma a la que todos los partidos aliados del comunismo adhieren sin reservas. El candidato debe actuar dentro de los estrictos límites del marxismo-leninismo y, más aún, circunscribirse a los pos-

tulados de un programa que representa una parcialidad a su vez dentro del marxismo-leninismo.

En otras ocasiones el candidato de la "unidad popular" se había presentado a la lucha como alternativa digna de considerarse por círculos más amplios que el de su ideología. Ahora ha creído más conveniente esta especie de embargo programático, teniendo tal vez en vista que su libertad de otros tiempos para pedir concursos heterodoxos no le dio el resultado que esperaba.

Es también una innovación la impersonalidad del programa frente a las experiencias comunistas desarrolladas en el extranjero. Desde Lenin hasta Fidel Castro la presencia de un líder, capaz de manejar y adaptar la doctrina marxista a las circunstancias concretas de la acción, parecía el verdadero secreto del éxito de la revolución totalitaria. En la época marcada por Stalin, por Tito, por Mao, por Ho Chi Minh, por Castro, es decir por relevantes personalidades dotadas de características individuales muy propias y poseedoras de una autoridad que no deriva de ideas abstractas sino de esas mismas características, concebir una lucha por el poder sobre la base de unos documentos programáticos parece algo reñido con la experiencia comunista internacional.

Puede ser que la acción de líderes muy fuertes haya contribuido fundamentalmente a la dispersión ideológica y política del comunismo internacional y que entonces los burócratas de Moscú deseen el "despersonalismo" como una medida de higiene frente a peligrosas rebeliones contra la ortodoxia del

Kremlin y contra expresiones del espíritu nacional independiente de cada pueblo.

En todo caso, una revolución con programa y sin líder, una empresa de "concientización" y de educación clasista, que no supone la presencia del conductor de masas y que imagina al abanderado popular como una suerte de mandatario de una cooperativa de partidos, es un acontecimiento que no tiene precedente en la historia del marxismo-leninismo.

VIEJAS PAUTAS

Aparte de los dóciles seguidores de la burocracia comunista soviética, acostumbrados a servir la consigna por el solo hecho de que ella esté mandada por el comité central o por la comisión política, los hombres de la izquierda marxista incurren en una ilusión casi infantil. Ellos creen que la adopción de ciertas medidas de despojo de la riqueza particular tendría la virtud mágica de desencadenar el progreso, la solidaridad, el orden y las demás condiciones que liberarán al país de sus actuales barreras.

Nacionalizaciones a granel, elección del Jefe del Estado y del Poder Judicial por el Congreso y relaciones con Cuba, además de otros países comunistas aún desvinculados a Chile, forman el tipo de aspiraciones formuladas para afianzar a la llamada "unidad popular". Tal es el estilo del programa de los partidos de izquierda: una acentuación del estatismo y del espíritu burocrático, un parlamentarismo ajeno al temperamento chileno, que ahondaría los vicios de la actual

demagogia, y un mayor desequilibrio entre las tentativas de hacer gran diplomacia y las limitaciones del país.

Pocos serán en Chile los que no vean que el aumento de misiones diplomáticas en países comunistas resulta poco más que un gesto sustantivo carente de todo provecho práctico. Muchos ciudadanos resistirán con razón la idea de una cámara política que centralice el poder, que genere a todas o casi todas las autoridades y que suplante a la institución presidencial, único correctivo posible contra la politiquería y guardiana eficaz de la evolución cívica del país. En cuanto a las nacionalizaciones, crece el convencimiento de que ellas obedecen más a finalidades doctrinarias que a exigencias estrictamente económicas o sociales.

Los serios tropiezos de Fidel Castro en la última zafra que, pese a la insistente propaganda acerca de que obtendría 10 millones de toneladas de azúcar, ha resultado de un nivel mucho más bajo que las predicciones, o los esfuerzos que realiza la Unión Soviética para superar el extendido alcoholismo de su población, son muestras diversas pero indicadoras de una misma realidad. El comunismo no modifica ni la naturaleza material ni la naturaleza humana. Es tan equivocado suponer que un cambio en la posesión de los bienes de producción va a producir un pueblo sobrio como creer que el clima cubano y los otros factores determinantes de la zafra iban a someterse al deseo casuista.

Si la autoridad de los dirigentes rusos, a través de largos años, y el

magnetismo de Fidel Castro no han logrado vencer las resistencias de la naturaleza, fácil es imaginar la ineficacia de un movimiento fundado en acuerdos abstractos, en documentos muy bien redactados y firmados, pero en que están ausentes las condiciones para inspirar adhesión y afán de seguimiento en el pueblo. Si Castro hubiera sido el mero intérprete de un programa de papel, las mermas en la cosecha de caña de azúcar se habrían agravado por la anarquía, las indecisiones y la desorganización que son propias de todo poder sin substancia, como el que desean establecer en Chile los comunistas y quienes siguen fielmente sus pasos.

El candidato señor Allende tiene el mandato de iniciar en Chile la "construcción del socialismo". Ese mismo propósito pertenece al bagaje político de varios años. Tal vez lo peor que le acontezca a la izquierda tradicional es que su inventiva ideológica pueda adolecer de esclerosis y de inmovilidad. Idénticas consignas se vienen repitiendo de año en año y de campaña en campaña. Las renovaciones relativas a la "despersonalización" de la campaña no modifican la monotonía doctrinaria, pero en cambio privan a ese movimiento del sello original y estimulante que proporciona el líder.

Las mismas comprobaciones estadísticas económicas y sociológicas, las mismas recetas que en país alguno han creado abundancia y bienestar y la misma fe en que la puesta en marcha de la revolución marxista traerá solidaridad y dinamismo sociales animan hoy día a la izquierda. Habrá que añadir que

impera en ella el mismo espíritu de arrogancia, aunque su candidato haya sufrido la disminución que representa el paso de jefe o líder al de

agente de una asociación de partidos más ligada a la letra de un programa que al espíritu de una gran tarea política nacional.

Violencia revolucionaria

(5 de abril de 1970)

Avanzada ya la campaña electoral, se producen atentados en Lota y Coronel contra el candidato Jorge Alessandri. El gobierno pide moderar la lucha, a través de una entrevista del Ministro del Interior Patricio Rojas con los jefes de comandos electorales (EM, 4 abril, pág. 29).

El diputado socialista Mario Palestro y su hermano, el alcalde de San Miguel, impiden propaganda de Radomiro Tomic en dicha comuna y envían obreros municipales a retirarla (EM, 4 abril, pág. 30).

Pobladores del campamento 26 de Enero, junto a estudiantes universitarios, acuerdan formar milicias internas, lo que es rechazado por el Ministro del Interior (EM, 1º abril, pág. 1). Un foro en el Instituto Pedagógico destinado a coordinar la lucha de los pobladores del mencionado campamento terminó en pugilato entre miristas y comunistas (EM, 3 abril, pág. 23).

La Semana Política

TIPOS DE VIOLENCIA

A partir de los atentados organizados en Lota y Coronel contra las manifestaciones al candidato independiente, el ritmo de la campaña presidencial ha cambiado.

Lo que empezó con una virulencia verbal extraordinaria, que no se ha detenido ni en acusaciones infundadas ni en injurias, empieza a transformarse en una larga serie de ataques físicos a propagandistas, de atentados contra manifestantes y de explosiones terroristas anónimas.

Podía preverse que esta campaña sería muy agitada, pero los apasionamientos y los desbordes parecen estar llegando más allá del nivel controlable, al punto de que es de temer que esta campaña sea una triste excepción en la historia electoral de Chile y constituya un retroceso en nuestras costumbres cívicas.

Con razón el Gobierno ha invitado a las candidaturas a moderar la lucha, llamamiento que será eficaz en la medida en que se identifique con el esfuerzo por crear un clima de respeto y decencia en la campaña, así como con la decisión de reconocer a todos los candidatos el derecho a llegar a todos los lugares del territorio sin exponerse a una violencia organizada por sindicatos o fomentada por municipalidades u organismos del Estado.

El tema de estos días es el de la violencia. Y, hablando de ella, conviene distinguir entre violencia y violencia. Quienes aseguran que el único camino del desarrollo y de la justicia es la lucha armada contra el régimen social y jurídico existente coinciden en los objetivos finales con la izquierda tradicional encabezada por el candidato Allende, pero no participan en esta elección, o lo hacen considerando a dicho candidato un mal menor o tal vez

una simple oportunidad de valerse de OLAS y de otras actitudes del apoderado de la UP para radicalizar el proceso revolucionario. En esta posición está la violencia propiamente tal, la violencia revolucionaria, la que se está encarnando en grupos de estudiantes y ahora en grupos de pobladores, fenómeno de peligrosidad creciente.

Pero al lado de esta violencia concebida como estrategia revolucionaria se encuentra lo que podríamos llamar el vulgar matonaje electoral. Este último consiste sencillamente en jugar sucio en las elecciones, en emplear la intervención gubernativa, en hacer que actúe la maquinaria sindical y declare huelgas, contramanifestaciones, en asaltar a los partidarios de una candidatura en sus casas o en los lugares en que trabajan electoralmente, en formar tumultos y en atacar a los manifestantes pacíficos reunidos para oír a su candidato.

En la línea del matonaje se encuentra la actitud de un diputado socialista que prohíbe toda propaganda o acción electoral contraria a la del señor Allende en una extensa y poblada área del Gran Santiago. En la misma línea se encuentran los que aplauden y los que ordenan actos de violencia destinados a entorpecer las manifestaciones de la candidatura independiente del señor Alessandri.

Este matonaje electoral fue iniciado en el terreno del periodismo verbal y escrito por la candidatura Allende para continuar después en el terreno de los hechos. Las declaraciones de los distintos personeros de la UP que condenan la violencia son simultáneas con las palabras de

estímulo a quienes usaron de la fuerza o están dispuestos a usarla en contra del señor Alessandri. Los parlamentarios radicales han debido llamar la atención al CEN sobre estos hechos tan graves y tan contrarios a la ideología del radicalismo, pero recibieron de la directiva de su partido una respuesta impropia de la seriedad de la denuncia.

La izquierda marxista cree evadir sus responsabilidades lanzando la especie de que la "violencia" sería alessandrista. Este es un manejo falso de la propaganda del señor Allende. La superchería resulta demasiado evidente.

Desde luego, la personalidad y los antecedentes del candidato independiente excluyen hasta la más remota suposición de que él quisiera aceptar o alentar la violencia. En segundo término, el señor Alessandri y sus partidarios saben muy bien que su oportunidad se encuentra en el desarrollo normal de la elección, pues todos los sectores coinciden en que ese es el candidato mayoritario y discrepan sólo en la distancia que lo separa de sus antagonistas. La fuerza del alessandrismo es la adhesión espontánea y masiva de electores no acarreados, no presionados y no fanatizados. ¿Cómo podría querer la violencia y cómo podría siquiera practicarla frente a la destreza con que el marxismo-leninismo usa su maquinaria sindical y los demás núcleos minoritarios pero fuertes cuyo control ha conquistado?

VIOLENCIA REVOLUCIONARIA

Mientras el matonaje corrompe el proceso electoral, por ser una

violación abierta a las reglas legales que las distintas candidaturas dicen acatar, otra violencia ocupa cada vez más espacio en la actualidad nacional. Se trata de los asaltos preparatorios de la lucha armada y de las visibles alianzas entre grupos de agitadores estudiantiles y de pobladores que adhieren a la insurrección.

En vano la candidatura marxista les hace señas amistosas a estos rebeldes y promete al país que durante el Gobierno de la asamblea de partidos y gremios, que propicia, los elementos de la violencia subversiva permanecerán muy tranquilos.

El estilo de la vieja izquierda, que no lo abandona, hace que el candidato Allende prometa al mismo tiempo la disolución del Grupo Móvil de Carabineros. Proposición evidentemente demagógica y falsa, pues el aparato policial deberá ampliarse enormemente para "defender a la revolución", si la izquierda llegara a triunfar. Y la policía tal vez aplicará métodos más drásticos para reprimir a esos revoltosos tan incómodos para el Partido Comunista, que sería entonces el verdadero gobernante de Chile. Ellos se encargarían de borrar el nombre del Grupo Móvil pero no prescindirían de la policía.

Los agentes de la subversión violenta son, en general, jóvenes que se han cansado de la militancia comunista o socialista, mentalidades nuevas impresionadas por la revolución castro-comunista, por la guerra de Vietnam y por los demás desórdenes político-sociales del momento. Ellos son síntomas de la crisis de la ortodoxia comunista mun-

dial. Se inspiran en Marx y Lenin, pero están contra la burocracia socialista de Europa Oriental y contra la política internacional de compromiso en que ha entrado la Unión Soviética.

El encuentro de estos jóvenes con los pobladores marginales no es episodio intrascendente. Esos pobladores habían recibido la dádiva ocasional que no deja raíces, la promesa no cumplida de las autoridades o la visita electoral de los políticos. Los extremistas de la ultrazquierda, en cambio, han convivido con ellos, les han formado líderes, han convertido la población implorante en campamento combatiente, han instituido milicias populares y les han hecho tomar conciencia del mito de la subversión armada como instrumento de justicia y liberación.

El drama de la miseria extrema se oculta generalmente por el temor de que constituya la expresión del fracaso del régimen democrático. Ciertamente es que puede explotarse demagógicamente, pero el planteamiento honesto de esa desgracia llevaría a la conclusión de que ella es la acusadora de los falsos precios de la agricultura, de la falsa seguridad social, del falso sistema de la salud, del falso socialismo y de un conjunto de trabas y engaños que impiden crear fuentes de trabajo con rapidez, hacer crecer velozmente las ocupaciones y distribuir los recursos públicos en beneficio de todos los chilenos. Sólo un régimen de libertad y prosperidad es capaz de derrotar a la extrema miseria.

Con todo, el estado de abandono y frustración en que se encuentran esos pobladores marginales explica

que se entreguen a cualquier ideal que los haga sentirse dignos y adquirir poder y esperanza.

Las candidaturas "revolucionarias" pueden encontrarse de pronto frente a la hoguera roja de la Revolución (con mayúscula). Es de desear que, antes de entonces, los par-

tidarios de ellas comprendan que los conceptos de autoridad, seguridad, propiedad y orden no están caducos, sino que representan la respuesta de la mayoría ciudadana ante el riesgo de que afanes de justicia mal entendidos lleven al país al caos y la miseria.

Realidad allendista

(7 de junio de 1970)

A raíz de una concentración realizada por el candidato Salvador Allende en la Plaza Bulnes de Santiago, el comentario analiza el discurso en que se dieron a conocer las medidas básicas de gobierno que ofrece el candidato de izquierda para aplicar.

La Semana Política

CONCENTRACIÓN ALLENDISTA

Las cuatro marchas y la concentración de los allendistas en la Plaza Bulnes de Santiago fueron un éxito de propaganda para el candidato del marxismo-leninismo. Los comunistas, que daban la impresión de no haber encendido todos los motores de su activismo para la campaña presidencial, desplegaron en esta ocasión sus bien organizadas fuerzas, y dieron un espectáculo de disciplina y cohesión demostrativo del poder del partido mayoritario, líder y constructor de la llamada "unidad popular".

El orador único del acto fue el candidato, quien pronunció un extenso discurso henchido de promesas electorales.

¿Cree el senador Allende en la posibilidad real de cumplir tales promesas? ¿Lo cree el equipo político que lo acompaña? ¿Lo creerán los electores?

Al parecer, a los estrategas de la "unidad popular" no les interesa hacerse siquiera estas preguntas. La oportunidad de la Plaza Bulnes les sirvió para eludir los problemas políticos y estructurales de fondo, esto es, la manera como el llamado "gobierno popular" conduciría al país hacia el colectivismo totalita-

rio. A cambio de este examen, hecho ya en el programa básico de dicha combinación política, la táctica fue llegar al límite máximo de la demagogia y derrotar anticipadamente por nocaut al candidato que quisiera seguir al senador Allende en el camino de las promesas.

Derecho de jubilar a todos los habitantes mayores de sesenta años de edad, aunque no se les hayan efectuado imposiciones; matrícula, libros, cuadernos y útiles escolares gratuitos para todos los niños de la enseñanza básica; supresión de los reajustes de los dividendos y deudas CORVI; eliminación de todo pago por medicamentos y exámenes en los hospitales; rebaja drástica de los precios de los medicamentos, reduciendo los gravámenes aduaneros de sus materias primas; campos deportivos en las escuelas y poblaciones; aumento de los artículos de consumo, control de precios y detención de la inflación; derogación del impuesto a la compraventa; garantía de trabajo para todos y prohibición de despidos; creación de consultorios judiciales en las poblaciones son algunas de las medidas propuestas por el candidato.

Todo chileno desearía que los objetivos de bienestar y de igualdad planteados en el discurso que co-

mentamos pudieran cumplirse con la amplitud señalada. Una vez más el problema no consiste en las finalidades, sino en los medios para alcanzarlas. En otros términos, el asunto no es "qué" se desea, sino el "cómo" lograr lo deseado.

La pieza oratoria de la Plaza Bulnes prometió cuantiosos beneficios a los desposeídos, pero al mismo tiempo ofreció dejar a la CORVI sin el reembolso del valor real de sus préstamos y privar al Fisco del tributo de más rendimiento como es el de las compraventas. No especificó el candidato de dónde van a salir los recursos para producir o importar los bienes que le faltan al país y que serían destinados a llevar el estímulo y el alivio gratuito a los necesitados.

Dijo el candidato que su programa va a herir a un 4 ó un 5 por ciento de la población para beneficiar al porcentaje restante. El senador Allende va a sacrificar pues a 400 ó 450 mil chilenos, pero está lejos la incertidumbre de que sus medidas se transformen efectivamente en la pensión de jubilación, en el litro de leche y el libro gratuito para la gran masa. Más aún, no se refirió el candidato a los sacrificios que tendría que imponer a esa masa para conquistar el bienestar prometido. Con astucia de político experimentado en oratoria electoral dejó la impresión de que con "herir" a esos 400 ó 450 mil chilenos podía el resto ponerse a esperar los dones gratuitos de la salud, del alimento, de la seguridad, la educación.

Es evidente que el candidato no quiso en esta oportunidad enunciar un verdadero programa de acción sino henchir de esperanzas a las

huestes que se habían reunido para proclamarlo en el centro de Santiago. De ignorarse su pensamiento político, el senador Allende habría aparecido como un demagogo de 40 ó 50 años atrás; de tal modo resultan anacrónicos sus recursos y argumentos.

REALIDAD ALLENDISTA

Sería necio desconocer el crecimiento que parece haber experimentado la candidatura del senador Allende y que se registra en las encuestas y sondeos. Lo importante no es comprobar pasivamente este crecimiento cuantitativo, sino analizar la naturaleza y realidad de la candidatura allendista.

El candidato marxista-leninista es conocido. El mismo se enorgullece, con razón, de haber sido siempre consecuente con sus ideas. Su concepción socialista, su ideología marxista y sus coincidencias con el régimen casuista no dejan dudas sobre el contenido concreto que tendría el Gobierno que él presidiera, sobre todo cuando la combinación de la "unidad popular" dejó trazadas en un folleto las líneas de una revolución social y política destinada a conducir a Chile hacia el totalitarismo colectivista integral.

El senador Allende aspira, como todos los chilenos generosos, a entregar a sus conciudadanos el pan, la leche, la educación, la medicina, pero el cumplimiento de ese anhelo tiene un precio: requiere pasar por un camino, que no es otro que el establecimiento de una "democracia popular", al estilo de las de Hungría, Polonia, Checoslovaquia, Rumania.

Se trata de una "democracia" que, en nombre del pueblo, instaura la dictadura de un partido.

Sin minimizar el aporte socialista a la campaña, la influencia de los comunistas chilenos en la promoción y organización de la "unidad popular" es de toda evidencia. Son ellos también los que han dado su fuerza a los comités de la unidad popular u organizaciones de base destinadas a impulsar y a vigilar la revolución.

Llamó la atención que el candidato se refiriera a su propósito de ampliar las relaciones solidarias del "gobierno popular" con Camboya, Corea del Norte, Vietnam y Cuba, omitiendo a la poderosa y extensa China de Mao.

Los observadores han pensado que esta omisión responde al hecho de que el candidato marxista-leninista, militante socialista y adicto a Fidel Castro, se adapta en último término a la rígida línea de los comunistas ortodoxos.

Esa línea, aceptada de antemano por el candidato, explica que la reunión nacional de la CUT, organismo que expresa fielmente la ortodoxia comunista, haya hecho suyas como proposiciones las promesas del senador Allende.

El carácter comunista de la "democracia popular" esbozada en el programa de la combinación que apoya al senador Allende se exhibe en el nuevo orden institucional allí descrito. Habrá una nueva estructura de poder. Existirá una organización única del Estado a niveles nacional, regional y local que tendrá a la

Asamblea del Pueblo como órgano superior de poder. Esta Asamblea será la Cámara Única y la expresión nacional de la soberanía popular. El sistema político deja entonces de ser presidencial y se convierte en la dictadura de un comité central que se impone a la confusa Asamblea del Pueblo.

La Asamblea del Pueblo, manejada entre bastidores por el comité central del partido dominante, elegirá a los jueces del tribunal supremo y habrá de imponerse en el hecho a quien tomaría legalmente el carácter de sucesor de los Presidentes de Chile para luego resignar el mandato personal que le dio el pueblo en manos de organismos creados por la burocracia partidista.

Los comunistas en todo el mundo, sin excepción alguna, han demostrado su capacidad de envolver, de cercar y de dirigir a quienes se entregan a ellos o se ilusionan de encontrar en el comunismo una colaboración abierta. Muchos de los universitarios que durante la reforma de la educación superior creyeron en algún momento en dicha colaboración tuvieron una experiencia amarga. En el plano político nacional, las fuerzas que acompañan a los comunistas y el propio candidato no podrán eludir el proceso inevitable de sujeción y desaparecimiento que implica seguir los dictados del comunismo.

La mansedumbre y moderación del senador Allende no pueden ocultar el verdadero contenido de su candidatura: la "democracia popular" según el molde soviético.

Panorama electoral

(19 de julio de 1970)

A dos meses de las elecciones el comentario analiza las tres candidaturas y sus respectivos programas. Como curiosidad podemos anotar que en El Mercurio del 17 de julio (pág. 33) se publica una inserción de una página del periodista Manuel Fuentes, quien hace una comparación punto por punto demostrando que el programa básico de la Unidad Popular, elaborado por todos los partidos integrantes en diciembre de 1969, es idéntico al acordado en el XIV Congreso del Partido Comunista chileno, celebrado en noviembre del mismo año.

La Semana Política

PANORAMA ELECTORAL

En noviembre de 1964 nuestro país tenía la sensación no sólo de haber elegido a un gobernante de excepcional capacidad y visión, como el Presidente Frei, sino que, además, sentía que detrás de él existía una organización política vigorosa, unida y con un programa consecuente. Tal organización era la democracia cristiana, el partido del Presidente Frei.

Las explosivas circunstancias que desorganizaron el Frente Democrático, en que militaban liberales, radicales y conservadores, hicieron que las fuerzas independientes y tradicionales depositaran su confianza y dieran su apoyo al candidato de la democracia cristiana. La aplastante mayoría lograda por don Eduardo Frei fue consecuencia de este trasvasijamiento e indirectamente provocó la inesperada crecida parlamentaria democratacristiana en marzo de 1965.

El panorama actual no tiene nada en común con la polarización de fuerzas de hace seis años. Si la opinión democrática de 1964 sintió el

grave peligro de que se instaurara en Chile una dictadura colectivista al estilo cubano, el contingente de la democracia cristiana, reforzado por esas fuerzas que se le adhirieron, formó un sólido bloque de defensa contra el comunismo. En 1970 ha desaparecido el factor de galvanización democrática, y el peligro del triunfo marxista ha aumentado notoriamente.

Los dirigentes de la democracia cristiana no supieron o no pudieron interpretar al enorme conjunto de fuerzas que respaldaba al Presidente Frei. Más bien al contrario, como despreciando la multitud que tenían detrás de ellos, procuraron congraciarse con el electorado de izquierda mediante la estrategia de rivalizar con el marxismo en expresiones revolucionarias.

Dicha estrategia se origina en un diagnóstico equivocado acerca de la realidad de Chile, según el cual se daría entre nosotros un pequeño número de privilegiados frente a una inmensa masa de desposeídos. En un esquema clasista muy rudimentario; dicho diagnóstico supone que las ideologías de desquite social y

de rápida transferencia de patrimonios y rentas cuenta con gran apoyo ciudadano. En vez de emprender entonces los cambios de estructura como elementos de una modernización planificada del país se abrió la puerta a la demagogia y a los impulsos anárquicos de los impacientes.

La gran popularidad del Presidente Frei no ha sido cosechada por su partido.

Con cierta ligereza política, se han estropeado en estos años principios y convicciones de profundo arraigo en el país. El valor de la ley, el prestigio de los Poderes Públicos, la misión de la Universidad, el rol de las Fuerzas Armadas, el papel de la empresa privada, son algunos de los temas sometidos a condenación cerrada y a socavamiento.

Ciertos ingenuos creían avanzar picota en mano, pero su avance era ilusorio. El pueblo chileno es más amigo de su libertad que de cualquier otra cosa, e intuyó antes que los políticos diestros y que los observadores entendidos la situación que se presentaba. Ese pueblo advirtió que sin autoridad y sin orden el país cae irremediablemente en la esclavitud totalitaria. Una gran mayoría ciudadana está lejos de militar en la derecha política, pero teme igualmente a la revolución marxista y a la demagogia perpetuadora del subdesarrollo.

CANDIDATO DEMOCRATACRISTIANO

Nadie niega las brillantes condiciones personales del segundo hombre de la democracia cristiana, don Radomiro Tomic, pero todos o casi todos advierten que su estrategia ha

descartado los valores positivos de la administración y se ha empecinado en disputar el terreno de los que patentaron políticamente la Unidad Popular.

El imaginó que a los comunistas no les quedaría otra alternativa eficaz que sumarse a su postulación. Teóricamente ese juicio puede ser válido. De ahí nació entonces el lema de que sin Unidad Popular no habrá candidatura Tomic.

Hubo, sin embargo, Unidad Popular en el sentido en que los comunistas la entendían, y hubo candidatura Tomic bajo la tesis de que la unidad popular exigida por el candidato era la de las fuerzas sociales y no la de las directivas políticas.

En todo caso el candidato demócratacristiano ha manifestado una y otra vez su disposición para llamar al marxismo para el caso de que él llegara al Gobierno, y esto pese a que los líderes del comunismo han rechazado públicamente al señor Tomic.

La "viga maestra" del Gobierno demócratacristiano, el programa del cobre, mereció críticas al candidato señor Tomic, quien en algún momento estuvo en favor de la nacionalización drástica por ley contra la nacionalización pactada que ostentaba como logro el actual Presidente.

Esta actitud presentó al señor Tomic, al menos externamente, como separado del Presidente Frei.

El enunciado de una revolución chilena, democrática, antimperialista, anticapitalista y antineocolonialista ha ofrecido poco alero a quienes emplean formulaciones casi idénticas a los enemigos de la democracia chilena, a los marxistas-

leninistas. Una confusión entre la candidatura Allende y la candidatura Tomic, en perjuicio de esta última, ha sido visible en la ciudadanía.

"La revolución chilena debe aceptar lealmente un período inicial de fluidez", ha dicho el señor Tomic. "Las instituciones definitivas sólo podrán ser sistemáticamente desarrolladas una vez que la revolución haya alcanzado lo principal de sus objetivos", ha agregado. En otra oportunidad denunció "la trampa de la democracia representativa", la cual "en definitiva permite que pequeños grupos se perpetúen en el control de los centros decisivos del poder político, económico, cultural y social".

Ante la intuición que el pueblo tiene de que su libertad se encuentra amenazada gravemente, las líneas revolucionarias del señor Tomic lo han presentado a mucha distancia de lo que el Presidente Frei representa para la masa ciudadana y como un peligro adicional al marxismo o hasta idéntico a éste.

En una reunión almuerzo con mujeres periodistas, el candidato de la democracia cristiana expresó: "La libertad de prensa nace del derecho del pueblo a ser informado. No del derecho de la empresa para informarle lo que ella quiera...". Una periodista le consultó: "¿Usted le preguntará al país, entonces, sobre la libertad de prensa?". Y la respuesta fue: "En mi programa de Gobierno se consulta el plebiscito". Este es el texto que de las palabras del candidato reproduce el diario "La Nación".

Estamos en un momento en que hasta el más modesto ciudadano percibe que se encuentra en juego la

subsistencia de la libertad en Chile. Esa es la oportunidad en que el candidato señor Tomic elige para insinuar que nada menos que la libertad de información se sometería a plebiscito.

Sabido es que lo que se somete a plebiscito es lo dudoso, lo controvertido, aquello sobre lo cual no se ha logrado el consenso. Pues bien, el candidato democratacristiano estima que es materia de consulta plebiscitaria la libertad de prensa, que es una garantía constitucional sagrada en Chile desde Camilo Henríquez y que forma parte de las libertades esenciales de la persona humana.

Estos antecedentes explican la difícil situación electoral del señor Tomic. Doctrinariamente no ha podido encajar con la apurada y seria actualidad chilena. De ahí que el énfasis de su campaña se haya puesto en el ataque personal al candidato independiente señor Alessandri, sin sacar ventaja, por otra parte, del prestigio del Presidente Frei.

Una descolocación política que no corresponde a las aptitudes del candidato, pero que hace pensar a muchos que el señor Tomic ha ido, en su concepto de "izquierda cristiana", más allá de lo que considera justo una gran mayoría de chilenos, siembra de graves dudas el porvenir de esta candidatura a los cuarenta y tantos días que faltan para la elección.

ALLENDE EN UNA FICCIÓN
DEMOCRÁTICA

El senador don Salvador Allende Gossens no ha sido favorecido en tres elecciones anteriores por la pre-

dilección popular. Sin embargo, sus condiciones personales y su proverbial tenacidad lo sitúan en lugar destacado entre los políticos chilenos.

La Unidad Popular eligió al senador Allende como su candidato luego de haber insistido implacablemente en que la persona del abanderado no interesaba y que lo importante era el cumplimiento de un programa.

Más aún, en el mencionado programa, calco fiel del programa comunista de noviembre de 1969, aparece que la Asamblea del Pueblo es el órgano supremo del poder y que dicha cámara única prevalece sobre la voluntad del Presidente de la República. Esto tiene importancia porque los comunistas desde hace tiempo combaten el tradicional presidencialismo chileno. Ellos ven en la línea portaliana, en la sucesión de Jefes de Estado, sostenedores de un poder fuerte, impersonal, nacional y democrático, la peor amenaza para la dictadura del proletariado. Es natural entonces que deseen una asamblea anónima y confusa dominada por la comisión política del Partido Comunista, en que resida el poder efectivo sobre el país, en tanto que un vanidoso personero simbólico haga las veces de sombra del antiguo poder presidencial chileno.

Pero el senador Allende es conocido entre nosotros por su invariable adhesión a la política revolucionaria castrista. En Chile él constituye la embajada doctrinaria y política de La Habana, lo que se considera una de las razones para su designación como candidato de la izquierda, ya que se esperaba así atraer a la ultraizquierda que tanto pertur-

ba al comunismo disfrazado de pequeño burgués.

El candidato de la Unidad Popular ha exagerado su adhesión al credo democrático y ha execrado de la violencia extremista. Sus presentaciones públicas han llamado la atención por su contenido pacífico y liberal. Los innegables vínculos del Partido Socialista, el del candidato, con la extrema izquierda terrorista y violentista, han sido repudiados con premura. Una nube de olvido se cierne sobre la organización OLAS, instituida en la Conferencia Tricontinental de La Habana y que marca el comienzo de la acción revolucionaria violenta en nuestro país. Todo Chile sabe, no obstante, que el fundador de OLAS fue el candidato de la Unidad Popular, senador Allende, y que a partir de la entronización de dicha entidad empezaron en el país las bombas, las preparaciones guerrilleras, la prédica ostensible de la violencia política, los asaltos y "expropiaciones" y los demás signos de la violencia extremista.

La peligrosidad del candidato señor Allende no debe medirse tan sólo por sus actuaciones personales sino por los postulados y el contenido de los partidos más importantes que le apoyan. Desde luego, y mayoritariamente, lo respalda el Partido Comunista, cuya dilatada trayectoria mundial no permite hacerse ilusiones acerca de la especie de "democracia popular" y de "dictadura del proletariado" que se propone establecer en Chile. En seguida vienen los socialistas, partidarios sin disimulo de la revolución armada, de la violencia revolucionaria y del castro-comunismo, cuya "justicia

revolucionaria" encontró su símbolo trágico en el paredón.

A no dudarlo, el triunfo de ese candidato significaría la victoria electoral del comunismo en Chile y sería la primera ocasión en que un pueblo votara libremente en favor de su propa esclavitud.

ALESSANDRI, INTERPRETE DEL
SENTIDO CHILENO DEL GOBIERNO

El ex Presidente de la República, don Jorge Alessandri, guardó silencio no sólo frente a los ataques personales y políticos de que fue objeto desde que entregó el poder supremo, sino, lo que es más difícil, no se defendió ante las omisiones o malas interpretaciones de su obra de gobernante.

El silencio del ex Presidente evidenció una desproporción con el bullicio propagandístico que sacudió a la república. Ese silencio se convirtió paradójicamente en el mejor instrumento de resonancia.

Poco a poco la voluntad espontánea del pueblo más modesto fue imponiéndose a la consideración de las mentes políticas. El señor Alessandri no empleaba el lenguaje en uso de los políticos modernos. Además no estaba dispuesto a concesiones ni transacciones dentro del juego partidista y parlamentario. Estas cualidades, que podrían parecer negativas en un viejo ambiente parlamentarista, resultaron ser las más adecuadas en un medio amenazado por la penetración del comunismo, disociado por impulsos anarquizantes y fatigado de la demagogia.

La evidencia de que Alessandri se habría apoderado de la adhesión

de los sectores más amplios de centroizquierda y de los independientes llevó a concertar a sus antagonistas para negar su posición de líder, vaticinando que entre julio y agosto la candidatura del señor Alessandri estaría descartada. El reciente viaje al norte del país, en que el candidato superó las esperanzas de los más optimistas entre sus partidarios, y otros signos igualmente elocuentes, han llevado a los observadores a convencerse de que el candidato independiente debe lograr la primera votación el 4 de septiembre de este año.

Respecto del señor Alessandri se han usado hasta la saciedad consignas tales como "el candidato de los ricos", "el candidato derechista" o "el candidato del Partido Nacional". Esas consignas silencian que es además candidato de grandes multitudes de pobres, de gente de izquierda y de independientes de todas las tendencias, y sobre todo intérprete de una necesidad de centrar el gobierno para hacer avances seguros.

En la medida en que las otras candidaturas entreguen el país a una Asamblea del Pueblo o a una legislación fluida y provisoria, la postulación alessandrista se confundirá con el anhelo chileno de progresar en el decoro, en el derecho y en la libertad.

La respuesta popular y el hecho de que las luchas presidenciales no se rigen por el encuadramiento partidista permiten pronosticar para el señor Jorge Alessandri un primer lugar en la elección del 4 de septiembre.

La elección presidencial

(6 de septiembre de 1970)

Se analizan los resultados de la elección presidencial realizada el 4 de septiembre, cuyas cifras y porcentajes oficiales fueron los siguientes:

Salvador Allende, 1.075.616 votos, con el 36,3 %;

Jorge Alessandri, 1.036.278 votos, con el 34,9 %;

Radomiro Tomic, 824.849 votos, obteniendo el 27,8 %.

La Semana Política

LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL

Los resultados de los escrutinios de la elección del viernes, conocidos a las 2.50 horas de ayer, dan al abanderado de la Unidad Popular, senador Salvador Allende, la primera mayoría relativa, con una ventaja del 1,4 por ciento de la votación y de 39.338 votos sobre el candidato independiente don Jorge Alessandri, que obtuvo un millón 36 mil 278 sufragios, o sea el 34,9 por ciento de la votación. En un tercer lugar, muy distanciado de los dos primeros, queda el candidato de la democracia cristiana, don Radomiro Tomic.

Como se ha reconocido por todos, las elecciones fueron un modelo de tranquilidad y de orden, factor que las convierte en un antecedente para estimar que la democracia sobrevivirá en Chile.

Los partidos de la Unidad Popular llamaron a sus partidarios a celebrar la mayoría que habían obtenido de acuerdo a los primeros resultados. La gran concentración que tuvo lugar demostró la disciplina que los dirigentes de los partidos de izquierda han sabido imponer a militantes y simpatizantes, pues, a pesar de que éstos concurrieron en gran

número a dicha concentración, no se registró acto alguno que empañara la alegría de quienes se sentían ganadores.

El discurso del senador Allende careció de expresiones de beligerancia demagógica; excluyó todo ánimo revanchista y llamó a los chilenos al esfuerzo y al sacrificio, para terminar invitando a sus entusiastas partidarios a que regresaran en orden a sus casas.

No obstante, insistió más de una vez en el cumplimiento integral de la Unidad Popular.

El senador Allende ha obtenido, según los resultados conocidos, el 36,3 por ciento de los sufragios, en lucha con un candidato independiente fuerte y con un partido que contaba con el poder. En la elección de 1964, el senador Allende obtuvo el 38,6 por ciento frente al actual Presidente, que sumó las fuerzas de su partido a conservadores, liberales, ciertos radicales y muchos independientes. En las elecciones de 1958, el senador Allende obtuvo 28,5 por ciento, cuando presentaron candidaturas separadas los conservadores y liberales, los radicales y los demócrata-cristianos.

Puede decirse entonces que la izquierda chilena es una fuerza compacta y sólida, que ha resistido las diversas contingencias de la política, pero que se ha mantenido sin crecimientos apreciables. En el hecho, el triunfo de 1970 y las derrotas de 1958 y de 1964 dependieron más de las colocaciones adoptadas por sus adversarios que de un repunte en el favor público.

A su vez, el Presidente Alessandri obtuvo el 31,2 por ciento de los sufragios en 1958, sin ir acompañado por los radicales, en tanto que el Presidente Frei logró el 55,7 por ciento del electorado en 1964 con el concurso de los votos que favorecieron el viernes último al señor Alessandri.

Por varios períodos los Presidentes de Chile han contado pues con un apoyo ciudadano directo que no sube mucho más allá de un tercio de la votación del país. En consecuencia, para gobernar en forma durable y eficaz han necesitado el concurso de otras fuerzas, hayan o no votado por ellos.

La diferencia en este caso no residiría en la proporción del apoyo (un tercio de la fuerza electoral), sino en la orientación de los gobiernos que descansan en ese sector. No puede compararse la situación de un régimen de votación minoritaria pero de ideología democrática, con otro que se propone cambiar no sólo el régimen político sino el estilo de vida de los chilenos. Hay que considerar que el sistema que propician quienes votaron en contra de la Unidad Popular reúne en el hecho a los dos tercios del país, y que ellos representan efectivamente un sentir democrático.

LOS INDEPENDIENTES

La apreciable votación obtenida por el señor Alessandri, no obstante la campaña sistemática de denigración personal en su contra, indica que una enorme proporción del electorado manifestó su repudio sobre todo a los métodos exclusivistas simbolizados en la idea del Gobierno de un solo partido.

No cabe duda alguna de que el candidato demócratacristiano vio empañadas sus posibilidades por el cansancio ciudadano, marcadamente partidista que ha dado el sello a las reformas del régimen. De este modo, obras de importancia innegable se desvirtuaron ante el público por la creencia de que valían más como temas de propaganda que como realizaciones positivas y perdurables.

El otro factor que restó apoyo al candidato señor Tomic fue la imprecisión con que formuló sus planteamientos comunitaristas. Así la candidatura demócratacristiana quedó confundida indebidamente con la de izquierda.

Con un sacrificio admirable del señor Alessandri a sus años, él aceptó ser abanderado de las fuerzas independientes y de los partidos que lo acompañaban, porque tenía la absoluta certeza de que era imposible una nueva victoria demócratacristiana que continuara el régimen del Presidente Frei.

La votación del señor Alessandri, no sólo significó el rechazo de los métodos partidistas sino que también fue la expresión de la resistencia mayoritaria de la ciudadanía a la dictadura del proletariado, que se consigna en los textos teóricos del marxismo-leninismo y que la Uni-

dad Popular le ha dado presentación democrática.

El senador Allende y los integrantes de la Unidad Popular han condenado en los términos más severos toda posible asimilación del régimen de la izquierda chilena al sistema cubano o al de las democracias populares europeas.

No hay posibilidad de que los partidos Comunista, Socialista, Radical y demás de la Unidad Popular demuestren en los hechos que el pluripartidismo político de su programa representa continuar y perfeccionar la democracia chilena, afianzando las libertades que enorgullecen al país.

Tal demostración es impracticable si el régimen que preconiza pone trabas de cualquier índole a la libertad de los chilenos para informarse por los medios que ellos estimen dignos de crédito. Precisamente, la prueba de que existe democracia se realiza cuando la opinión pública puede constatar por sí misma y a través de diversos canales libres de expresión lo que está sucediendo en el país. Es evidente que la información controlada es capaz de

disimular cualquier tipo de dictadura.

Si la ciudadanía ve que las informaciones le llegan por diversos medios de comunicación, sin que sean objeto de tergiversaciones o controles, y puede comprobar en su vida diaria que la libertad no ha disminuido en Chile, la izquierda chilena habrá hecho una obra que ningún régimen marxista ha logrado realizar: prolongarse por el consenso ciudadano y no por la represión.

Estas columnas se han definido nítidamente como adversarias del marxismo no porque pretenden amparar intereses materiales y transitorios, sino en la convicción firme de que en esa línea defienden la libertad de los chilenos y por tanto su posibilidad de progresar en paz.

La opinión pública internacional ha asistido con inusitado interés, a través de múltiples periodistas de prensa, radio y televisión, al desarrollo de esta elección chilena. Era la primera vez que un candidato marxista-leninista aspiraba al poder por elecciones democráticas inobjetables.

Entendimiento UP-DC

(11 de octubre e 1970)

Se ha producido un intercambio de cartas entre el candidato Salvador Allende y la directiva de la Democracia Cristiana, encabezada por el senador Benjamín Prado. La respuesta de Allende a la carta de Prado exigiendo ciertas garantías no satisface los requerimientos de la DC (EM, 1^o oct., págs. 1 y 8). La Junta de la Democracia Cristiana, reunida el 3 de octubre, analiza el compromiso de caballeros entre Tomic y Allende, y debate sobre si apoyará o no a Allende cuando se vote en el Congreso Pleno (EM, 4 oct., pág. 31).

Como consecuencia de todas las conversaciones, una comisión mixta de la Democracia Cristiana y la Unidad Popular elaboran un proyecto de reforma constitucional que amplía las garantías constitucionales (EM, 9 oct., pág. 22).

La Semana Política

ENTENDIMIENTO UP-DC

Los últimos acontecimientos políticos tienen la ventaja de situar al país ante su verdadera realidad. El reciente cambio de cartas entre el candidato mayoritario, senador Allende, y el presidente de la democracia cristiana, senador Prado, viene a confirmar coincidencias anticipadas entre ellos, que se manifestaron en conversaciones preelectorales, evidenciadas en el pronto reconocimiento del candidato señor Tomic de la victoria del senador doctor Allende.

La Junta Nacional demócrata-cristiana del domingo pasado se limitó a conocer estas coincidencias, ignoradas para muchos delegados, y a exigir al senador Allende lo que al señor Tomic denominó "lo esencial".

Como era de preverlo, el candidato triunfante no aceptó ni dio "garantías". Refiriéndose al proyecto de reforma constitucional acordado

rápida y unánimemente por los negociadores de la Unidad Popular y de la Democracia Cristiana, el senador Allende expresa que "los términos del referido proyecto concuerdan plenamente con mi posición sobre las materias que contempla, y que interpretan integralmente los planteamientos que sostuve durante la campaña electoral y ante los delegados de la Unidad Popular que participaron en la comisión redactora".

El proyecto de reforma constitucional es una explicitación de ciertas garantías ciudadanas ya contenidas en la Carta Fundamental, que afianzan el régimen democrático representativo, en tanto que ése sea el espíritu de los Poderes Públicos encargados de cumplir dichas normas.

En otras palabras, la verdadera garantía de la subsistencia de las libertades públicas en un régimen de Unidad Popular estará concretamente en la persona del propio senador Allende, cuyas convicciones

democráticas nadie discute y que ha declarado ser "intransigente defensor de las prerrogativas del Jefe del Estado" y "celoso camelador" de sus atribuciones constitucionales.

De más está decir que la garantía a que nos referimos no excluirá la realización de transformaciones revolucionarias que postula la Unidad Popular. El senador Allende ha declarado a la revista argentina "Primera Plana" que "las transformaciones revolucionarias no implican la violación del derecho" y que "los chilenos seremos capaces de demostrarlo".

Mientras el Jefe del Estado sea un intransigente defensor de sus prerrogativas constitucionales, que le entregan el mando responsable de la nación el resguardo del orden interno y de la seguridad exterior, la conducción de las relaciones internacionales y atribuciones legislativas determinantes, el país estará a salvo de la dictadura anónima de comités o asambleas que, bajo apariencias democráticas, pueden imponer en la práctica decisiones violatorias de la real libertad de los chilenos.

Valioso apoyo para las prerrogativas del Jefe del Estado es la existencia de jueces independientes e inamovibles, cuya generación no sea político-partidista. El peor peligro para un Gobierno empeñado en transformaciones profundas y difíciles es la presencia de jueces que cumplan su misión de hacer justicia y que no confundan al opositor levantado y constructivo con el sedicioso o el traidor.

Aunque se ha insistido muchas veces en la conveniencia del sistema bicameral, como otro resguardo

de las libertades públicas, lo cierto es que los candidatos señores Tomic y Allende llevaban en sus programas la idea de la Cámara única. Lo esencial es que dicha Cámara sea tan sólo legislativa y no sofoque en ningún orden la plena autoridad presidencial ni sirva para generar al Poder Judicial. De aceptarse que esa Cámara nombre al tribunal superior, se abre el camino para que mañana nombre también al Jefe del Estado, y el pueblo chileno tome el camino de la dictadura anónima, en que las transformaciones revolucionarias se vuelvan un pretexto para entronizar a una nueva minoría que se perpetúa en el poder por autogeneración.

Es de suponer que el entendimiento entre la directiva de la Democracia Cristiana y la Unidad Popular tenga como trasfondo la inviolabilidad de los principios señalados.

LA REFORMA CONSTITUCIONAL

El proyecto constitucional da a los partidos políticos el carácter de personas jurídicas de derecho público y facilita su libre formación y desenvolvimiento. Amplía el derecho de sindicación y confirma la participación de los organismos sociales de base en la vida de la nación. Además, actualiza algunas de las garantías ciudadanas establecidas.

Más decisivas sin embargo son las materias que se relacionan con la libertad de información, la libertad de enseñanza y el régimen de la fuerza pública.

La libertad de información se amplía y perfecciona en varios sentidos, pues el proyecto garantiza no sólo la libertad de expresión, sino el

derecho de rectificación. Reconoce explícitamente el derecho de cualquier persona a organizar, fundar y mantener medios informativos, así como la libre circulación y transmisión de las noticias.

La libertad de expresión queda configurada en términos tan amplios que sólo los abusos y delitos que se cometan en el ejercicio de la misma señalan un límite, llegándose a decir que el sustentar y difundir alguna idea política no constituye delito o abuso, lo que permite la libre crítica del régimen mismo.

Sin embargo, la propiedad de las estaciones de televisión se reserva al Estado y a las universidades.

Se asegura el acceso igualitario de todas las corrientes de opinión a los medios de difusión y comunicación social de los particulares, quedando excluida esta igualdad respecto de los del Estado, empresas de difusión fiscales, universidades y partidos políticos. En cambio, los partidos políticos se aseguran el libre acceso a los medios informativos del Estado o controlados por éste.

La única contradicción sería que contiene este punto de la reforma constitucional es que, por una parte, asegura la plena libertad de expresión y, por otra, se pone en el caso de que se expropié un diario u otro medio de publicidad. Lo lógico sería que se castigaran los abusos o delitos cometidos con la publicidad, pero no se divisa qué razón de interés público democrático exista en suprimir a quien tiene garantizado constitucionalmente el derecho de opinar e informar. Si con la información se incurre en delito, que venga el castigo de los responsa-

bles, pero no la supresión del diario, revista o estación de radio, pues ello invita a una forma de autocensura o intimidación muy contradictoria con la libertad informativa, sin la cual ninguna otra forma de libertad queda garantizada.

Los redactores han hecho un gran esfuerzo por asegurar la libertad de enseñanza, que es un valor fundamental para la inmensa mayoría de las familias chilenas. El marxismo es una interpretación global de la realidad y no una simple bandera de cambios sociales. La idea de que dicha interpretación se infiltre en los textos de ciencias sociales y de la naturaleza o en la formación moral de la juventud preocupa a la ciudadanía. La difusión del marxismo se hace hoy y seguirá haciéndose, pero hay que prevenir que se convierta en leit motiv pedagógico exclusivo.

Dentro de los límites ya impuestos por la organización educacional existente se reconoce un sistema nacional de educación formado por instituciones oficiales de enseñanza y las privadas que se ajusten a los planes del Estado. Sólo será subvencionada la educación particular gratuita. El proyecto insiste en que la orientación será pluralista y no partidarista oficial, así como se asegura la libertad para elegir entre varios textos oficiales de estudio. Se garantiza asimismo la libertad de administración de los establecimientos privados de enseñanza.

Las universidades existentes obtienen el reconocimiento de su autonomía académica, administrativa y económica, así como el pluralismo en la selección de postulantes, en los estudios y en la carrera académica.

El proyecto afianza por último el carácter profesional, jerarquizado, disciplinado, obediente y no deliberante de la fuerza pública, la cual queda constituida sólo por las Fuerzas Armadas y Carabineros, es decir, tal como es la situación actual.

Hay que decir, pues, que la Democracia Cristiana si, como se presume, consagra Presidente de la

República al candidato mayoritario, doctor Salvador Allende, lo hace porque confía en la acción y convicciones de éste, así como en las fuerzas no comunistas que lo acompañan, pues la reforma constitucional conocida no es ni podía ser una "garantía" de que por medio de la ley se viole de hecho la libertad de los chilenos.

Una garantía personal

(25 de octubre de 1970)

Salvador Allende es proclamado Presidente Electo luego de una votación del Congreso Pleno, en la que se pronunciaron 153 parlamentarios a su favor, 35 afavor de Jorge Alessandri y 7 votos en blanco (EM, 25 oct., pág. 1). Se produce en estos días, el 22 de octubre, el atentado contra el Comandante en Jefe del Ejército, general René Schneider, quien fallece el domingo 25 en el Hospital Militar (EM, 23 oct., pág. 1). Asume el mando del Ejército el general Carlos Prats González.

El día 22 se votó en el Senado la reforma constitucional propuesta por la Democracia Cristiana como requisito para apoyar a Salvador Allende en el Congreso Pleno, y es aprobada por 41 votos a favor y 3 abstenciones. Allende pronuncia un discurso en que hace un recuento de su trayectoria política (EM, 23 oct., pág. 24).

La Semana Política

DÍAS HISTÓRICOS

Estos días verdaderamente históricos culminan con la proclamación como Presidente de la República del Excelentísimo señor don Salvador Allende y con la tragedia del atentado homicida en la persona del señor Comandante en Jefe del Ejército, general don René Schneider.

Dicho acto cobarde, cruel e inicuo ensombrece este momento y envuelve una amenaza para el porvenir nacional. Cualquiera que haya sido el fin que perseguían los criminales, su delito constituye un vejamen a la República y a las Fuerzas Armadas, que no encontrará defensores ni siquiera en los adversarios más irreconciliables de los partidos o fuerzas que llegarán al poder con el Presidente Electo.

Ese acontecimiento contradice bruscamente la tradición nacional y hiere en lo más vivo el espíritu de hidalguía que anima a nuestro pue-

blo, donde la lealtad del proceder y la humanidad hacia amigos y enemigos constituyen normas inquebrantables.

Al lado de este doloroso suceso, tanto para la persona del señor Comandante en Jefe como para su familia y para el país entero, debe situarse la actitud del ex Presidente de la República, señor Jorge Alessandri Rodríguez, quien ha invitado a los que fueron sus partidarios a no insistir con su nombre en el Congreso Pleno celebrado ayer.

Es preciso recordar que el señor Alessandri insistió reiteradamente durante su campaña en que no lo movía sino el propósito patriótico de superar el marasmo en que, a su juicio, la politiquería tenía sumido al país, pero nunca hizo profesión de anticomunista o de antimarxista. Que sus partidarios vieran en su persona la única posibilidad de que el país sorteara la difícil situación en que ahora se encuentra, es otra cosa, pero no puede extrañar a na-

die que el candidato independiente haya sido consecuente con su idea de que el Congreso Pleno debía proclamar Presidente al candidato que obtuviera la primera mayoría en las urnas. Por lo demás, siempre insistió el señor Alessandri en su carácter de candidato independiente, lo que fue desconocido a menudo por sus adversarios. Por último, hay que decir que sólo una muy importante mayoría en favor de este candidato le habría permitido desarrollar su política.

Tampoco puede asombrar que el Presidente Electo haya visitado al señor Alessandri, en un gesto de cortesía y comprensión que lo honra. El ha dicho reiteradamente que su Gobierno será democrático tal como ha sido su conducta política y parlamentaria. Ahora bien, una de las características de la democracia chilena es que el diálogo entre personeros de bandos opuestos no se interrumpe, lo que es algo muy distinto que abandonar principios ideológicos.

En otro momento, el Presidente Electo había tenido expresiones de cortés gratitud hacia el candidato señor Tomic, pero ha tenido que valorizar también el gesto de quien era su verdadero rival en esta elección.

Mientras la democracia se desenvuelve de acuerdo a sus procedimientos constitucionales, las Fuerzas Armadas y Carabineros cumplen su misión de proteger el país contra un posible nuevo rebrote de terrorismo y mantienen el orden como lo hicieron en la jornada electoral. A su vez, los Servicios de Investigaciones realizan las pesquisas encaminadas a descubrir no sólo a los

hechores materiales del atentado contra el general Schneider, sino sus intenciones, así como los demás posibles autores, cómplices o encubridores del crimen.

El Presidente Electo ha destacado con razón la conducta disciplinada, responsable y respetuosa del pueblo en estos días necesariamente difíciles. Debe entenderse que el elogio no vale tan sólo para quienes sufragaron por el Excmo. señor Allende, sino también para el resto de la ciudadanía, donde la actitud es todavía más meritoria puesto que el fragor de la campaña había creado distancias difíciles de salvar, sobre todo ante la inminencia de cambios sociales profundos que afectarán, de manera todavía desconocida en la práctica, a muchos sectores.

La aceptación de que una mayoría relativa pueda traer un cambio trascendental en la línea política, económica y social del país no ha podido hacerse sin vacilaciones e inquietudes, pero es forzoso reconocer que, a no mediar el atentado inalicable que entristece esta semana, el país entero habría dado un espectáculo de disciplina que todos desean se conserve.

UNA GARANTÍA PERSONAL

La concurrencia del senador Salvador Allende a la sesión del Senado en que se votaba la reforma constitucional convenida entre la Unidad Popular y la Democracia Cristiana tiene singular valor.

Aparte de ser la última vez en que el Presidente Electo concurría a ejercer sus funciones de senador, antes de tomar las responsabilidades del mando supremo, su voto y

el fundamento de éste revistieron singular trascendencia.

Mucho más que el contenido textual de disposiciones constitucionales que pueden sustituirse por otras o reglamentarse por leyes que las desvirtúen, la garantía de la libertad y de la seguridad de los chilenos reside en la persona del Presidente Electo, como él mismo lo ha manifestado varias veces.

La fundamentación de su voto favorable a las reformas constitucionales es una expresión concreta de la voluntad del Presidente Electo "He venido a este recinto, dijo, a señalar con mi voto favorable la decisión del pueblo, que, siendo Gobierno, hará más amplia, profunda y honda la democracia en nuestro país". Y subrayó sus propósitos, al decir: "Queremos que se entienda que estas disposiciones serán no sólo los principios consagrados en la Carta Fundamental, sino que la regla moral de un compromiso ante nuestra propia conciencia y ante la historia".

Sus palabras tuvieron la solemnidad que correspondía a la trascendencia del hecho. No se trataba de un discurso parlamentario más ni de un juego político frente al cual la malicia nacional está habituada sino que, por el contrario, el fundamento del voto del senador Allende pareció un anticipo del juramento constitucional que debe pronunciar al tomar en sus manos el mando supremo de la República.

Uno de los méritos del Presidente Electo es su franqueza. Todo el país sabe lo que quiere y sabe también adonde va. Cuando él se ha referido a que el mantenimiento de las libertades públicas constituye "la

regla moral de un compromiso ante nuestra conciencia y ante la historia", ha dado su palabra de hombre y de chileno, y frente a ello no cabe otra actitud honesta que hacer fe en esa palabra.

A su turno, corresponde que el Presidente Electo tenga la confianza de que el país entero prestará colaboración sincera al futuro Gobierno.

Le esperan al Presidente Allende tareas muy duras y es previsible que las dificultades no surjan de sus opositores ideológicos sino de la definición específica de las tareas de Gobierno, así como del reclutamiento de los hombres y tendencias llamados a cumplirlas.

La ciudadanía está resuelta a cooperar con las nuevas autoridades y a poner todo de su parte para que el país salga de la honda crisis que la situación política ha acarreado, lo que viene a sumarse a los serios problemas que se generaron durante la Administración que termina.

El coraje, la capacidad y la honestidad del Presidente Electo serán la mejor garantía de que el país pueda desarrollarse como nación libre, emprendiendo cambios de acuerdo a las exigencias de los tiempos y de acuerdo también a las posibilidades efectivas de Chile.

Interesa sobremanera insistir en esto de la garantía personal del Presidente Electo, porque su experiencia de parlamentario y de hombre que desempeñó tareas de Gobierno en la Administración del Presidente don Pedro Aguirre Cerda debe pesar en forma decisiva por sobre las audacias de algunos técnicos que merecen ser seguidas tan sólo cuando ellos tienen en cuenta la totalidad de los elementos de una

determinada situación. Mientras más extremas son las soluciones económicas o sociales, más obligado es el examen realista escrupuloso de los obstáculos y de los antecedentes del caso. Esto es válido siempre y lo ha sido en forma dramática en muchas naciones socialistas. Más digno es de considerarse en un país como Chile, cuyas limitaciones naturales y sociopolíticas son evidentes.

El equilibrio entre la experiencia política, el conocimiento efectivo del país y la inventiva de los técnicos sólo se logra cuando el mando corresponde a una autoridad segura y firme.

La causa de que las transformaciones innegables de Chile en el período comprendido entre 1938 y nuestros días se realizarán en la normalidad ha de encontrarse en que las tendencias opuestas, las pasiones desencadenadas, las presiones de toda índole, los ideologismos puramente abstractos, encontraron la valla y el cauce a la vez en la autoridad tranquila de los Presidentes que, con notas personales diversas, respondieron al concepto constitucional del mando supremo, tal como ha sido concebido desde la fundación de la República.

Despejando dudas (29 de noviembre de 1970)

El comentario analiza el informe presentado por el Secretario General del Partido Comunista, senador Luis Corvalán, al Pleno del Comité Central de dicha colectividad. A dicho pleno concurrió el Presidente Salvador Allende, quien pronunció un discurso. En parte fundamental de su informe, el senador Corvalán señala que "el pueblo ha conquistado el Gobierno. Necesita ahora lograr que todo el poder político, que todo el aparato estatal pase a sus manos en una sociedad pluralista". (EM, 27 nov., pág. 25).

La Semana Política

DESPEJANDO DUDAS

El informe del Secretario General del Partido Comunista, senador don Luis Corvalán Lepe, al Pleno del Comité Central de dicha colectividad tiene el mérito de despejar cualquier duda acerca de la actitud de la fuerza mayoritaria de la Unidad Popular.

"El Partido Comunista considera que su deber principal consiste, precisamente, en trabajar junto a los demás partidos de la Unidad Popular, junto al Presidente de la República, dentro y fuera del Gobierno, tras el propósito común de realizar cambios revolucionarios", dice el informe.

El Partido Comunista coloca en primer lugar el trabajo conjunto con los demás partidos de la Unidad Popular y en segundo término el trabajo "junto al Presidente de la República".

Sabemos que esa colectividad no acepta el régimen presidencial chileno porque prefiere un sistema de Gobierno con responsabilidades indefinidas, que se confíe a comités o comisiones formados por individuos cuya jerarquía y verdadera influen-

cia no son de conocimiento público. La idea de que un ciudadano, elegido directamente por el pueblo en sufragio universal, tenga personalmente el Mando de la Nación y la responsabilidad del orden interior y de la seguridad exterior es contraria al sistema de las democracias populares controladas por los comunistas.

De ahí que el Secretario General, senador Corvalán, estime que el deber de su partido no sea apoyar sencillamente al Gobierno del Excmo. señor Allende sino que se limite a "trabajar junto a él", situándose en el mismo nivel de autoridad y prerrogativas que el Presidente de la República.

"La Constitución Política, los códigos, la organización institucional responden ante todo a los intereses de la burguesía", prosigue el informe. "Ello contribuye a que en el Parlamento, en la judicatura y en los medios de comunicación de masas la burguesía y la oligarquía detenten aún fuertes posiciones políticas". "En el Congreso Nacional la Unidad Popular sólo tiene la primera mayoría relativa, no la mayoría absoluta. Estos son también obstáculos que debemos tener en cuenta".

Está llegando la hora en que los comunistas hablan con toda claridad. El régimen legal chileno y los medios de información serían instrumentos de la burguesía y del imperialismo. El orador toma en consideración que la Unidad Popular representó algo más de un tercio del electorado y que una fracción de éste la forman los comunistas. Pero en vez de que estos hechos lo inviten a un respeto democrático por el electorado nacional, su idea es que tal posición minoritaria es un obstáculo que debe removerse lo más pronto posible.

Y ¿cómo desean salir los comunistas de su posición minoritaria? A través de la ampliación de la Unidad Popular. "La unidad socialista-comunista seguirá siendo la base de nuestra política unitaria", afirma el senador Corvalán. "Pero al mismo tiempo nos entregamos y nos entregaremos por entero a la Unidad Popular, a la unidad entre todas las fuerzas antiimperialistas y antioligárquicas, entre todos los componentes del Gobierno. Y tratamos y trataremos de atraer nuevas fuerzas al cauce del pueblo para hacerlo cada día más ancho y caudaloso".

Es imposible hablar más claro: el régimen legal y los medios de información responden a los intereses de la burguesía, contra los cuales lucha el Partido Comunista; sin embargo, mediante la Unidad Popular los comunistas atraen a sectores de la burguesía como los radicales, API, socialdemócratas y Mapu. Esto significa que los comunistas van a destruir el poder de la clase burguesa mediante la colaboración de los elementos de esa clase que ahora forman parte de la Unidad Popular y

de los demás que ellos piensan atraer en el futuro próximo. La destrucción del poder de la burguesía se identificaría pues con la desaparición de la institucionalidad vigente y de los medios de información tal como se dan hoy.

Señalando cuál es el sector de la burguesía que constituye el objetivo inmediato, el informe declara: "Esperamos que la Democracia Cristiana no pierda la brújula y dé apoyo a la nacionalización del cobre y a otras medidas que necesitan sanción legislativa y que coinciden con postulados programáticos de ese partido".

Es de presumir que la verdadera cuestión no es el destino de las grandes minas de cobre, que seguramente planteará grandes debates en el Parlamento, sino el apoyo demócratacristiano que los comunistas esperan obtener para el grueso de su política.

EL ESTADO POPULAR

Los visibles intentos de atraer a los demócratacristianos corren paralelamente a los ataques al ex Presidente Frei y a su gestión de Gobierno, lo que indica que los comunistas piensan enriquecer la Unidad Popular con fragmentos de partidos, táctica que han seguido hasta ahora y que les ha brindado la influencia de que hoy disfrutan en la combinación oficialista.

El informe deja en claro que no bastaría con detener la inflación, redistribuir los ingresos, absorber la cesantía y dinamizar el proceso económico. Ellos van al "cambio de sistema", que empieza en lo económico en "la nacionalización del cobre y de la banca, la estatización de

un grupo de industrias monopólicas y de importantes rubros del comercio exterior, así como de una transformación profunda y acelerada del campo". Pero con toda evidencia "el cambio de sistema" no se detiene allí.

El cambio fundamental anunciado en el informe es político y social. "El Gobierno que preside el compañero Salvador Allende es ante todo una conquista de la clase obrera. Por su composición social y su programa ofrece la posibilidad real de marchar al socialismo, el cual pondrá fin a la explotación del hombre por el hombre".

Podría pasarse por la inexactitud envuelta en esto de "el Gobierno que preside el compañero Salvador Allende", puesto que el Excmo. señor Allende no preside el Gobierno sino la República y como Presidente de ella le "está confiada la administración y Gobierno del Estado", según la Constitución. Sin embargo, esta inexactitud no es más que una reafirmación del propósito comunista de sustituir la autoridad presidencial por el mando de comités o comisiones que diluyan el mando del Presidente.

Incurriendo en un salto de etapas que es otra inexactitud, el Secretario General del Partido Comunista dice en su informe que: "La última reforma constitucional le confiere al Presidente de la República, el derecho de convocar a un plebiscito para disolver el Parlamento en caso de conflicto entre ambos poderes". En el hecho, el Ejecutivo puede enviar un proyecto de reforma constitucional, no para "disolver" el Parlamento sino para suprimirlo o sustituirlo y, ante el rechazo de tal

iniciativa, es posible que convoque a plebiscito haciendo uso de un arma excepcional contemplada para disminuir las diferencias entre ambos poderes.

A tal situación especialísima y grave se refiere el informe, al decir: "En un momento determinado habrá que hacer uso de esa facultad y abrir paso a una nueva Constitución y a una nueva instinacionalidad, a un Estado popular".

Olvidando el Secretario General del Partido Comunista que la convocatoria a plebiscito es una atribución exclusiva del Presidente de la República, emplea esta expresión de "habrá que hacer uso de esta facultad". Llama la atención que en la cuenta a un Pleno del Comité Central de su partido, el senador Corvalán se anticipe a la decisión individual del Presidente de la República y anuncie que en un momento determinado "se" tomará una decisión que sólo compete al Excmo. señor Allende.

Por lo demás, lo que se trataría de imponer por medio del plebiscito no es sólo la disolución del actual Parlamento sino su supresión para reemplazarlo por otra entidad, encajada en una nueva Constitución, en una nueva institucionalidad, en un Estado popular o, lo que es lo mismo, en una democracia popular según los modelos comunistas probados en el mundo.

Estos anuncios del Secretario General del Partido Comunista han causado viva impresión en los círculos políticos, sobre todo porque ellos fueron formulados en el primer acto oficial del Partido Comunista, que es a su vez la primera fuerza de la combinación oficialista.

El Presidente Allende obtuvo un limpio triunfo popular por mayoría relativa y fue proclamado en el Congreso Pleno con el voto de la Democracia Cristiana. Las contingencias de la política pueden contribuir a distanciar mucho del régimen del Presidente Allende a los democratacristianos, pero siempre pesará sobre el Jefe del Estado su compromiso de mantenimiento de las libertades públicas expresado en las reformas constitucionales convenidas entre él y la Democracia Cristiana. Ahora bien, hay derecho a temer que la "nueva institucionalidad" postulada por los comunistas se acerque al estilo de las democracias populares y asegure el predominio irreversible de dicho partido como aconteció hasta ahora en todas las experiencias de este género.

La novedad de la semana es entonces que los comunistas no plantean ya la lucha entre los que están a favor y los que están en contra de los cambios revolucionarios sino que formulan la lucha entre la clase obrera y la burguesía así como entre los partidarios de la Constitución, de los códigos, de la organización institucional, de la judicatura y de los medios informativos actuales, por una parte, y los que propugnan el "Estado popular".

La idea de poner en práctica una democracia clasista vuelve a subrayar el problema de la compatibilidad entre el estatuto constitucional de libertades públicas para todos con el "Estado popular" que hasta ahora ha sido siempre el instrumento de dominio de una minoría, precisamente del Partido Comunista.

Institucionalidad democrática

(27 de diciembre de 1970)

El Congreso Pleno aprueba el proyecto de reforma a la Constitución que refuerza las garantías constitucionales. El Presidente Salvador Allende visita la zona de Cautín, donde se han denunciado "tomas" de predios agrícolas, y pide calma a los campesinos (EM, 21 dic., pág. 25). El Presidente del partido Demócrata Cristiano, Narciso Irureta, formula declaraciones en las que destaca la mentalidad demócrata de Allende, pero señala que está siendo sobrepasado y que se está realizando una campaña de prensa contra la Democracia Cristiana; diversos ataques al Poder Judicial, tomas de predios en Cautín, persecución administrativa y existencia de grupos armados (EM, 22 dic., pág. 20).

La Semana Política

INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA

El momento es propicio para que la ciudadanía aprecie en qué consiste realmente la institucionalidad democrática o, dicho de otro modo, en qué términos se da en el país un régimen de acatamiento a la norma jurídica y de ejercicio efectivo de las libertades cívicas.

Como era de preverlo, el Congreso Pleno aprobó el lunes, con 127 votos a favor y 24 abstenciones, el proyecto de reforma constitucional propuesto por la Democracia Cristiana a don Salvador Allende y a la Unidad Popular como condición para elegir al primero Presidente con el apoyo de sus parlamentarios.

El lunes los votos favorables fueron de la Democracia Cristiana y de la Unidad Popular. Las abstenciones correspondieron a parlamentarios nacionales.

La enmienda constitucional sugerida por los demócratacristianos y aceptada por la Unidad Popular lleva al texto de la Carta Fundamental principios, ya implícitos o explícitos

en ella, sobre pluralismo político, vigencia del Estado de Derecho, integridad de las Fuerzas Armadas y de Orden, educación independiente de ideologías, autonomía universitaria, libertad de organización sindical, de prensa y de expresión y otros, que reflejan la honda preocupación con que la mayoría demócratacristiana entregó el poder a la Unidad Popular.

Los nacionales se abstuvieron en esta oportunidad por estimar que la reforma, "lejos de afianzar o reforzar las garantías, puede servir de base a graves restricciones de las actuales libertades", como expresó el senador Bulnes al hablar a nombre de su partido.

El presidente de la Democracia Cristiana, senador don Narciso Irureta, dejó testimonio de la conducta democrática del Presidente Allende, antecedente que ha resultado fundamental para el acuerdo entre la Unidad Popular y la anterior directiva demócratacristiana, que permitió el nombramiento de S. E. por el Congreso Pleno.

Sin embargo, el senador Irureta describió varios hechos que revisten extraordinaria gravedad. A juicio del dirigente máximo democratacristiano, la autoridad del Presidente de la República está siendo sobrepasada por iniciativas de sectores políticos que se dicen afectos a él. Destacó la pasividad de algunas autoridades administrativas ante arbitrariedades e ilegalidades cometidas por grupos que se dicen partidarios del Gobierno. Denunció el senador Irureta la campaña destructora del prestigio personal de figuras representativas de la Democracia Cristiana. "Una oscura maniobra ha sido planeada en estas semanas para dar al Gobierno una posible mayoría en el Senado", dijo, anticipando eventuales pretensiones de inhabilitar a senadores enfermos.

Como ejemplos de violación del espíritu del Estatuto de Garantías, el presidente democratacristiano señaló las ocupaciones ilegales de tierras en la provincia de Cautín, la persecución administrativa contra funcionarios modestos, la propaganda intimidatoria en contra de la independencia del Poder Judicial y la existencia de grupos armados que delinquen sin temor y debilitan así el prestigio de las Fuerzas Armadas y Carabineros.

El diputado comunista don Orlando Millas, en nombre de la Unidad Popular, rechazó el cargo de que su bloque político pretendiera aprovecharse de situaciones personales de algunos parlamentarios para inhabilitarlos y se empeñó en desvalorizar las acusaciones concretas de la Democracia Cristiana acerca de la actual precariedad del Estado de Derecho.

A lo largo de la tramitación de la reforma constitucional, tendiente a garantizar la institucionalidad democrática, se han ido produciendo los hechos que denuncia el senador Irureta y que son perceptibles por la gran mayoría de los ciudadanos.

Un hombre es débil y transitorio frente a los movimientos de masas y a los procesos históricos. Sin embargo, en el caso de la institucionalidad democrática y de la vigencia real de la libertad para todos los chilenos, es más sensato hacer descansar esos valores en la palabra honesta de un hombre que en un texto escrito, pues tales valores no dependen de una frase más o de una frase menos, sino de una concepción moral.

Todos saben que la Constitución es susceptible de reformas y que éstas tienden a multiplicarse en los últimos años. No se ignora además que es posible redactar una norma que declara respetar un principio, como el de la libertad personal o el de la propiedad, en términos que el desarrollo ulterior del artículo respectivo evapore dicho principio con vaguedades o derechamente lo anule con normas contradictorias. Por último está el arma casi incontestable del plebiscito, en virtud del cual un Gobierno puede obtener prácticamente cualquier tipo de consentimiento popular, lo que depende tan sólo de los términos en que haga la consulta y del énfasis que ponga en la propaganda de las aspiraciones oficiales.

La vulnerabilidad de la Constitución y, por tanto, del Estado de Derecho, explican que tenga más valor el compromiso moral del Excmo. señor Allende, para mantener el ré-

gimen de libertades públicas, que la mecánica de los textos jurídicos.

FORMALISMO Y ETICA

La circunstancia de que un nuevo Gobierno y una nueva reforma constitucional se apoyen en la palabra del Presidente Allende ha de ser motivo de satisfacción para éste, pero al mismo tiempo indican que la democracia chilena está en riesgo de perder sus bases morales, transformándose en un mero legalismo formalista.

Un régimen de libertad, esto es un sistema de poderes equiparados entre los gobernantes y los particulares, y una estructura económica que permita decidir al consumidor o tomar iniciativas y riesgos a los productores, está fundado en una concepción del hombre.

La gran duda de la ciudadanía es si los partidos marxistas y los especialistas experimentados en Cuba tienen plena conciencia de que el problema básico de Chile no se resuelve expropiando determinadas firmas extranjeras o nacionales, si las posiciones antimperialistas se traducen en la aparición de otros imperialismos y si las posiciones antimonopolistas terminan en el establecimiento de un solo monopolio: el de la burocracia estatal.

En buenas cuentas, la democracia no consiste en una legalidad que permite entregar al Gobierno un Poder sin contrapeso o que tolera que supuestos partidarios del Presidente atropellen la ley. La democracia es una realidad moral y social que se funda en que el pueblo está formado por personas, vale decir por individuos humanos que aportan valo-

res trascendentes a la sociedad y que merecen, por tanto, el pleno respeto de sus semejantes y del Estado. Los atropellos públicos al honor de las personas o de las tierras de propiedad particular no se avienen con la ética de la democracia. Dicha ética tiene, por supuesto, la opción a diversos empleos, domicilios, profesiones, formas de ahorro o de seguro, con lo cual puede obtenerse el delineamiento de la vocación o destino de cada persona. Se comprende que la explosión demográfica y las naturales aspiraciones de los sectores postergados a tomar parte en las decisiones de la sociedad y del Estado hagan más difícil el cumplimiento de aquellos principios éticos, pero, por apremiantes que sean los deseos de las masas, nunca corresponde sacrificar la dignidad o el destino de las personas a las exigencias ciegas de las multitudes.

Por lo demás, ya es sabido que la voluntad de las masas termina siendo esclavizada y utilizada por individuos que se encumbran en una supuesta representación del pueblo, pero que, en el hecho, establecen la tiranía de sus personas o de su grupo. De este modo, un monopolio se sustituye por otro; una clase dominante es reemplazada por la nueva clase, y la oligarquía, o forma de gobierno de alguna minoría, se perpetúa en el poder a través de equipos gobernantes más o menos ce-rrados.

En momentos en que partidos políticos no mayoritarios pugnan por afianzarse en el poder y se atribuyen la exclusiva representación del pueblo, es útil tener presente que la democracia está sustentada en valores morales incompatibles con el

exclusivismo de clases, con el absoluto control estatal de los empleos de los ciudadanos, con el atropello a las propiedades de los particulares o con la neutralización de los mecanismos de defensa del Estado (Fuerzas Armadas y Carabineros).

Faltando esta ética, con la letra de la Constitución y de la ley pueden cumplirse los más variados propósitos, inclusive el desaparecimiento del régimen legal, sobre todo si las reformas a la Carta Fundamental pueden llevarse a cabo mediante plebiscitos.

De ahí es que los sectores democráticos estén obligados a ejercer una celosa vigilancia, a denunciar sin temor los delitos que se cometen a través de la difamación de las personas, a protestar sin descanso contra los despojos que sufren los propietarios agrícolas, a exigir la acción policial y judicial pertinente respecto de grupos armados u organizaciones similares que actúan en las tomas de fundos en Cautín u otras localidades y también a reclamar eficiencia en cuanto a las decisiones económicas o administrativas adoptadas.

Duras serán las batallas que los ciudadanos libres habrán de empeñar con tendencias políticas monopolistas en el orden económico,

político, social, cultural y jurídico. Es evidente que las fuerzas partidarias que apoyan al Presidente Allende, sobre todo los comunistas y socialistas, tienen una visión pesimista de la capacidad de los particulares y una fe excesiva en las aptitudes del Estado empresario y administrador. Ciertos éxitos notorios en empresas fiscales autónomas podrían justificar esta posición, pero ella pierde fuerza si se considera que aquellas empresas operaban en un régimen de mercado, en medio de un gran grupo de empresas privadas activas, procurando adoptar la más moderna ideología empresarial y contando con equipos alejados sustancialmente de la política partidista.

El Gobierno puede acudir al plebiscito en los casos en que la Constitución y la ley lo autorizan, pero ese sistema de consulta popular será un engaño para el propio Gobierno si las condiciones económicas y sociales hacen que los ciudadanos líderes, en cualquier nivel, dependan directa o indirectamente del régimen. Tal vez así se logre la paz por la ausencia de conflictos visibles, pero no será la paz digna y libre a que aspiran los chilenos, empezando por el propio Presidente de la República.

Régimen presidencial

(3 de enero de 1971)

El artículo hace referencia a palabras de Luis Corvalán, Secretario General del Partido Comunista, pronunciadas en el Senado en 1968 (EM, 6 abril, 1968, pág. 23), y también mira hacia las elecciones municipales que se acercan, oportunidad en que además se votará en la décima agrupación senatorial para ocupar la vacante dejada por el Presidente Salvador Allende (EM, 27 dic. 1970, pág. 9).

Los partidos Demócrata Cristiano y Nacional desmienten la existencia de un pacto para rechazar la ley de reajustes propuesta por el Gobierno (EM, 30 dic., 70, pág. 23).

La Semana Política

RÉGIMEN PRESIDENCIAL

La ascensión del Excmo. señor Allende al Mando Supremo constituye el hecho de mayor relieve en el año 1970. El enorme cambio que el suceso ha provocado en la situación interna y en las relaciones exteriores de Chile demuestra, como ningún argumento abstracto, que la voluntad presidencial en este país tiene la más amplia y significativa importancia.

El régimen presidencial chileno, que no se funda en el cesarismo de un caudillo, sino en la autoridad personal del Mandatario que el pueblo elige periódicamente, ha sido objeto de serias incomprensiones por parte de los partidos de la Unidad Popular. Esas incomprensiones han surgido tal vez por falta de conocimiento del papel de avanzada que cumplió siempre el Ejecutivo en nuestro país y también por desconfianza en torno al papel moderador que desempeña el Presidente al cumplir su misión constitucional de gobernar este país, tan modesto como singular en su conducta histórica.

Ya en abril de 1968 el Secretario General comunista, senador don Luis Corvalán Lepe, advertía que "desde hace tiempo el régimen presidencial viene permitiendo que, a poco de constituirse un gobierno, se cree un divorcio muy grande entre los pasos del Ejecutivo y los que quiere la mayoría de los chilenos y, en ocasiones, el o los partidos que lo sustentan...", y añade que "una sola persona, por muy capaz e inteligente que sea, está expuesta a errores muy graves y no se puede seguir dejando en sus manos tantas atribuciones".

Puede apreciarse entonces que el espíritu antipresidencialista del comunismo chileno, que por cierto se introdujo en el programa básico de la Unidad Popular, marcándolo con un sello de asambleísmo impersonal y anónimo, fue anterior a la designación del Excmo. señor Allende como candidato de la izquierda y no se relaciona en forma directa con la persona misma de S.E. Tal espíritu responde más bien a una concepción teórico-práctica de los comunistas, pues ellos están acostumbrados a gobernar asambleas y a manejar por

tanto el aplauso, el silbido, el griterío y el amedrentamiento moral, pero les resulta más difícil imponerse a una persona dotada de firmeza, de imparcialidad y de serenidad.

Cuando una personalidad con dichas características tiene el gobierno en sus manos y no experimenta temor frente a las consignas comunistas ampliamente voceadas, su autoridad se abre paso y logra imponerse a la conciencia ciudadana.

Si los comunistas siguen pensando como en 1968 habrá que decir que ellos consideran que "por muy capaz e inteligente que sea" el Presidente Allende está expuesto "a errores muy graves y no se puede seguir dejando en sus manos tantas atribuciones".

En este juicio se contiene una de las divergencias de fondo que la mentalidad democrática chilena tiene con el comunismo internacional. En efecto, los miembros del Partido Comunista cumplen un esquema abstracto y de utilización mundial. Para llevarlo a cabo prefieren una asamblea controlada fácilmente por el partido antes que la acción responsable de un dirigente, elegido en forma directa por el pueblo, pues debe éste dar cuenta ante sus conciudadanos y ante la historia de sus actos y no aplicar un esquema cerrado, sino cumplir un programa de acuerdo a las circunstancias políticas reales, al encuadramiento de las leyes y a la voluntad popular concreta, es decir, no filtrada en votos de directivas.

Para la mentalidad democrática chilena, el Presidente de la República está lejos de ser un caudillo caprichoso o una autoridad personalista. La Presidencia de la Repúbli-

ca es una institución fundamental de la República, generada en el sufragio universal, intérprete de la real voluntad del país y depósito de la tradición jurídica y de la libertades de la patria.

No es efectivo que los Presidentes chilenos hayan vuelto las espaldas al pueblo. Lo que ha sucedido a veces es que quienes los eligieron han mostrado más preocupación por servir sus propios intereses políticos, sus propias ideas programáticas, sus propias consignas o ambiciones electorales, que por atender el bien público permanente. El interés de todos los chilenos del presente y del porvenir. Como esto último es la misión de los Presidentes, no han faltado ocasiones en que entre el deber del cargo y la amarra ideológica o electoral los Jefes de Estado hayan preferido ser fieles a lo primero.

Sin duda es más fácil para un Primer Mandatario limitarse a seguir la corriente programática que le señalan las fuerzas partidistas que lo eligieron, designar funcionarios conforme a las sugerencias de éstas y ejecutar los planes económicos o sociales de acuerdo a las pautas de los equipos técnicos de tales partidos.

Pero la verdadera y difícil tarea de los Presidentes de Chile ha sido adaptar el caudal de ideas y ambiciones con que llegan al poder a la compleja realidad del país, en términos de que la rutina, aun la rutina de los cambios y de las revoluciones, no estorbe la marcha del progreso nacional y en forma de que la inquieta energía creadora no sofoque la libertad.

Sería absurdo que alguien se atreviera a sugerir al Presidente

Allende una conducta política contraria a sus convicciones, pero parece lícito solicitarle que siempre sea él quien encabece el proceso de ejecución de su programa a fin de que su experiencia política y su patriotismo contrapesen los criterios extraños a la mentalidad chilena.

OPOSICIÓN INDISPENSABLE

Una oposición para frenar los cambios necesarios al avance del país es y ha sido siempre un obstáculo que los gobiernos resisten, acompañados en esto por la opinión pública. La oposición por la oposición es ciertamente indeseable.

Sin embargo, ahora más que nunca parece necesario que, frente a la línea de resistencia a la crítica que está imponiendo el Partido Comunista, se consolide una oposición tranquila pero firme, no con el objetivo de servirse a sí misma, de satisfacer propósitos de desquite o de recuperación del poder para uno o más partidos, sino realmente para servir al país.

Hasta ahora la subsistencia real (y no meramente formal) del régimen de derecho reposa en la palabra solemne del Presidente de la República. Es evidente entonces la necesidad de que la subsistencia de la democracia sea vigilada en forma directa en el Parlamento por los partidos de la Unidad Popular y por los que no pertenecen a ella. De este modo, si alguno de los proyectos del Ejecutivo franqueara la valla constitucional, el Presidente Allende tendrá la oportunidad de oír un debate indispensable para la salud de nuestra democracia y podrá cautelar la vigencia de esta demo-

cracia con el auxilio de todos los sectores políticos, rectificando cuando sea conveniente el punto de vista de los técnicos de la Unidad Popular.

El Partido Comunista está vivamente interesado en que no se forme una oposición orgánica al Gobierno. De ahí su empeño en anunciar por anticipado un posible pacto entre democratacristianos y nacionales, anuncio que sólo persigue distanciar a ambos partidos obligando a las alas extremas de uno y otro a mostrarse hostilidad recíproca.

Entretanto el país tiene conciencia de que no hay comunidad ideológica alguna entre la democracia cristiana y los nacionales o la Democracia Radical. No obstante las profundas diferencias, que aconsejan políticas independientes y hasta divergentes, en la actualidad todo indica que muchos partidos pueden coincidir en la meta de resguardar el régimen de derecho, meta que es también del Presidente de la República, pero que él sólo puede cumplir si existen partidos capaces de pesar en el Parlamento frente a los grupos que anhelan un estatuto jurídico diverso al de la democracia chilena.

En círculos políticos se conversa sobre el posible intento de los comunistas de inhabilitar a algunos senadores de la oposición, lo que les aseguraría las modificaciones constitucionales y legales que desearan para asegurar el control del partido sobre la Unidad Popular, sobre el Gobierno y sobre el país.

De ahí surge, entonces, la necesidad de que los partidos democráticos no sigan jugando partidas que corresponden ya a otra época de la

vida nacional. El ciudadano común tiene conciencia de que la victoria del Presidente Allende representa un hito histórico de más trascendencia que la victoria de don Pedro Aguirre Cerda en 1938. Con la reciente elección del Ministro de Salud de aquella Administración aumentan las posibilidades de cambio y de progreso, pero también aumentan en gran proporción los peligros para la libertad. No hay, pues, lugar para las pequeñas posiciones y para la devociones ideológicas de capilla. Está llegando el tiempo en que lo único que se preguntará a un candidato o a un partido es si está dispuesto a defender la Constitución y la democracia chilenas o si se siente tentado por imitar a Cuba o algunas de las democracias populares de Europa oriental. Y los partidos y candidatos democráticos chilenos han de reunir fuerzas para las grandes luchas, en donde los matices desaparecen y quedan en pie dos concepciones básicas: la del monopolio estatal y la del régimen de equilibrio entre el poder del Estado y el de los particulares.

Es indispensable que la mayoría

partidaria de la democracia chilena mantenga su representación en el Parlamento. La Democracia Cristiana, el Partido Nacional y la Democracia Radical tienen difíciles tareas para la elección municipal de abril próximo, pero no es menos serio el problema que les crea la elección senatorial en la Décima Agrupación, que se realizará en la misma fecha, así como una probable ausencia del senador demócratacristiano don Raúl Gormaz, quien, al no contar con el permiso constitucional de rigor, generaría una elección de senador por Talca, Curicó y Linares.

Ciertamente el retroceso de la oposición democrática, lejos de fortificar al Presidente Allende, lo dejaría con menos capacidad de maniobra que si la correlación actual de fuerzas políticas se mantuviera. De ahí entonces que la opinión pública desee vigorosos partidos democráticos opuestos a la Unidad Popular, como manera de que se conserve el equilibrio asegurando que el programa de aquella se realice dentro del régimen democrático y no bajo la tuición única del Partido Comunista.

ÍNDICE DE ARTÍCULOS

Preeminencia del criterio electoral frente a las soluciones que exigen los problemas nacionales (7 febrero de 1965).....	371
Los partidos históricos en busca de nuevos métodos (18 abril de 1965).....	376
El FRAP abandona la acción directa (2 de mayo de 1965).....	381
El tema de la propiedad privada (23 de mayo de 1965)	386
¿Resurrección del Frente Popular? (20 de junio de 1965)	391
El comunismo se convierte en partido de masas (4 de julio de 1965)	395
El Gobierno y los partidos frente al cobre (12 de septiembre de 1965)	399
¿Peligro de la Reforma Constitucional? (10 de octubre de 1965).....	403
Pro y contra de la clase media chilena (31 de octubre de 1965)	407
Reforma Agraria Política (28 de noviembre de 1965)	412
¿Lucha generacional o lucha de clases? (13 de febrero de 1966)	416
La importancia política de la clase media (3 de abril de 1966)	420
La engañosa ofensiva comunista (17 de abril de 1966)	425
La batalla de las banderas (24 de abril de 1966).....	430
Peligro de un derecho basado en la ley (15 de mayo de 1966).....	434
El socialismo comunitario (21 de agosto de 1966).....	439
Tendencias en la Democracia Cristiana (18 de septiembre de 1966) ..	444
Dos años de gobierno (6 de noviembre de 1966)	448
Presión sobre los jueces (20 de noviembre de 1966)	452
Falta la alternativa (27 de noviembre de 1966)	456

El parlamentarismo recobra sus fuerzas (12 de febrero de 1967)	460
La demolición de estructuras (12 de marzo de 1967)	464
Nuevo panorama electoral (9 de abril de 1967).....	468
Desarrollo no capitalista (21 de mayo de 1967)	472
La disyuntiva radical (18 de junio de 1967)	476
La doctrina de la insurgencia (25 de junio de 1967).....	480
Presidente y partido (6 de agosto de 1967)	484
Uno cultiva y otro cosecha (27 de agosto de 1967)	487
Un informe del "no desarrollo" (22 de octubre de 1967)	490
Año de tensiones (31 de diciembre de 1967).....	493
Ebullición interna (14 de enero de 1968)	496
Una reforma clave (24 de marzo de 1968).....	499
Trabas presidenciales (7 de abril de 1968).....	503
Partido frente a Gobierno (11 de agosto de 1968).....	507
La Catedral (18 de agosto de 1968).....	511
Decantación radical (8 de septiembre de 1968)	515
La unidad en la Democracia Cristiana (13 de octubre de 1968)	519
Labor de cuatro años (10 de noviembre de 1968)	523
Las imprecisiones (8 de diciembre de 1968).....	527
Origen de la vía no capitalista (15 de diciembre de 1968)	531
Después de las elecciones (9 de marzo de 1969)	535
Decadencia de los partidos (23 de marzo de 1969).....	539
La crisis de la DC (11 de mayo de 1969)	543
Defensa del orden (15 de junio de 1969).....	547

Toma de posiciones (13 de julio de 1969)	551
Candidato de la DC (17 de agosto de 1969)	554
Escalada subversiva (31 de agosto de 1969)	558
Situación de las Fuerzas Armadas (16 de noviembre de 1969)	562
Programa de izquierda (28 de diciembre de 1969)	566
Segunda candidatura (18 de enero de 1970)	570
Programa impersonal (15 de febrero de 1970)	573
Violencia revolucionaria (5 de abril de 1970)	577
Realidad allendista (7 de junio de 1970)	581
Panorama electoral (19 de julio de 1970)	584
La elección presidencial (6 de septiembre de 1970)	589
Entendimiento UP-DC (11 de octubre de 1970)	592
Una garantía personal (25 de octubre de 1970)	596
Despejando dudas (29 de noviembre de 1970)	600
Institucionalidad democrática (27 de diciembre de 1970)	604
Régimen presidencial (3 de enero de 1971)	608 <input type="checkbox"/>